

Ni pan ni circo

Historias de hambre en América Latina

Omar Rincón

Florencia Grieco

editores



Ni pan ni circo

Historias de hambre en América Latina

Omar Rincón
Florencia Grieco
editores

Ni pan ni circo : historias de hambre en América Latina / Tadeu Breda ... [et al.] ; editado por Omar Rincón ; Florencia Grieco ; prólogo de Martín Caparrós. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Nueva Sociedad ; Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016.
272 p. ; 23 x 15 cm.

ISBN 978-987-95677-8-4

1. Agricultura. 2. Hambre. 3. América y el Caribe. I. Breda, Tadeu II. Rincón, Omar, ed. III. Grieco, Florencia, ed. IV. Caparrós, Martín, prolog. CDD 630

Primera edición: 2016

Corrección: Vera Giaconi

Diseño y diagramación: Fabiana Di Matteo

Ilustraciones: Ariana Jenik

© Friedrich-Ebert-Stiftung,
Fundación Foro Nueva Sociedad
Defensa 1111, 1° A, C1065AAU
Buenos Aires, Argentina

ISBN 978-987-95677-8-4

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.
Libro de edición argentina.

Índice

Prólogo

- El Hambre. Un problema ajeno 9
Martín Caparrós

Argentina

REPORTAJE

- Se mira y no se toca 19
Josefina Licitra

ENTREVISTAS

- Verónica Piñero: «No creo que haya hambre en Argentina» 29
Miryan K. de Gorban: «Esta es la primera generación
que va a vivir menos que las anteriores» 35
Josefina Licitra

CRÓNICA

- Dueño vende 41
Josefina Licitra

Bolivia

REPORTAJE

- Los nuevos indígenas urbanos comen chatarra 53
Cecilia Lanza Lobo

ENTREVISTAS

- Gonzalo Flores: «Los campesinos no son solo
campesinos, también son consumidores» 71
Miguel Urioste: «Bolivia quiere ser parte de la liga
mayor del agronegocio en América Latina» 79
Cecilia Lanza Lobo

CRÓNICA

- Un pajarito negro que alza vuelo 89
Cecilia Lanza Lobo

Brasil

REPORTAJE

- De la miseria a la obesidad 101
João Peres / Tadeu Breda

ENTREVISTAS

- María Emilia Lisboa Pacheco: «Comer es un acto político» 121
Teresa Campello: «El hambre en Brasil nunca se debió
a la imposibilidad de producir alimentos» 133
João Peres / Tadeu Breda

CRÓNICA

- Sí, nosotros tenemos bananas y ya no pasamos hambre 145
Thiago Domenici / Tadeu Breda

Colombia

REPORTAJE

- Colombia, la tierra del olvido 159
Catalina Lobo-Guerrero

ENTREVISTAS

- Eduardo Díaz Uribe: «El problema de Colombia
es la falta de acceso a los alimentos» 175
Absalom Machado: «Se viene un cambio del conflicto
armado por los conflictos sociales» 183
Catalina Lobo-Guerrero

CRÓNICA

- Agua a cambio de votos 189
Catalina Lobo-Guerrero

Jamaica

REPORTAJE

- Las caras del hambre 197
Marilyn Facey

ENTREVISTAS

- «Los niños vienen a la escuela solo los días
en que se les da de comer» 207
Marilyn Facey

CRÓNICA

- Niños y mujeres primero 225
Marilyn Facey

Perú

REPORTAJE

- El hambre en Perú no sabe de milagros 235
Nelly Luna Amancio

ENTREVISTAS

- Fernando Eguren: «La desigualdad es una decisión política» 249
María Isabel Remy: «Sendero Luminoso destruyó
las economías más pobres de Perú» 255
Nelly Luna Amancio

CRÓNICA

- El queso que revolucionó el altiplano 261
Nelly Luna Amancio

EL HAMBRE

Un problema ajeno

Martín Caparrós

Sí, yo me la busqué: escribí un libro sobre el hambre que se llama *El Hambre*, lo publicaron en dos docenas de países, tuve que presentarlo en muchos de ellos; en los últimos años he hablado y escuchado casi todo sobre el hambre, aquí y allá y en todas partes donde voy: es posible que haya aprendido algo.

Si sólo pudiera saber qué.

Lo primero que me sorprendió fue que le hicieran algún caso. Cuando me resigné, hace ya tiempo, a ponerme a trabajar en él, mi libro estaba destinado al olvido más raudo. Decidí hacerlo porque me resultaba más difícil no hacerlo —porque, una vez que había barajado la posibilidad, no hacerlo era una deserción—, pero estaba convencido de que nadie lo leería. El hambre vive entre nosotros, mata entre nosotros, está con nosotros todo el tiempo y no le prestamos ninguna atención, nunca tratamos de averiguar dónde, cómo, por qué. O, incluso: creemos que sabemos todo lo que necesitamos saber sobre ella —que, por supuesto, nunca es mucho—.

Y, sin embargo.

Creía en el olvido veloz pero, aun así, me importaba hacer un buen trabajo. Tomé, para eso, dos decisiones básicas —sintetizadas, faltaba más, por dos eslóganes de cuarta—.

Primero, que no existe *el hambre* —sino millones de personas que no comen lo suficiente—. Que, en general, quienes dicen *el hambre* intentan convertirla en algo abstracto, inmaterial, lo contrario de lo que realmente es: las vidas y las muertes de casi 1.000 millones de personas. Y que, para evitar esa trampa, la base de mi trabajo sería hablar

con una buena cantidad de esas personas, preguntarles, escucharlas, averiguar cómo es vivir con hambre —y tratar de contarlo—. Pero temía que esas historias pudieran convertirse en eso que, para no entendernos, llamé «pornografía de la miseria»: historias tristes muy sentidas que dejaran en el lector el alivio, la satisfacción de haberse entristecido, de haber sido sensible al dolor de esos pobres, y ya. Para evitarlo debía encontrar el modo de combinar esas historias con la historia, los contextos, los datos, los análisis que les dieran sentido: que consiguieran explicarlas.

Y, segundo: que no existe *el hambre*, sino formas y estructuras diversas, muy variadas, por las cuales millones de personas no comen lo suficiente. Y que si quería evitar las simplificaciones debía definir esas formas y tratar de contar sus singularidades: para eso, decidí, iría a ocho o nueve países, y cada uno me permitiría mostrar y analizar cada una de esas formas. Fueron, al fin, la India, Bangladesh, Níger, Sudán del Sur, Madagascar, Estados Unidos, Argentina. Esperaba que, por esa combinación de historias y análisis, el tema no cerrara con una lagrimita de compasión sino con ese hormigueo que —se supone— la comprensión provoca: la voluntad de hacer algo a partir de lo que uno ha entendido. Era —soy, ya lo sabemos— un iluso.

Grasiadió.

El libro, por supuesto, establecía ciertos hechos brutales: que, según el secretario de la ONU, Ban Ki Moon, cada día se mueren 25.000 personas por causas relacionadas con el hambre. Que esa matanza —un Holocausto y medio cada año— no tiene justificaciones técnicas, porque sucede en un mundo habitado por 7.300 millones de personas capaz de producir comida para 12.000 millones: un mundo donde la comida debería sobrar. Que el hambre contemporánea no es un producto de la pobreza, como suelen decir los grandes organismos, sino de la riqueza: del hecho de que algunos acaparen lo que muchos necesitan. Y que, entonces, el hambre contemporánea es la más violenta de la historia, porque no la causa la carencia sino, tan claramente, la concentración de esa riqueza. Y que esa concentración tampoco es algo abstracto, sino que tiene mecanismos muy precisos, que yo intentaba mostrar.

Pero me interesa, ahora, pensar lo que pasó después, en esas charlas repetidas —que siguen todavía— sobre el tema, con públicos muy variados, en países también muy diferentes. En esas discusiones aprendí cosas, entendí cosas que no había conseguido pensar durante la escritura. Por ejemplo,

que debería haber enfatizado más en ese momento histórico decisivo que la historia no se encargó de registrar.

Hay quienes dicen que el hambre empezó con el descubrimiento de las técnicas de producción de la comida. Por sorprendente que pueda parecer, creemos saber que nuestros ancestros cazadores y recolectores no pasaban hambre: eran cuatro o cinco gatos, iban y venían, podían conseguir sin mucho esfuerzo lo poco que necesitaban. Hasta que alguien entendió que si dejaba en tierra una semilla obtenía una planta, y si dejaba cien obtenía unas docenas, y fue la agricultura. Y la producción de comida se sistematizó, y los hombres y mujeres tuvieron que instalarse para esperar que crecieran esas plantas, y aparecieron los primeros pueblos y después las primeras ciudades y las primeras casas y las primeras amas de casa y los primeros jefes y los primeros ricos y los primeros soldados y los segundos dioses. Los hombres podían producir —predecir— su comida, saber cuándo y dónde la tendrían, y eso les permitió reproducirse tanto más y esas aglomeraciones de más personas empezaron a conocer el hambre: bastaba una sequía o una guerra o un jefe demasiado ávido o un dios insatisfecho para que esas comunidades que dependían de su cosecha se quedaran sin nada que comer.

Desde entonces, la principal característica de la comida siempre fue su escasez: más allá de la concentración que siempre hubo, era cierto que la tierra no conseguía producir comida suficiente para todos. Hasta un momento, hacia 1970 o quizás 1980, en que al fin sí. Habría que estudiarlo: cómo fue que sucedió, por qué, sus causas, consecuencias. Los cambios técnicos derivados de la Revolución Verde parecen haber sido decisivos: lo cierto es que, por primera vez en la historia, el planeta fue capaz de alimentar a todos sus habitantes. Es un hecho mucho más que histórico, es uno de esos quiebres que suceden muy de tanto en tanto —y nadie sabe cómo fue, nadie pensó en pensarlo y registrarlo como tal—.

El principio de la Era de la Alimentación Posible es el mayor hecho histórico que no estudia ningún historiador.

O, quizá, pensé después, debería haber insistido en el final de la Era de la Carne. El consumo de carne es una forma tan clara de concentración de la riqueza. La carne acapara recursos que se podrían repartir: se necesitan cuatro calorías vegetales para producir una caloría de pollo; seis, para producir una de cerdo; diez calorías vegetales para producir

una caloría de vaca o de cordero. Lo mismo pasa con el agua: se necesitan 1.500 litros para producir un kilo de maíz, 15.000 para un kilo de vaca. O sea: cuando alguien come carne se apropia de recursos que, repartidos, alcanzarían para cinco, ocho, diez personas. Comer carne es establecer una desigualdad bien bruta: yo soy el que puede tragarse los recursos que ustedes necesitan. La carne es estandarte y es proclama: que solo podemos usar así el planeta si hay otros —miles de millones— que se resignan a usarlo mucho menos. Si todos quieren usarlo igual no puede funcionar: la exclusión es condición necesaria —y nunca suficiente—.

Cada vez más gente se empuja para sentarse a la mesa de las carnes —los chinos, por ejemplo, que hace 20 años consumían cinco kilos por persona y por año, y ahora consumen más de 50— porque comer carne te define como un depredador exitoso, un triunfador. En las últimas décadas el consumo de carne aumentó el doble que la población del mundo. Hacia 1950 el planeta producía 50 millones de toneladas de carne por año; ahora, casi seis veces más —y se prevé que vuelva a duplicarlo en 2030—. Mientras, un buen tercio de la población mundial sigue comiendo como siempre: miles de millones no prueban la carne casi nunca, la mitad de la comida que la humanidad consume cada día es arroz, y un cuarto más, trigo y maíz.

Ahora nos parece normal, pero es tan raro: un bistec con patatas, unas salchichas con puré, un pollo con arroz, proteína animal con algún vegetal acompañando, es una inversión del orden histórico que, desde siempre, fue el contrario: un vegetal si acaso acompañado por ínfimos trozos de animal. Es un tremendo cambio cultural —y ni siquiera lo pensamos—. Y menos pensamos lo que eso significa como gesto económico, social. No le digan a nadie que lo está diciendo un argentino: comerse un buen bife/chuletón/bistec, un gran trozo de carne, es una de las formas más eficaces de validar y aprovechar un mundo injusto.

Pero ya aparecen las grietas en el imperio de la carne. Primero fue el imperativo de la salud: cuando nos dijeron que su colesterol nos embarraba el cuerpo. Y ahora, en los barrios más *cool* de las ciudades ricas, cada vez más señoras y señores rechazan la carne por convicciones varias: que no quieren comer cadáveres, que no quieren ser responsables de esas muertes, que no quieren exigir así a sus cuerpos, que no quieren. Lluve, estos días, sobre mojado: la amenaza del cáncer. Hasta que llegue la imposibilidad más pura y dura: tantos querrán comer su libra de carne que el planeta, agotado, dirá basta.

Tardará. El comercio mundial de alimentos está organizado para concentrar los recursos en beneficio de los más ricos, intereses potentes defenderán sus intereses. Pero alguna vez, dentro de décadas, un siglo, los historiadores empezarán a mirar atrás y hablarán de estos tiempos –un lapso breve, un suspiro en la historia– como la Era de la Carne. Que habrá, entonces, pasado para siempre.

Son cuestiones internas, lo que fui aprendiendo sobre el hambre en este año y pico de charlas y presentaciones. Pero lo que más me interesa no está allí, sino del otro lado: en las reacciones de quienes vinieron a escuchar, a conversar.

¿Qué hacer cuando te dicen que tu forma de vida solo es posible gracias a las formas de muerte –al hambre– de millones; qué, cuando te explican que la ropa que llevás es el producto del hambre de las mujeres bengalíes; qué, cuando te cuentan que la electricidad que ilumina tu casa te llega del expolio del uranio de Níger?

Todo eso que algún autor debidamente trasnochado podría titular: ¿Qué hacer con la conciencia?

Lo dicho: no solemos pensar en el hambre. No es difícil no pensar en el hambre: es el problema ajeno por antonomasia. Hay, supongamos, más de 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre: una de cada nueve. Si la estadística fuera una disciplina seria, podríamos esperar que una de cada nueve personas que encontramos sufriera de desnutrición –y sabemos que no–. El hambre –para nosotros, ciudadanos letrados de países más o menos prósperos– es algo que solo les sucede a otros, no a nuestros parientes, amigos, vecinos, discípulos. No solemos pensar en el hambre y, cuando pensamos, no sabemos qué hacer con esos pensamientos.

Me pasó muchas veces, casi siempre: la exposición sobre el asunto lleva a una mezcla de cabreo y desaliento. Me preguntan qué solución propongo, y yo, ninguna. Y me vuelven a preguntar; como si me dijeran: para qué nos cuenta todo esto si no nos va a decir cómo solucionarlo. Estamos, sospecho, bastante malacostumbrados.

Entonces yo, a veces, digo que estoy en contra de los que ofrecen soluciones, que los que ofrecen soluciones son los profetas o los politicuchos, que lo que vale la pena no es esperar que te traigan las solu-

ciones hechas sino encontrarlas entre muchos, que las soluciones que nos llegan de arriba son sospechosas de por sí y además suelen estar pensadas para beneficio del que las ofrece y, aun si no, son un modo de establecer o consolidar el poder del profeta de turno, digo –y que, entonces, si tuviera la solución no la daría–. Y podría, supongo, dejarlo allí y escapar con supuesta elegancia. Pero en este tema la elegancia es una porquería, así que me embarro: digo que, por supuesto, más allá de todo eso, no la tengo.

El obstáculo principal para tenerla es que, como siempre, no sabemos de qué estamos hablando. Son los problemas de la literalidad: ¿solucionar el hambre es solucionar el hambre? ¿O es buscar la solución a la desigualdad de la que el hambre es, a su vez, el efecto más brutal y la metáfora más clara?

Creo que cuando hablamos de solucionar el hambre estamos hablando de –por lo menos– dos cosas muy distintas. Una es atacar el hambre como problema sanitario; otra, atacarla como la metáfora extrema de un estado económico y social, político.

La solución sanitaria consiste en conseguir que esos cientos de millones de personas que comen menos de 2.000 calorías diarias alcancen esa cantidad. Lo cual podría obtenerse si la cooperación internacional y las ayudas humanitarias llegaran al nivel que los países ricos suelen proclamar, por ejemplo: no sería ni tan difícil ni tan caro proveer de alimentos de bajo costo a esos millones. Y conseguir que, en lugar de vivir con menos de 1,25 dólares por día vivan con, digamos, 1,75, y que la desigualdad extrema se mantenga pero se manifieste en muchas otras cosas –y ya no en la absoluta falta de comida–. Sería un avance enorme para esos cientos de millones –salvaría tantas vidas– y también para el sistema de injusticia, que quedaría mucho mejor legitimado. Es la opción más difundida: los mecanismos de la beneficencia o caridad o –su nombre más actual– el asistencialismo. Nunca dije que no haya que hacerlo; digo, sí, que no alcanza.

Otra posibilidad es pensar el hambre como manifestación extrema de esa desigualdad, y suponer que no sirve solucionar la falta de ingesta si no se cambian las condiciones sociales y económicas que la producen: creer que los cambios políticos y económicos necesarios para establecer mayores niveles de igualdad traerán, entre sus numerosas consecuencias, el fin de cualquier hambre. Esos cambios son, por supuesto, difíciles de

imaginar: cómo se consigue el poder político necesario para modificar la forma en que se organizan los mercados mundiales —y, entre otras cosas, su producción y distribución de alimentos y demás bienes—. O, por decirlo de una forma modesta: nuestras sociedades.

Las últimas líneas de *El Hambre* aluden brevemente a esta cuestión:

Un nuevo paradigma es lo impensable. Es lo que constituye su dificultad y su atracción y su dificultad. Es lo que vale la pena de ser pensado.

Maneras, en síntesis, de forzar el reparto: que los bienes estén equitativamente repartidos, que el poder esté equitativamente repartido. Buscar la forma política que corresponda a una idea moral de la economía —y no la forma de la economía que corresponda a una idea moralista de la política. Así dicho parece una simpleza —y no sabemos—.

Yo creo esto, pero no sé cómo se hace. Tengo un deseo, no un camino. Y a nadie le gusta que le digan deseos sin decirle cómo podrían, si acaso, cumplirse.

Y entonces suelo recordar que hay momentos de la historia en que las sociedades tienen un proyecto claro de futuro y momentos en que no, y que cuando lo tienen desean llegar a ese futuro, construirlo, pero que cuando no lo tienen el futuro se constituye en amenaza: lo desconocido, lo temible. Y que ahora estamos claramente en uno de esos momentos —como bien puede verse por la hegemonía del discurso ecologista, gran heraldo del miedo al futuro— y que la construcción de un proyecto de futuro es algo que se hace de a poco y entre muchos y que vaya a saber cuándo cristalizará en un cuerpo de ideas lo suficientemente potente como para movilizar a quienes conseguirán implementarlas. Y que eso puede tardar años, siglos, pero que la historia no conoce ningún sistema que dure para siempre, y que el nuestro, que nos empeñamos en suponer eterno, no tiene ni cómo ni por qué ser diferente.

Todo lo cual, por supuesto, suena a paja distante y no disminuye la angustia de pensar que sí, que hay cientos de millones de personas que no comen y que esa señora sentada en la séptima fila acaba de enterarse —de enterarse en el sentido fuerte de enterarse— y lo piensa y lo toma en cuenta y no sabe qué hacer al respecto. Y entonces la desazón, el malhumor: saber es irritante y desmovilizador cuando no se proponen soluciones.

La culpa, sobre todo: la culpa es una reacción que te detiene, que te deja a solas con tus imposibilidades. Pornografía en estado puro.

Y eso no es bueno para un libro escrito bajo un lema casi claro, un libro que repite la pregunta que es mejor evitar: «¿Cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasan estas cosas?».

Pero, más allá o más acá de todo esto, espero que tanta cháchara pueda haber contribuido algo a hacer más visible el problema más brutal, más cacareado, más invisible de estos tiempos. Espero, también, que estas páginas sirvan –algún poco– para eso.

O no, pero eso depende de usted, no de nosotros.

Argentina



SE MIRA Y NO SE TOCA

Josefina Licitra

En Argentina, considerada el «granero del mundo», 10% de las familias no puede acceder a una cantidad suficiente de alimentos. Razones, mitos y verdades de una realidad difícil de medir, ya que en el país no hay cifras oficiales –creíbles– sobre pobreza y hambre.

El año 2015 fue un año paradójal en Argentina, al menos en lo que refiere al problema del hambre. Por un lado, la opinión pública se conmovió con la historia de Néstor Femenía, un niño de la etnia qom que murió de tuberculosis y desnutrición en un hospital de la provincia de Chaco, en el norte del país, y que con su muerte llevó el hambre –como tópico noticioso– a los medios de comunicación nacionales. Y por otro lado, mientras los debates por la muerte de Néstor seguían activos, el gobierno argentino recibió un premio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que distinguió a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por sus «progresos notables y extraordinarios en la lucha contra el hambre». El galardón aludía a que el país había cumplido con uno de los principales Objetivos de Desarrollo del Milenio: una serie de metas aprobadas en el año 2000 por 189 naciones, entre las que estaban reducir a la mitad la pobreza y el hambre en el mundo para 2015.

¿Cómo coexistían las muertes por desnutrición con este escenario de reconocimiento internacional? ¿Dónde estaba el error? ¿En los medios de comunicación que difundían –según el oficialismo– casos de desnutrición aislados con una «intencionalidad política destabilizadora»? ¿O en el premio de la FAO, basado en el análisis de estadísticas oficiales que desde hacía años despertaban polémicas, en tanto se creía que habían sido distorsionadas por el gobierno?

Hablar de hambre en Argentina supone, en primer lugar, hablar de la dificultad para medirla. Este problema existe desde el año 2007, cuando

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) fue intervenido en el marco de una operación más amplia que incluyó la modificación del índice de precios al consumidor (IPC) y la consecuente dificultad para medir las líneas de pobreza e indigencia, ya que la canasta básica total y la canasta básica alimentaria se actualizan teniendo en cuenta las cifras del IPC.

«En Argentina desaparecieron las estadísticas sociales, que son cruciales para evaluar la calidad de vida de una población», dice el sociólogo Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, un organismo privado, dependiente de la Universidad Católica Argentina, que desde el año 2004 realiza sondeos vinculados con desarrollo humano y la integración social en el país. «Controlar las estadísticas públicas constituye una ruptura con las convenciones científico-técnicas y además es una práctica perjudicial para una sociedad democrática, ya que impone un sistema engañoso en la producción de saberes sociales».

A lo largo de la última década, el observatorio coordinado por Salvia fue una de las fuentes más usadas por el «periodismo no oficialista» a la hora de buscar datos duros sobre pobreza en Argentina. En un estudio titulado «Progresos sociales, pobrezas estructurales y desigualdades persistentes», basado en una encuesta de 5.700 casos, el organismo advierte que al menos 10% de los hogares de los principales centros urbanos del país presenta déficits en alguno de los indicadores de pobreza estructural (entre ellos, la alimentación); y que desde 2011 viene aumentando el nivel de hogares con «inseguridad alimentaria», una categoría que consiste en «la reducción involuntaria de la porción de comida y/o la percepción de experiencias de hambre por problemas económicos durante los últimos 12 meses», y también en «la deficiencia en la dieta» de un grupo familiar. Para 2014, el año de la última medición, 13,8% de los hogares relevados padecía inseguridad alimentaria, mientras que en 2011 –por dar un punto de referencia– la cifra era de 11,2%.

La FAO, sin embargo, no tiene en cuenta estos datos porque no son oficiales y porque ofrecen demasiadas diferencias respecto de la información brindada por el gobierno. Según el Observatorio, por caso, en 2010 la canasta básica alimentaria estaba en 912 pesos y en 2014 estaba en 2.735 (200% más cara). Mientras que, según el Indec –el organismo oficial–, la canasta básica era de 575 pesos en 2010 y de 896 en 2014, es decir que no solo era más barata, sino que se había encarecido apenas en 55%.

Esta clase de falseamientos llevó al gobierno que inició su gestión en diciembre de 2015, encabezado por Mauricio Macri –de la coalición

Cambieamos—, a repensar el Indec a poco de asumir. La tarea, que hasta el momento es más bochornosa que eficaz, supuso un «apagón estadístico» que a la fecha de cierre de este texto lleva ya dos meses, y que busca suspender todo tipo de cifra hasta que se reacondicionen las variables de medición. Por fuera de esta intervención, hay otras áreas vinculadas a la lucha contra el hambre que aún no fueron tocadas porque incluso en la nueva gestión se las considera eficaces. Se trata del sistema de Asignación Universal por Hijo (que desde 2009 da dinero a las familias de bajos recursos de acuerdo con la cantidad de hijos que tengan) y del plan «El hambre más urgente», compuesto —entre otros— por proyectos como el Pro Huerta, un programa dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que enseña a cultivar la tierra y brinda educación alimentaria a poblaciones rurales y del área periurbana.

El Pro Huerta entrega semillas agroecológicas, y opcionalmente pollitos, a unos tres millones y medio de personas, y ayudó a que una buena porción de la población marginal entrara gradualmente en una instancia de «seguridad alimentaria». Así lo explicó Verónica Piñero, directora del Pro Huerta. «Hoy no creo que tengamos hambre en Argentina. Pero si sacás los hechos de contexto, como hacen muchas veces los medios de comunicación, lo que se logra es un impacto terrible», dijo en relación con la muerte del niño qom.

En Chaco, no obstante, la lectura de esta muerte —y de muchas otras que se dieron a lo largo de estos años— es distinta. Aída Ayala, quien en 2015 fuera candidata a gobernadora de esa provincia por la Unión Cívica Radical (UCR), relacionó la desnutrición en su región con una ausencia del Estado no solo en términos económicos sino también educativos. «Las poblaciones aborígenes están abandonadas, no hay un Estado presente ni decisión política», advirtió durante una conferencia de prensa dada en septiembre de 2015. «Ocultan que de 2010 a 2014 han muerto 2.000 niños. Son indicadores muy fuertes que tienen que llamar a la reflexión, a asumir que acá hay pobres. En la tierra del pan es difícil morir de hambre. El problema es la ausencia del Estado, que tiene que asegurar la vivienda y un sueldo digno, y tiene que aconsejar a las familias cómo comer».

Las palabras de Ayala son compartidas por parte del mundo académico. Carlos Carballo, ingeniero agrónomo y coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cree que la falta de educación alimentaria está estrechamente ligada al problema del hambre, aunque considera que ese factor no es el principal responsable de que haya población con

déficit alimentario. Para Carballo –y para muchos otros– el hambre es la consecuencia de una política pública que alienta los agronegocios en perjuicio del estómago de millones de personas. «El ‘reino de la soja’ de principios del siglo XXI, al igual que ‘el granero del mundo’ de principios del siglo XX, plantean la misma paradoja: mientras el tesoro nacional se enriquece con las divisas por exportación, así como antes lo hacía con las barras de oro, en el país hay hambre y desnutrición. Está claro que contar con recursos naturales adecuados, tecnología y conocimientos disponibles puede ser suficiente para producir grandes volúmenes de alimentos, pero eso no implica que sea suficiente para alcanzar la soberanía alimentaria de los pueblos».

Carballo y muchos otros expertos se detienen en la idea de «soberanía alimentaria»: un concepto que, junto con el de «seguridad alimentaria», creció en la última década y complejiza las discusiones en torno del tópico «hambre». La «seguridad alimentaria» fue definida por la FAO en 1974 como «el derecho de todas las personas a tener una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada y suficiente». Y supone que el hambre no se debe a la carencia de alimentos, sino a las dificultades de acceso a ellos. Y la «soberanía alimentaria» forma parte de un paradigma propuesto por las organizaciones campesinas en 1996, durante una Cumbre Mundial de la Alimentación, y consiste en «el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente». Dicho de otro modo, mientras que la seguridad alimentaria se centra en la disponibilidad de alimentos y en la posibilidad de comprarlos, la soberanía alimentaria hace foco en sus modos de producción y rechaza la importación de alimentos baratos y el imperio del agronegocio: una industria que manda en las bolsas de valores del mundo –tanto que la FAO y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señalan que en América Latina un dólar invertido en el sector agrario rinde más que un dólar invertido en un sector no agrario– y que empezó su itinerario más notable a principios de la década de 2000.

El periodista y escritor argentino Martín Caparrós habla de esto en su libro *El Hambre*, donde intenta entender cómo es posible que en el mundo se muevan fortunas en torno del comercio de granos, a la vez que hay 805 millones de personas que no tienen qué comer. Uno de los puntos de inflexión dados por Caparrós –y por muchos analistas– está en el año 2003, cuando una crisis financiera mundial transformó las materias primas en la mejor inversión posible para la especulación bursátil. Si en 2003 la inversión mundial en granos era de 13.000 millones

de dólares, en 2008 la cifra llegó a los 317.000 millones, es decir que aumentó 2.400%: un valor —dice Caparrós— 15 veces mayor que el tamaño del mercado agrícola global.

Los precios, en consecuencia, se dispararon. No solo por la incidencia de la especulación bursátil, sino por otros dos factores que ayudaron a inflar las cifras todavía más. Uno de ellos es el aumento del precio del petróleo (para trasladar los alimentos hace falta combustible y para controlar las plagas hacen falta pesticidas). Y el otro es la aparición de los agrocombustibles, una opción económica —al menos en comparación con el petróleo— que puso los granos en otra clase de competencia: como los agrocombustibles se hacen a base de etanol, que se obtiene del maíz o de la caña de azúcar, empezó a ser más rentable cosechar granos ya no para alimentar gente, sino para alimentar motores.

«Nuestros estómagos compiten con el de los automóviles», dice la nutricionista Miryam Gorban, directora de la cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Y luego da el siguiente ejemplo internacional, que Caparrós también usa para graficar en qué medida esta competencia es perniciosa para las personas. Estados Unidos produce 35% de maíz del mundo, y de esa producción hay 40% que, por ley federal, debe ser destinado a la elaboración de etanol. Como la demanda de etanol es alta, muchos granjeros del Medio Oeste se volcaron a producir prioritariamente una variedad —el maíz amarillo— que solo se usa para hacer agrocombustible. En cambio el maíz blanco, que se usaba para la alimentación —y que era exportado a México para hacer las famosas tortillas— bajó su producción y por lo tanto encareció su precio. Las tortillas se volvieron tan costosas que miles de mexicanos salieron a la calle en el marco de lo que se llamó la «revuelta de las tortillas».

¿Por qué, en cualquier caso, México no producía su propio maíz? Por la misma razón por la que otros países no lo hacían: la eficacia del sistema agropecuario estadounidense —alimentado por el alto desarrollo tecnológico y por grandes subsidios al agro— generó grandes excedentes que se exportaban a bajo precio a otros países y que hacían que la industria nacional de los países latinoamericanos no pudiera competir con esos valores. Como resultado, muchos campesinos tuvieron que vender sus tierras a empresas que ahora plantan con los ojos y el bolsillo puestos en el etanol, y no en el estómago de las personas. Según calcula Caparrós, con los 170 kilos de maíz que se necesitan para llenar un tanque de etanol-85, un chico puede sobrevivir un año entero. Y los casi 900 millones de tanques que se llenan al año en Estados Unidos alcanzarían para que todos los hambrientos del mundo recibieran medio kilo de maíz por día.

Este ejemplo ayuda a entender por qué es difícil pensar el problema del hambre sin centrarse en los modos de producción de la tierra. Y permite explicar en qué medida Argentina está encerrada en esa misma lógica que afecta al resto de América Latina. Argentina es un país agropecuario que sufrió un cambio en la década de 1990, cuando el neoliberalismo dio lugar a lo que se llamó la «agriculturización», es decir: el desarrollo de la llamada «patria sojera», que dejó el campo en manos de los grandes negocios.

La agriculturización tuvo tres consecuencias principales que remodelaron la estructura agraria y alimentaria en el país. La primera fue la concentración de tierras en manos de *pools* de siembra extranjeros: según el Censo Nacional Agropecuario 2002 —la cifra más reciente con la que se cuenta—, solo 2,1% de las explotaciones concentra 50% de la tierra. A su vez, esas grandes explotaciones están en manos de multinacionales que ni siquiera compran la superficie a trabajar: la arriendan a productores familiares y a pequeñas y medianas empresas que entregan sus campos a cambio de un pago fijo o de un porcentaje de la producción obtenida. El trabajo de esas tierras, entonces, no es hecho por sus propietarios sino por personal sujeto a contratos temporarios y mal pagos, y mediante tecnología —plaguicidas, fertilizantes, maquinarias, semillas transgénicas— que reduce al mínimo los requerimientos de mano de obra, por lo que la producción a gran escala se volvió fácil y barata. Además, el destino final de esas cosechas es el exterior: las exportaciones nacionales de productos agropecuarios superan el 60% del valor total de los ingresos nacionales por exportaciones.

La segunda consecuencia fue el desplazamiento de la ganadería y de cultivos menos rentables —como los de frutas y hortalizas—, pero necesarios para el alimento de la población. Hoy, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, 93% de la producción depende solo de cinco granos (soja, trigo, maíz, girasol y arroz), entre los que la soja representa 51% del total. Y solo 1,7% corresponde al resto de los productos salidos de la tierra —no del agua— y ligados a la canasta básica de alimentos de la población urbana.

La tercera consecuencia, finalmente, fue la migración de la población que vivía en el campo. Como solo 10% de los ciudadanos pertenece al sector rural —según datos que maneja el ingeniero Carlos Carballo—, los avatares de ese sector quedaron silenciados. Pero lo cierto es que, desde 2001 —cuando la crisis económica hizo eclosión—, y a lo largo de la década de 2000 —cuando estalló el modelo a gran escala y la llamada «agricultura sin agricultores»—, se fue del campo población joven y calificada que terminó buscándose la vida en ciudades superpobladas.

Esta dinámica migratoria hizo que todo un sector rural que normalmente podría tener acceso a una dieta saludable –como resultado del trabajo en el campo– terminara sometido a la lógica del hacinamiento urbano, esto es: al desempleo, al empleo precarizado y a la consecuente dificultad para acceder –entre otras cosas– a una buena alimentación. La socióloga Julieta Vera, miembro del Observatorio de la Deuda Social Argentina e investigadora especializada en mercado de trabajo, pobreza y desigualdad, intentó trazar un perfil alimentario de esta población urbana y llegó a las siguientes conclusiones: 30% de los hogares urbanos de clase baja y marginal presenta inseguridad alimentaria moderada o severa. Y, a su vez, el riesgo nutricional severo o moderado es mayor en los hogares con niños (17,9%) que en los constituidos solo por adultos (9,5%); y es mayor en los hogares con jefe subempleado o desocupado (34,6% presenta riesgos de inseguridad alimentaria severa o moderada) que en los hogares con jefe inactivo, sostenidos sobre la base de planes sociales (15,5%).

Todo esto, una vez más, sucede en un país donde solo en 2015 se cosecharon más de 100 millones de toneladas de granos. Una paradoja que fue trabajada por las nutricionistas Malena Giai (miembro del área de capacitación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) y Guillermina Veronesi (nutricionista de planta del Hospital Alemán), en un informe titulado «Disponibilidad de alimentos y recomendaciones alimentario nutricionales en Argentina». Giai y Veronesi concluyeron que, más allá de las falencias alimentarias que hay en el país, desde los medios de comunicación suelen hacerse cálculos engañosos. El de los 100 millones de toneladas de granos es uno de ellos. «A veces en los medios hay afirmaciones que provocan confusión», dice Giai. «Por ejemplo, la que dice que Argentina produce 100 millones de toneladas de granos que, transformados en alimentos, podrían alimentar a 400 millones de personas en el mundo. Si bien este tipo de afirmaciones son impactantes, no son del todo correctas».

Según Giai y Veronesi, el error radica en que buena parte de los alimentos que se toman en cuenta para hacer estas ponderaciones no es de consumo directo humano, sino que son insumos para la producción de alimentos, como es el caso de la soja. Y en que las ecuaciones para calcular las «millones de raciones» habitualmente se realizan a partir de las necesidades de calorías que potencialmente cubrirían esos granos de acuerdo con las recomendaciones internacionales, cuando en realidad –dicen las investigadoras– las personas no necesitamos solo una determinada cantidad de calorías, sino además una serie de nutrientes provistos por alimentos variados. «Que esas calorías correspondan a toneladas de granos no equivale a que provengan de carnes, frutas, verduras o leches», dice Giai.

Por esta razón, cuando se afirma que Argentina produce suficientes alimentos como para saciar a millones de personas, lo que se está diciendo en realidad es, por un lado, que hay insumos para la producción de alimentos de consumo humano. Y, por el otro, que hay disponibilidad de «calorías». Pero en ningún caso se está expresando qué tipo de alimentos son los que están disponibles. ¿Son variados, culturalmente adecuados y accesibles para la población? Para responder esto, las investigadoras buscaron información en las Guías Alimentarias para la Población Argentina y llegaron a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, en el país hay disponibilidad suficiente de aceites, leche, carne y huevos. Pero lo que falla es la accesibilidad, es decir, la posibilidad real de comprarlos. «Los datos de disponibilidad de carnes aparecen contradictorios con los indicadores sobre prevalencia de anemia en la Argentina —dice el informe—, que en el caso de niños menores de dos años llega al 34% (superando el 45% en algunas zonas), en mujeres embarazadas es del 30,5% y en mujeres de 10 a 49 años llega casi al 19%. Esto se puede relacionar con causas vinculadas al acceso económico a este tipo de alimentos, debido a que la disponibilidad, como es sabido, no garantiza que las personas puedan consumirlos diariamente, a pesar de ser un alimento básico desde el punto de vista nutricional».

En segundo lugar, el escenario es distinto en lo que refiere a las frutas y las verduras. Ahí, la disponibilidad disminuye desde el año 2000, a punto tal que es imposible cubrir las porciones recomendadas por las Guías Alimentarias para la Población Argentina: dos frutas medianas y 550 gramos de verduras por día. La razón de la disminución está inmediatamente relacionada con el agronegocio, ya que la producción frutihortícola fue desplazada por la producción de granos. Y esto tiene consecuencias en el consumo. Según datos de la segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada en 2009, solo 4,8% de la población argentina ingiere las cinco porciones diarias de frutas y verduras recomendadas.

Y en tercer y último lugar está el consumo de azúcar. Si bien no es un alimento de importancia nutricional, Giai y Veronesi analizaron su disponibilidad por la relación del azúcar con la producción de biocombustibles, ya que el bioetanol puede ser producido a partir de diversos cultivos, entre ellos la caña. Con la implementación de la ley 26.093 (Ley de Biocombustibles), a partir de enero de 2010 es obligatorio que por cada litro de combustible líquido, el 12% sea bioetanol. Y eso hizo que los productores evalúen reducir la producción de azúcar en beneficio de la producción de etanol y entrar en una lógica que —más allá de que

el azúcar no es relevante nutricionalmente como el maíz— sería similar a la del problema de las tortillas en México.

¿Es posible evitar la migración de la producción hacia los biocombustibles? Hay dudas al respecto, sobre todo porque los alimentos, en Argentina y en el mundo, están en manos de muy pocas empresas que piensan la producción de acuerdo con la rentabilidad y no con sus derivaciones sociales. En el caso del azúcar, por ejemplo, 85% de la producción y comercialización está en manos de una sola compañía (Ledesma). Además, hay una sola empresa (Molinos) que concentra 62% de la venta de pan, dos empresas (Sancor y La Serenísima) que controlan 78% de la producción de leche, tres empresas supermercadistas que concentran 83% de la venta de alimentos, y cuatro empresas que reúnen 40% de la cuota Hilton y 15% de la faena en el mercado de la carne. A su vez, todas ellas incluyen capitales extranjeros, ya que solo un tercio de las 500 empresas más grandes del país es argentino.

«Este esquema deriva en lo que se dio en llamar una ‘puja distributiva’ —explica la nutricionista Miryam Gorban—. Estos años, frente a la mayor circulación de dinero por aumentos salariales, por la Asignación Universal por Hijo o por los aumentos a los jubilados, hubo un aumento del consumo. Y las empresas, que deberían responder con mayor producción, respondieron con un aumento de precios para lograr mayores ganancias sin invertir. No tuvieron en cuenta, o en realidad no les interesó, que la inflación afectara a los sectores menos pudientes, dado que más de 60% y hasta 70% del presupuesto familiar del sector de menores recursos está destinado a la alimentación».

Según un relevo publicado por Gorban en su libro *Hablemos de soberanía alimentaria*, solo en el año 2010 Molinos, hoy en manos de Pérez Companc —que retiene la mayor parte de sus acciones—, aumentó sus utilidades en más de 1.000 millones de pesos, Sancor en 300 millones, Arcor en 418 millones, Ledesma en 158 millones y La Serenísima en 140 millones. Estas empresas, además, son las mismas que concentran las llamadas «compras a futuro», matriz de la especulación bursátil que también deriva en un aumento de los precios. «Eso sí, estas empresas formadoras de precios, que además son evasoras impositivas, tienen responsabilidad social empresaria y financian a través de diversas ONG el tema de la desnutrición infantil o diversos planes de ‘alimentación saludable’. Hasta ahí llegamos la paradoja y el cinismo», dice Gorban.

Dentro de este esquema, las clases bajas son las más perjudicadas, aun cuando el universo de la alimentación responsable tiene acá también su

letra chica. «La inseguridad alimentaria no solo afecta a los hogares de clase baja; si bien llegamos al ‘hambre cero’, el camino por recorrer hacia una ‘nutrición 10’ es aún muy largo», dice Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, y profesor asociado de la Escuela de Nutrición de la facultad de Medicina de la UBA. En su informe «Derecho a una alimentación adecuada en la infancia» –centrado en un rango de niños de dos a 17 años y publicado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina–, Britos arma una escala de consumo de cuatro categorías. De peor a mejor, son «insuficiente», «aceptable», «adecuado» y «óptimo». Luego advierte que en las familias pobres 75% del consumo semanal de frutas frescas es entre insuficiente y aceptable (mientras que en la clase media 61% es entre adecuado y aceptable); 81% del consumo de verduras es entre insuficiente y aceptable (en la clase media, 70% es entre insuficiente y óptima); 80% del consumo de carnes es entre adecuado y aceptable (en la clase media, 7% lo es); y 61% del consumo de lácteos es entre insuficiente y adecuado (en la clase media, 74% es entre óptimo y aceptable).

«Hay desigualdades entre estratos socioeconómicos en lo relativo al consumo de alimentos y nutrientes. En particular, los grupos de estratos sociales bajos tienen una tendencia mayor a llevar una alimentación desequilibrada y consumen pocas frutas y verduras», dice Britos en su informe.

Que cuenta, entre otros socios, con el respaldo de Coca-Cola. Una de las diez empresas que controlan la producción y el mercadeo de alimentos en el mundo.

VERÓNICA PIÑERO: «NO CREO QUE HAYA HAMBRE EN ARGENTINA»

Josefina Licitra

El problema no es el hambre, dice Verónica Piñero, directora del Programa Pro Huerta, dependiente del Ministerio de Desarrollo y Acción Social de la Nación y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de Argentina. Cuando Néstor Femenía, un niño gom de siete años, aparece en las tapas de los diarios por haber muerto con un cuadro de «desnutrición y tuberculosis»; cuando Mauricio Lucas –wichi, dos años– presenta un estado y un destino similares en un hospital de Orán, en la provincia de Salta; cuando meses después un bebé –Marcos Solís– muere en el mismo centro de salud por «desnutrición severa»; cuando todo esto sucede, dice Piñero, el problema no es el hambre sino la cultura, primero, y los medios después.

«Hoy no creo que tengamos hambre en Argentina. Pero si sacás los hechos de contexto, como hacen muchas veces los medios de comunicación, lo que se logra es un impacto terrible», dice Piñero.

El despacho de Piñero está en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Es un lugar amplio, con una pequeña mesa de reuniones y con el piso tapado de carpetas y cajas con semillas del Pro Huerta, un programa de políticas públicas que nació en 1990 con el objetivo de enseñar a cultivar la tierra y brindar educación alimentaria a las poblaciones diezmadas por el ajuste neoliberal encabezado por el ex-presidente Carlos Menem. Desde entonces –hace ya 25 años– y hasta hoy, tres millones y medio de personas reciben del Estado un set de granos mensual y, de modo optativo, una provisión semestral de pollitos para aquellos que quieran tener gallinas ponedoras.

«Lo cierto es que la desnutrición no es un estado al que se llega indefectiblemente por falta de acceso a los alimentos», sigue Piñero. «Podés tener una nutrición bastante equilibrada y saludable, pero si por otro lado tenés una enfermedad crónica que te impide asimilar los alimentos, o si un chico sufre parásitos también de manera crónica, a través de la diarrea y los vómitos se va a desnutrir».

El Pro Huerta, articulado en torno de una red que incluye 25 coordinaciones provinciales, 500 técnicos y funcionarios rentados, y 20.000 promotores voluntarios —en general, referentes barriales—, hizo que una buena porción de la población saliera del hambre y entrara gradualmente en una instancia de «seguridad alimentaria». Tanto es así que en 2015 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), valiéndose de cifras dudosas suministradas por el gobierno argentino, distinguió al país por haber llegado al «hambre cero» a través del sistema de Asignación Universal por Hijo (que da dinero a las familias de bajos recursos de acuerdo con la cantidad de hijos que tienen) y también mediante el programa El Hambre Más Urgente, encabezado por el Estado a través de esquemas como el que ofrece Pro Huerta: un programa que llega a familias de todo el país, pero que —dice Piñero— puede encontrar límites con ciertas comunidades originarias, que plantean algunas resistencias a cambiar sus técnicas y creencias ancestrales. Esas poblaciones, finalmente, son las que producen casos que después, según Piñero, son retomados por los medios de comunicación bajo la etiqueta del «hambre».

«No se trata de falta de acceso al alimento sino de cuestiones culturales. Y eso pasa con las comunidades originarias. Nosotros trabajamos con ellos, pero llega un punto en el que sus creencias o su cultura son más fuertes que lo que uno les pueda decir».

¿Qué es lo que ustedes les dicen?

Nos ha pasado ver a un chiquito con fiebre y decir que hay que llevarlo al médico, y recibir como respuesta que lo van a curar con rezos. Entonces, sí: cuando después el chico llega finalmente al hospital, lo hace en una situación absolutamente crítica. Pero no es que no tuvo acceso a los alimentos. Intervinieron varios factores. Yo he trabajado años en comunidades originarias, donde por ejemplo se toma al perro como si fuera un familiar más. Y probablemente ese perro tenga sarna, parásitos, otras enfermedades que en algunos casos les son traspasadas a los nenes. Y con esto de que no van a los hospitales, a veces nos resulta casi imposible cambiar esa situación. Es frustrante.

Para estas comunidades, el Estado no es un interlocutor válido.

No. La barrera cultural es muy fuerte. Y no abarca solo la profilaxis sino también los modos de producción. El que toda su vida fue agricultor, lo va a seguir siendo. El que fue recolector lo va a seguir siendo, y no vas a lograr que se ponga a sembrar. El que es pescador, nunca va a criar un

animal. Entonces tratamos de respetar esa marca cultural, pero a la vez no podemos desaparecer como Estado. Y buscamos los puntos en los que es posible una relación. Por ejemplo, trabajamos muy bien con todo lo relacionado con plantas medicinales. Pero los módulos de semillas no siempre los reciben.

Se pone de pie para buscar una bolsa de semillas. Piñero es una mujer delgada, de dedos finos y un rostro detenido en algo que no es tanto —o no solo— exceso de trabajo, sino más bien preocupación. La entrevista se hace dos días antes de un *ballotage* presidencial que promete definirse —como finalmente lo hará— con Mauricio Macri como nuevo mandatario de Argentina. Y ante la retirada del kirchnerismo, luego de 12 años en el poder, Piñero teme que su programa pierda financiamiento. Hasta el cierre de esta entrevista, sin embargo, no hubo novedades respecto de los destinos del Pro Huerta.

«Estamos alerta», dice Piñero, y entrega un paquete de semillas.

La bolsa tiene 14 variedades que se renuevan cada seis meses y que varían según la región. Junto con este combo, quienes se anotaron en el programa reciben además una capacitación dentro de las estaciones experimentales que el INTA tiene en todo el país. Después, alcanza con que haya una parcela —en escuelas, comedores, parroquias, hogares y asociaciones vecinales— para empezar a producir el propio alimento. El Pro Huerta incluye desde granjas convencionales hasta geriátricos que empezaron cultivando en canteros y terminaron ocupando una hectárea. Y puede leerse como el paso inicial de lo que se entiende como «soberanía alimentaria»: un objetivo perseguido principalmente por los movimientos campesinos latinoamericanos, que busca recuperar para las comunidades el concepto de agricultura familiar. La idea de soberanía, en este caso, se articula en torno a la posibilidad de decidir qué producir, para quién hacerlo, cómo llevarlo a cabo y con quiénes encarar el proceso productivo.

«En un comienzo, desde ya, los objetivos eran más inmediatos», dice Piñero. «Cuando surgió el Pro Huerta la gente pasaba hambre. Pero a medida que se solucionó esa inmediatez pudimos empezar a construir de otra manera».

El Pro Huerta surgió con objetivos urgentes. En 1990, el modelo neoliberal impuesto por el ex-presidente Carlos Menem, peronista, supuso un ajuste económico que dejó a buena parte de la población excluida del acceso a una alimentación básica. En ese entonces, el Ministerio de

Desarrollo Social —a través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria— empezó a distribuir cajas de alimentos secos (arroz, leche en polvo, fideos, aceite), y se decidió que Pro Huerta complementara esa oferta con un módulo de semillas y pollitos que ayudaran a completar la dieta con alimentos frescos. Ese material, a su vez, venía acompañado de un proceso de capacitación. Inicialmente la enseñanza apuntaba a los modos de producción, pero conforme se fue saldando la deuda más inmediata, las poblaciones comenzaron a tener otras demandas: querían comercializar los excedentes.

«Empezamos a capacitarlos para ir a canjear sus productos en ferias del trueque, y con los años los fuimos ayudando a comercializar los excedentes teniendo en cuenta los mismos pedidos que ellos hacían. Si en una comunidad nos dicen ‘queremos vender berenjena en escabeche’, les enseñamos a hacerlo porque deben ser conscientes de que si no lo producen bien pueden tener un impacto negativo. También debimos enseñarles a vender sus productos con base agroecológica, porque lucen distinto que las frutas y verduras que se venden en comercios tradicionales. La fruta puede estar picada, la lechuga puede tener los rastros del paso de un gusano por la hoja. Y eso, que a ojos de un consumidor es indicador de un producto de mala calidad, es en realidad un signo de lozanía: cuando la mercadería está sin marcas, es porque tiene exceso de pesticidas. Eso, finalmente, es lo que debieron aprender las familias cuando empezaron a negociar sus productos».

El problema es que la producción agroecológica es cara, y muchos productores deben tener miedo de no poder vender lo que ofrecen.

Ahí hay que ver qué concepción de la vida tiene cada uno. Vos hablás con un productor agroecológico y le dedica la vida. Nosotros, sobre todo en el Gran Buenos Aires, tenemos huertas urbanas y periurbanas. En las comunidades, donde venimos trabajando mucho, la cultura era la de fumigar y tirar un veneno que no solo va a la planta que consumimos, sino que es aspirado por los hijos de los granjeros. Entonces quizás tengan un ingreso menor por el volumen, pero le están salvando la vida al hijo, que a los 15 años no va a tener cáncer por exposición a los pesticidas.

Pero las urgencias económicas a veces hacen pensar a corto plazo.

A ver: somos conscientes de que el agronegocio sostiene buena parte de la economía. Pero todo depende de las dosis. Si tenés una enfermedad y el médico te da un antibiótico, el uso moderado va a tener un buen efecto

sobre vos. Entonces no decimos «no usen nada», pero a nuestros quinteros y huerteros sí, porque trabajan sobre espacios más pequeños y producciones más reducidas, y porque están dentro de ciudades donde vive el resto de las familias. Entonces no le podemos contaminar el ambiente a todo el mundo. Lo que hacemos es concientizar sobre el uso racional de pesticidas y fertilizantes. Si trabajan para una empresa, tienen que tener y exigir su ropa de trabajo. Y en cuanto a las comunidades, si bien siguen produciendo de modo convencional, lo que hacemos es poner cerca de su parcela otra parcela que ya sea agroecológica. Para que ellos vayan viendo, sin dejar de producir, cómo la otra parcela empieza a ser productiva. Y ahí van dejando el modo convencional.

Para un trabajador, podría ser más atractivo entrar en el circuito del agronegocio a cambio de un jornal. ¿Cómo se los alienta para que se queden trabajando en una huerta propia?

Además del kit de semillas y pollitos, está la posibilidad de acceder a un subsidio. Para eso, el agricultor familiar debe presentar un proyecto productivo explicando cuánto incrementaría su producción, dónde la comercializaría, a cuántas familias ayudaría... El dinero puede ir para armar un invernáculo o para montar un sistema de riego. En aquellas comunidades donde hay problemas de acceso al agua potable, lo que se financia son proyectos especiales que permitan a las familias tener acceso a agua con la que puedan regar y dar de beber a los animales.

Respecto de otros países, ¿cómo está parada Argentina en términos de seguridad alimentaria?

Está muy bien parada. En el Pro Huerta dictamos un curso de autoproducción de alimentos con la ayuda de la Cooperación Japonesa y la Cancillería Argentina—a través del FOAR [Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular]— y viene gente del resto de América Latina, Asia y el Caribe. Tenemos personas muy preparadas para la producción de alimentos. Lo que nos falta, y es a lo que apuntamos, es tener bancos propios de semilla.

Las semillas que usa el Pro Huerta no son excedentes de la agroindustria, sino que son agroecológicas. Las produce la FeCoAgro, una cooperativa de 400 pequeños productores de San Juan que se organizaron hace 25 años para vender las semillas al Pro Huerta. Ese es el primer paso de un objetivo mayúsculo: que cada productor genere su propia semilla y que de esa manera se genere la llamada «soberanía alimentaria». El esquema, de hecho, ya funciona en Haití, donde antes compraban las

semillas a Estados Unidos y hoy –tras la exportación del programa Pro Huerta, luego del terremoto de 2010– producen 13.000 toneladas de granos.

«Depender de Estados Unidos tiene implicancias en el precio y en el sometimiento de un pueblo. Por eso queremos tener más bancos de semilla en Argentina y rescatar cultivos que ya nadie hacía. Siempre queda alguna semilla para poner a producir», dice finalmente Piñero, y vuelve varias veces sobre la palabra «semilla», como si ahí estuviera el mito –también la metáfora– de un origen perfecto.

MIRYAM K. DE GORBAN: «ÉSTA ES LA PRIMERA GENERACIÓN QUE VA A VIVIR MENOS QUE LAS ANTERIORES»

Josefina Licitra

Miryam K. de Gorban, licenciada en Nutrición, presidenta honoraria de Médicos del Mundo y coordinadora general de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, habla del modo inquietante en que la industria alimentaria interviene en la salud de la población argentina.

En febrero de 2015, durante la inauguración de una embotelladora, la ex-mandataria Cristina Fernández de Kirchner habló con orgullo del *boom* de las «bebidas cola» y dijo que Argentina es el país donde más gaseosa se toma en todo el mundo. Sin embargo, este dato —al que puede sumarse otro: el país está segundo en consumo de galletitas— no es un indicador de prosperidad sino, por el contrario, un ejemplo perfecto de la parábola que traza el hambre en Argentina. Eso dice Miryam K. de Gorban: que el problema en el país no está vinculado tanto a la falta de alimento —ya no hay casos de hambre agudo— como al problema de la soberanía alimentaria, es decir: al sometimiento de la alimentación a los designios de la industria; al modo en que el mercado se mete en el estómago de la población hasta producir lo que Gorban llama «malnutrición».

«Esta es la primera generación que va a vivir menos que las anteriores. El concepto de ‘malnutrición’ supone problemas de obesidad, diabetes, cáncer, leucemia, abortos frecuentes, disfunciones tiroideas y hormonales, infertilidad, celiaquías y malformaciones que derivan todas de este modelo productivo».

Sentada en su sillón de cuero, en una casa apacible de Lomas de Zamora, en la zona sur del Conurbano bonaerense, Gorban usa los dedos para enumerar las infinitas plagas que vienen con el mercado alimentario. Y luego suelta un aluvión de datos que ayudan a entender de qué se habla cuando se habla de «industria» o de «modelo productivo». Gorban dice que solo diez empresas manejan la comercialización de los

alimentos en todo el mundo. Que, al ser fijadoras de precios, esas multinacionales lograron que solo durante 2007 —esa es la cifra más actualizada que Gorban maneja— se elevara el número de personas con hambre en el planeta en 133 millones, hasta alcanzar la cifra total de 982 millones. Dice que en Argentina la situación no es mejor: la comercialización de comestibles está en manos de seis grupos que administran entre 80% y 90% del mercado de consumo. Que de las 500 grandes empresas que hay en el país, 178 son nacionales y 322 son extranjeras. Y que de ellas solo ocho acaparan entre 50% y 90% del mercado en su rubro, por lo que fijan los precios con comodidad. Entre otras cosas.

Es un día de calor tórrido, y las cifras de Gorban parecen quedar suspendidas en el aire espeso. Se pone de pie. Enciende un ventilador. Es un turbo de la década de 1980, ubicado al lado de un televisor de varios años.

«El problema es esta caja boba: nos enseña a comer mal», señala Gorban, y vuelve a sentarse. «La publicidad, en especial la dirigida a la alimentación en los niños, está haciendo estragos en el mundo entero trayendo, sobre todo en los núcleos duros de la pobreza, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Ese problema, el de la malnutrición y la desnutrición crónica, que surge también de la mala conducta alimentaria, hoy acá es mucho más grande que el problema del hambre».

Pero la obesidad en la pobreza no está solo vinculada a la mala información. Las harinas son más baratas que los vegetales y las carnes.

Así es. Pero el modo de sostener ese mercado de comida de mala calidad es el marketing. Prendés el televisor y te venden comida chatarra argumentando que te da salud, vitalidad, que corrige tu intestino y que le da energía a tu pelo. Con todo eso, cuando finalmente solo podés comprar esa comida, lo hacés sin resistencia. El negocio del comercio de los alimentos es el que imprime las conductas alimentarias de los pueblos en general.

Gorban cita a Henry Kissinger, quien fuera secretario de Estado de Estados Unidos durante las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford. En la década de 1970, Kissinger dijo una frase —una de tantas— que hizo historia: «Controla el petróleo y controlarás naciones; controla los alimentos y controlarás pueblos».

«Kissinger apuntó no solo a los combustibles fósiles sino también a las tierras fértiles y a los bienes naturales», dice Gorban. «El maíz, la soja y

el trigo, el café, el cacao y el té, el azúcar, las frutas tropicales, la palma aceitera y la carne se convirtieron en los objetivos inversionistas. Pero esto no alcanzó: necesitaban manejar a su vez la comercialización a gran escala y el modelo de los supermercados se desparramó por todos lados. Hoy solo diez compañías concentran el mercadeo de alimentos y más de una de esas empresas forman parte de los fondos buitres que intentan asfixiar a nuestro país, además de ser evasoras impositivas, especuladoras, formadoras de precios, pero eso sí: con responsabilidad social empresaria, financian a través de diversas ONG el tema de la desnutrición infantil en Argentina. Estos mecanismos perversos llevan a países enteros a la malnutrición y hacen que hoy algunas de las mayores epidemias mundiales sean la obesidad y la diabetes sectorizadas socialmente. Hay una sociedad de capas medias y medias altas, de gran consumo de alimentos de valor nutritivo, y otra de capas bajas que no acceden a esa posibilidad. Por eso tenemos los ricos flacos y los gordos pobres».

Las políticas de «precios cuidados» instaladas por el gobierno anterior para controlar la inflación ¿no alientan un consumo saludable?

Esta política se pensó principalmente en función de productos comestibles, no de alimentos. Los «precios cuidados» fomentan el consumo de productos que están en las góndolas del supermercado. Entonces, cuando desde la cátedra decimos que la alimentación es el primero de los derechos humanos adquiridos, no nos referimos a los comederos sino a una idea de alimentación sana, segura y soberana.

Gorban nació en Santiago del Estero, una provincia pobre del centro de Argentina, y creció con una idea concreta del hambre. En su pago, el hambre no era una abstracción sino un horror visible en los ojos de las personas. Cuando creció, Gorban —maestra de grado— viajó a Buenos Aires, se formó como dietista y, décadas después, con la licenciatura en Nutrición ya terminada, entró en el terreno de la «soberanía alimentaria»: un concepto que fue mencionado por primera vez por los movimientos campesinos en la Cumbre Mundial de la Alimentación que se realizó en Roma en 1996 y que consiste en dejar de pensar el alimento como una mercancía.

«Contra lo que dice Kissinger, el alimento no puede ser utilizado como herramienta de dominio de los pueblos. Es vital para la vida de los pueblos y no debe estar sujeto a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Pensemos en el caso argentino: somos un país productor de alimentos que en las últimas décadas se volcó al monocultivo de soja, un *commodity* que no está vinculado a las necesidades del mercado interno

sino a las necesidades de exportación y de los otros países, y que encima supone la utilización desmedida de agrotóxicos. Además de un aumento de enfermedades crónicas no hereditarias, esto ha llevado a que disminuya la producción de carne, que forma parte de nuestra base alimentaria; de trigo, que también es básico en tanto sirve para hacer el pan... Por razones elementales de oferta y demanda, si hay poco de algo, ese algo se encarece, y la consecuencia es que nuestra canasta alimentaria hoy está muy por encima del nivel del salario, lo que impide un acceso real a esa canasta».

¿Se puede pensar la «sojización» de Argentina como el mayor de los problemas alimentarios que hay en el país?

A ver: el problema no es la soja, sino el modo capitalista y salvaje de producción, que está resumido en el proceso de sojización y que supone una concentración monopólica de la tierra, de la semilla, del transporte, del comercio exterior, y una alteración de las propiedades de los terrenos... Por no hablar de los agrotóxicos y la salud. Esto no es un dato menor: la producción de transgénicos está casi exclusivamente reducida en 97% al continente americano, mientras que en Europa, donde no están permitidos, la producción es limitada. Ya hay cinco agroquímicos declarados por la Organización Mundial de la Salud como probables cancerígenos, es decir que esto tiene impacto en nuestras poblaciones.

Entonces el problema sí es la soja.

No solo. La FAO también habla de los biocombustibles, que nosotros denominamos agrocombustibles, como actores determinantes de la seguridad alimentaria. Los agrocombustibles se producen a partir de alimentos esenciales como el maíz o la soja, o la caña de azúcar en el caso del etanol. Y esa producción entra en competencia con la de alimentos y termina provocando un aumento en el precio que incide en la composición de la canasta básica de muchos pueblos.

Gorban da un ejemplo. Dice que Estados Unidos destina 60% de la producción de maíz amarillo –transgénico– a la elaboración de combustible, y que esa administración de los recursos naturales impactó de tal forma en el precio del maíz que en 2008 la gente salió a la calle en el marco de lo que se dio en llamar la «revuelta de las tortillas».

«Pensemos además que el maíz es originario de México y gracias a los tratados de libre comercio ha perdido su nacionalidad, por lo que disminuyó la producción en su país y se hizo necesario importarlo para cubrir sus

necesidades de consumo, lo que a su vez generó una situación de dependencia que lleva a la inseguridad alimentaria», agrega.

En el caso de Argentina, al problema de los agrocombustibles se suma el de la posesión de la tierra. ¿En qué medida la estructura latifundista impacta en la seguridad alimentaria de la población?

Nosotros tenemos un problema muy viejo de latifundios que se ha incrementado en los últimos años. Hay una mayor concentración de la tierra, como en todo el mundo. Pero en nuestro caso además hay Estados que vienen y se apropian de tierras para cultivar para sus países, que se han quedado sin tierras. Tenemos una extranjerización de tierras en zonas claves como el Acuífero Guaraní, la Cordillera... Los chinos tomaron 300.000 hectáreas en Río Negro. Los Emiratos Árabes tomaron 200.000 hectáreas en Chaco... Entonces, nosotros tenemos la tierra, ¿pero en manos de quién está?

¿Eso impacta en los precios para consumo interno?

Por supuesto, porque el costo de la tierra ya no es caro: es brutal. Incluso ahora los extranjeros ni siquiera la compran. La arriendan por periodos determinados, la sobreexplotan y te la devuelven vacía. Desierta. Es como si vos alquilaras esta casa y después la entregaras hecha pedazos. Por eso, la soberanía alimentaria no puede plantearse en términos de alimentación: es un concepto político que incluye la defensa de los recursos naturales, de los derechos humanos, de la educación, la salud...

En ese contexto, ¿es posible que una familia del interior tenga una huerta propia y se autoabastezca?

Cada vez menos. El costo de la tierra no es menor. Si andás por el interior, vas a ver que se levantan barrios enteros uno arriba del otro, sin siquiera un pedacito de tierra para tener un jardín, ya ni digo para plantar un arbolito. El concepto de la huerta individual no existe. Sí en cambio hay margen para las huertas colectivas. Una de las propuestas que tenemos es la de rodear las ciudades con chacras que las abastezcan y que tengan el acceso directo más barato. Porque si tenés un tomate que viene de Salta y recorre 2.000 kilómetros para llegar a la capital, por supuesto que va a ser más caro.

El Programa Pro Huerta del INTA trabaja en ese sentido.

Exacto. El programa además tiene una apuesta interesante: ayuda a educar a la población en términos alimentarios. Durante décadas, ante

el problema del hambre vino la asistencia alimentaria y trajo bolsones de hidratos, harina, arroz, porotos, y no de alimentos frescos como verduras y frutas y carne. Y ese es el paradigma que hay que cambiar.

En su libro *Alimentos para todos o ganancias para pocos*, Gorban hace propuestas para paliar el hambre y las vincula a variables de pleno empleo, precios justos y salarios dignos. Habla de facilitar el acceso a la tierra a las familias campesinas. De dar apoyo crediticio a los proyectos de desarrollo local. De proteger humedales, zonas áridas, bañados y bordes de selva. De oponerse a la producción de agrocombustibles. De estimular la producción de semilla criolla y alimentos originarios con costo accesible. De recuperar y fortalecer las redes de ferrocarriles para transportar mercadería de un modo más barato. Y de entender, en definitiva, que el hambre es un concepto político. Y que en la abstracción de un escritorio está, a veces, el comienzo de la solución.

«Estos años hubo una evolución, pero todavía hacen falta más políticas que subsidien y estimulen a los pequeños y medianos productores. Y para que esto sea posible, hace falta un acceso a la tierra, al conocimiento, al desarrollo científico, al agua, a la luz...». Gorban vuelve a usar los dedos pero después los guarda, como si acabara de cerrar una ecuación. «Eso es soberanía alimentaria: un pilar indispensable de la democracia real», concluye.

DUEÑO VENDE

Josefina Licitra

En Florencio Varela, 16 familias se organizaron para vender su cosecha sin intermediarios y respetando ciertas pautas agroecológicas. El proyecto, que cuenta con apoyo estatal y tiene réplicas en todo el país, es la contraparte de un negocio que abusa de los productores y los consumidores, y que incumple pautas básicas de seguridad alimentaria. Frente a un escenario desmesurado y hostil hay, cada tanto, esta clase de historias con final feliz.

Luis Pérez tenía una quinta: así empieza la historia. Al igual que su padre, quien también había tenido una quinta —y al igual que miles de pequeños productores de Argentina—, Luis usaba el terreno para cultivar frutas y verduras. Sin embargo, no podía vender la cosecha porque no tenía camión para trasladarla, ni un puesto en un mercado para ofrecerla al público. Así que Luis, como tantos otros granjeros, se vio obligado a aceptar la oferta de un vecino.

«¿No querés que lleve algo de lo tuyo al mercado?», le dijo el hombre, en referencia al Mercado Central, el predio donde se comercializa buena parte de la fruta y la verdura que provee a los comercios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Luis respondió que sí. No tenía opción. Sin un flete propio, la única forma de colocar la producción era con la ayuda de intermediarios. Llenó entonces diez cajones con mercadería. El vecino se los llevó en la noche y a la mañana siguiente apareció con el dinero de la venta.

«Mirá, Luis, vendí el cajón a diez: son 100 pesos. Pero te voy a descontar el viaje, así que te quedan 70, ¿te sirve?».

Luis respondió que sí. No tenía opción.

«Fenómeno, entonces preparame para esta noche 20 cajones de radicheta», fue la siguiente orden.

Luis accedió, y al día siguiente cobró la mercadería —con los descuentos—, y al día siguiente volvió a llenar cajones y a cobrar, y así se armó un circuito que para Luis, y para muchos otros quinteros del país, inicialmente parece ideal: se trabaja la tierra durante el día, se entrega la producción en la noche y se recibe el dinero al día siguiente.

Hasta que una mañana cambiaron las reglas.

«No te traje la plata, Luisito, pero haceme otros cajones para esta noche y mañana arreglamos las dos cargas juntas», dijo el vecino.

Luis respondió que sí —no tenía opción— y empezó a cobrar día por medio. Pero más adelante las reglas volvieron a cambiar.

«Hagamos una cosa, Luis: te pago los sábados para no andar con la plata en el bolsillo porque capaz me asaltan y vengo del mercado con mucho dinero...»

Luis, que no tenía opción, dijo que sí, sin imaginar que el sábado siguiente el intermediario no aparecería con la plata. Luis fue a buscarlo a la casa, le tocó el timbre. Vio salir a una mujer.

«¿Quién es usted?»

Luis llevaba puesto el sombrero de ala ancha que usaba para trabajar la tierra. Se lo quitó. Mostró la cara vencida y los cabellos grises, pegados por el sudor.

«Soy el productor, le vendí verdura a su marido...»

«Ah, pero en este momento él está descansando...»

«Pero yo tengo a mi señora con el bolso esperando para hacer los mandados y no tengo un peso, ¿me podrías pagar?»

La mujer movió la cabeza en señal negativa.

«Mi marido trabaja toda la semana, hoy sábado no lo puedo molestar... Mejor péguese una vuelta a las seis de la tarde.»

Luis hizo cálculos. A las seis, la feria estaría cerrada y su esposa —Adriana— ya no podría hacer las compras. Pero respondió que sí porque no tenía opción, y volvió al atardecer sin sospechar que cuando finalmente

diera con el intermediario, quedaría de cara a una nueva sorpresa: la mercadería que normalmente estaba a diez –por cajón– había pasado a estar a cinco. ¿La razón? El vecino, simplemente, argumentaba que el precio había bajado. Y con esa estafa inauguraba una larga tradición para Luis y para todos los pequeños productores del país: arreglaran con quien lo hicieran, los intermediarios siempre decidirían, de un modo discrecional, cuánto le pagarían al productor.

«Yo he perdido fortunas por culpa de estos vivillos que tendrían que estar presos –recuerda Luis Pérez–. Pero no me quedaba otra, ¡si yo no tenía espacio de venta! El problema es que ellos estaban organizados para pagar menos. Y nosotros no estábamos organizados, éramos unos muertos de hambre desesperados por vender verdura. Hasta que nos pusimos de acuerdo».

En 2010, Luis Pérez se organizó junto con otros quinteros de Florencio Varela –la localidad del Conurbano sur donde tiene su terreno– para que no los siguieran estafando. Y así fue como nació la Asociación de Productores Hortícolas de la 1610, una de las tantas agrupaciones de horticultura familiar armadas en áreas periurbanas que, con asesoramiento estatal, producen de un modo responsable –en términos agroecológicos– y venden la mercadería evitando la formación de precios que supone la aparición de intermediarios, y que perjudica tanto la ganancia de los productores como el costo final de las frutas y las verduras.

Sentado a la sombra de un árbol, de espaldas a un campo donde se suceden varias formas del verde, Luis Pérez se acomoda el sombrero, toma un mate y hace números:

«El productor es una cadena que alimenta a siete familias. El aserradero al que le pagamos la jaula –dice en relación con el cajón de verduras– vive de nosotros. El fletero vive de nosotros. El changarín que descarga los cajones en el mercado y me cobra cinco pesos por cajón, y capaz que son 100 cajones, vive de nosotros. El que tiene puesto en el mercado y me cobra 25% de la venta vive de nosotros. Alumbrado, barrido y limpieza del puesto lo pagamos nosotros. Conclusión: de cada cajón que vendo a 100 pesos, me quedan 40. Y si tengo un socio, encima tengo que dividirlo por dos».

A metros de Luis hay varias jaulas apiladas. Representan, dice Luis, otra de las formas de abuso que los intermediarios ejercen sobre los productores. Por cada jaula, Luis paga 50 pesos. Si bien la Asociación prioriza la venta directa en los mercados, los excedentes se siguen ofreciendo a «culata de

camión», que es como se llama el sistema de intermediarios. Y es por eso que, cuando llega el camión, Luis entrega la verdura dentro de estas jaulas. Una vez en el mercado, el intermediario le entrega las jaulas al verdulero minorista a cambio de una «seña»: un dinero –otros 50 pesos– con el que se asegura que la jaula, cuando esté vacía, regrese al mercado. En sus locales, los verduleros apilan las jaulas y terminan devolviéndolas cuando ya no tienen un peso. Ahí, no las cambian por plata sino por verdura.

«Pero yo no veo un centavo de todo eso –dice Luis Pérez–. No veo las jaulas ni la plata. El de la mercadería es un negocio tremendo, por eso yo lucho para poder producir y vender directamente. Porque el proceso es abusivo para nosotros y para los que compran, que terminan pagando fortunas por algo que a nosotros nos sacan a dos pesos».

¿Y no es posible ir al Mercado y controlar eso?

«Yo no puedo ser inspector de mi propia verdura porque estoy trabajando al rayo de sol. Y la vez que fui para ver, no pude controlar. El vendedor le decía el precio al oído al verdulero, para que yo no escuchara a cuánto le estaba vendiendo. Otra vez me dijeron ‘Andá que es temprano, tomate un café con leche y medialunas que te invito yo’, y yo como un tarado me fui al bar de enfrente y cuando volví al puesto ya me habían vendido todo. Me estafaron como a una criatura».

Luis nació y creció en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Sus padres eran quinteros y él los ayudaba por fuera del horario escolar. Su vida siempre sucedió en el campo. Años después, cuando la familia se mudó a Florencio Varela, Luis conoció allí a la mujer que sería su esposa y terminó armando con ella –y luego con sus dos hijos– una nueva huerta familiar: un modo de producción que hoy es visto como uno de los principales garantes de la seguridad alimentaria en el país.

«La agricultura familiar es una forma de vida que tiene como principal objetivo la reproducción de la familia en condiciones dignas –explica Ana Broccoli, ingeniera agrónoma y directora de proyectos de investigación en semillas criollas y agroecología–. Tengamos en cuenta que estos productores cuentan con pocos recursos económicos y no pueden participar del proceso de modernización concentradora y excluyente que se está dando en el sistema agroalimentario y agroindustrial argentino. Por eso, si bien el rol de la agricultura en la sociedad es muy vasto, en lo que refiere directamente a los conceptos de seguridad alimentaria habría que considerar muy particularmente la obtención de los alimentos básicos de las familias productoras y sus comunidades».

En Argentina, 79% de los productores familiares tiene serias dificultades para incrementar su producción e incluso para mantener su actividad productiva. Este dato, tomado de registros del año 2006 del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (Proinder) y la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos (Sagpya), explica por qué desde ciertas dependencias del Estado se empezó a alentar, tímidamente, la creación de mercados locales donde los productores pudieran vender directamente el fruto de su trabajo.

Uno de los programas encargados de esta iniciativa se llama Cambio Rural, es coordinado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y nació en 1993 –la década de auge del modelo neoliberal–, con la misión inicial de sacar a los productores del hambre a través de iniciativas de corte asistencialista. En ese entonces, hubo 1.347 grupos de trabajo con los que se acompañó a más de 13.500 pequeños y medianos emprendedores de todo el país. Hoy, sin embargo, el objetivo es otro. El programa Cambio Rural II, nacido en 2014, ayuda a que los granjeros adquieran insumos y reciban asesoramiento para tener una producción rentable y responsable a la vez.

«Los asesoramos para que en la cadena de comercialización no se explote al productor ni se abuse del consumidor. Queremos que los productores puedan vivir por fuera de los intermediarios, y que no se intoxiquen ni intoxiquen a los consumidores con la mercadería que producen», explica Verónica Mautone, ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora, y miembro del grupo de Cambio Rural que trabaja con la Asociación 1610, formada a su vez por 16 familias, entre ellas la de Luis Pérez.

La 1610 toma su nombre de la calle principal en la que está ubicada la mayoría de las quintas. Se trata de un camino de tosca sin alumbrado, sin barrido y sin servicio de recolección de residuos –la basura se quema o se entierra–, que ahora, mediodía de un jueves de febrero, se parte al medio bajo el sol del verano. Detrás de los arbustos que delimitan las quintas llega, cada tanto, un vaho ácido y espeso: es la «cama de pollo», un abono natural, con fuerte olor a amoníaco, hecho de cáscaras de arroz y desechos de animales.

Desde que se formó, este corredor –el de la 1610– es visto como referente dentro del municipio de Florencio Varela. Estos quinteros fueron los primeros en organizarse, en bancarizarse y en adoptar una personería jurídica que les permitiera recibir del Estado instrumental (máquinas pulverizadoras, rollos de polietileno para los invernáculos, grupos

electrógenos para poder regar aun sin luz) y maquinaria —principalmente un tractor—. Luego, con la ayuda de Cambio Rural, empezaron a vender la producción en diversos mercados del Conurbano sur y la Capital. Entre ellos, la Feria Soberana de Lomas de Zamora y la feria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde ofrecen bolsones de diez kilos de mercadería a un precio notablemente más bajo que el de las verdulerías. Cuando empezaron —en 2014— vendían 100 bolsones; hoy, dos años después, venden 300.

«Si nos agrupamos podemos tener mayores márgenes —dice Luis Pérez—. No es que yo me quiera unir, no me interesa ‘unirme’ porque unirse significa perder tiempo y participar de charlas que preferiría no tener... Pero no nos queda otra. Lo que me pasa a mí les pasa a todos los productores: al que manda limones de Tucumán, al que manda patatas de Salta... a mí primo salteño le pagan dos pesos la patata y acá se vende a doce. ¡Eso es un abuso para todos! ¡Para mi primo y para el ama de casa que la compra! Después hay gente en quintas de La Plata a las que no podés entrar ni con carreta, y que regala la mercadería con tal de que alguien pase a buscarla. Eso después se vende a precios ridículos, y lo más increíble es que quizás el productor que cosechó ese tomate no tiene para comer».

¿Y cómo se soluciona esto?

Luis hace un gesto de asombro, como si soltara bombas por los ojos.

«¡Con control del gobierno! ¡Porque no puede ser que los intermediarios figuren como grandes productores cuando tienen media hectárea y llevan trescientos cajones de verdura todos los días! ¡Ellos, que son levantadores de mercadería, figuran como productores y a mí no me conoce ni el perro! ¡Yo soy productor! ¿Pero el cajón qué dice? ‘Noemí’. ‘Juancito’. ¡Los cajones los pago yo pero el sello es el de ellos, encima! Yo a veces les pido que me traten bien la verdura en el cajón, hasta que un día un levantador me dijo: ‘Luis, la verdura es tuya, pero una vez que está arriba del camión es mía. La carga como sea’. Esos son los levantadores de mercadería. Son grandes señores que después se van de vacaciones mientras que yo, que vendo comida, no puedo poner comida en mi mesa».

La casa de Luis es de un cemento sencillo y está rodeada de árboles y tierra sembrada. Verduras de hoja, repollitos de Bruselas, alcauciles, maíz, zapallos y tomates —entre tantas otras cosas— se alternan con plantaciones puestas con fines agroecológicos: flores de copete para

repeler ciertos gusanos; plantas de fornio cuyas hojas se usan para atar la verdura –y no usar hilos de plástico–; plantas de tabaco para hacer preparados de nicotina –que expulsan algunos insectos– y montañas de tierra enriquecida con levadura, minerales y cáscaras de arroz que los japoneses llaman «bokashi» y que Luis Pérez llama «el menjunje». Eso hay, entre otras cosas. Eso y una bicicleta playera, un grupo electrónico, un secador natural para frutas deshidratadas y dos terrenos aparte –uno abierto y otro cerrado como un invernáculo– donde, con ayuda del INTA, la asociación lleva adelante cultivos orgánicos. Los rindes de esas ventas se usan para cubrir el sueldo del contador y cualquier otro gasto fijo de la 1610.

«A nosotros nos ayudan en Cambio Rural y en el municipio, donde nos pidieron una libreta sanitaria, nos enseñaron a manejar el dinero, a elegir el mantel en contraste con la mercadería –cuenta Luis–. Pero nos pasa a nosotros porque fuimos a golpear puertas, si no el Estado no controla. Y tiene que controlar porque a la población la están envenenando, eh. Somos productores y también tenemos la nuestra, eh. A nosotros nadie nos controla si metemos o no veneno. Y si metemos veneno, no controlan cuántos días de carencia tiene –dice Luis en referencia al periodo que debe pasar entre la aplicación del veneno y la cosecha–. Hasta hace poco nosotros estuvimos equivocados de punta a punta. Tenemos un producto que se llama Desis, un insecticida con poder de volteo, que se suponía que tenía tres días de carencia. Hasta que hace poco lo analizaron y no eran tres días: ¡eran diez! ¡Y lo comiste vos! ¿Y quién nos controló? Nadie. Y si no me controlan yo hago lo que quiero. ¿Sabés cuántos dicen que venden agroecológico y no venden? Van al Mercado Central, compran una calabaza, le ponen un piso de aserrín o viruta y dicen ‘agroecológico’. Y están lucrando con la confianza de la gente. Está lleno de quinteros que tienen una parcela personal para su familia y otra llena de veneno para vender. Pero también el consumidor tiene la culpa, porque elige los tomates perfectos, la lechuga perfecta... Y lo perfecto tiene tóxicos. Si me decomisaran la mercadería y me clausuraran tres meses por vender verdura envenenada, ¿sabés cómo me curo? Eso es mejor que una aspirina».

Convencer a las familias quinteras de usar los productos químicos de un modo responsable es, en algunas oportunidades, una tarea ardua. En el caso de la 1610, al igual que en muchos otros, la organización está compuesta por 80% de familias bolivianas: gente que viene de ser explotada en su país o en el norte argentino, que llegó a la provincia de Buenos Aires para cumplir funciones de peón de campo y lentamente fue aprendiendo el oficio hasta tener sus propias tierras arrendadas. Allí, viven en

condiciones precarias. Al no ser sus tierras, y al tener contratos de alquiler cortos —a veces por un año, y sin escribanía de por medio—, no hacen grandes apuestas personales: sus viviendas son de chapa o de polietileno —el mismo que usan para los cultivos— y abusan de los herbicidas, insecticidas y fungicidas, que muchas veces guardan en sus propias viviendas.

«Al comienzo, junto con el INTA les decíamos que no los guardaran en sus casas porque son muy contaminantes; han tenido intoxicaciones —recuerda Verónica Mautone, de Cambio Rural—. Ahora están usando mucho menos porque los concientizamos y fiscalizamos junto con el INTA y las universidades. Les explicamos que no podemos jugar con la salud nuestra ni del consumidor, y de a poco los vamos convenciendo».

Las familias fueron aprendiendo a tratar mejor la tierra. A armar purines con plantas de ortiga o bolitas de paraíso; a usar fertilizantes como el bokashi; a respetar los tiempos de las plantas. Y a no engañar a los agrónomos que revisan la mercadería que luego sale a la venta. Cuando las frutas y verduras tienen demasiado brillo o no tienen insectos —ni siquiera un pulgón o una mosca blanca— o tienen alguna mancha de color, eso marca la presencia de agroquímicos.

«Una vez en una feria agroecológica vi una frutilla con una mancha azul, y eso es señal de que se usó un fungicida —recuerda Verónica Mautone—. Como la frutilla no se puede lavar después de la cosecha, porque se pudre, la marca de la fumigación se ve. Ahí hubo una levantada en peso porque no podemos seguir haciendo eso. Pero convengamos que nuestro seguimiento no forma parte de las generales de la ley. Normalmente, en las ferias donde ellos venden no se estudia si los productos tienen residuos químicos. Y en el Mercado Central cada tanto se saca una muestra, pero es aleatoria. El control no es fidedigno».

Verónica está sentada junto a Luis, a la sombra del mismo árbol. Alrededor corren perros y cada tanto, con el viento, llega en oleadas el sonido lejano de una radio evangélica. Verónica suele venir hasta acá dos veces por semana. Junto con otro compañero de trabajo, instruye a las familias de la 1610 en temas de agroecología, contratos, dinero y mantenimiento general de la agrupación. De un encuentro anterior quedaron dos pizarrones escritos con tiza. Allí se leen palabras como «concientizar», «consumidor», «logística» y «ferias». Gracias a estas clases, en la 1610 aprendieron, entre otras cosas, a mostrar mejor la mercadería y a sumar valor agregado a ciertos productos. El jueves próximo, por caso, Verónica volverá para hablar de la elaboración de salsa de tomate.

«Eso les permitiría aprovechar una parte de la producción que normalmente se tira», explica Verónica mientras Luis, ahora de pie, camina de un lado a otro y habla por teléfono móvil.

De modo entrecortado se escucha su voz: un recitado de verduras «albahaca, pepinillos, morrón» que Luis le está ofreciendo a un comprador mayorista.

«Escuchame, arrancamos sin precio, así que el precio pónganlo ustedes», dice Luis.

Así empiezan las cosas. Con un hombre a la sombra ofreciendo el fruto de su tierra a cambio, por el momento, de nada.

«De todos lados nos llaman –dice Luis cuando corta–. Nos dicen ‘queremos que la 1610 esté acá porque los productos son buenos’. La mercadería dura en la heladera 20 días, no se descompone porque no tiene químicos, no tiene hormonas... Ella crece y cuando le llega la hora, madura».

Luis dice «ella» y señala sus plantines de alcauciles. Si les mete hormonas, explica, la planta –«ella»– levanta temperatura y da sus frutos en invierno, cinco meses antes de la fecha que le corresponde de acuerdo con su ciclo natural. Esa aceleración deriva en un buen negocio. Si se vende en verano, cada alcaucil sale unos cinco pesos la unidad. Pero con el frío la cifra trepa a los 40 pesos, y es por eso que los productores suelen sucumbir a la tentación de la hormona: una aplicación –valor 300 pesos– puede ser la garantía de una ganancia importante.

«Si lo pensás dos veces, no ganás un peso alimentando gente con verdura sana. Pero yo decidí que mi cálculo tiene que ser otro. Si hago las cosas bien, a la larga me va mejor que antes y todo esto es una belleza... ¿Viste después de la lluvia, que salen los hongos en el campo? Nosotros resurgimos así», dice Luis y mira su granja.

Desde la sombra del árbol, lo que puede verse es un lugar iluminado y tranquilo. Tan tranquilo como una buena conciencia.

Bolivia



LOS NUEVOS INDÍGENAS URBANOS COMEN CHATARRA

Cecilia Lanza Lobo

La producción de alimentos de forma local ha disminuido en Bolivia; la fuente principal de ingresos de los campesinos bolivianos está dejando de ser la agricultura; cada vez se cultiva menos, y finalmente muchos abandonan las tierras; solo la gente mayor se esfuerza por consumir platos tradicionales, la obesidad va en aumento y la diabetes es una de las enfermedades más comunes en el país. Aunque todavía existen bolsones de pobreza, lo que hay en la actualidad no es hambre, sino al revés: hay dinero, nuevos patrones de consumo y mala alimentación.

«Cuando yo era niña, en cada casa había árboles frutales: ciruelos, durazneros, parrales, higueras, pacayes... ¡El pacay! Como leña, lo envolvían en sábanas grandes hechas de saquillos de harina. En cada esquina, desde La Alameda hasta Cala Cala, ¡en cada cuadra había pacay!», lamenta doña Blanca Arze, propietaria de un pequeño puesto de comida en el popular mercado 25 de Mayo en Cochabamba, una región antiguamente conocida como «el granero de Bolivia» y donde comer es todavía un culto, ya sea un plato bien servido en el puesto de doña Blanca o unas papas con oca humeantes, sazonadas con su propio sabor a tierra, sobre un awayo [tejido] indígena en el campo.

Blanca Arze, la «comidera» más reconocida del lugar, sabe lo que dice, y su experiencia cotidiana da cuenta de una situación que se repite en el resto del país: que la producción de alimentos propios ha disminuido, que el sabor es casi un arcaísmo, que solo la gente mayor recuerda y se esfuerza por consumir platos tradicionales y variados cuyos ingredientes están desapareciendo, que los jóvenes militan en la monotonía alimentaria y prefieren la comida «chatarra», que la obesidad va en aumento y la diabetes es una de las enfermedades más comunes, así como el cáncer es pan de cada día, y que aunque todavía existen bolsones de pobreza, en Bolivia lo que hay no es hambre sino al revés: hay dinero, consumo y mala alimentación. Malnutrición crónica.

EL MILAGRO DE LOS BONOS

En 2014 Bolivia recibió complacida el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que presentaba al país como el más exitoso de la región por haber reducido la pobreza 32% entre los años 2000 y 2012. Sin embargo, ese informe también indicaba que los 16 habitantes de cada 100 que lograron salir de la pobreza no se habían consolidado aún en un estrato medio en ascenso debido a la fragilidad de las condiciones estructurales y, por lo tanto, corrían el riesgo de recaer en la pobreza.

Efectivamente, en 2000 los datos señalaban que 42 de cada 100 bolivianos eran pobres, y cuatro años después, cuando se inició el gobierno del presidente Evo Morales, eran 38 de cada 100. Hoy, según datos oficiales, 19 de cada 100 personas en Bolivia son pobres. Eso quiere decir que en los últimos nueve años, 19 de cada 100 personas lograron salir de la pobreza y se encuentran en esa delicada franja social en ascenso.

Las razones que explican la reducción de la pobreza en el país, particularmente en los últimos años, son varias, según el economista Gonzalo Chávez de la Universidad Católica Boliviana. Por una parte está «el crecimiento de la economía boliviana, sobre todo en sectores de comercio, servicios y construcción, donde a pesar de la informalidad han mejorado los ingresos de las personas». La segunda razón coincide con la de varios otros analistas que apuntan tanto a las reformas que en 1997 dieron lugar a la creación del sistema de pensiones de jubilación (que se inició durante el gobierno del presidente Morales y redujo la edad de 65 a 60 años) como a la apuesta gubernamental por las transferencias monetarias condicionadas. Estas se iniciaron durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con el Bonosol, destinado a las personas de la tercera edad y hoy llamado Renta Dignidad, y continúan en la actualidad con los bonos Juancito Pinto para los estudiantes de primaria y Juana Azurduy para las madres en gestación y sus hijos hasta los dos años de edad.

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, asegura que estos beneficios, que llegan a 42% de los diez millones de habitantes que tiene el país, han permitido mejorar las condiciones de vida de los bolivianos y reducir la pobreza. Pero el economista Gonzalo Chávez cree que la pregunta debiera ser más bien: «¿Cuán sostenible es que esa gente se mantenga por encima del umbral de dos o tres dólares por día si esto no está vinculado al ciclo de las materias primas? Es decir, ahora que el precio [de las materias primas] está bajando, probablemente la gente

vuelva a un estado de pobreza. Eso es lo que ha ocurrido en Brasil, y en Argentina hay un fenómeno similar».

Efectivamente, 18% de los ingresos que el país recibe por la venta de hidrocarburos —que representa 9,17% del presupuesto general del Estado— se va en aquellos bonos. De allí que aquel informe del PNUD que colocaba a Bolivia como un país exitoso en la disminución de la pobreza alertara al mismo tiempo acerca de la fragilidad de ese cambio. Aquellos ciudadanos ascendidos al sector medio podrían recaer en la pobreza por estar amarrados a la renta hidrocarbúfera, dependiente a su vez de los vaivenes del mercado internacional.

Esto hace prever que el gobierno del presidente Morales pueda dar un giro respecto de la fuente de generación de ingresos que sostienen los bonos, a los que se atribuye buena parte del salto fuera de la pobreza. Ese cambio apunta hacia el Oriente del país, donde se ha instalado la agroindustria de soja, caña de azúcar, girasol, maíz, arroz, sésamo, trigo y frijol. El presidente Morales ya ha expresado su intención de ampliar la frontera agrícola en diez millones de hectáreas en la próxima década, a pesar de las críticas de algunos sectores sociales debido a las implicancias que tendría esa medida. A pesar de los datos relativamente alentadores y de los esfuerzos gubernamentales, Bolivia continúa estando entre los países pobres de la región si bien se ha alejado del extremo más pobre. Según el estudio del Banco Mundial «Los olvidados. Pobreza crónica en América Latina y el Caribe» (2015), las tasas globales de pobreza crónica en Bolivia son cercanas a 2%, pero esta se triplica en el área rural con 20% más de pobreza que en los centros urbanos. La media para América Latina es de 21%. Uruguay, Argentina y Chile ostentan las cifras más bajas (alrededor de 10%) y, en el otro extremo, Nicaragua, Honduras y Guatemala muestran las tasas más altas (37% en Nicaragua y 50% en Guatemala).

«LOS AGACHADITOS»

Aún insuficiente y todavía frágil, ¿cómo se refleja la disminución de la pobreza en la mesa de los bolivianos? Si la pobreza ha disminuido, ¿el hambre también?

Miguel Urioste, experto en temas de desarrollo rural y reforma agraria e investigador de la Fundación Tierra en La Paz, cree que a pesar de todo los bolivianos estamos mejor que hace 30 años y que, por ejemplo, si la comida de un albañil antes consistía en un pan con plátano y una gaseosa (735 calorías, la mitad de ellas las aporta el refresco lleno de

azúcar), hoy ese trabajador come en «los agachaditos»: cualquier vereda en las calles de la ciudad de La Paz donde se ofrecen platos completos, generalmente tradicionales, de carne, arroz, papa, cebolla y tomate (507 calorías más nutritivas) a menos de un dólar, y donde se come «agachadito» mirando a la pared. «No es lo ideal pero estamos mejor», opina Urioste.

Para Gonzalo Flores, experto en asuntos agrarios y ex-representante asistente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia, dos datos son suficientes para saber si el hambre ha disminuido o no en Bolivia: la desnutrición crónica (baja talla para la edad) en menores de cinco años, que según él debe estar por debajo de 5%, y el hecho de que no nazcan niños con menos peso del que deben tener al nacer (desnutrición aguda).

Veamos entonces algunos datos, a pesar de su dispersión. La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud es de 2008; sus resultados, sin embargo, aún se mencionan para medir avances y retrocesos. En dicho estudio, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años en Bolivia era todavía de 27%. Datos más recientes del Programa Multisectorial de Desnutrición Cero del Ministerio de Salud comparan los años 2007 y 2012 y señalan que la desnutrición crónica en niños menores de dos años se redujo de 23% en 2007 a 16% en 2012. Por su parte, Unicef apunta que la desnutrición crónica entre niños y niñas menores de tres años en Bolivia disminuyó de 42% en 1989 a 18% en el año 2012. Unicef igualmente indica que la probabilidad de que un niño o niña menor de tres años padezca desnutrición crónica es casi el doble en las zonas rurales (25,9%) que en las zonas urbanas (14,6%).

Entonces, si consideramos que en 1970 en Bolivia 36 de cada 100 niños menores de cinco años tenían desnutrición crónica y que 45 años después son 27 de cada 100, efectivamente hemos mejorado pero lo hemos hecho muy lentamente. Este progreso ha sucedido particularmente en las últimas dos décadas, de acuerdo con el último informe de la FAO «Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo» (SOFI-2014). El resultado es que el porcentaje de personas desnutridas se ha reducido de 38 cada 100 en 1990-1992 a 19 cada 100 en 2012-2014. Bolivia ha logrado cumplir la meta del milenio, que era alcanzar ese 19%, «pero es distinto lograr un 0%. Ningún país debería tener más de 2% de desnutrición crónica», asegura el experto Gonzalo Flores.

Pero entonces, ¿qué sucede en Bolivia? ¿Dónde está la desnutrición? La respuesta se encuentra en gran medida en el área rural donde la pobreza

se triplica, la extrema pobreza afecta a 37 de 100 indígenas y donde 26 de cada 100 niños todavía sufren desnutrición crónica (según datos de Unicef). Y es que, como afirma el economista Gonzalo Chávez, el asunto de la pobreza debe mirarse desde dos perspectivas: «La de los ingresos —que sin duda ha mejorado en los últimos años— pero también la de los servicios básicos, y allí probablemente los resultados no sean tan alentadores».

Efectivamente, más de 2,5 millones de bolivianos no tienen agua potable y la mitad de la población (50,7%), vale decir cinco millones de personas, carece de servicios de saneamiento (alcantarillado y servicio sanitario). En el área rural la situación se agrava, pues más de 60% de sus habitantes no cuenta con alcantarillado —según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas—, el uso de letrinas es extendido y en muchos casos no existe cuarto de baño. La falta de acceso y la precariedad de estos servicios afectan directamente tanto a la salud como a la inseguridad alimentaria. Los resultados más visibles son la diarrea aguda y la malnutrición crónica. De hecho, la primera causa de muerte de niños menores de cinco años en Bolivia sigue siendo la diarrea (8,5%), que afecta sobre todo al área rural (10,4%), según datos del Ministerio de Salud.

Sería interesante preguntarse qué están haciendo los bolivianos —sobre todo, quienes salieron de la pobreza— con aquellos nuevos ingresos que aparentemente han mejorado sus condiciones de vida. Pues si antes no era posible, hoy los pobres podrían enviar a sus hijos a la escuela liberándolos de la necesidad de trabajar junto a ellos, podrían proveerles los materiales escolares necesarios y podrían comprar herramientas para producir más alimento en el campo; asimismo, podrían comprar más alimento en los centros urbanos y comer tres veces al día, podrían también mejorar sus condiciones de higiene para evitar enfermedades como la diarrea y así enfermar menos y rendir más.

Una parte importante de aquellos cambios se ha producido aunque, dados algunos datos relativos a la salud y la alimentación, la pregunta se reitera: ¿ese mayor ingreso relativo ha permitido mejorar sus condiciones de vida y salud? ¿Permite un mayor acceso a los alimentos? Más aún, ¿garantiza una mejor alimentación?

LA MADRE TIERRA

Las tierras del altiplano boliviano han tenido tradicionalmente muy baja productividad debido a las condiciones adversas del medio geográfico,

porque «¿quién cultiva a 4.000 metros de altura?», exclama Miguel Urioste. Luego explica que esta es una situación que puede revertirse y que, de hecho, países vecinos con características similares –aunque menos complejas– lo han hecho. Pero en Bolivia, las prácticas heredadas de los antiguos pobladores indígenas que cultivaban la tierra de manera eficiente en distintos pisos ecológicos, utilizando además complejos sistemas de riego, se han empobrecido y finalmente abandonado.

Aun con escasa productividad, las tierras altas fueron cultivadas pero han sido sobre todo los valles centrales de Bolivia los que concentraron los campos de cultivo. A partir de los años 40 y 50, la producción agropecuaria se trasladó al Oriente del país, siguiendo las políticas nacionales de colonización de aquellas tierras bajas hasta entonces desvinculadas de la nación y con un inmenso potencial de desarrollo agropecuario.

La Reforma Agraria de 1953, sucedida como parte de la Revolución Nacional de 1952 que devolvió las tierras a los indígenas y cambió su identidad de indígenas por «campesinos», pronto dejó de ser prioridad para el gobierno revolucionario, de modo que las tierras del Altiplano y los valles quedaron un tanto abandonadas. Esa es la razón que explica, según Urioste, la subutilización de estas áreas inclusive hasta el presente, aunque haya hoy otras razones, como la importante migración hacia las ciudades.

Desde aquellos años, la mirada de los gobiernos nacionales –más interesados en la generación de divisas a través de la explotación minera que en la tierra, e impacientes por lograr un desarrollo acelerado– estuvo puesta en los campos del Oriente. Allí comenzó a diseñarse el «modelo de desarrollo agrario-capitalista» que ahora predomina en el departamento de Santa Cruz, convertido en el centro de producción agrícola del país. De los 3,2 millones de hectáreas cultivadas que hay en Bolivia, 2,8 están en el oriente, básicamente en Santa Cruz. Se trata de grandes extensiones de cultivos básicamente vinculados con el agronegocio internacional.

De modo que la colonización de las tierras bajas del Oriente prevista hace más de 60 años por los distintos gobiernos nacionales funcionó. La pregunta es ¿cuáles han sido los resultados? «Uno podría decir que ese modelo ha sido exitoso», comenta Urioste, pues Santa Cruz es en Bolivia (junto con El Alto en La Paz) el principal centro de atracción migratoria del país, con un relevante desarrollo local cuyo sustento principal, aunque no exclusivo, es la agroindustria y la producción de alimentos.

Entonces, si la tenencia de la tierra cultivada en Bolivia está mayoritariamente en manos de empresarios agroindustriales del Oriente, que básicamente producen soja, sorgo, girasol, caña de azúcar, maíz, trigo y arroz, y considerando que ese no podría ser nuestro único alimento ¿quién da de comer a los bolivianos y qué es lo que comemos?

Hace 30 años no había duda al decir que los principales proveedores de la canasta básica familiar boliviana eran los campesinos agricultores bolivianos. Ya no. De las 872.641 unidades productivas que hay en el país, 94% corresponde a los pequeños productores familiares, 5% son medianos y 1% corresponde a las grandes unidades productivas. Solo 13% de las unidades productivas en Bolivia están concentradas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, pero ocupan 73% de toda la superficie cultivada del país. De los 3,5 millones de hectáreas que se cultivan en Bolivia, 69% están en Santa Cruz. Tal es la relevancia de la producción agropecuaria particularmente cruceña que ese 1% que corresponde a las grandes unidades productivas ubicadas en esa región produce 67,5% de toda la oferta nacional. Eso quiere decir que de las 18 toneladas de alimentos que Bolivia produjo el último año (2014-2015), 67,5% salió de las grandes unidades productivas del Oriente.

Los medianos y pequeños productores dispersos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Oruro completan 32,5% de la producción agropecuaria boliviana que, a decir tanto de los expertos como de las vendedoras en los mercados del país, resulta insuficiente para cubrir la demanda local.

De manera que la tierra en Bolivia por un lado es menos productiva en la parte alta, no solo por las condiciones del medio sino porque las políticas orientadas a cambiar las condiciones productivas —léase riego— han sido escasas. Hay que decir que en gran parte del país aún se produce a secano. Por otra parte, en el Altiplano y los valles la tierra está subutilizada y, paradójicamente, junto a la reforma agraria que entregó tierras a los campesinos, sucedió también otro fenómeno: la migración a las ciudades como parte de ese proceso político de apropiación del país y también como parte de las políticas de colonización del Oriente. Con el Oriente como polo de producción agropecuaria vinculada al agronegocio rentable, con ausencia de riego y políticas productivas y, paradójicamente, con más dinero en el bolsillo, los campesinos agricultores ya no trabajan la tierra como antes. Ya no son los principales proveedores del alimento de los bolivianos pues prefieren migrar.

EL RESIDENTE

La migración campo-ciudad no es nueva. De hecho, se trata de un «ida y vuelta» constante que, en palabras de Miguel Urioste, tiene como protagonista principal al «residente»: la persona que «siendo de origen campesino y teniendo tierras, reside en la ciudad y por lo tanto es un ciudadano que de vez en cuando va a la comunidad y de esa manera vive una ambivalencia entre el mundo urbano y rural». Es un fenómeno que el director general de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRT), Lucio Tito Vilca, identifica como «migración itinerante»: el campesino «va, siembra y vuelve», explica. «En la zona andina no es como en los valles que hacen dos, tres cultivos al año y están ahí permanentemente; en la región andina es solo un cultivo al año, entonces los meses de estiaje (mayo, junio, julio, agosto), cuando no hay producción, salen a las ciudades para trabajar de lo que se pueda y vuelven», alega.

Esta situación ha dado lugar a otras dos características que Urioste señala como «multiactividad» y «multirresidencia». Los agricultores son a su vez choferes, artesanos, obreros o comerciantes, del mismo modo que las mujeres son comerciantes, vendedoras ambulantes o artesanas o se emplean como trabajadoras del hogar. La «multiactividad» forma parte del enorme empleo informal o «autoempleo» que en Bolivia ocupa a más de 70% de la población económicamente activa —según datos del Observatorio Boliviano del Empleo y Seguridad Social del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) y del Instituto de Estudios de Avanzados en Desarrollo (Inased)—, cuyo ingreso es variable e incierto y que no accede a los beneficios de la seguridad social.

La excepción son aquellos nichos de producción de soja, quinoa y coca, quizás la producción lechera del norte de La Paz y algunas frutas, que permiten una agricultura a tiempo completo y rentabilidad, acumulación y generación de excedentes en torno de esa actividad. «Se trata de productores que han encontrado en un *commodity* una opción de articularse a un mercado internacional de manera más o menos rentable y solvente para la familia, aunque ocupen el último eslabón de la cadena de exportación capitalista», asegura Urioste. Desafortunadamente, esos agricultores campesinos son pocos. Según datos del Censo Agropecuario, la gran mayoría de los productores agropecuarios bolivianos —94 de cada 100 unidades productivas— son pequeños. El estudio de 2015 «Marginalización de la agricultura campesina e indígena», de la Fundación Tierra, identifica «12.000 productores de *commodities* (1,4%) dirigidos a

la exportación (cacao, café, soja); aproximadamente 61.000 productores *mercantiles* (7%), dirigidos principalmente al mercado (arroz, maíz, hortalizas, frutas, etc.), y unos 780.000 productores de *subsistencia* (91%), que básicamente producen para sí mismos (papa y tubérculos, yuca, camélidos, etc.), en economías fundamentalmente locales».

La migración itinerante es también reconocida por Tito Vilca, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, quien afirma que estaría dando lugar a que los campesinos migrantes multirresidentes poco a poco abandonen a sus animales de traspacio y a que, por tanto, «la oferta de alimento disminuya. Porque como el campesino agricultor ya no está permanentemente en el campo, se deshace de sus animales de pequeña escala (ovejas, gallinas) y los vende pues no hay quien cuide». Añade que así estaría desapareciendo, por ejemplo, el huevo tradicional, «más sano, pues lo que conocemos es el huevo industrial».

De modo que los hechos parecen dar la razón a quienes aseguran que hoy en Bolivia «no es negocio ser agricultor familiar campesino», pues a pesar de los esfuerzos del gobierno por impulsar algunos proyectos de desarrollo productivo, los campesinos prefieren usar ese dinero comprando un auto, un minibús o un pequeño terreno en la ciudad (como señala en la entrevista Miguel Urioste).

La explicación recae en el mercado. Al tener Bolivia un dólar muy barato, la importación de alimentos resulta conveniente, pero ciertamente perjudicial para el pequeño o mediano agricultor campesino que no puede competir con las importaciones, el contrabando y los subsidios del gobierno a importadores y consumidores. Todos esos aspectos, aseguran los analistas, destruyen el aparato productivo interno.

La migración rural-urbana, entonces, tiene como consecuencia un hecho determinante que cae en cascada: la fuente principal de ingresos de los campesinos en Bolivia está dejando de ser la agricultura en muchos lugares del país, porque tienen otras fuentes de ingreso más rentables. Por lo tanto cultivan menos y finalmente abandonan la tierra; hay más dinero y esa disponibilidad de los pobres de comprar más lleva a nuevos patrones de consumo. Sucede entonces un problema: en Bolivia los ingresos se han multiplicado gracias a la renta de los hidrocarburos; hay más dinero en el bolsillo, pero no hay producción que haga sostenible esa ventaja. De modo que, con ese dinero, quienes salieron de la pobreza hoy compran televisores, karaokes o automóviles que incrementan su bienestar material pero, a pesar de los modestos avances gubernamentales, no resuelven aún sus necesidades básicas.

Según el informe de actualización 2014 de los Objetivos del Milenio de la Organización Mundial de la Salud relativo a los «Progresos en materia de agua potable y saneamiento» en América Latina y el Caribe, Bolivia y Haití tienen los niveles más bajos de cobertura de agua y saneamiento. Comparten esa situación con el África subsahariana, a pesar de que Bolivia se encuentra entre aquellos países que «mejoran adecuadamente». Tales mejoras resultan insuficientes pues recordemos que la primera causa de muerte de niños menores de cinco años en Bolivia sigue siendo la diarrea. De modo que en Bolivia se produce una suerte de despilfarro que prioriza el consumo de bienes materiales por sobre los servicios básicos.

Así, los pequeños agricultores campesinos bolivianos, convertidos en trabajadores informales urbanos y vinculados al consumo en un mercado nacional abarrotado de una gran cantidad de productos importados, también habrían cambiado sus patrones de consumo alimentario al sumarse a la masa del consumo uniforme. «Tenemos una oferta de alimentos nunca vista anteriormente», reconoce Lucio Tito, director de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. La pregunta es: ¿de qué están abarrotados los mercados bolivianos?

Doña Blanca en el mercado 25 de Mayo de Cochabamba, igual que la señora Ely en el mercado norte de La Paz, o Martha en el mercado de Los Pinos en la zona sur de La Paz, y prácticamente todas las vendedoras en los mercados del país, se quejan de estar «inundadas» de productos peruanos, chilenos y argentinos. El propio Lucio Tito recuerda su experiencia con un agricultor campesino en el Perú que le contó cómo preparaba una importante producción de papa para el mercado Rodríguez de La Paz, el más importante de la capital de Bolivia. «¡Papa! ¡Cebolla estamos importando!... No puede ser», se queja doña Blanca, que no puede creer que el valle cochabambino, tradicional productor de una abundante cantidad de verduras, frutas, granos y hortalizas, haya renunciado de tal manera a su fertilidad.

La canasta básica alimentaria boliviana, con ligeras variaciones por ciudades, cuenta aproximadamente con 23 productos que se consumen en mayor cantidad en este orden: papa (tunta y chuño), pan, azúcar, banana o plátano, carne de pollo, arroz, yuca (papalisa, oca, camote y otros), carne de res, maíz, aceite, fideos y pastas, carne porcina, cebolla, harina de trigo, tomate, zanahoria, carne de pescado y quinoa. De los 19 productos de origen agrícola incluidos en esta canasta básica, 11 están considerados en el Censo Agropecuario como parte de la oferta de 26 productos

agrícolas para los cuales se toma en cuenta la época de estiaje, es decir, los meses en que un producto no se cosecha (de junio a noviembre). Para los otros –como el tomate, que también escasea de acuerdo con la época–, no se hace esa consideración y su importación legal está permitida.

La cebolla, por ejemplo, cuya época de estiaje se tiene en cuenta y cuya importación controlada también es permitida, es sin embargo introducida al país de contrabando durante todo el año pues la producción local no abastece al mercado nacional, según señalan las vendedoras de los mercados. Los productores reclaman, pues aseguran que no es que no haya oferta local sino que la cebolla que ingresa al país vía contrabando es simplemente más barata, y contra eso no pueden competir.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, cada boliviano consume al año 102 kilos de papa, 43 kilos de pan, 38 kilos de azúcar, 35 kilos de plátano, 34 kilos de pollo, 33 de arroz, 11 de aceite, 9 de fideos y pastas, 8 de carne de cerdo, 8 de cebolla, 6 kilos de harina de trigo, 6 de tomate, 2 de zanahoria, 2 de pescado y 1 kilo de quinoa, cuyo consumo, sin embargo, sería el que más ha aumentado en el último año (9,5%). Esto quiere decir que la dieta de los bolivianos abunda en carbohidratos y que se consume, por ejemplo, más azúcar que arroz; que el consumo de frutas, vegetales y hortalizas es mínimo y que a pesar de que Bolivia es el principal productor de quinua del mundo (en constante competencia con el Perú, ambos con alrededor de 10.000 a 12.000 toneladas en 2014), cada boliviano consume apenas un kilo al año. Entre los productos que tienen como origen la agroindustria, los que más habrían aumentado en consumo son la harina de trigo (7,2%), el pollo (5,3%) y los fideos (4,7%). Y entre los líquidos, el consumo de bebidas gaseosas no alcohólicas es el preferido: cada boliviano consume 50 litros de gaseosas al año, 48 litros de cerveza y 42 litros de leche de vaca (datos del consumo per cápita del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras).

MÁS COMIDA, MENOS ALIMENTO

Los datos parecen probar que la dieta de los bolivianos está compuesta en 79% por productos de origen agroindustrial, mientras los cultivos tradicionales se producen en menor cantidad. «Cada vez se consume más azúcar, arroz, pollo, aceite y lácteos, que son productos de origen industrial, y se consumen menos alimentos originarios como el amaranto, la chía y otros, que son tradicionales», afirma Miguel Urioste y añade que «los campesinos solo producen 20% de los lácteos que consumen, 24% de las leguminosas, 42% de las frutas, 40% de las carnes y 14% de

las verduras. El resto lo deben comprar». Así, Bolivia forma parte de aquella uniformización tanto de los modos de producción como de consumo mundial. La dieta se ha uniformado tanto como empobrecido.

«Bolivia no es un caso extremo, pero en otros países se está produciendo una simplificación atroz de la dieta», asegura Gonzalo Flores, que aporta estos datos fundamentales: «Del 100% de calorías que se consumen en el mundo cada día, 90% las proveen 12 alimentos; 6 o 7 de estos aportan 80% y son: arroz, papa, trigo-maíz-mijo, azúcar, aceite, leche, carnes. Aunque hay una lista de más de 12.000 alimentos que se pueden consumir, los que más se consumen son los de la lista corta. ¿Por qué? Porque los 12.000 son difíciles de cultivar o porque su rendimiento es bajo; en cambio, el arroz se cosecha dos y hasta tres veces al año», dice.

Como afirma Soledad Barruti, autora del libro *Malcomidos*, «las máximas que ordenan nuestra producción alimentaria ahora no tienen que ver con nutrir ni con generar cultura ni sabor ni experiencia placentera, sino con maximizar la producción en el menor tiempo y espacio posibles». De modo que son esas máximas las que condicionan hoy la producción y reordenan no solo los modos de consumo, sino también nuestra relación misma con el alimento. «Los monocultivos que imperan en nuestro sistema alimentario se trasladan y convierten en monoculturas urbanas y en personas que solo acceden a los alimentos comprándolos», dice Barruti.

Efectivamente, en Bolivia el monocultivo está en avance y se ratifica con la intención del presidente Evo Morales de ampliar la frontera agrícola, además de su intención de emular el crecimiento alcanzado por la producción sojera en el Paraguay que, como recuerda Urioste, trajo como consecuencia el desplazamiento de un millón de campesinos que quedaron sin tierra y la deforestación de seis millones de hectáreas. «Puesto que han disminuido los precios del gas y de los minerales, se supone que las regalías y los impuestos que va a cobrar el Estado a los productores del agronegocio van a permitir mantener los bonos sociales, pero ya no vamos a tener bosques. Y esa es una pérdida irreversible y sin vuelta de hoja: no es negocio para un país cambiar un bono por un bosque», concluye.

En Bolivia, de los 3,2 millones de hectáreas cultivadas, la soja ocupa más de un millón (1.160.152 hectáreas) y en los últimos 12 años ha crecido en 622.000 hectáreas mientras que la papa ha aumentado solo 2.000 hectáreas. El resto de la superficie cultivada se divide básicamente entre maíz (408.000 hectáreas), trigo (210.499 hectáreas), papa (208.692 hectáreas), quinoa (173.960 hectáreas), caña de azúcar (157.034 hectáreas) y arroz (153.822 hectáreas.).

Varios especialistas coinciden en que el crecimiento de la producción agroindustrial va en detrimento de los cultivos tradicionales, tubérculos o frutas. Datos de noviembre de 2014 presentados por el economista Julio Prudencio muestran que «en las cosechas de 2000 y 2001, la producción de los cultivos básicos para la alimentación (haba, arveja, cebolla, tomate, maíz, choclo, papa, yuca e inclusive el trigo y el arroz) representaba 7,11%, mientras que los cultivos de exportación (caña de azúcar, girasol, soja, sésamo) llegaban a 67,55%. Doce años después, los mismos cultivos básicos para la alimentación representan 9,21%, con un incremento de solo 2%, mientras que los cultivos de exportación ahora representan 71,38% del total de la superficie cultivada en Santa Cruz».

Una de las consecuencias importantes de esta situación es que alimentos que alguna vez fueron cultivados corren el riesgo de desaparecer, pues ante la falta de demanda ya no se cultivan. Así lo ratifica doña Blanca que, apenada, dice: «Muchos productos se están perdiendo. El albarillo [albaricoque o damasco], por ejemplo, ya no se produce». Al mismo tiempo, Blanca señala otra característica resultante del modo de producción agroindustrial: la pérdida del sabor. «La mejor papaya del mundo era la del Chapare (centro del país, ahora región básicamente cocallera). Ahora pelas y su cáscara es gruesa, dura. La papaya original del Chapare no tiene pepa; esa ya no existe. El plátano también tiene otro sabor. Todo se hace hoy a base de químicos. Antes al plátano, que era dulce y tenía sus negritos en la cáscara, le llamábamos «dulce cajita». Ya no hay, ahora parece yuca, duro. Con qué químicos estarán haciendo», se queja.

Efectivamente, la producción agroindustrial en Bolivia ha impactado en la disminución de la producción, el crecimiento del monocultivo, y la menor variedad de productos y, por lo tanto, ha empobrecido la dieta con una mala calidad de nutrientes –vitaminas y minerales que el cuerpo necesita y que al consumir un mismo alimento menos posibilidades tiene de encontrarlos–. Sucede como en los inicios de la agricultura misma, recuerda Martín Caparrós en su libro *El Hambre*, cuando superada la necesidad de buscar el alimento en todas partes, el hombre dejó de ser nómada y descubrió la posibilidad de cultivar. Es decir, hubo más comida pero menos variedad, menos alimento.

Doña Blanca ratifica cómo los hábitos de consumo se han visto afectados a pesar de sus propios esfuerzos y alega que en su puesto de comidas del mercado ofrece más de 30 variedades de platos típicos (*lloqalla chupe* de locoto, lagua de choclo, sopa de maní, papa pica, ají de papalisa, toma-

tada de cordero, kawi, riñón, ranga blanca y colorada, falso conejo, costillar, laping, etc.) con ingredientes originarios distintos al pollo. Solo son consumidos por «gente mayor»; en cambio, los jóvenes prefieren el «pique macho» (carne en trozos con papa frita, chorizo, tomate y cebolla) o una «milanesa napolitana», observa Blanca, que por esa razón ofrece un «menú para jóvenes». Bolivia ya es parte de la monocultura que prioriza la «comida chatarra» (particularmente el pollo frito, las gaseosas y los alimentos ultraprocesados) como signo de ascenso social a la nueva clase media boliviana.

EL CÍRCULO VICIOSO

Otro motivo de preocupación es el uso de agroquímicos en la agroindustria y también de manera creciente por parte de pequeños y medianos productores. Casi 70% de las importaciones bolivianas son plaguicidas, herbicidas y fungicidas. En los últimos ocho años, la demanda de fungicidas aumentó 20 veces, señala el último informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En 2014 se importaron 131 millones de kilos de agroquímicos, 424% más que 13 años atrás, según datos de la organización Productividad Biósfera y Medio Ambiente (Probioma).

Expertos afirman que varias sustancias que han sido prohibidas en algunos países del mundo y otras observadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el glifosato —principio activo del grupo de herbicidas más utilizado del mundo—, se usan en Bolivia sin control y se venden en los mercados libremente ya que ingresan por vía del contrabando. También lo hacen con otras formulaciones comerciales que tienen básicamente la misma composición. Es el caso del Adrin, el Diedrín y el Paraquat, que también está prohibido a escala global y sin embargo es de uso extendido en Bolivia. Únicamente dos de las sustancias consideradas por la OMS como «extremadamente tóxicas» están registradas en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, pero al no estar prohibidas, son susceptibles de ser empleadas.

El glifosato está en la lista de sustancias «probablemente carcinógenas [cancerígenas] para humanos» de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS. Pese a ello, su uso en Bolivia está asociado a los cultivos de soja transgénica, que comprenden 99,6% de la soja industrial. El número de hectáreas afectadas sería un millón, asegura Miguel Ángel Crespo, director de Probioma, pero su uso se amplía hacia cultivos asociados como el girasol, la chía y el sésamo.

Lucio Tito, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, reconoce que el incremento en el uso de agroquímicos se debe a la ampliación de la frontera agrícola de la soja, que promueve una dinámica que repercute en la producción agropecuaria familiar. «El productor se desespera porque no ve que su producción mejore en términos de volumen. Queremos fortalecer esa agricultura familiar», asegura.

Las consecuencias de este modo productivo, igual que en el resto del mundo, se advierten en Bolivia en el deterioro de la salud, en aspectos puntuales como el aumento en los índices de enfermedades vinculadas con la mala alimentación –diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, infartos cerebrovasculares y obesidad– y señaladas, en ese orden, como las enfermedades de mayor prevalencia entre aquellas no transmisibles en Bolivia. La mala alimentación, el sobrepeso y la diabetes conforman un círculo vicioso que crece a paso acelerado. Uno de cada diez bolivianos tiene diabetes y 80% de los pacientes con diabetes es obeso (datos del Ministerio de Salud). «Actualmente se está trabajando la reglamentación del etiquetado de alimentos y/o productos de alimentos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM) para precautelar la salud de la población y coadyuvar al ejercicio del derecho a la información que tienen las consumidoras y consumidores», indican en el Ministerio de Salud.

Ante este complejo escenario, las acciones del gobierno boliviano son contradictorias. Por una parte, el presidente Evo Morales manifiesta la firme intención de ampliar la frontera agrícola en diez millones de hectáreas para los próximos diez años. Esa aspiración simplemente reitera el propósito de la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Reforestación de Bosques, que legaliza tierras ilegalmente deforestadas y permite a los empresarios del agro ampliar la frontera agrícola. Asimismo, el gobierno nacional mantiene las subvenciones al combustible y ciertos aranceles para la importación de insumos para la agroindustria, evidencian lo que su apoyo directo a los empresarios agroindustriales. «La producción de soja con transgénicos seguirá adelante mientras los defensores de los cultivos ecológicos no garanticen la seguridad alimentaria del país», declaró Evo Morales en 2013.

Igualmente continúa el ingreso de alimentos con o sin control vía importación o contrabando, lo que afecta la producción mediana y pequeña del agro nacional. El tipo de cambio monetario, por su parte, resulta conveniente para la importación de alimentos. La menor producción y rentabilidad de la agricultura familiar campesina provocan la migración hacia las ciudades, que completa así el recorri-

do iniciado por la reforma agraria, que cambió la identidad del indígena por la del campesino. Paradójicamente, un gobierno de raíz indígena ahora ha reemplazado al indígena campesino por el trabajador informal urbano.

RUMBO A LA CANASTA FAMILIAR PLURINACIONAL

Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Morales ha impulsado una gran cantidad de proyectos de apoyo a la producción agropecuaria de menor escala en los que ha invertido cerca de 300 millones de dólares. Los resultados se han visto cuestionados por distintos motivos, entre ellos la propia dinámica del mercado, que ha hecho que para un agricultor campesino sea más conveniente comprar verduras fuera del país y venderlas en Bolivia que producirlas él mismo.

Aun así, el gobierno insiste en sus esfuerzos y ante la migración hacia las ciudades, por ejemplo, pretende apoyar cultivos en áreas periurbanas, o ante la demanda de riego responde con una ambiciosa campaña que pretende declarar la «década del riego» a partir del año 2016. Según anuncia Lucio Tito, busca aumentar significativamente la actual cobertura menor a 8% (360.000 hectáreas bajo riego de un total de 3,8 millones de hectáreas en Bolivia) con una inversión de 3.600 millones de dólares «en cumplimiento de la Agenda Patriótica [programa de gobierno], de aquí a 2020».

Como parte de los resultados de la cumbre agropecuaria de abril de 2015 llevada a cabo precisamente en Santa Cruz de la Sierra, el gobierno decidió impulsar el etiquetado de todos aquellos productos que contengan OGM y, anteriormente, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Consumidor, el «semáforo saludable» que ayude a identificar los componentes menos saludables en los alimentos. Todas estas iniciativas son poco auspiciosas en tanto no exista al mismo tiempo un conjunto de normas que hagan posible su puesta en marcha.

Igualmente, al mismo tiempo que alienta el agronegocio, el gobierno pretende recuperar el cultivo de productos originarios que estarían perdiéndose e incluirlos en la canasta básica familiar urbana. Tito Vilca asegura que Bolivia exporta 26 cultivos tradicionales, entre ellos maca, cañahua, amaranto y tarhui. «Queremos contrarrestar la producción agroindustrial», dice y muestra satisfecho el ingreso de la quinua a la canasta básica alimentaria urbana, aunque ocupe el último lugar y su consumo sea únicamente de un kilo al año por habitante. Tito anuncia la conformación por primera vez de una «canasta básica familiar rural»

y dice: «La Agenda Patriótica 2025 establece fortalecer la producción ecológica de 3% a 15%».

La producción de quinoa, que creció espectacularmente en los últimos 15 años y convirtió a Bolivia en el mayor productor del mundo y al «grano de oro» en un *commodity* para los productores, es el ejemplo exitoso de desarrollo agrícola en las tierras altas del país que el gobierno boliviano menciona. Pero las consecuencias de este nuevo monocultivo comienzan ya a advertirse en la ampliación de los campos de cultivo, que ha reducido los pastizales y por lo tanto provocado la merma del ganado camélido. Tito cree que esta reducción es mínima pero reconoce la disminución del ganado ovino, que cayó de 9,2 millones de cabezas en 2010 a 7 millones en la actualidad.

El auge de la quinoa ha llevado al gobierno a hablar de una «recampe-sinización» pues efectivamente los precios muy atractivos de la quinoa convocaron de vuelta a muchos migrantes-itinerantes y residentes. Datos oficiales señalan que del total de la población ocupada en Bolivia (cinco millones de personas) 32% se dedica hoy a labores agrícolas en el campo. Varios analistas cuestionan estos datos y alegan que estos no consideran la «migración itinerante».

A pesar de la intención del gobierno de fortalecer la producción ecológica, esta se desarrolla por iniciativa de instituciones privadas y ONG. Eso ha hecho posible la rentabilidad moderada de aquellos agricultores rurales que han asumido ese desafío sin el apoyo oficial suficiente. El gobierno aún no ha desarrollado políticas concretas favorables a este sector, como compras estatales o mercados seguros, y el etiquetado de productos con OMG no los beneficia significativamente, pues su competencia directa no es la gran industria sino la importación y el contrabando.

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?

En países como Brasil, Colombia, Argentina o Paraguay, el agronegocio ha provocado el desplazamiento a las ciudades de campesinos que escapan de los procesos de fumigación intensiva o son expulsados de sus tierras con distintos mecanismos, como la generación de violencia en Colombia —según explica Milson Betancourt—, especialista en estudios interdisciplinarios de América Latina, pero también porque, ante la expansión de la frontera agrícola, alquilan o venden sus tierras. Estos desplazados engrosan los cinturones urbanos de pobreza y generalmente viven en condiciones precarias.

En Bolivia se repite parte de este fenómeno: los migrantes campesinos constituyen la nueva masa de ingeniosos trabajadores informales urbanos con autoempleos precarios que se integran al consumo según sus magros ingresos. Pero si, como afirma Soledad Barruti, la única manera de acceder a los alimentos hoy es a través del consumo, el hambre queda del lado de los pobres. 61% de los bolivianos trabaja pero no recibe salario (18% no recibe remuneración alguna); consigue algún empleo precario y muchos de ellos se buscan la vida en las calles como «vendecositas» (aunque en las cifras oficiales cuentan como «empleados»). La canasta familiar boliviana cuesta 154 dólares mensuales. La «Renta Dignidad», destinada a la tercera edad, que para muchos ancianos es el único ingreso, es de 37 dólares. El salario mínimo es 238 dólares, un monto que recibe únicamente 39% de ciudadanos que cuenta con trabajo asalariado. Es decir, 43% de la población boliviana tiene un ingreso per cápita menor al costo de la canasta básica.

Por lo tanto, una mayor producción de alimentos no garantiza ni mayor acceso ni mejor consumo, como podría deducirse de lo que sostienen quienes proponen fortalecer y ampliar la producción de base campesina e indígena como fuente de ingresos para productores y beneficiosa para todos. Tampoco lo hace la idea opuesta, que alienta la ampliación de la frontera agrícola y el fortalecimiento de la producción agroindustrial, pues se estanca en los monocultivos de exportación.

Gonzalo Flores cree que obligar a los agricultores campesinos a quedarse en sus tierras es condenarlos a la pobreza. «En Bolivia el ingreso per cápita más bajo por rama de actividad lo paga la agricultura. Instar a un agricultor familiar promedio a que permanezca en la agricultura equivale a pedirle que reciba los ingresos más bajos del país», dice. Los campesinos han sido y son consumidores, sostiene, y por lo tanto cree que lo que hay que hacer es orientar el consumo hacia prácticas saludables. «La demanda jalará a la oferta», asegura.

Una tercera opción que busque la convivencia de ambos tipos de producción —la agroindustrial «sostenible», que deja dudas respecto del manejo eficiente y responsable de la tierra así como del uso de agroquímicos, y la «ecológica» que haga de Bolivia su vocación productiva— parece pretenciosa, lo cual deja nuevamente más preguntas que respuestas.

GONZALO FLORES: «LOS CAMPESINOS NO SON SOLO CAMPESINOS, TAMBIÉN SON CONSUMIDORES»

Cecilia Lanza Lobo

Gonzalo Flores cree que el concepto de «hambre» no ayuda a medir nada y prefiere hablar de datos cuantificables, aunque sabe que la carencia de información precisa es una de las grandes dificultades a la hora de revisar la situación alimentaria en Bolivia. Quizás por eso el especialista en políticas agrarias y ex-representante Asistente de la FAO en Bolivia es cauto respecto de los supuestos avances logrados por el país en los últimos años en términos de salud y alimentación.

¿Qué es el hambre?

Hambre es la sensación que sentimos cuando llega la hora de comer y no tenemos qué llevarnos a la boca. Pero el hambre no es un concepto con estatus científico. Es como el dolor. Si decimos que nuestra misión es mitigar el dolor del pueblo, ¿de qué dolor se habla, de dolor físico, de dolor moral? Por eso mismo no se puede medir el hambre como no se puede medir el dolor. Los conceptos que tienen más utilidad son aquellos de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, adecuación de la dieta, ingesta de nutrientes, consumo de alimentos. Resulta más fácil saber cuáles son las necesidades nutricionales de una persona, grupo o población para compararlas con lo que realmente consume, que preguntarse si tiene o no hambre.

No es lo mismo el hambre en Bolivia que el hambre en Perú, en Argentina o en África. ¿O sí?

Hay que eliminar el uso de la palabra «hambre». Hambre es demasiado genérico, demasiado subjetivo. No ayuda a medir nada. Tenemos que usar conceptos más precisos. Los indicadores para medir esto son: primero, la disponibilidad de alimentos (cuánto se produce, cuánto se importa, cuánto se vende, cuánto se gana o se pierde); segundo, el acceso de la población a esos alimentos (cuánto dinero tiene la población

para comprar alimentos, o cuántos alimentos produce en su huerta o en su chacra, o si los hombres reciben más que las mujeres o si los niños más que los viejos, etc.); tercero, la estabilidad (cambios climáticos, emergencias que alteran la disponibilidad), y cuarto, la inocuidad (calidad del alimento). Son las cuatro dimensiones en que se puede medir la seguridad alimentaria. Lo que realmente te dice cómo está la alimentación de un país es el estado nutricional de la gente. Para saber cuán bien alimentada está la gente, el mecanismo es muy fácil: a cada persona, individualmente, hay que tomarle la edad, la talla y el peso. Cuando comparas edad con talla puedes determinar si una persona tiene o no desnutrición crónica. Si comparas la edad con peso obtienes la desnutrición aguda. Y si comparas talla con peso obtienes la desnutrición global. Ese es el resultado principalmente del consumo de calorías y de proteínas. Pero además hay que controlar separadamente el consumo de vitamina A, D, calcio, yodo, zinc, y a veces algún otro elemento dependiendo del país. Ni Bolivia ni la mayor parte de sus vecinos tienen buena información sobre estos indicadores. Tenemos información sobre importación de alimentos, un poco sobre producción, un poco sobre acceso y consumo, pero la información antropométrica y de monitoreo de estos micronutrientes es muy parcial y atrasada. No estamos bien informados.

Tengo algunos reparos con los datos que, aun dispersos, en Bolivia abundan. De hecho, uno de esos datos indica que Bolivia es el país de la región con más proyectos referidos al hambre. Entonces, los datos muestran mejoras y son alentadores, pero en el terreno, la realidad respecto de la pobreza y el hambre en el país parece decir otra cosa.

Estos estudios hacen muestras representativas de toda la población, no buscan al individuo sino la sumatoria de los datos para que nos muestren el estado del conjunto. Creo que la situación alimentaria en Bolivia está mejorando pero en un muy largo plazo. Un dato interesante: en 1946, el gobierno de Gualberto Villarroel (1943-1946) contrató a un profesor argentino de nombre Martín Escudero que hizo un estudio en la zona de las minas. Puso a los mineros en fila, les preguntó su peso y su edad. A partir de aquella medición obtuvo la desnutrición crónica: estaba en ese momento arriba de 60%; era muy alta. Hoy sabemos que ese porcentaje ha bajado, seguramente de manera paulatina y durante muchos años, pero ha bajado. La desnutrición aguda, la del niño chiquitito, enflaquecido, también ha bajado, así como la desnutrición global. Pero no bajan con la suficiente velocidad como para decir que lo hemos logrado. Bolivia todavía está mal pese a los premios que hemos obtenido. Y hay algo importante. La medición del estado nutricional de la población solo se puede hacer agarrando a la gente, midiéndola y

pesándola. En cambio, las estadísticas internacionales en las que se basan todos los organismos son mediciones indirectas que se hacen a partir de otros indicadores: cuánto se ha producido, cuánto se ha importado, cuánto dicen que ha crecido la producción de alimentos, cuánto creen que se ha reducido el crecimiento de la población, etc. y se hacen modelos matemáticos. Como no podemos ver parámetros, vemos cosas que nos informan sobre ese parámetro y con esa base estimamos que estamos cerca de la costa. No vemos la tierra pero como vemos las gaviotas suponemos que nos estamos acercando. Ahora, tu percepción es correcta. Vamos al campo y todavía vemos niños de baja estatura, flaquitos, vemos mucho adulto de estatura insuficiente, tirando a gordos. Generalmente los problemas nutricionales no van solos, no es solo escasez de alimentos sino también mala alimentación. Estos problemas coexisten. Sin embargo, el Programa Multisectorial de Desnutrición Cero estableció que la desnutrición crónica entre niños menores de cinco años está en 23%. Este sería un progreso muy grande respecto de lo que teníamos a mediados de los años 70, cuando con seguridad estábamos por encima de 36%. Otro hecho que permite evidenciar claramente el cambio de la situación nutricional es la estatura de los niños y jóvenes. En todos los países hay una tendencia al alargamiento. No es uniforme, no es igual, pero hay una tendencia al mayor crecimiento y eso indica mejor nutrición. También hay hechos y datos indirectos. Por ejemplo, se ha logrado controlar enfermedades transmisibles: difteria, tétanos, coqueluche, parálisis infantil. Gran parte de las enfermedades transmitidas por alimentos también se han controlado. Todos los episodios provocados por infección minan las reservas de nutrientes del cuerpo humano y afectan su capacidad de crecimiento. En la medida en que se van controlando, se crece mejor. Pero también han aumentado problemas como el sobrepeso tanto en las ciudades como en el campo, sobre todo en los más jóvenes. Eso es efecto combinado de dos cosas: una dieta más rica en carbohidratos, grasas y azúcares, y una vida más sedentaria.

Considerando que no es posible definir el hambre y que hay que hablar de desnutrición y otros indicadores, ¿cuándo decimos que en el país estamos bien o mal respecto de la situación alimentaria? ¿Cuál es el indicador que probaría ciertamente que hay o no hambre?

Yo me sentiría feliz con uno de dos indicadores. El primero es que la desnutrición crónica para menores de cinco años esté por debajo de 5%, y el otro es que no nazcan niños con menos peso del que deben tener al nacer. Ese es un indicador maravilloso y no sé por qué no se usa. Un niño, para ser «viable» —como dicen los pediatras—, debe tener por lo menos 2.500 gramos de peso porque eso le asegura tres cosas:

un sistema cardiorrespiratorio que le permita absorber oxígeno; un sistema nervioso suficientemente desarrollado como para saber que sus cinco sentidos están bien conectados, y un cerebro con la masa suficiente, sobre todo con el neocórtex suficiente como para cumplir todas las funciones intelectivas, particularmente en la zona frontal. Cuando el chico nace con 2.500 gramos puedes decir casi con total seguridad: «Este chico va a ser normal». Mientras más abajo esté de los 2.500 gramos tiene menos probabilidades, aunque hay excepciones.

Podría entenderse como una contradicción: si los indicadores muestran niveles bajos de desnutrición y niveles altos de obesidad, ¿cómo podemos ver un futuro promisorio, saludable, en un niño cuando este pesa más? ¿Debemos hablar de calidad? Porque podría haber un niño con muy buen peso cuya madre tenga sobrepeso.

Eso hay que aclararlo muy bien. Claramente los niños que tienen menos de 1.200 gramos tienen grandes problemas de viabilidad, generalmente no sobreviven. Un niño que pesa menos de 1.000 gramos es casi imposible que sobreviva. No tiene capacidad pulmonar, muere asfixiado. ¿De qué depende la nutrición del niño en el útero? De la madre. Por eso la estrategia debiera ser primero captar a la madre, a la embarazada y a la potencialmente embarazada.

¿Cómo entender que hayamos progresado en términos de reducción de la desnutrición o de mejor salud y desarrollo de la población (jóvenes más altos, indicadores más alentadores, etc.) cuando al mismo tiempo aparentemente estamos produciendo menos, importando más, comiendo más pollo frito, más comida chatarra?

Es un tema muy interesante que tiene que ver con la calidad de la dieta. El cuerpo crece igual si tú le das 2.000 calorías de harina que 2.000 calorías de arroz, desgraciadamente. Bolivia no es un caso extremo pero en otros países se está produciendo una simplificación atroz de la dieta. Hay un fenómeno mundial que la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] tiene bien detectado: más o menos de 100% de calorías que se consumen en el mundo cada día, el 90% lo proveen 12 alimentos y 80% solamente seis o siete alimentos que son: arroz, papa, mijo, soja, maíz, etc. Aunque hay una lista de más de 12.000 alimentos que se pueden consumir, los que más se consumen son los de la lista corta. ¿Por qué? Porque los 12.000 son difíciles de cultivar, porque su rendimiento es bajo, en cambio el arroz se cosecha dos y hasta tres veces al año. Este es un problema de la humanidad, no de Bolivia. Para la FAO es un tema de preocupación porque no solo es un tema de monotonía y pérdida de calidad en las dietas, sino de pérdida de nutrientes. Hay muchos nutrientes que podríamos ingerir simplemente consumiendo una

dieta variada: zinc, flúor, azufre, cobalto, cromo, etc., de los que solo necesitas un microgramo cada tres meses —pero que necesitas— y que con una dieta monótona no los vas a consumir. El otro perjuicio es que alimentos que alguna vez fueron cultivados corren el riesgo de desaparecer porque, como no tienen demanda, los productores no los cultivan. Hay especies vegetales y animales que antes se comían y ahora no se conocen.

¿Cuál es el alimento que más se consume en Bolivia?

Una cosa es lo que más se consume y otra cosa son los alimentos realmente importantes. Los alimentos que contribuyen al consumo de calorías en Bolivia son el maíz, la papa y la yuca. No estoy diciendo si esto es bueno o malo, solo señalo qué es lo que más se consume. Respecto de las proteínas, el pollo está desplazando a la carne de vacuno, ovino y camélido porque es más barato, es más accesible.

Se dice que los pastizales se están reduciendo por causa de las plantaciones de soja y quinua.

Todo depende de la zona. Los pastos en el Oriente generalmente se siembran en áreas de cultivo que ya están degradadas donde no se siembra la soja. En el Altiplano el ganado no se alimenta de pasto nativo sino sobre todo de alfalfa. El Altiplano es un pastizal natural y debe ser conservado como tal. Es un error tratar de hacer del Altiplano un campo de producción de granos y de tubérculos.

En ese caso, ¿qué está pasando en el campo en términos de alimentación? Si se mantuviera como pastizal, ¿qué consumiría la población? De hecho, tal cosa no está sucediendo pues más bien las plantaciones de quinua se han multiplicado, la migración hacia la ciudad también ha aumentado y la alimentación es monótona, ya no se produce sino que se compra y lo que se compra es fideo, arroz, azúcar...

Tendemos a creer que los campesinos son solamente campesinos y no es así. Los campesinos en todas partes siempre tienen otra actividad. En Bolivia la otra actividad generalmente es la minería, la migración hacia El Alto, el Chapare, Chile, Argentina, o dentro de las propias áreas rurales para trabajar en albañilería, comercio o también para hacer agricultura. Muchos se van de los valles bajos de Cochabamba a las afueras de Buenos Aires a hacer horticultura, otros trabajan en construcción. No solo son agricultores sino también ganaderos. Eso tiene una implicación muy importante. La fuente principal de ingreso de un campesino está dejando de ser la agricultura porque tiene dos o tres fuentes de

ingreso mayores a la agricultura. Tiene más dinero y eso lleva a nuevos patrones de consumo. Compra alimento. No es verdad que los campesinos producen todos los alimentos que consumen. Ese es uno de los grandes mitos de la política agraria boliviana. Los campesinos no son solamente campesinos, son también consumidores.

¿Cómo está Bolivia respecto de la situación alimentaria en relación con los países vecinos?

Estamos mejor que Haití.

Eso no es muy alentador.

No, no es muy alentador. Se ha progresado pero nuestros pequeños logros son mínimos. Me voy a alegrar cuando realmente vea progreso en la gente más pobre. Y lo que veo son pequeñas cosas y muy lentamente. Los progresos logrados han sucedido en décadas.

¿Qué significa entonces erradicar el hambre? Al parecer Bolivia lo habría logrado.

Bolivia ha logrado cumplir la meta del milenio que era llegar a 19%. Ha llegado. Pero es distinto que llegar a desnutrición cero. Ningún país debería tener más de 2% de desnutrición crónica. Las Metas del Milenio y las metas de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se parecen pero son diferentes: una habla de reducir el número absoluto de desnutridos crónicos y la otra habla de reducir el número relativo. Apuntan básicamente a lo mismo pero en ambos casos dicen: hagamos la mitad o cerca de la mitad. Pero además la población crece. No es lo mismo 19% de ocho millones que 19% de diez millones. Hay mucho trabajo por hacer, por eso no soy de los partidarios de cantar victoria.

La producción orgánica en Bolivia ¿podría ser impulsada como vocación productiva tanto internamente como para el mundo?

La producción orgánica en Bolivia está creciendo. No soy uno de los padres pero sí uno de los tíos. Sucede que esta actividad comenzó hace 30 años, y en este momento hay certificados unos 60.000 productores en Bolivia. Se considera que es uno de los movimientos más vigorosos en América Latina, lo cual me deja absolutamente frío; 60.000 productores en 30 años no representan ningún progreso, pues creíamos que en Bolivia había 600.000 unidades productoras rurales aunque el último censo agropecuario indica que hay 847.000. Digamos que hay 800.000. Entonces, si hemos formado 60.000 productores en aproximadamente 40 años,

quiere decir que estamos produciendo a una tasa de 1.500 productores por año. ¿Cuántos años necesitamos para certificar a 800.000 productores? Estamos hablando de más de 200 años. Pero la producción del alimento orgánico es muy importante. Existen tres tipos de agricultura: la convencional (usa tractores, semillas de paquete, fertilizantes sintéticos, insecticidas y plaguicidas), la natural (usa semillas, fertilizante natural, ningún químico sino tal como la naturaleza lo haría crecer) y la orgánica (hace lo mismo que la natural: usa semillas, fertilizante natural, control de plagas con otros insumos, control de plagas con otros insectos, con bioinsumos, todo natural). ¿Cuál es la diferencia con la agricultura natural? La diferencia es que el productor orgánico está certificado.

Entonces, ¿cuál es la ventaja para el productor orgánico, si es que la hay?

Debería servirle para vender su producto a un mejor precio. Porque en este mercado con tantos químicos, importaciones, cadenas internacionales y una serie de cosas, hay una gran incertidumbre cuando uno compra algo en un supermercado. Entonces, saber que uno se va a llevar una bolsa de hortalizas que han sido cultivadas en forma natural sin ningún agroquímico nos da una gran seguridad, y eso debería recibir un premio en el precio, cosa que no existe en Bolivia. En otros países sí.

¿Qué porcentaje de la producción agrícola en Bolivia es natural y qué otra es orgánica o convencional?

No hay el dato exacto pero sí estimaciones. Habría que segmentar por productos (soja, papa, maíz, etc.) y establecer el porcentaje para cada uno de ellos. El caso de la soja, por ejemplo, es ultraconvencional (transgénico, químico) y habría que abrir una casilla que diga «ultraconvencional». En el caso del maíz hay una mezcla: una parte es convencional, otra natural y nada orgánico. En el caso de las hortalizas, una parte es natural, otra convencional y otra orgánica con pequeños productores, pero con un uso cada vez más intenso de pesticidas. En Bolivia, de todos los insumos agropecuarios que ingresan al país, los que más han aumentado en los últimos años son los plaguicidas. No son los equipos de riego ni son los tractores, son los plaguicidas. Es un problema.

Entonces, si los productores naturales son iguales a los orgánicos, ¿quiénes se certifican?

Esa es la pregunta inmediata. El punto es el siguiente: el productor certificado está protegido de caer en el mundo de los plaguicidas de síntesis por voluntad propia, por educación, etc. En cambio, el productor natural está tentado de caer hacia el lado de los productores conven-

cionales. Sabemos que ese es un problema grande porque, además, los fertilizantes y plaguicidas, incluso aquellos prohibidos por la OMS [Organización Mundial de la Salud], se venden en el país libremente. El problema es que estos productores naturales no tienen ninguna barrera y caen muy rápidamente en el uso de esos productos agroquímicos y se vuelven productores convencionales. Al no existir un precio diferenciado para el producto orgánico, el agricultor no tiene ningún incentivo para seguir siendo un productor orgánico. Los únicos que se mantienen firmes como productores orgánicos son los que exportan café, quinua o cacao porque tienen un premio por eso, en cambio el que lo hace para el consumo interno no.

¿Tenemos soberanía alimentaria?

Es un concepto extremadamente complicado. La soberanía alimentaria tiene tres dimensiones: producir lo que se come y comer lo que se produce; control sobre las semillas y, finalmente, control sobre las políticas. La primera no se puede aplicar a países enteros ni a regiones enteras. Por ejemplo, en el departamento de Oruro querían aplicar este principio. Les dije: ¿desde hoy van a renunciar al consumo de frutas? Porque en Oruro no se producen frutas. ¿Van a renunciar a consumir hortalizas? ¿Quieren comer arroz? Porque no producen arroz. ¿Quieren pollo? Tampoco tienen. Entonces, el comercio es esencial para la alimentación. No todos los ecosistemas del mundo tienen la capacidad de producir todos los alimentos que la población necesita. El comercio es una solución maravillosa a las necesidades humanas, te trae lo que no produces. La segunda dimensión son las semillas. Con esto de los transgénicos, los agricultores podrían perder el control sobre las semillas porque las semillas transgénicas no son completamente fértiles y eso los obligaría a estar comprando semillas continuamente de un solo proveedor, y eso haría que la alimentación mundial quede en manos de seis o siete proveedores. Ahí yo comparto plenamente: un país, un productor, debe tener acceso a una variedad de semillas de distintos tipos para producir lo que quieran. Finalmente, el control sobre las políticas. A ningún país se le puede impedir definir las políticas que quiera sobre sus recursos. Otra cosa es que tenga los recursos, el aparato y la ley.

MIGUEL URIOSTE: «BOLIVIA QUIERE SER PARTE DE LA LIGA MAYOR DEL AGRONEGOCIO EN AMÉRICA LATINA»

Cecilia Lanza Lobo

El economista y especialista en desarrollo rural y reforma agraria Miguel Urioste destaca la gran paradoja que vive hoy Bolivia al tener un presidente de origen indígena y un gobierno de corte popular que, sin embargo, ha convertido a los indígenas y campesinos en migrantes urbanos con empleos informales. El fundador de Fundación Tierra cree que la particularidad étnica de esos sectores se ha perdido y que su dieta alimentaria ha sido uniformizada por el patrón de consumo del capitalismo mundial.

Luego de la reforma agraria de 1952, que entregó tierras a los campesinos en Bolivia, ¿cuál es el panorama hoy respecto de la propiedad y el uso de esas tierras? ¿Esas tierras han sido productivas? ¿Para quién lo han sido? ¿Para la autosostenibilidad de los campesinos? ¿Para todos los bolivianos?

La reforma agraria estuvo centrada en la región andina. Tuvo como objetivo eliminar la servidumbre y el *pongueaje* —nombre con el que se denominó la semiesclavitud del hombre del campo— y devolver las tierras a las comunidades originarias y a los ex-colonos. Esos objetivos se cumplieron y cambiaron la historia del país. A partir de entonces se inició un proceso de autoidentificación étnica nacional: el concepto de campesino reemplazó al concepto de indio. Los agricultores que antes trabajaban para el patrón aumentaron su producción, mejoró su consumo de alimentos, mejoró su bienestar, aumentó la oferta interna de alimentos, disminuyó en gran medida la hambruna rural. Sin embargo, con el pasar de los años, la reforma agraria —fue un hecho revolucionario, un hecho social antes que político y jurídico, una de las más radicales del continente porque logró objetivos de profundidad estructural y la eliminación del sistema de *pongueaje*— fue abandonada, dejó de ser una política pública, el Estado se retiró del Valle y el Altiplano y, según confesión del propio Víctor Paz Estenssoro [líder de la Revolución Nacional], no formó parte de las prioridades de la agenda de la Revolución Nacional. El tema campesino pasó

a segundo lugar hasta que la «marcha al Oriente», promovida inicialmente por el Plan Bohan [misión estadounidense conducida por Mervin Bohan, 1941-1942] y reforzada por el Plan de Guevara [Walter Guevara, canciller, 1955], abrió las fronteras del Oriente y se comenzó a diseñar un modelo de desarrollo agrario capitalista para satisfacer la demanda interna de alimentos. Revisando la historia, uno puede decir que esa estrategia fue exitosa, que efectivamente el Estado sentó presencia en el Oriente, donde hay un desarrollo capitalista «exitoso» porque en esa región hoy se cultivan dos de los tres millones de hectáreas cultivadas del país y porque la agroindustria vinculada al agronegocio internacional por medio de la soja está comenzando a ser parte de un régimen alimentario globalizado. Sin embargo, en un estudio de la Fundación Tierra llamado «Comer de nuestra Tierra» hemos confirmado que en las últimas dos décadas, pero particularmente en esta –vaya paradoja e ironía, durante el gobierno popular e indígena [del presidente Evo Morales]– se ha producido una uniformización de la dieta nacional urbana y rural. El estudio muestra que no hay diferencias sustantivas en la dieta de consumo entre un indígena guaraní, la de un leco o un aimara de Achacachi o Viacha o la de un quechua de Cochabamba. Y esa dieta está conformada en 79% por productos de origen agroindustrial: pollo, aceite, azúcar, harinas, fideos, refrescos y, en menor medida, productos tradicionales producidos localmente. Esto quiere decir que en Bolivia, como en otros países, estamos viviendo las consecuencias de una mala calidad de nutrientes y malos hábitos de consumo.

¿En manos de quién están las tierras productivas en Bolivia? ¿Son productivas? ¿A quién han dado y dan de comer?

En el Altiplano y el Valle ciertamente no se ha reconstituido ninguna forma de latifundio. Lo que hay es una subutilización de la tierra en el Altiplano y los valles en general. Hay muchas tierras baldías que fueron dotadas por la reforma agraria y que han quedado semiabandonadas, pero tienen dueños que se esfuerzan por certificar sus derechos de propiedad y tienen como actor protagonista a un personaje que se llama «residente». Es la persona que, siendo de origen campesino y teniendo tierras, reside en la ciudad y por lo tanto es un ciudadano que de vez en cuando va a la comunidad (durante fiestas patronales, a ayudar a la familia en tiempos de cosecha, etc.), y de esa manera vive una ambivalencia entre un mundo urbano y uno rural. La característica principal en ese modelo de subutilización de la tierra se combina con una fuerte presencia de la multiactividad y la multirresidencia. Los agricultores son a su vez choferes, comerciantes, albañiles y las mujeres son a su vez lecheras, criadoras de ganado, comerciantes, etc. Al mismo tiempo, prácticamente la totalidad de los habitantes

del Altiplano norte, centro y sur tienen una precaria vivienda en El Alto, Viacha, Oruro o Potosí. La multirresidencia urbano-rural es un producto de esta nueva ruralidad que surge de un capitalismo deformado, atrasado, que no da empleo pleno a un proletariado que nunca se ha desarrollado.

Históricamente en Bolivia se han producido importantes migraciones del campo a la ciudad. ¿Por qué? Añado a la pregunta la crisis minera y el auge petrolero que vive Bolivia. ¿Cómo afecta a la agricultura y al tema alimentario en el país?

Tenemos más de un 1.200.000 ciudadanos bolivianos viviendo en Argentina. De ellos, 10.000 son horticultores y verduleros que abastecen el mercado del Gran Buenos Aires, que tiene más de diez millones de habitantes, y mueven centenares de millones de dólares. Son emprendedores que se han ido porque aquí no tienen opciones laborales y encuentran allá mejores oportunidades de trabajo y de ingresos. Esto está mostrando cómo en determinadas condiciones de acceso a recursos, su inventiva y su capacidad son tan extraordinarias que permiten que estos bolivianos sean los principales propietarios de tierras del cordón que rodea la Ciudad de Buenos Aires. Se han comprado las quintas que antes eran de alemanes, de italianos y que ahora son de bolivianos. Son los «bolitas».

¿Por qué no pueden hacer lo mismo en este país?

Hay varios elementos que ayudan a responder la pregunta. Primero, las condiciones del medio. Allá están a 400 metros sobre el nivel del mar, tienen acceso al agua, riego permanente y tienen tierra más productiva. Segundo, tienen un mercado gigantesco asegurado, tienen la habilidad para trabajar la tierra y la organización social que es la familia extendida. Son núcleos familiares de seis o siete miembros que están explotando y comercializando hortalizas y verduras y que han logrado niveles de productividad, eficiencia comercial y retorno a través de la venta que les permiten acumulación y envío de remesas al país.

¿Qué pueden lograr allá que no puedan lograr en Bolivia?

El contexto macroeconómico boliviano de hoy es particularmente adverso para los campesinos de agricultura familiar porque vivimos una época de auge del precio de las materias primas (gas y minerales en menor medida porque eso se está acabando), que le permitió al Estado disponer de tal abundancia de recursos que hubo una lluvia de dinero y de proyectos en el área rural. Pero la preocupación del campesino ha sido cómo desviar esos recursos que estarían originalmente destinados al agro para comprarse un autito, un minibús o un terrenito en El Alto

o en Cochabamba o donde fuera. Y tiene lógica. Porque ser agricultor en Bolivia en las condiciones actuales no es rentable. Es un problema: estamos viviendo un ciclo de precios extraordinarios de materias primas acompañado de un periodo de abundancia de dinero en el país, donde las condiciones productivas debido al dólar barato, al tipo de cambio fijo y a que los países vecinos devalúan sus monedas hacen que los productores bolivianos no puedan competir con los productores internacionales. La gran paradoja es que en un gobierno de raíz indígena se está expulsando a la población rural del campo hacia las ciudades para que se conviertan en trabajadores informales urbanos.

Sin embargo, datos oficiales señalan que estaría sucediendo más bien un retorno de los campesinos a sus tierras, una suerte de «recampesinización». Del total de la población ocupada en Bolivia (cinco millones de personas), 32% estaría dedicada hoy a las labores agrícolas en el campo. ¿Esto es así?

Quinoa, soja y coca son excepciones a la dinámica generalizada de los campesinos. En estos casos, que son a su vez *commodities* que se transan en el mercado internacional a precios muy atractivos, sí se ha generado un uso intensivo de la tierra y de la fuerza de trabajo y un retorno de los migrantes a sus lugares de origen, al extremo de generarse conflictos por la tenencia de la tierra entre vecinos, entre territorios indígenas, entre familias, entre municipios o entre departamentos. Ahí donde la tierra se valoriza por el alto precio internacional de un *commodity*, se va a generar un retorno de propietarios de esa tierra, un uso intensivo del recurso natural, un sobreuso de los recursos del suelo hasta llegar al extremo de su destrucción. Eso está ocurriendo en el caso de la quinoa y [las tierras para pastoreo de] las llamas y lo propio en el caso de la coca (sobreuso del suelo, uso extensivo de agroquímicos). En términos generales, hay necesidad de hacer ajustes de los datos estadísticos de población urbana y rural por procesos migratorios campo-ciudad y número de residentes. Lamentablemente, el Instituto Nacional de Estadística no quiso aceptar la categoría de «multiresidencia» en el Censo de Población y Vivienda ni en el Censo Agropecuario, algo que hubiera ayudado muchísimo a esclarecer este tema.

¿Cómo ha afectado a la agricultura y a la alimentación en Bolivia la megaproducción de soja, quinua y castaña, que son los productos que más se producen y exportan en el país?

Por un lado, aquello genera dinámicas virtuosas en el sentido de permitir desarrollos territorializados o territorios rurales dinámicos en los que la agricultura se combina con otras actividades (financieras, telefonía, transporte, etc). Es interesante. Pero tiene también su lógica perversa:

el agotamiento de los recursos naturales, la diferenciación entre ricos y pobres, los conflictos entre regiones. Y esto ocurre casi al margen de las políticas nacionales. El Estado puede alentar un desarrollo rural más o menos uniforme, homogéneo, igualitario en todo el país —y para eso tiene múltiples proyectos y programas—, pero las dinámicas económicas que dependen de la globalización y de la exportación de *commodities* se superponen y se imponen a estas políticas públicas, que quedan completamente marginales e insuficientes para reordenar las fichas en el tablero. Sucede entonces que los campesinos prefieren comprarse un televisor plano en vez de construir un baño porque se distraen, porque les gusta, porque les alegra la vida. Y tienen derecho, es parte de sus conquistas de nivelación social y de acceso a la ciencia y la tecnología, pero eso destruye valores de solidaridad, reciprocidad, intercambio, que son valores muy fuertes y que suponíamos que en este proceso de cambio se iban a fortalecer. Pero ha ocurrido lo contrario.

¿Cuál es la superficie cultivada en Bolivia? ¿Quiénes son los mayores poseedores de tierras cultivadas hoy: los empresarios exportadores o los campesinos agricultores? Esto apunta finalmente a saber cuánta mano de obra trabaja la tierra en Bolivia. O, dicho de otro modo, ¿quiénes dan de comer a los bolivianos?

Son 2,8 millones de hectáreas en Santa Cruz y poco más de un millón en el resto del país. La expansión de la frontera agrícola se da básicamente en el Oriente. No es reciente sino desde hace 50 años, con una aceleración a partir de los años 90 por la presencia de inversión extranjera, particularmente argentina, brasileña, menonita, de colonias rusas y de algunos colombianos que traen conocimiento del negocio sojero, tecnología y capital. Ellos encuentran que hay tierras baratas que no están siendo usadas y que hay una elite boliviana —no solo cruceña sino también muchos terratenientes collas— que prefiere alquilar sus tierras antes que producirlas y trabajarlas ellos mismos. El modelo del agronegocio sojero, que se ha implantado a partir de Argentina y Bolivia a países como Paraguay y Uruguay, está generando una clase rentista que prefiere alquilar sus tierras a esos inversores y vivir de sus rentas. Es menos problemático: no tienes que estar sembrando, cosechando, exportando, lidiando con los tractoristas o fumigadores. Si tienes 2.000 hectáreas, tienes casi un millón de dólares por año de ingreso solo por alquilar tu tierra.

Entonces, la mayor cantidad de tierra cultivada en Bolivia está sobre todo en manos de empresarios privados del Oriente.

La mayor cantidad de tierra productiva dedicada a agricultura y ganadería en Bolivia sigue en manos de grandes propietarios que han logrado

sanear sus tierras, o están en curso de hacerlo o las han vendido a inversionistas extranjeros (brasileños, argentinos y menonitas de diferentes países) y que están a la espera de una acelerada expansión del agronegocio. La Cumbre Agropecuaria de abril de 2015, la Agenda 2025, el paquete de leyes y decretos que el presidente ha mandado al Parlamento en agosto de 2015 están generando las condiciones para que la inversión extranjera pase de una escala marginal a una escala significativa: Bolivia quiere ser parte de la liga mayor del agronegocio en América Latina. Por eso el presidente Evo Morales apuesta por ampliar la frontera agrícola en diez años a diez millones de hectáreas nuevas que estarían cultivadas con estos cultivos de exportación.

¿Qué se cultiva en estas grandes extensiones y cómo afecta esto la alimentación en el país?

Los grandes productores del Oriente se enojan cuando se les dice que son monocultivadores, monoprodutores y que el monocultivo erosiona los suelos, deteriora los nutrientes, cansa la tierra y genera un impacto ambiental irreversible. Dicen que no es verdad, que rotan la soja con girasol, con sorgo, con dos o tres cultivos de granos u oleaginosas y que por lo tanto no son monocultivadores. No quieren admitir que hay un cultivo dominante, patrón, que es el que genera la acumulación financiera, porque no se exporta girasol ni sorgo ni chíá, lo que se exporta es soja y sus derivados. Lo que mundialmente se conoce como «boom del agronegocio» está asentado en la soja. Esto tiene efectos colaterales que implican ampliar la frontera agrícola del arroz, maíz, trigo, girasol, sorgo y chíá, lo cual no deja de ser interesante porque arrastra otros cultivos que diversifican de alguna manera la oferta interna de alimentos que satisfacen de lejos la demanda de este pequeñísimo mercado interno de diez millones de habitantes. Bolivia es un poroto. La soja que produce Bolivia significa solamente 0,9% de la soja que se produce en el mundo. Brasil tiene 30 millones de hectáreas de soja, Argentina 24 millones, Paraguay cuatro millones, Bolivia un millón y Uruguay medio millón. La pregunta que se hacen los cruceños es: «¿Por qué no hemos crecido tanto como Paraguay?». Y Evo Morales dice: «Yo quiero imitar el modelo paraguayo, tenemos que lograr que crezcamos como lo ha hecho Paraguay en los últimos diez años». Bueno, el crecimiento de Paraguay ha significado el desplazamiento de un millón de campesinos paraguayos que se han quedado sin tierra y la deforestación de seis millones de hectáreas. Ese es el costo de ingresar a las ligas mayores de los productores de soja en América Latina. Y esa es una opción política: lo quieres o no lo quieres. Y el Estado boliviano ha dicho que sí.

¿Qué producen entonces los pequeños productores? ¿De qué se alimentan los bolivianos? ¿Quién les provee?

El argumento de los sojeros no deja de tener su lógica. ¿Por qué no deja de haber oferta de huevo y de pollos en Bolivia? Porque hay más soja que se convierte en alimento balanceado. ¿Por qué el pollo tiene un precio cada vez más bajo? Porque estoy vendiendo torta de soja a un precio más bajo. Y efectivamente es verdad. El consumo de pollo en Bolivia ya está a nivel del contexto latinoamericano, y el de leche también. Estos son efectos de la cadena de la soja. Pero ¿qué pasa con los productores tradicionales de los productos originarios de la región? El autoconsumo de estos productos ha disminuido y están siendo reemplazados por la comida chatarra, que ha entrado en el imaginario de la dieta popular como una muestra de ascenso social y de prestigio: consumir una hamburguesa es mejor que comerse un plato típico. Hay un efecto de demostración vía la televisión que llega al campo y a los jóvenes. ¿Quiénes producen las verduras y hortalizas que consumimos? Aquí hay un *mix*: en alguna medida, la producen los pequeños productores de origen campesino, pero también los pequeños productores que han encontrado buenos niveles de riego provistos por el Estado. No es el caso de La Paz, que se abastece del contrabando de Perú y Chile y muy poco de pequeños productores locales. Ha habido una transformación muy radical en la última década. Si hace 30 años no había duda en decir que quienes proveían los principales alimentos de la canasta familiar a los bolivianos eran los agricultores campesinos, hoy no es así. Los principales proveedores de los alimentos que consumimos provienen ahora de la agroindustria en una muy alta proporción. Las tierras bajas del Oriente se han convertido en el principal productor de alimentos del país.

Como en México las tortillas, ¿en Bolivia el pan?

Sí. Somos «trigoadictos».

Pero no producimos trigo.

Tenemos un vecino muy grande, Argentina, que es además el principal productor de granos de América Latina, particularmente de trigo, aunque está compitiendo con la soja, que está desplazando al trigo. Nosotros no hemos sido capaces de desarrollar variedades para el trigo que se cultiva en Santa Cruz. El trigo en Bolivia era originalmente de valles (Chuquisaca y Cochabamba, productores de maíz, trigo y cebada) pero el trigo cultivado a lo grande, a lo gaucho, tiene precios cuatro veces

más bajos y una calidad diez veces mayor que el trigo boliviano. Por eso seguimos importando y consumiendo harina americana y argentina. Este gobierno ha hecho esfuerzos importantes y está obligando a los productores de soja a que por lo menos 5% de su cultivo sea destinado al trigo. Les ofrece comprarles 100% de su producción al valor de la bolsa. Es atractivo.

¿Y entonces de qué hablamos cuando hablamos de hambre? ¿Qué es el hambre?

Entiendo el hambre como un estado de violación al derecho a la alimentación; un estado de falta de nutrientes, calorías y proteínas para cubrir las necesidades de desarrollo y crecimiento, que se agrava cuando se concentra en la población infantil desprotegida. No es lo mismo que un adulto tenga hambre que que un niño tenga hambre cuando la leche de su madre no es suficiente en cantidad y calidad o cuando no hay alimentos suficientes para ofrecérselos. En términos planetarios, si comparamos Bolivia con Etiopía, Zimbabwe u otros países, vivimos en una condición ciertamente mejor. Creo que en esos términos en Bolivia no hay hambruna. Hay insuficiencia nutricional, y en general los niños se acuestan con el estómago lleno, aunque sea de fideos, de arroz o de alimentos que no son los mejores.

¿Es posible medir el hambre?

No lo sé. La nutrición se puede medir, pero el hambre...

Los datos respecto de desnutrición, mortalidad, esperanza de vida, salud, es decir, los datos que medirían el hambre en Bolivia muestran mejoras. Se muestra incluso que la pobreza ha disminuido notablemente. ¿Quiere decir esto que el hambre ha disminuido? ¿Hay hambre en Bolivia?

Después de hacer un estudio de caso en seis municipios del país y después de leer estudios comparativos sobre la cuestión alimentaria a escala mundial, me atrevo a decir en voz alta que en Bolivia hemos mejorado notablemente desde hace dos o tres décadas y que la disponibilidad y el acceso a alimentos hoy son mucho mejores para el conjunto de la población, especialmente los niños.

¿Cuál es el indicador que probaría con certeza que hay o no hay hambre en Bolivia?

Por ejemplo, el hecho de que cuando en una familia se recibe un ingreso adicional, en lugar de comprar alimento la mujer se compre una falda, o una cerveza, o vaya a una fiesta, o se vaya de paseo con su

comadre al pueblo vecino. Ese ha sido para mí un indicador interesante de que los umbrales de extrema pobreza y hambruna han sido superados. Porque cuando hay dinero adicional, el que tiene hambre compra alimento, y el que no, engaña a su estómago y puede destinar ese ingreso adicional a otra cosa que no sea alimentación, y esa es una opción subjetiva y personalísima.

¿Cómo se entiende que los indicadores muestren altas tasas de desnutrición al mismo tiempo que un incremento de la obesidad en el país?

He tratado de que me lo expliquen en la Facultad de Medicina. Ellos piensan que es un problema básicamente de educación y de que los buenos alimentos son más caros. La comida chatarra es más accesible, más barata y a veces más rica. La agroindustria también se las ingenia para *marketear* su producto y vendernos empaquetados bonitos.

Si la clase popular boliviana come un buen plato de comida como desayuno y luego otro a media mañana y luego otro en el almuerzo, ¿dónde está el hambre?

Cuando comencé mis primeras investigaciones veía que a mediodía un albañil comía una marraqueta [pan], una botella de refresco Papaya Salvietti y un plátano. Hoy tú ves que comen su guiso de carne, arroz, papa, etc. Hay un cambio, para bien.

¿El cultivo de productos alimenticios básicos ha disminuido? ¿Importamos cada vez más?

Sí. La investigación del especialista en nutrición Julio Prudencio muestra cómo las importaciones de verduras y hortalizas en Bolivia están aumentando aceleradamente. Aun si productos básicos podrían producirse fácilmente en una carpa solar en Viacha, Río Abajo o Palca [regiones aledañas a La Paz], lo hacen pero no cubren la demanda y todavía hay espacio para el contrabando o la importación.

La producción orgánica está siendo impulsada por distintas organizaciones. ¿Podría esto impulsar la producción nacional? ¿Es posible el éxito de esta iniciativa en el país o, nuevamente, beneficiaría solamente a los mercados externos?

No tengo una respuesta sino dudas. Alguna vez he escrito que una opción para Bolivia sería especializarnos en cultivos ecológicos para vender a mercados *gourmet* pero suena un poco raro. Lo que pasa es que los consumidores somos cada vez más exigentes y queremos cada vez más calidad, rastreamos el origen del producto y vemos que no tenga

organismos genéticamente modificados, pero eso en Bolivia es todavía algo excepcional. Pero claro, los que acaban comiendo chatarra son los pobres. Los ricos comen productos de altísima calidad que son diez o veinte veces más caros.

¿Cómo está Bolivia respecto de la seguridad y la soberanía alimentarias?

Peor. En Bolivia hoy hay abundancia de alimentos a partir de una masiva importación y un subsidio al consumo de alimentos. Tenemos seguridad alimentaria en la medida en que encontramos alimentos por todos lados y no hay escasez de alimentos ni en el campo ni en la ciudad. Los mercados están abarrotados y ese es un éxito de la política de Emapa [Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos] y del gobierno: hay una oferta mayor que la demanda. Pero el asunto es cómo cubres tu oferta. Si la cubres vía importación de alimentos, la seguridad alimentaria es endeble, no es sostenible ni siquiera en el mediano plazo. Emapa defiende los intereses del consumidor boliviano, pero no los del productor agrícola familiar campesino. Ahora, en soberanía alimentaria ni hablar. Hemos ido para atrás.

¿Cuál es el impacto de los bonos Juana Azurduy [transferencia condicional en efectivo otorgada por el gobierno nacional, que beneficia a madres en periodo de embarazo y a niños y niñas menores de dos años que cumplan con asistir a controles integrales en salud] y Juancito Pinto [dinero en efectivo a los estudiantes de primaria] en la salud y alimentación de la población boliviana?

En general son positivos. La mortandad por infecciones diarreicas o tos es mucho menor que hace diez años. He visto, por ejemplo en el Altiplano y en los hospitales públicos del norte de La Paz, cómo hay un seguimiento a los recién nacidos: peso, talla, suplementos nutricionales. Una maravilla. Y eso va a cambiar de aquí a 20 años. Esos niños van a ser más fuertes, más grandes y más inteligentes.

UN PAJARITO NEGRO QUE ALZA VUELO

Cecilia Lanza Lobo

Urcuri es una comunidad pequeña del Altiplano boliviano donde no más de 50 vecinos cultivan quinoa y pastan sus llamas, cada vez más escasas. Allí vive Efigenia, una mujer que a los 14 años aprendió a cosechar arroz en los campos cruceños y que hoy, después de décadas de ir y venir entre el campo y la ciudad, produce y exporta quinoa real en cantidades suficientes para ganar 6.000 dólares al año, lo mismo que un empleado público o un maestro.

Pudo haberse llamado Soledad pero su mamá prefirió bautizarla con el nombre de Efigenia, con «e», no con «i» como enseña la mitología griega. Paulina, la mamá de Efigenia, tiene un aire un poco rebelde pero no fue por eso que nombró a su hija con la letra que quiso sino porque equivocó la vocal. Alguna vez oyó ese nombre y lo copió. Al fin y al cabo, de mitología griega no sabía nada. Nunca asistió a la escuela porque nadie la mandó, y con el paso de los años aquello no solo le pareció innecesario sino riesgoso: muchacha que iba a la escuela volvía cargada de «wawa» (hijo). De modo que cuando Efigenia terminó la primaria, Paulina le dijo: «Ya eres jovencita, eres un peligro en la escuela», y Efigenia no se dejó rogar. Casi contenta abandonó el colegio. Tenía tres razones para hacerlo: nunca pudo escribir la letra «b»; para mayor desánimo, sus compañeros la llamaban «pajarito negro» y, finalmente, creía que si asistía a la escuela era para ser maestra y eso nunca le gustó. Vaya destino cantado por el pajarito negro de su oráculo andino. Las tres cosas resultaron al revés.

Efigenia sonríe a sus anchas, sus dientes blancos. Ella puede. Su mamá Paulina, no. No quiere mostrar su sonrisa pelada como maíz desgranado. Efigenia tiene hoy 46 años y aquellos días en la escuela los recuerda hoy con ganas, un poco apurada, casi acostumbrada al relato de su vida. Dice «pajarito negro» y sus ojos se alumbran. En un par de semanas alzará vuelo a Nueva York.

LA TIERRA, LA FERTILIDAD

El Altiplano sur es una inmensa pampa árida, agrietada, blanquecina y a ratos, muchos ratos, arenosa. Arena blanca y seca como talco que se hunde al caminar. Es un desierto en las alturas, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, que también podría haberse llamado Soledad. Pero se llama Urcuri, y es la comunidad de pocas casitas donde vive Efigenia desde siempre, cerca del lago Poopó, no muy lejos del Salar de Uyuni en el camino hacia Orinoca, la tierra de Evo Morales. En esta pampa de color ocre y verdes deslavados con cara de tristeza, el viento sopla frío y a lo lejos se ven llamas, paja brava y alguna que otra construcción de adobe. Es invierno, hace frío pero el sol arde furioso, quema. Todo es planicie hasta donde la vista alcance, lejos, donde se alzan las montañas azuladas.

Urcuri queda a 20 minutos de Quillacas, la población principal del municipio que tiene 4.000 habitantes, a dos horas y media de la ciudad de Oruro en el Altiplano sur, distante a su vez tres horas de la capital del país, La Paz. Urcuri es una comunidad pequeña de no más de 50 vecinos que han regresado al lugar. El espacio es inmenso y sus casas no se ven, están muy dispersas en el Altiplano. La casa de Efigenia es más bien un conjunto de cuartos, uno al lado del otro: uno que mandó construir ella, otro que es de su papá, otro que era del abuelo, dos que son de sus hermanos... y así. Cinco construcciones que forman un cuadrado en cuyo centro está un patio con otro cuarto. Hay un par de árboles, llantas en desuso, recipientes de plástico, botellas y más arriba dos cocinas que nadie usa y cinco gatos gordos. Allí vive la familia Encinas Choque: Efigenia Encinas, sus dos hermanos hombres y sus padres. Todas sus hermanas han migrado y no viven aquí. Si estuviésemos en la ciudad, estas cinco construcciones ocuparían el espacio de una casa de 500 metros cuadrados, no más. Pero Urcuri tiene más de 50 hectáreas de tierra comunitaria donde la familia Encinas Choque cultiva quinoa y patea sus llamas cada vez más escasas.

Desde la carretera asfaltada hay que entrar hasta Urcuri un par de kilómetros. Bajamos del minibús y empujamos porque esto es el desierto mismo y la arena no deja avanzar. Son diez centímetros de espesor de polvo pero si agarras un palo y cavas un poco, más abajo encuentras algo de humedad. Solo así puedes entender que esa tierra desértica sea capaz de parir la mejor quinoa del mundo, la quinoa real.

Efigenia cava con sus manos ajadas y me muestra la tierra más oscura enseñando la particular fertilidad del suelo como si fuese su propio

vientre. Porque Efigenia no tuvo hijos, haciendo caso al miedo de su mamá Paulina aquellos días en que iba a la escuela. «No he tenido la oportunidad», dice, porque entre otras cosas nunca le gustaron los niños, repite varias veces. Efigenia es efectivamente un caso raro en un país donde las mujeres son madres muy pronto y muchas veces: siete hijos por mujer, según las estadísticas, hasta mediados de los años 70 cuando Paulina, la mamá de Efigenia, paría un hijo tras otro hasta completar los diez. A partir de los años 80 las mujeres bolivianas comenzaron a reducir la cantidad de hijos, hoy tienen en promedio tres pero lo hacen cada vez más jóvenes, entre los 15 y 19 años. Las mujeres bolivianas son las que más hijos tienen en toda América Latina, inclusive más que Haití.

Pajarito negro, bicho raro Efigenia, que de niña andaba con esos trajes negros de bayeta propios de su comunidad: pajarito negro, motivo de burla de sus compañeros. Efigenia no tuvo hijos y creció sola igual que su mamá Paulina que, aunque fue única hija, no se libró de dar a luz esa decena de niños de los cuales murieron dos, «una con viruela y el chiquito con dolor de estómago, parece», cuenta Efigenia, un poco insegura porque por aquellos años los niños morían con diarrea como si nada. Con tantos hijos, la mamá Paulina optó por dejar a Efigenia con su mamá y se marchó a la comunidad de su marido, el padre de Efigenia. De modo que el pajarito negro se crió con su abuela, una abuela que tuvo como única hija a Paulina porque su marido, el abuelo de Efigenia, la abandonó. Sin embargo, fue ese abuelo quien un día de esos apareció y trajo consigo unas cosas raras llamadas lima y mandarina: «Feeceas..., duuulces», cuenta Efigenia y se ríe.

LOS FRUTOS DE LA TIERRA

La tierra es su casa, su alimento, su todo. La tierra de Efigenia ha sustituido su maternidad, que ni falta le ha hecho porque su preocupación siempre ha sido el trabajo en el campo. «He tenido amigos pero siempre he vivido sola, tampoco tan fiestera era», cuenta sonriendo y vuelve a decir que mientras cuida a sus llamas y esté en el campo será feliz.

De esa tierra inmensa donde solo vivían 20 abuelos y que poco a poco fueron repartiendo salomónicamente entre todas las familias —que, como dice Efigenia, «fueron progresando», es decir, creciendo con hijos y más hijos hasta sumar ahora 45 personas—; de esa tierra salía papa, quinoa y cebada. Y con eso bastaba, asegura Efigenia. El resto lo conseguían mediante el trueque. De Potosí, el departamento vecino, llegaban campesinos con harina de maíz o de trigo que cambiaban por una

llama viva. Así, además de comer papa y chuño (papa pequeña ennegrecida por la helada), de vez en cuando su abuela cocinaba buñuelo: harina mezclada con un poco de agua y frita en grasa de llama. Ese era su desayuno especial porque lo habitual era desayunar alguna sopa preparada con huesos y quinoa. Aunque a veces la abuela hacía moler toscamente quinoa o cebada para luego mezclar ese «pito» con agua al gusto. Así, el «pito» podía consumirse como caldo, refresco o papilla.

Pero si algo comía Efigenia era el *ph'iri* como pan de cada día. El *ph'iri* sacaba de apuros. Solo había que tostar harina, mezclarla con un poco de agua, formar unos bolos y ponerlos a cocinar al vapor en una olla sobre las brasas. El resultado era una masa pastosa con la que se disimulaba todo. Así Efigenia podía comer *ph'iri* con charque de llama, *ph'iri* con chuño o, finalmente, únicamente *ph'iri*. Además, el *ph'iri* tenía la ventaja de la suavidad porque la abuela no tenía dientes y solo podía comer ese bolo o chuño cocido hasta deshacerse. Tres veces al día, no siempre, ni mucho, ni todo, esta era básicamente la comida de la niña Efigenia. Si una niña de diez años, mediana y delgada, necesita aproximadamente 2.000 calorías diarias, Efigenia consumía menos de la mitad.

Ahora que recuerda, cuenta que su mamá Paulina también le mandaba queso y mote de maíz —425 calorías más—. Entonces dice: «Mi mamá no me hacía faltar, sobre la comida he crecido», y hace un gesto de beneplácito mirando a lo lejos, la casa de su mamá Paulina que hoy tiene cerca de 70 años y vive en la comunidad. Desde aquí, la casa de Paulina es apenas un punto en el horizonte, pero Efigenia ve bien y ni hace falta porque todas las noches camina hacia allá en la oscuridad más profunda guiada solo por su sentido de orientación. Porque aquí en el campo la noche es siempre la noche más oscura del mundo.

EL HAMBRE

A pesar de lo que cuenta, Efigenia sabe lo que es no comer. En los meses de agosto y septiembre, cuando el día es más largo, dice, da más hambre, y cuando no hay comida, el estómago comienza a doler.

Mientras vivió con su abuela, casi nunca le faltó nada porque no tuvo que compartir nada. Claro que en una comunidad como Urcuri las necesidades de una niña suelen ser pocas hasta que llega la hora de compartirlas. Eso mismo sucedió cuando su abuela murió y su mamá Paulina se mudó allí junto con sus siete hermanos: dos hombres y cinco mujeres. Eran tantos que la comida ya no era suficiente. «A veces el chuño no

agarraba el estómago», recuerda Efigenia, y va y trae algo que parece un pedazo de madera del tamaño de una oca: «Amañoqo», dice. Está seco. Es un tubérculo que crece de las raíces de la thola, ese arbusto leñoso que alimenta a las llamas y que hasta hace poco solía ser el paisaje dominante en el Altiplano. Ya no. Yo nunca antes había visto el «amañoqo» y al parecer solo se conoce en el campo y poco. «Tiene una parte bien dulce y otra amarga, la cabeza es amarga», cuenta ella, enseñando el «amañoqo» como su dulce preferido en esa mala hora en que el hambre estrujaba el estómago. Porque como la familia se había multiplicado, si antes Efigenia comía una porción, ahora comía la mitad: medio buñuelo, medio plato, medio bolo, medio todo. Por tal motivo, ella y sus hermanos salían a buscar el «amañoqo» hurgando en la tierra agrietada, corrían a lavarlo al río, lejos, muy lejos, y se lo entregaban a su mamá Paulina, que hacía cocer el «amañoqo» en una olla de barro bajo la tierra. «Whatía», explica Efigenia, traga saliva y dice: «Era riiiiico... como lacayote cocía».

Ahora que el valor nutritivo de la quinoa se reconoce en todo el mundo, Efigenia insiste en que ese fue y es su alimento principal. La quinoa es un grano diminuto de aproximadamente dos milímetros, fruto de una planta de no más de dos o tres metros de altura cuyas flores moradas, rojísimas o amarillas, resaltan en su mejor hábitat en las alturas del Altiplano boliviano, próximas al Salar de Uyuni. La quinoa es considerada un pseudocereal cuyas características nutricionales son excepcionales: tiene proteínas, grasas, carbohidratos y minerales en perfecto equilibrio, no tiene gluten y aporta más del doble de beneficios que ningún otro cereal. La quinoa aporta 368 calorías cada 100 gramos.

Sin embargo, aun comiendo quinoa tres veces al día, ni Efigenia ni sus hermanos alcanzaban a consumir los nutrientes necesarios. Primero porque la quinoa es un grano difícil de llevar a la mesa. Está cubierto por una toxina llamada saponina que obliga a lavarla mucho, y por allí el agua escasea; hay que quitar la saponina y limpiar, un proceso para el que se requieren equipos, aunque sea domésticos. Efigenia y su familia no los tenían pero —como era habitual en el campo antes del auge actual de la quinoa— lograban su cometido usando un tejido tan áspero que era capaz de raspar y limpiar la quinoa. Un trabajo complicado y moroso que se hacía de vez en cuando. De modo que en la familia Encinas Choque el consumo de quinoa era regular pero moderado y también insuficiente, no solo porque no cubría los nutrientes necesarios sino porque hacía falta vitamina C, por ejemplo, o fruta para ayudar al cuerpo a absorber el hierro de la quinoa.

Por eso, aunque Efigenia ignoraba sus ventajas, la vez que conoció la lima y la mandarina fue importante. Fue el día que apareció ese señor diciendo: «Yo soy tu abuelo». Y parece que sí porque ese señor solo repartía la fruta a ella y a sus hermanos, prueba suficiente de que era su pariente. «Nunca había visto fruta», cuenta ahora abriendo sus ojos. «No me gustaba porque era dulce», sonrío y recuerda cuando su mamá les preparaba a ella y a su hermana Margarita un poco de «pito» de quinoa o cebada como merienda, que Margarita cambiaba por azúcar con su maestra en la escuela. Así conoció el dulce. Más tarde contará que lo que más le gusta en el mundo ahora es el chocolate: «Es mi golosina fascinante», se entusiasma.

ESE DULCE LLAMADO CIUDAD

El año 1982 fue particular en Bolivia porque después de varios años de gobiernos militares recuperamos la democracia. Para entonces, Efigenia ya había cumplido 14 años y se preparaba para migrar a la ciudad.

Luego de que la Revolución de 1952 devolviera a los campesinos sus tierras, sucedió un fenómeno singular porque la reforma agraria no solo les dio de regreso sus tierras sino sus derechos ciudadanos, de modo que la presencia campesina en el país se volcó hacia las ciudades. En 1950, de cada 100 habitantes 73 vivían en el campo; para 1980 eran 58 y hoy solo 33 personas de cada 100 viven en el campo. Aunque claro, van y vuelven igual que Efigenia y sus hermanos que, pasada la siembra y la cosecha, se van a la ciudad a trabajar como choferes o comerciantes. Su hermano Irineo, por ejemplo, tiene una confitería en Challapata donde vende salteñas (empanadas típicas rellenas de guiso).

Desde los años 50 hasta hoy, el porcentaje de población rural ha ido mermando a la vez que la población urbana ha crecido. Por esos años el gobierno impulsó planes de colonización de las tierras del Oriente del país, y buena parte de los campesinos de tierras altas partieron hacia la tierra prometida. En la década de 1980 la migración campesina, no solo hacia el Oriente sino a otras ciudades del país, estaba ya consolidada. Muchos de quienes migraron llamaron luego a los suyos año tras año. Eso mismo hizo la familia Encinas Choque, confirmando asimismo la historia que cuenta que los viejos se quedan en el campo mientras los jóvenes parten en busca de un destino mejor. Así, la tía de Efigenia marchó a Santa Cruz y se la llevó.

Cochabamba, y particularmente Santa Cruz, eran destinos atractivos pues en esos años comenzaba en Bolivia el auge de la soja, las plantaciones de

arroz y también el narcotráfico. Eso cuenta la historia y Efigenia la ratifica. Cumplidos sus 14 años, aprendió a cosechar arroz en los florecientes campos cruceños. No aguantó demasiado y ensayó como niñera en una casa tan pero tan grande que allí trabajaban varias cocineras, jardineros, choferes y niñeras. «La cocinera cocinaba aparte para nosotros. *Ch'aque* de trigo, maíz pelado hacía. Cocinaba aparte porque éramos hartos. Sería porque en el campo comemos diferentes comidas y ellos, los dueños de la casa, comidas especiales comían. Verduritas nomás comían. Nosotros, como trabajadores, siempre comemos todo. La cocinera era de Pampa Aullagas también [el pueblo vecino al suyo]. Los dueños... esas veces 'pichicata' [droga] parece que funcionaba. ¡Tanto servicio! Choferes, jardineros... todo tenía».

Pero ni los mimos culinarios de la cocinera convencieron a Efigenia de quedarse en la ciudad. Nunca le gustaron los niños, repite una vez más, pero sobre todo «no me gustaba siempre: un domingo nos dejaban salir, otro domingo no», dice moviendo la cabeza, porque lo que no soportaba era el encierro. Extrañaba el campo y sus llamas. El aire frío y el paisaje infinito.

Esos pocos años citadinos le sirvieron para ahorrar. Ella quería comprarse ropa pero sus papás le insistían en que comprara una mesa. «Mesa, mesa, mesa siempre querían», cuenta ella que hasta ahora no entiende por qué. Y la mesa está ahí, en un rincón de su cuarto repleta de bultos encima, que es lo único para lo que finalmente sirvió.

Pero sus ahorros fueron suficientes y varios años después sirvieron para juntarlos con el dinero de sus hermanos, que también habían migrado escapando de la terrible sequía de 1983 que obligó a carnear el ganado y venderlo como charque en el Chapare, el lugar a donde se trasladó buena parte de la migración andina. Así vivieron los Encinas Choque, yendo y viniendo del campo a la ciudad, entre siembras, cosechas, sequías y heladas durante un par de décadas, hasta que en 2006 comenzó la buena hora de la quinoa y ellos volvieron a sus tierras con una máquina que ayudara en su cultivo.

Fueron sus hermanos Irineo y Arturo quienes se vincularon con una institución que llegó a la zona para impulsar a las organizaciones de productores de quinoa que comenzaron a formarse al enterarse de las potencialidades de su grano en el mercado internacional. En Estados Unidos fue un boliviano, Sergio Núñez de Arco, quien puso en marcha el proyecto y alentó la importación de quinoa orgánica boliviana. Así creó Andean Naturals y su brazo en Bolivia, Jacha Inti. En Bolivia la quinoa no era demasiado apreciada en las mesas urbanas de clase media pero el creciente mercado mundial comenzó a valorarla tanto que desde

principios del año 2000, y sobre todo a partir de 2006, cuando Evo Morales fue elegido presidente por primera vez, la demanda internacional de quinoa —en particular de Estados Unidos— comenzó a multiplicarse: de 7.600 toneladas en 2006 pasó a 12.400 en 2012. Fue en ese año cuando Efigenia decidió sumarse al proyecto exportador al ver cómo sus hermanos construyeron sus cuartos con ladrillo y calamina, compraron un auto y una confitería en Challapata.

LA QUINOA REAL

Efigenia camina hasta el pozo de agua que está a unos 100 metros de su casa. La bomba se ha arruinado hace meses, no tiene agua y espera que alguien la arregle algún día. Alguna vez plantaron por allí tomate y cebolla en carpas instaladas por una ONG que llegó con un proyecto de riego, pero el entusiasmo pronto se secó como el agua y fue rápidamente desplazado por el auge de la quinoa. La quinoa solo necesita el agua de lluvia que moja la tierra y allí se queda. En esa tierra capaz de retener suficiente humedad crecerá luego la quinoa real, soberana y espléndida, sin que nadie la riegue.

Habían pasado dos meses desde la última cosecha, por eso el suelo estaba pelado. Por ahí caminamos y finalmente nos montamos en el carro porque llegar hasta la casa de Paulina a pie tomaría media hora. Finalmente llegamos y encontramos a Paulina, está sentada sobre la tierra contemplando sus llamas. Son casi las seis de la tarde y ha estado allí todo el día, el rostro ajado. Señala con la mirada una llama bebé que nació esa mañana. Paulina está contenta y solo ella y su hija pueden reconocer a la llama recién nacida mirando a gran distancia entre decenas de camélidos. Son 130. Hasta el año pasado tenían 170, pero su ganado ha disminuido porque no hay alimento suficiente —tierra para pastar y agua— para mantenerlo. El cultivo de quinoa ha ido ocupando la tierra para el pastoreo, desplazando a las llamas a un espacio cada vez más pequeño. Igual que ocurrió con Efigenia cuando era pequeña, ahora las llamas tienen que compartir su alimento y este es cada vez más escaso. Por eso cada día son menos llamas, aunque Efigenia todavía defiende la existencia de espacio suficiente. Sin embargo, sabe que el abono que antes le proporcionaban sus propios animales no alcanza y ahora tiene que comprar. Si antes costaba 150 pesos (unos 20 dólares) la carga, ahora cuesta 3.500 (500 dólares).

El precio de la quinoa trepó hasta el cielo en 2014 y llegó a costar 300 dólares el quintal. El último tiempo ha comenzado a bajar hasta llegar a 67 dólares. Es un asunto grave para los productores locales. El vuelo

que alzaron las exportaciones desde el año 2006 tuvo luego un importante descenso: de 34.700 toneladas en 2013 a 29.500 un año después. El agronegocio le echó el ojo y ahora se cultiva quinoa en varios lugares del mundo al modo industrial convencional: utilizando químicos. La quinoa real boliviana, probadamente la mejor del mundo por varias razones, está en emergencia. Pero Efigenia, que suele decir «tengo una iniciativa», cree que lo que hay que hacer es transformar la quinoa en diversos productos envasados y consolidar el mercado local de una buena vez. Para eso está empeñada en lograr una alianza con los gobiernos locales y regionales, de modo que estos se comprometan a comprar de forma regular importantes cantidades de quinoa para incluirla como alimento base del «desayuno escolar».

Porque aun si en el último tiempo ha disminuido, el negocio de la quinoa boliviana es rentable. La competencia de la producción industrial convencional peruana, cuyo producto es ciertamente más barato, es inminente, pero a Efigenia no parece preocuparle demasiado. Ella cosecha y exporta su quinoa en cantidades suficientes como para lograr cerca de 6.000 dólares al año, unos 500 dólares al mes dependiendo de la cosecha, que equivalen al sueldo de un empleado público de nivel medio o de un maestro. Tiene la ventaja de venderle a Andean Naturals, que le asegura mercado, certificación orgánica y un precio mayor, además de otros incentivos como el panel solar que le instalaron hace poco en su casa para obtener energía eléctrica, cuya mayor utilidad no ha sido alumbrar sus noches sino poder cargar la batería de su teléfono celular.

No es poca cosa. Desde que Efigenia se puso a estudiar Comunicación Social a distancia hace un año, le tomó mucha fe a la tecnología. «Bien cara había sido una Mac», comenta de pronto. Y sigue: «Para editar video y eso, ¿no?», aclara, y en su gesto se ve que ahora que sus ingresos se lo permiten, hasta sería posible comprarse una computadora de Apple. «Ahora tengo acceso para estudiar, puedo conocer la computadora, la tecnología. Antes no podía comprarme ni una calculadora. Ahora, teniendo platita, puedo. Puro inglés había sido», comenta y esta vez se ve que aprender inglés es una posibilidad. Dentro de poco rendirá sus últimos exámenes en Cochabamba, la ciudad donde ha estudiado yendo y viniendo, y se graduará como facilitadora. Quiere dar a conocer los problemas de su comunidad y para eso la tecnología es fundamental, cree ella: «No manejamos internet y aquí muchos problemas pasan, hay sequía y no podemos acceder al gobierno municipal y demás cosas al instante. Uno tiene que sacar foto y mandar por internet para que verifiquen si está pasando o no. También hay violencia, hay niños abandonados y esa facilidad de tomar fotografías o mandar esa información es

importante. En el campo las mujeres callan. Yo quiero hacer conocer los problemas que tenemos aquí», explica entusiasmada y también dice que ahora está enterada de lo que significan las autonomías y el «Vivir Bien», el plan de gobierno del presidente Evo Morales. Hasta 2013 ocupó un cargo importante en su comunidad y sus inquietudes políticas siguen.

Ella, que no quería ser profesora, se prepara para ser facilitadora y capacitar a más mujeres como ella. No podía escribir la letra «b» pero pronto será comunicadora social y tendrá su propia computadora. Su mamá Paulina tuvo miedo de mandar a su hija a la escuela por miedo a que volviera preñada pero Efigenia, pajarito negro, creció como hija emprendedora y autosuficiente. La empresa Andean Naturals la escogió para llevarla, junto con sus hermanos Irineo y Arturo, a la feria de productos orgánicos más importante de Baltimore, donde verán su quinoa en los estantes del Primer Mundo. Es la primera vez en su vida que Efigenia se subirá a un avión. Efigenia, pajarito negro.

El sol ha comenzado a esconderse tras las montañas. De pronto, Efigenia y Paulina comienzan a ulular: uhhhh, uhhhh, shhhh, shhhh, uhhhh, uhhhh, gritan. «¡Oso! ¡Oso!», y con la mano agitan una sonajera de pequeñas piedritas. Las llamas dispersas comienzan a correr, se juntan y obedientes se dirigen a su casa, a dormir. El silencio del Altiplano se rompe por unos minutos para luego volver a su lugar. Mañana volverá a salir el sol.

Brasil



DE LA MISERIA A LA OBESIDAD

João Peres / Tadeu Breda

El Brasil del siglo XXI abandonó el Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas gracias a la combinación de políticas de ingresos, aumento del empleo y el salario y mucha movilización social. Sin embargo, falta saldar deudas históricas en el área rural y con los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, evitar una epidemia de obesidad y la reversión del ciclo de prosperidad que sacó a 36 millones de brasileños de la extrema pobreza.

Nimbopyrua usó la técnica que sus antepasados mantuvieron durante siglos: cortó un brote de la rama de la mandioca, lo enterró horizontalmente y esperó. Pasados algunos meses, arrancó la raíz y, para su decepción, nada había crecido. Algunos meses más y, de nuevo, nada. De repente estaba forzada a comprar en el mercado aquello que toda la vida, durante cinco décadas, había obtenido del suelo. Su vivienda ya no estaba construida sobre tierra roja, sino encima de una arena blanca infértil, incapaz de proveer los elementos más básicos de la cultura tupí-guaraní: mandioca, batata y maíz.

Estos elementos, mantenidos durante quién sabe cuánto tiempo por los pueblos indígenas, fueron fundamentales en la formación del territorio y de la cultura alimentaria de Brasil. El caso de Nimbopyrua, también llamada Catarina Delfina dos Santos, hoy de 65 años, es particular: el cambio de las tierras fértiles de Bananal, a pocos kilómetros de allí, por las infértiles de Piaçaguera, en el litoral sur del estado de San Pablo, en el año 2000, fue lo que selló la suerte alimentaria de su pueblo.

No, el caso de Nimbopyrua no es particular: la alimentación de los pueblos tradicionales surgió como un gran desafío para un país que en las dos últimas décadas alcanzó un avance singular en el combate a la extrema pobreza. En 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró que Brasil abandonó el Mapa del Hambre por primera vez. Nimbopyrua y su pueblo habían quedado atrás.

Entre 2002 y 2012, el índice de subalimentados se redujo en 82%, uno de los mejores desempeños a escala global y el mejor de América Latina, acompañado por Venezuela. Eran 22,5 millones de personas en 1990, 19 millones en 2002 y 3,4 millones en 2013. De 2002 a 2014, 36 millones de personas dejaron la extrema pobreza. ¿Por qué el año 2002 siempre es elegido como marco temporal? Es el año que precede al comienzo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Es el lapso que la administración del Partido de los Trabajadores (PT) buscó para confrontarse con el desempeño de los oponentes en las seis últimas elecciones, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Estos últimos, conocidos como «tucanes», dicen que Lula básicamente solventó programas ya existentes. Los del PT alegan que hubo un cambio absoluto en la orientación del Estado para dar cuenta del problema del hambre. Manteniendo las proporciones, no podría ser diferente: el PT era el resultado del encuentro de corrientes ideológicas y movimientos del campo y de la ciudad interesados en el combate a la pobreza. Antes que nada, se creó el Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre (dentro de la simbología lulista, recibió la abreviatura MESA).

Comandado por el agrónomo José Graziano, lanzó las bases de Hambre Cero, un programa de transferencia de ingresos dentro de los moldes de otros que habían surgido en la región, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) en Argentina y el Bono Juancito Pinto en Bolivia. MESA dio lugar al Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, y Hambre Cero fue sustituido por Bolsa Família. El programa se inició con 5,8 millones de beneficiarios en 2003 y llegó a 14 millones en 2014 (en los cálculos del gobierno, un cuarto de la población brasileña es subsidiada en forma directa). El valor medio actual del beneficio es de 163 reales (unos 40 dólares), con un desembolso anual de alrededor de 27.000 millones de reales (8.000 millones de dólares).

«La salida del Mapa del Hambre es el cruce de una decisión política tomada por el presidente Lula, y la ocupación de espacios por la sociedad civil. No se explica la presidencia de Lula sin esa dinámica social anterior», afirma Renato Sergio Jamil Maluf, una de las autoridades del estudio y de la formulación de políticas sobre hambre en Brasil. Maluf sigue el tema desde la década de 1980 y actualmente es miembro del Panel de Alto Nivel de Especialistas en Seguridad Alimentaria y Nutricional de Naciones Unidas.

Las articulaciones contra la miseria tomaron nuevo aliento en el país al final de la dictadura, en 1985, y durante los debates que dieron como

resultado la Constitución de 1988. Años de conversaciones estancadas comenzaron a adquirir contornos institucionales durante el gobierno de Itamar Franco (1992-1994), que aceptó crear el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA). Pero la llegada de Fernando Henrique Cardoso a la Presidencia marcó el cierre de algunos canales de diálogo. El trabajo de CONSEA se interrumpió. Y la población en situación de pobreza, que había retrocedido de 31,3% en 1993 a 23,9% en 1995, cerró el gobierno de Cardoso, en 2002, en 24,3%.

De cierto modo, la debilidad de Cardoso en el área social fue la fuerza de Lula en las elecciones cuando adoptó la bandera de la esperanza contra el miedo a los cambios. «El Brasil que come ayudando al Brasil que tiene hambre», fue uno de los primeros eslóganes de un gobierno que podía contar con la colaboración —y la expectativa— de académicos y movimientos involucrados en la lucha contra la pobreza. Dentro de los gestos simbólicos buscados por el ex-sindicalista, la reactivación de CONSEA ofreció la perspectiva de la reapertura del diálogo. El colegiado no delibera sobre la realización de políticas públicas, pero puede sugerirlas e influir en la implementación.

Flagelado, *retirante*, industria de la sequía. El léxico de Brasil a comienzos del siglo XXI reflejaba el *know how* de un país acostumbrado a la pobreza. El Noreste era la imagen del hambre por excelencia: niños con las costillas a flor de piel y una enorme barriga portadora de lombrices; mujeres con latas en la cabeza caminando kilómetros hasta un charco de agua sucia; la tierra rajada por la sequía; millares de personas yendo del sertón sin lluvias hacia el litoral menos árido o hacia otras regiones.

El fenómeno, exhibido *ad nauseam* en los noticieros televisivos, había sido naturalizado, presentado como mera cuestión de falta de lluvia y no de inacción política. Sabíamos de la existencia de los coroneles nordestinos, símbolos de la perpetuación del poder político obtenido a cambio de una bolsa de alimento, de ropa, de un camión de agua. La actual ministra de Desarrollo Social, Tereza Campello llegó al gobierno en la transición de Cardoso a Lula, en la misma época en que la Articulación en el Semiárido Brasileño (Noreste del país) intentaba entrar en el Planalto con una idea simple y eficaz. La organización, que congrega varias entidades de la sociedad civil del Noreste, quería dar impulso a la producción y distribución de cisternas, estructuras usadas para capturar agua de lluvia en los raros periodos en que la sequía da tregua. De esta manera, el agricultor consigue decidir en qué momento va a echar mano del precioso líquido.

Parecía simple y barato. Si era tan fácil, ¿por qué nadie lo había hecho? Hoy son 1,2 millones de estructuras para consumo humano y poco más de 100.000 para producción agrícola. «Las cisternas tienen varios impactos. Primero, la mujer que caminaba ocho o diez kilómetros para buscar agua ahora tiene agua en la puerta de la casa», afirma Naidison de Quintella Baptista, uno de los coordinadores de la Articulación en el Semiárido. «Segundo, la calidad del agua, que era barroosa, que venía de fuentes donde se lavaba la ropa, donde estaban los animales. Además, usted compra los materiales de construcción en la ciudad y eso mueve el comercio. Utiliza mano de obra de los albañiles locales y eso mueve la economía del municipio.»

La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), otra organización que actúa en el Noreste, considera que las cisternas tienen que ser entendidas más allá de las estructuras. «Hay todo un proceso de educación de las familias sobre los cuidados con el agua, sobre las dificultades de convivencia con el semiárido. Son grupos multiplicadores de conocimiento. Eso no ocurre con las cisternas de plástico, que el gobierno decidió implantar sin escuchar a los movimientos sociales. No generan ni empleo, ni renta. Es, nuevamente, la lógica del capital sobreponiéndose a la lógica de la agricultura familiar y campesina», protesta Thiago Valentim, integrante de la coordinación nacional de la CPT.

A Lula le gustaba reproducir en el gobierno las tensiones de la sociedad brasileña. Creó el Ministerio de Desarrollo Agrario para cuidar la agricultura familiar y contraponerse al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, volcado al agronegocio y con muchos más recursos. Entregaba el Ministerio de Comunicaciones a un representante de *O Globo*, mientras alimentaba a asesores interesados en los medios alternativos. Ponía desarrollistas y neoliberales frente a frente. Se enfrentaban ambientalistas y admiradores de obras enormes en medio de la Amazonia. Y el presidente se nutría de la certeza de que de las radicalizaciones surgirían las mejores políticas públicas.

En algunos casos funcionó. El salario mínimo tuvo un aumento real de 72,31% de 2003 a 2014 —de 200 a 788 reales—, a punto tal de haber recuperado finalmente el poder de compra perdido durante la dictadura. La apertura de puestos de trabajo alcanzó el récord de 11 millones entre 2003 y 2010, frente a 790.000 de Cardoso, y se crearon 4,7 millones más en el primer mandato de Dilma Rousseff. La inversión en programas sociales creció 128% en diez años, y llegó a una media anual de 35.000 millones de dólares. Bolsa Familia, en los cálculos del gobierno, da un retorno en la economía de 1,78 reales por cada real invertido (50 centavos de dólar).

El llamado «ciclo virtuoso» alcanzó su punto máximo en 2010, cuando Lula estableció como sucesora a la ministra jefe de la Casa Civil. La secuencia de esa política llevó la pobreza de 24,3% de la población en 2002 a 8,4% en 2012, y la extrema pobreza, de 14% a 3,5%. La subalimentación cayó de 10,7% a 1,7%. Los niños alimentados por el programa Bolsa Família comienzan a desmentir el mito de que el nordestino es bajo por naturaleza: lo que les faltaba era comida. Y agua. Entre el 5% más pobre, el acceso a comida y agua pasó de seis de cada diez personas a ocho de cada diez. En el mismo segmento, la provisión de energía eléctrica subió de 84% a 97,6%.

Además de Bolsa Família y del aumento de renta garantizado por la creación de empleo y la valorización del salario mínimo, otras políticas se cruzaron en el combate contra el hambre. El Programa de Adquisición de Alimentos empezó a comprarles a los agricultores familiares, en la búsqueda de resolver la principal queja del sector: la falta de canales para encauzar la producción. Dentro de la dicotomía lulista, se creó una línea de crédito para los pequeños productores (en 2015, el monto ofrecido fue de 30.000 millones de reales (10.000 millones de dólares), frente a 200.000 millones de reales del agronegocio, (70.000 millones de dólares). Por otro lado, el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) previó que 30% de la merienda servida a los niños proviniera de la agricultura familiar local. Los 43 millones de niñas y niños alimentados por las redes públicas fueron uno de los motivos que llevaron a Brasil a salir del Mapa del Hambre.

Es un cruce de políticas considerado exitoso por la FAO, hoy dirigida por Graziano, que dio inicio al Hambre Cero, en una elección justamente acoplada a los avances obtenidos por el país. Bolsa Família obliga a mantener a los niños matriculados, el Programa de Adquisición de Alimentos garantiza la renta de los productores y el Programa de Merienda Escolar asegura que los alumnos no pasen hambre. Hubo, además, un esfuerzo por institucionalizar políticas. En 2006 se sancionó la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que busca definir el papel de cada esfera de la federación para crear un sistema de salvaguardias sociales. La legislación creó también la Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, un órgano formado por ministros para discutir las sugerencias encaminadas por el CONSEA que, a su vez, ya no puede ser cerrado. Cuatro años más tarde, en 2010, el Congreso Nacional promulgó una enmienda que coloca la alimentación entre los derechos sociales básicos de la Constitución.

Cuando finalizó el gobierno de Lula, la expresión «dar calidad» a las transformaciones pululó en la boca de Dilma y sus ministros. Dar calidad se traducía en llegar a las personas «invisibles» para el Estado, lo que el gobierno llamó «núcleo duro de la pobreza»: 16 millones de habitantes. Eran en su mayoría negros (71%) y concentrados en el Noreste (60%), con proporción preocupante de niños y adolescentes (40%). Los residentes del área rural, que representan 15,6% del total de la población, eran casi la mitad de los extremadamente pobres.

El objetivo era garantizar en cuatro años el fin de la extrema pobreza, fijada en la línea de 70 reales al mes (17 dólares) por persona. Brasil sin Miseria fue debatido durante seis meses, articulando dos decenas de órganos federales en tres ejes: garantía de ingresos, generación de ingresos por medio de la inclusión productiva y acceso a los servicios públicos. «El pilar de la transferencia de ingresos era responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, cuando usted manda, se hace más fácil. Las otras son articulaciones con otros ministerios y ahí comienzan más dificultades», analiza Nathalie Beghin, que estaba en el equipo que dio forma al programa. Ella colaboró con la elaboración de políticas contra la miseria en gobiernos anteriores y hoy está en el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), una ONG.

De nuevo, los números de Brasil sin Miseria tienen fuerza: 22 millones de personas dejaron la línea de pobreza entre 2011 y 2014, con una inversión total de 109.000 millones de reales (30.000 millones de dólares). Pero hay problemas. El CONSEA quedó al margen del programa, a diferencia de lo que había ocurrido en las articulaciones del gobierno de Lula. Y siguen existiendo serias cuestiones en la zona rural.

UN MUNDO DE OBESOS Y HAMBRIENTOS

Somos un país con manía de grandeza. Al dejar el Mapa del Hambre, empezamos a promover el esfuerzo hercúleo para escalar al tope del ranking de obesidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Nadie puede negar que hicimos progresos extraordinarios: casi 60% de los brasileños está con sobrepeso o es obeso. Cuando usted piensa en Brasil, ¿ve la imagen de cuerpos agradables en una playa paradisíaca? Olvídense de eso. Somos una nación de gordos. Seis de cada diez mujeres entre 35 y 44 años tiene sobrepeso, índice que llega a siete de cada diez entre los 55 y 64 años. A lo largo de una década, entre 2003 y 2013, la obesidad femenina pasó de 14% a 25,2% y entre los hombres, de 9,3% a 17,5%.

¿Estábamos mejor con millones de hambrientos? Es evidente que no. Los ingresos posibilitaron también el acceso a alimentos antes inalcanzables para los más pobres, especialmente fuera de casa. Pero el tema es más complejo y tiene raíces en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria había acumulado tecnología de procesamiento de alimentos para las tropas y necesitaba volcar el conocimiento en algún lado.

Pasadas siete décadas, la OMS constató que la oferta de calorías aumentó de forma escalofriante. Desde 1980, la proporción de obesos en el mundo saltó de 28,8% a 36,9% entre los hombres, y de 29,8% a 38% entre las mujeres. Tenemos un problema global con muchas características regionales.

Es un lunes de septiembre de 2015. Salimos tarde de un debate realizado en una universidad de Rolim de Moura, una ciudad de 50.000 habitantes ubicada en el interior de Rondônia, un estado amazónico al norte del país. Tenemos hambre. ¿Podemos comer pescado con açaí, la maravillosa pulpa morada de una baya silvestre servida como dulce o salada? ¿O una cecina con mandioca? No. El único lugar abierto a las 23:30 es una sandwichería Subway. Pedimos el nuevo plato, que trae costilla de cerdo con salsa barbacoa. Son 405 calorías, con seis gramos de grasas saturadas (un cuarto de lo recomendado por día para un cuerpo adulto), 46 gramos de carbohidratos (un tercio de lo recomendado) y casi un gramo de sodio. Como el hambre es mucha, acompañamos con una papa industrializada que proporciona 140 calorías, 12 gramos de carbohidratos y cuatro gramos de grasas saturadas. El jugo de uva agrega 200 calorías y 48 gramos de carbohidratos.

Subway es un emblema alimenticio de la pujanza económica que Brasil experimentó a lo largo de una década. La cadena saltó de 800 locales en el país en 2011 a casi 2.000 en 2015. Hoy tiene presencia en todos los estados brasileños. Hecho raro. A pesar de que el sándwich de la cadena ofrece una tabla nutricional menos grave que la de otras cadenas de *fast-food*, el balance final queda muy por encima del ofrecido por alimentos tradicionales. «Independientemente de la cultura y las costumbres locales, la marca Subway creó una red con patrones y procedimientos internacionales», dice el sitio web de la empresa. «O sea, el sándwich que usted come acá en Brasil puede ser encontrado también en Islandia».

Nubes de turistas brasileños llegan todos los días a Buenos Aires dispuestos a probar las delicias de la cultura local: McDonald's y Burger

King a precios más bajos que los aplicados aquí. En Roma, una pasta saldrá nueve, diez, 15 euros, mientras que por menos de la mitad se come el mismo Big Mac que se probaría en San Pablo. «El estímulo exagerado hacia el consumo de alimentos superfluos termina interfiriendo no solo en la salud sino también en los hábitos alimenticios y en la cultura. La gente deja de valorar los alimentos tradicionales. La masificación acaba perjudicando la diversidad», critica Ana Paula Bortoletto, nutricionista e integrante del Instituto Brasileño de Defensa al Consumidor (IDEC).

La economía brasileña creció a una media de 2,2% al año en el primer mandato de Dilma. En el mismo periodo, el sector de *fast-food* vio aumentar la facturación un 9% anual, según el Instituto Food Service Brasil, para llegar a 157.000 millones de reales (50.000 millones de dólares) en 2014. Un reportaje del periódico *Valor Econômico* dice que la facturación había crecido 80% entre 2008 y 2013. En ese intervalo, los puntos de venta de comida rápida pasaron de 360.000 a 400.000. Burger King pasó de 17 locales en 2011 a 193 en 2013, y a 293 en 2014. McDonald's es todavía más grande: 850 unidades. Dos de ellas están a pocos kilómetros de Catarina, la tupí-guaraní que vio la cultura alimentaria de su pueblo perderse en el litoral de San Pablo. Cuando éramos pequeños y pasábamos el verano en aquellas playas, nuestros padres buscaban peces y camarones frescos en el puerto. Hoy, durante la temporada alta, los autos hacen fila para entrar en los locales del McDonald's de Peruíbe e Itanhaém.

El Ministerio de Salud dice que 60,8% de los niños brasileños con menos de dos años de edad come bizcochos, galletitas y tortas. 32,3% toma gaseosas o jugos artificiales. El film *Muito Além do peso* [Más allá del peso], que debería recibir el Oscar en la categoría «Documental más preocupante de 2012», les pone caras a los números. Son niños de dos, tres, cuatro años, que patalean, lloran, gritan desesperados por un poco más de azúcar.

«Evite los alimentos ultraprocesados». El mensaje central de la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, lanzada el año pasado por el Ministerio de Salud, enfureció a la industria defensora de las virtudes de productos con alto grado de industrialización, como productos de cope-tín, gaseosas, pastas instantáneas y algunas bebidas lácteas. El documento se convirtió rápidamente en una referencia global al dejar de mirar los alimentos solo por las informaciones nutricionales.

El equipo del Núcleo de Investigaciones Epidemiológicas en Nutrición y Salud de la Universidad de San Pablo (USP), contratado para

hacer el trabajo, decidió echar luz sobre el modo en que cada alimento llega a la heladera y a la despensa de las familias. «Teníamos una mirada equivocada hacia lo que estaba ocurriendo en la alimentación en Brasil», dice María Laura da Costa Louzada, integrante del núcleo. La guía tiene un lenguaje fácil, pensado para transformarse en instrumento de comunicación que no quede restringido a los grupos que actúan en la salud. Básicamente, recomienda que se coma lo más natural posible y que los productos industrializados sean aquellos que pasaron por un procesamiento mínimo: arroz, frijol, garbanzo, carnes en cantidades moderadas.

Los ultraprocesados son criticados por contener una composición nutricional desbalanceada y la capacidad de engañar al organismo, proporcionando informaciones erradas sobre el grado de saciedad del sistema digestivo. La facilidad para abrir cualquiera de estos productos frente al televisor, dentro del auto o en el trabajo hace que se pierda el momento de sentarse a la mesa, convivir, intercambiar experiencias y reflexionar sobre lo que se come.

La Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos dice que el sector tuvo 529.000 millones de reales (160.000 millones de dólares) de facturación en 2014. «Deshidratados y supercongelados» son la principal fuente de ingresos de un segmento que exportó 35.400 millones de dólares, un peso relevante en una balanza comercial que se volvió deficitaria en los últimos años.

«La primera cosa que se pierde es la historia del alimento. Es un elemento vivo que fue creado por la naturaleza», dice María Louzada. «También perdemos la conformación de las comidas. ¿Por qué se combinan los alimentos de esa forma? No es algo aleatorio. Son generaciones y generaciones que fueron equivocándose y acertando hasta conseguir definir algunos patrones de alimentación que no sabemos cómo se descubrieron pero que son saludables».

Una propaganda de Sadia, gigante de la industria de alimentos, recomienda que se practique una «vida más sabrosa». No hay comida durante los 30 segundos de la tanda publicitaria. Son hombres y mujeres con cuerpos bellos, practicando deportes y viviendo bien. Por otro lado, la competidora Seara estampó en su anuncio un jamón que tiene 50% menos grasa y 36% menos sodio.

Se transforma en virtud lo que es una obligación legal o moral. La obesidad es un tema central en los debates sobre salud. Tres de cada cuatro

muerter en Brasil son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, aquellas provocadas por los hábitos de vida y por las condiciones generales del cuerpo. La hipertensión, que afecta a 25% de los brasileños, está asociada con problemas cardiovasculares. El consumo diario de sal en Brasil es de 12 gramos por persona, contra una recomendación de la OMS de cinco gramos diarios. Un acuerdo firmado entre el gobierno y la industria retiró 7.652 toneladas de sodio de los alimentos entre 2011 y comienzos de 2015. Es poco: será necesario cuadruplicar ese número para alcanzar la meta firmada para 2020.

¿Cómo llegamos a este cuadro? No fue de la noche a la mañana. El historiador y antropólogo Câmara Cascudo, en *Historia de la alimentación en Brasil*, lanzado en 1967, registra su indignación con los que serían los precursores de los ultraprocesados. «Las recepciones con productos de copetín, las bandejas circulantes, las comidas en los restaurantes automáticos, los panchos, los sándwiches fríos, la disculpa de no tener tiempo para comer, aplicándolo a otras tareas inferiores, el disfraz decorativo mutilando la integridad sávida, las máquinas *self-service*, la banalidad multicolor de los *drugstores* son factores adversos a la buena y venerada tradición culinaria».

La creencia de que basta con abrir un paquete y servirlo llevó a que muchos abandonaran el hábito milenario de transmisión de conocimientos culinarios. «¿Qué comemos y quién está controlando lo que comemos?», indaga Thiago Valentim, de la Pastoral de la Tierra. La organización internacional Oxfam dio una respuesta: diez marcas controlan la franja significativa del mercado global de alimentos, con una facturación anual que las colocaría, si fueran un país, entre las 40 mayores economías.

«Comer es un acto político», dice la antropóloga Maria Emília Lisboa Pacheco, actual presidente del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La concentración de la producción de alimentos es seguida por la concentración de la comercialización: las cinco empresas más grandes de súper- e hipermercados de Brasil recaudan 53% de la facturación, según datos de la asociación del sector.

En algunos lugares, los establecimientos se convirtieron en la gran referencia alimentaria. San Pablo tiene 871 ferias libres para 11 millones de habitantes. Hay otros 17 puestos municipales, que son espacios de comercialización de frutas y verduras. La capital es uno de los lugares en que se formaron los «desiertos alimenticios», áreas en las que prácticamente no hay provisión de productos frescos. En general, los desiertos están localizados en barrios de bajos recursos, donde los mercados se convirtieron en reyes al proveer ultraprocesados a precios baratos, con

una practicidad sin par para una población forzada a perder hasta cinco horas diarias en desplazamientos en transporte público.

«Estamos bajo el yugo de una dinámica privada de abastecimiento. Con excepción de algunos municipios, se toman pocas iniciativas. No veo al gobierno federal estimulando a las municipalidades a involucrar más activamente en estrategias de abastecimiento. No es que no existan iniciativas del gobierno federal. Existen, pero son muy pocas y muy débiles», dice Renato Jamil Maluf, que presidió el CONSEA y sigue como integrante de la comisión directiva.

La disponibilidad de alimentos adecuados es vista por el Ministerio de Salud como un eje central en el combate contra la obesidad, junto con campañas de educación sobre consumo saludable, promoción de la actividad física y regulación de la calidad de los productos. «La garantía del acceso a los alimentos de buena calidad en todas las áreas de los centros urbanos exige la elaboración de políticas intersectoriales», dice Michele Lessa, coordinadora general de Alimentación y Nutrición del ministerio. Esto implica incentivos a la existencia de ferias y la reducción de precios de frutas, legumbres y verduras, lo que pasaría por la colaboración entre gobierno federal, estados y municipios.

El de Salud es uno de los ministerios que reciben demandas de los sectores de la sociedad favorables a la imposición de límites a la industria de alimentos. En 2010, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) determinó que la publicidad sobre comida fuera acompañada por alertas sobre los daños al cuerpo, siguiendo el modelo de lo que se hace con las propagandas de cigarrillos. Rápidamente, el Poder Judicial revocó la decisión y enseguida se definió que solo el Poder Legislativo tiene poder sobre la cuestión. No se puede esperar del Congreso Nacional ningún obstáculo al sector privado: la bancada empresarial domina directamente la mitad de las bancas en la Cámara y el Senado, y tiene muchos amigos en la otra mitad.

«La industria dice que regular la publicidad hiere el derecho a la libertad de expresión comercial. Es un absurdo. La Constitución prevé el derecho a la libertad de expresión de ideas, de pensamiento, de ideología, de cultura», dice Ana Paula, del Instituto de Defensa del Consumidor. «La publicidad guía la demanda de ultraprocesados con una imagen de bienestar, de felicidad. Intenta ocupar el espacio de la educación nutricional».

Sadia, la empresa que hizo el anuncio publicitario de los deportistas, lanzó otro en que una pareja sonriente llega a la conclusión de que el nuevo

jamón tiene apenas 15 calorías por tajada. «Sí, querido, y 200 miligramos de sodio». La propaganda de mayonesa Hellmann's va en la misma línea: 40 calorías por cuchara. «Amor, compra mayonesa que está liberada. Es de bajas calorías», dice un hombre al teléfono.

Cuando se le pregunta sobre la posibilidad de imponer límites a la publicidad de alimentos, la ministra Tereza Campello es evasiva: el camino son las acciones educativas, en especial de jóvenes y niños. Claro. Si la regulación del sector no avanzó durante el auge del lulismo, no será en tiempo de baja cuando se verá resuelta. La pauta conservadora ganó mucha fuerza y crecieron todas las ideas contrarias a cualquier límite. El límite de tierras, como no podía ser de otra manera, entra en esta canasta. El agronegocio brasileño, siempre muy fuerte, ha obtenido victorias importantes en la lucha contra la reforma agraria y la demarcación de territorios tradicionales.

«Bundão», tachó João Pedro Stédile, uno de los principales líderes de los sintierra del país, al evaluar la conducta del gobierno de Dilma en relación con la reforma agraria. Es una expresión bien brasileña para definir «flojo, lento, débil». Fueron 107.000 familias asentadas en los primeros cuatro años frente a 614.000 de Lula y 539.000 de Cardoso. El argumento inicial fue que sería necesario reducir la velocidad para garantizar una mejora en la calidad de los asentamientos creados y, a continuación, retomar con fuerza la redistribución de tierras. El freno funcionó. El acelerador está atascado. Y no hay mecánicos en el gobierno.

Año tras año, el agronegocio bate récords de exportación y de recursos públicos prestados. También renueva las marcas de trabajo esclavo y deforestación. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) dice que las grandes propiedades responden por 15,6% del total de establecimientos agropecuarios pero controlan 75,7% de las tierras agroclutivables y se quedan con dos tercios de la ganancia. En el otro extremo, la agricultura familiar tiene 84% del total de las propiedades distribuidas en solo 24,3% del territorio. En ellas se produce la mayor parte de la mandioca, el frijol y la leche que consumen los brasileños, además de franjas significativas de arroz, café y carnes de vaca, cerdo y aves.

El coeficiente de Gini, usado para medir la desigualdad, da pruebas de cómo el sector rural brasileño tiene fuerza para garantizar que nada cambie. Entre 1985 y 2006, el índice en la zona agraria pasó de 0,857 a 0,854 (cuanto más próximo al 1, peor es la situación de equidad de un país). Se trata de un grupo históricamente acostumbrado a hacer del

Estado la extensión de sus tierras, movilizándolo hace 200 y tantos años al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial para que se perpetúe la pobreza rural. «Es conveniente que no lleguen todas las inversiones porque eso posibilitaría la soberanía de las familias. Nuestra experiencia muestra que en áreas desarrolladas por las familias, las grandes empresas tienen más dificultades para entrar», dice Valentim, de la Pastoral de la Tierra.

Volvemos al interior de Rondônia. Vamos a la región del Cono Sur, famosa por tener las áreas más fértiles del estado. En la dictadura, solo aquí se entregó a los hacendados poco más de un millón de hectáreas. Recientemente, el gobierno federal expropió para la reforma agraria un área emblemática: la hacienda Santa Elina, donde en 1995 un conflicto dejó 12 muertos (nueve sintierra, dos policías y un muchacho no identificado). Los propietarios tuvieron derecho a 52,7 millones de reales (17 millones de dólares) por 14.000 hectáreas, incluso después de haber deforestado fuera de los límites legales. Andando por el lugar, hoy convertido en asentamiento, se notan los efectos de la falta de estructura ofrecida por los órganos públicos. Muchos lotes no están cultivados. Otros fueron vendidos, lo que es ilegal. En algún momento, todo o casi todo volverá a estar en manos de grandes hacendados para que produzcan soja o depositen ganado (en toda la Amazonia eran 79,8 millones de cabezas en 2011 que vivían en 44,7 millones de hectáreas, o 1,78 vacunos en una cancha de fútbol).

Entre 2000 y 2010, Brasil deforestó 363.000 kilómetros cuadrados de bosques, lo que equivale a dos veces la superficie de Uruguay y un poco más. En los últimos años, para peor, la trayectoria de reducción del ritmo de tala se revirtió: solo entre 2010 y 2012 fueron 100.000 kilómetros cuadrados, o 3,5% del territorio nacional, según el IBGE. «Entendemos que para tener una comida de verdad hay que cambiar este modelo. Hay que rescatar la historia, la cultura, producir con semillas tradicionales, valorizar la preparación de los alimentos», afirma Nathalie Beghin, del Instituto de Estudios Socioeconómicos.

El reflujo de las políticas de combate contra la deforestación es un ítem entre varios de un reflujo general en las políticas públicas de la década pasada. La bancada ruralista intenta poner en marcha una ley que, en la práctica, les quita a las personas el derecho a saber si un alimento contiene transgénicos. Mientras tanto, frena la reglamentación de la enmienda constitucional que destina a la reforma agraria las tierras en que ocurran delitos de trabajo esclavo. Y busca sacar de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) el derecho a la demarcación de tierras tradicionales.

La Constitución de 1988 preveía que, en cinco años, todas esas áreas estarían demarcadas. Casi tres décadas después, hay casos graves por resolver. El gobierno de Dilma concluyó el registro de 21 tierras, la mayor parte con procesos abiertos en la gestión de Lula. Desde 2013 hasta hoy, no se ha hecho nada, con el argumento de que se trata de casos en los cuales hay conflicto entre indígenas y los que se presentan como propietarios. «En este proceso de no regularizar, se deja a las poblaciones en una situación de vulnerabilidad y también se favorece el surgimiento de nuevos conflictos. Cuando usted no toma posición en los conflictos, está favoreciendo a un lado y eligiendo un lado para favorecer», evalúa Otávio Penteadó, asesor de programas de la Comisión Pro Indio de San Pablo.

La FAO entiende que la no demarcación de tierras indígenas es uno de los peores riesgos para la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, un argumento que encuentra acogida entre cuadros de la FUNAI. Las tierras de los tupí-guaraní del litoral paulista, un total de casi 3.000 hectáreas, todavía no tienen el proceso finalizado. Será necesario retirar a los colonos instalados a lo largo de décadas y a aquellos que entraron recientemente con la esperanza de conseguir una indemnización.

A los niños les encanta cuando la escuela sirve comida tradicional: mandioca, maíz, batata. Los niños también aman lo que el comercio vecino a la escuela ofrece: hamburguesas, *snacks*, bizcochos. El trabajo de las profesoras de la aldea Piaçaguera, la misma en que vive Nimbopyrua, suena como reducción de daños. Se trata de reducir el consumo de sodio, carbohidratos, azúcar y proteínas a niveles «menos peores».

No es fácil. La dieta proporcionada por la Municipalidad de Peruíbe es el terror de cualquier nutricionista. De nuevo, no se trata de un caso aislado: la alimentación de los niños indígenas, por regla general, corresponde a las administraciones municipales, muchas veces ocupadas por ruralistas o por personas que no saben nada sobre política indigenista. Patrícia Chagas Neves, coordinadora general de Promoción de los Derechos Sociales de la FUNAI, dice que hay un consumo alarmante de productos industrializados, en especial de azúcar, lo que ha elevado rápidamente los índices de diabetes dentro de las aldeas. «La merienda escolar entra en eso. El niño va a la escuela, toma una chocolatada, come una galletita, hace esa comida industrializada y cuando vuelve a la aldea no quiere la comida tradicional». La situación se vuelve más grave porque en muchas comunidades los niños toman la mayor parte de las comidas en las escuelas. Es el caso de los 36 que estudian en la aldea Piaçaguera. Se comienza el día con leche en polvo, chocolate

en polvo y galletas rellenas. Una mezcla de calorías y conservantes que no baja los niveles a lo largo del almuerzo, la merienda y la cena.

Los tupí-guaraníes, más o menos apegados a los conocimientos ancestrales, concuerdan en que durante más de una década predominó cierto letargo, un estado de aceptación absoluta de los rasgos culturales del blanco. La alimentación no escapó a esto. Los ultraprocesados entraron con toda la fuerza, creando una generación de obesos afectada por enfermedades.

Solo recientemente, gracias a una serie de impulsos, la situación comenzó a cambiar. «La modernidad está tan activa que todo lo que queríamos hacer terminaba obstaculizado. Las personas decían que no querían ir para atrás», cuenta Itamirim, o Miriam Dina dos Santos Oliveira, de 37 años. Hace tres años, un grupo de familias creó una población apartada, en la cual se pretende rescatar al menos parte de la cultura.

Itamirim, que es vicecacique y profesora de la comunidad, sabe que intenta retornar a un pasado que ya no existe, pero que surge como única posibilidad para alcanzar un punto mínimo civilizatorio. La propuesta es garantizar una tensa armonía, *fifty-fifty*, entre la contemporaneidad del blanco y el conocimiento tradicional. Con mucha insistencia, comienza a surgir un pequeño plantío. Y las siete familias que hicieron frente al desafío intentan rescatar lo que está sumergido en una laguna: herramientas, neumáticos, chapas metálicas. Herencias de la minera que actuó allí durante mucho tiempo. El contacto con el agua es una manera de dialogar con el pasado. En una tarde de primavera, niños delgados corren desnudos después de un chapuzón, en un acto de libertad que se volvió raro en los otros núcleos de la Piaçaguera. A la noche, comerán alimentos tradicionales y no tomarán gaseosas. El trabajo emprendido por Itamirim termina influenciando a las otras aldeas. En los últimos años, muchos jóvenes se animaron a (re)conocer los rasgos tradicionales de la cultura tupí-guaraní. Y la merienda pasó a ser una preocupación de las profesoras. «Abrimos los ojos demasiado tarde, dejamos introducir bastantes cosas antes de despertar», se lamenta una de ellas, Lilian Gomes, que se queja de las dificultades para dialogar con la municipalidad.

La intervención de la Comisión Pro Indio y de un órgano del Ministerio de Educación hizo que los rumbos cambiaran. Finalmente, la administración municipal aceptó crear un grupo de estudio para definir una nueva composición para la merienda escolar de los indígenas. No se está pidiendo ninguna extravagancia: mandioca, maíz, legumbres y verduras

frescos. «No queremos más salsa de tomate lista, enlatados, albóndigas, salchichas», dice Lilian.

Para Patrícia, de la FUNAI, existe gran incompreensión entre los gestores públicos sobre qué es ser indígena. «Existe eso de que el indígena debe ser el buen salvaje, o sea, que no usa ropa y vive en medio de la selva. O aquellos que creen que están aculturados. Dialogo mucho con los municipios y esa es una frase constante: ellos usan celular, están aculturados».

No hay datos globales sobre hambre y desnutrición en tierras indígenas. Sin embargo, varios estudios dan pistas de la gravedad. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas, realizada entre 2008 y 2009, detectó que uno de cada cuatro niños presentaba una altura por debajo de lo normal para la edad. La anemia era una realidad para 51% de los que tenían hasta seis años y para 32,7% de las mujeres adultas.

La FUNAI hace la salvedad de que los datos que toman el dinero como parámetro son imprecisos porque tienen como base el concepto occidental de alimentación. «La disponibilidad de tierra en el Norte no significa exactamente ingresos, pero significa alimentación. O sea, un indio aislado en la Amazonia puede estar comiendo bien con ingreso cero», advierte Juan Felipe Negret Scalia, coordinador general de Promoción al Etnodesarrollo que, sin embargo, admite que el cuadro no es nada fácil.

La situación no es mejor en tierras quilombolas, que son espacios tradicionales ocupados por descendientes de esclavos. Una investigación presentada en 2013 por la Fundación Euclides da Cunha de la Universidad Federal Fluminense mostró la dimensión del déficit. Los programas señalados como responsables de hacer de Brasil un ejemplo en la lucha contra el hambre tenían bajo acceso en las 169 comunidades analizadas. Solo 68,3% de los domicilios estaba inscripto en el Catastro Único para Programas Sociales del gobierno federal. La distancia física en relación con los órganos públicos y el desconocimiento fueron identificados como principales factores. Con eso, Bolsa Família llegaba a 61% de los entrevistados y la distribución de canastas de alimentos beneficiaba solo a 31,4% del total. La renta per cápita era de menos de 70 reales (20 dólares) para 45% de las familias (extrema pobreza), mientras que 17,9% quedaba entre 70 y 140 reales (pobreza).

En ese contexto, la baja escolaridad –84,2% no completó la enseñanza fundamental– se transforma en potenciadora de un ciclo de exclusión

difícil de revertir. Faltaban escuelas primarias en casi 20% de las comunidades investigadas. Solo 5,8% de los domicilios recibía beneficios del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF). En cuanto a la salud, 15% de las tierras no contaba con la presencia de agentes comunitarios, el eslabón de entrada al sistema público de atención. Las unidades básicas estaban en funcionamiento en apenas 14,7% de los espacios. En solo 5% había servicio de cloacas y en 48% no había abastecimiento de agua (y sin agua no hay alimento).

Este conjunto de déficits tiene resultado directo sobre la salud de los niños. La prevalencia de desnutrición era de 18,7% entre niñas y niños de hasta cinco años de edad, índice que llegaba a 50% entre los chicos que nacieron debajo del peso ideal. En el otro extremo, el riesgo de sobrepeso era una realidad para 17,8% de los niños examinados por los investigadores.

No es difícil entender cuándo y dónde el país rural se encuentra con el urbano. La nación fue siempre uno de los caballitos de batalla de la Revolución Verde, que prometía el hambre cero en el mundo mediante el uso de la tecnología. Medio siglo después, Brasil está entre los mayores productores de soja y es el campeón en el uso de agrotóxicos, marca obtenida en la temporada 2008-2009 y mantenida con orgullo.

Casi un millón de toneladas de venenos se vierten por año en el campo. Cada brasileño tiene derecho a una media de cinco kilos en su estómago. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria encontró niveles por encima del tolerado o sustancias prohibidas en 25% de los alimentos analizados en 2012. El año anterior, en 36%, con preponderancia absoluta del pimentón (90%), seguido por la zanahoria (67%), el pepino (44%) y la lechuga (43%).

El tope del ranking de agrotóxicos no fue algo que se alcanzó de la noche a la mañana. En 2003, Lula tenía en las manos una decisión complicada: ¿regularizar o no las plantaciones de transgénicos? La decisión oficializó en nuestros mercados la presencia de semillas genéticamente modificadas. Hoy Brasil tiene algunas decenas de variedades de soja y maíz para comercialización, junto con algodón y eucalipto. El Sindicato Nacional de la Industria de Productos para Defensa Vegetal dice que la soja responde por más de la mitad de las ventas de venenos, seguida por el maíz.

Creada en 2005, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) es un ejemplo claro de que prestamos atención a las cosas

equivocadas. Desde una sala de Brasília se decide aquello que vamos a comer hoy, mañana, de aquí a 20 años. Pero casi nadie sabe de la existencia de esa comisión. «Sería imaginable que la principal característica de los científicos fuera la duda. Para mi sorpresa, en la CTNBio, la mayor parte de los investigadores tiene confianza en la biotecnología y suele quedar satisfecha con las informaciones presentadas por las empresas», cuenta Leonardo Melgarejo, que representó al Ministerio de Desarrollo Agrario en la comisión entre 2008 y 2014. «Sería óptimo si los miembros de la CTNBio que no tienen ninguna preocupación tuvieran razón. Porque la posibilidad de estar equivocados es muy grande y es una posibilidad demasiado amenazadora. Significa que el gobierno está siendo dirigido por intereses que contrarían su función, que es la protección de la sociedad y la construcción de un horizonte de desarrollo a largo plazo».

Un agrónomo que presidió la comisión llegó a declarar que una persona podría beber con tranquilidad un litro entero de glifosato porque los seres humanos tienen el mismo metabolismo de las plantas. Es de esperar que él no haya incorporado a su dieta diaria el arrebato retórico: este año, el Instituto Nacional del Cáncer declaró que hay evidencias de conexión entre la enfermedad y el agrotóxico más usado en Brasil. El glifosato se convirtió en campeón de ventas gracias a las variedades transgénicas listas para tolerar dosis tremendas del herbicida, en contraposición a las hierbas silvestres, que no lo soportan. O no lo soportaban: en los últimos años han surgido plantas que resisten el veneno. Para resolver el problema, la industria prepara productos a base de 2,4-D, mucho más tóxico, una sustancia usada en la composición del «agente naranja», utilizado por Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. «De hecho, la biotecnología es algo necesario. Pero, infelizmente, los productos de la biotecnología que tenemos hoy son innecesarios. No tenemos necesidad de plantas que no mueren tomando un baño de veneno. Tenemos necesidad de plantas más productivas», lamenta Melgarejo.

Lo que el paquete biotecnológico ha traído en escala global es la concentración de semillas y agrotóxicos en manos de pocas empresas. Seis corporaciones controlan 76% del mercado mundial de agrotóxicos y 60% de la comercialización de semillas, según un informe de la organización socioambiental ETC lanzado en 2013.

En el caso local, algunas variedades transgénicas son pensadas en sociedad con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), vinculada al Ministerio de Agricultura. La organización tiene en su historial el desarrollo de una variedad de soja que consiguió adaptarse a las

duras condiciones del Cerrado, ecosistema que ocupaba, antes de este advenimiento, un quinto del territorio nacional y que hoy está camino a la extinción. En 2011 la Embrapa recibió luz verde de la CTNBio para testear y comercializar la semilla de frijol genéticamente modificada.

La decisión suscitó perplejidad entre organizaciones que toman con cautela los transgénicos. El frijol es un ítem consumido diariamente por la mayoría de la población. Además, guarda una variedad significativa para la riqueza de la cocina nacional, virtud que podría desaparecer con el éxito comercial del nuevo producto, que dejaría, de paso, a los productores dependientes de una única semilla.

«Los agricultores del Noreste hacen plantaciones muy diversificadas», explica Amaury Santos, investigador de un sector de la Embrapa preocupado por la valorización de los conocimientos tradicionales. «Es una cuestión de convivencia con el ambiente: si una cosa no da, otra da. Se tiene sustento y una garantía de seguridad alimentaria».

El Noreste pasa por un periodo intenso de sequía. Análisis preliminares realizados por Santos muestran que, en esas condiciones, solo las variedades tradicionales han logrado producir. Él condujo también un test en el que personas con los ojos vendados probaron varios tipos de maíz. Las semillas tradicionales, también llamadas criollas o de la pasión, obtuvieron los mejores resultados en cuanto al sabor y a la textura. «La semilla de la fruta de la pasión es prioritaria. Tener la semilla en ese ambiente difícil, de sequía, es vital. Cuando llegan las primeras lluvias el agricultor siembra. A veces llueve, a veces no llueve. Si no se da, tiene las semillas en casa y las planta de nuevo».

Los guardianes de las semillas de la fruta de la pasión saben que luchan contra una fuerte corriente, al igual que los que quieren restricciones al uso de agrotóxicos, la regulación de la publicidad y la demarcación de tierras tradicionales. Todos saben que cambiar esa realidad dependería de decisiones gubernamentales. Es difícil. Entre 2011 y 2014, la gestión de Dilma caminó en dirección al cierre de los canales de diálogo y al fortalecimiento de los intereses empresariales. Este año, aceleró el proceso.

Ganadora de las exasperadas elecciones con un discurso a la izquierda de lo que había sido su primer mandato, Dilma pasó a adoptar enseguida una serie de medidas que irritaron a movimientos, organizaciones sociales y parlamentarias que la habían apoyado. El nombramiento en el Ministerio de Hacienda de Joaquim Levy, ligado a uno de los bancos más grandes del país, el Bradesco, fue una clara señal de que la protección

que había garantizado la continuidad de los programas contra el hambre estaba en peligro. La senadora Kátia Abreu, llamada «reina de la motosierra», exponente del agronegocio y que tiene a Dilma entre sus madrinas de casamiento, fue al Ministerio de Agricultura, desde donde envió el mensaje de que el país no tiene más latifundios y, por lo tanto, no hay necesidad de hacer una reforma agraria.

Fue un conjunto de decisiones que contribuyeron a que Dilma sea la presidente más impopular de la redemocratización. Los recortes generales de presupuesto anunciados hasta septiembre llegaban a 108.000 millones de reales o 1,8% del PIB, acompañados de 25.000 millones de reales de recaudación que debían alcanzarse con el aumento de impuestos y la eliminación de exoneraciones tributarias que habían ayudado a crear empleos. Nada escapó a la tijera: ni el Programa de Aceleración del Crecimiento lanzado por Lula para centralizar las acciones de infraestructura, ni la salud, la educación o el financiamiento inmobiliario. Algunos de los ministerios emblemáticos del lulismo, como Políticas para las Mujeres e Igualdad Racial, volvieron a ser secretarías, en un esfuerzo más de la Presidenta para cumplir la agenda de compromisos del candidato al que derrotó en las urnas. El desempleo avanzó de 4,9% en 2014 hasta alrededor de 8% en 2015, y el rendimiento medio retrocedió de 2.278 reales (unos 650 dólares) a 2.179, cuadro agravado por una inflación de casi 10%, un incumplimiento inédito de las metas fijadas en las gestiones del PT.

«Es una gran preocupación, sin duda», admite el boliviano Alan Bojanic, representante de la FAO en Brasil. «El gran desafío es mantener el nivel de los programas de transferencia de ingresos, mantener los programas de alimentación escolar, los programas de agricultura familiar, todo lo que tenga que ver con el apoyo a la población más vulnerable».

Áreas antes inquebrantables frente a los recortes —lo que se convino en llamar «colchón de protección social»— también entraron en la rueda. Frente a un gobierno debilitado, el Congreso amenazó, por primera vez, con cortar recursos de Bolsa Família. Cuando conversamos con Tereza Campello, ella evaluó que las ganancias obtenidas en los últimos años eran estructurales, y aunque hubiera un escenario de desempleo y crisis, las personas no serían alcanzadas con la misma fuerza que en otras ocasiones. La ministra dijo que jamás había tenido problemas con colegas de Hacienda porque la lucha contra el hambre era «prioridad absoluta» de la Presidenta. Últimamente, la prioridad absoluta parece haber cambiado.

Traducción: Claudia Solans

MARÍA EMÍLIA LISBOA PACHECO: «COMER ES UN ACTO POLÍTICO»

João Peres / Tadeu Breda

Maria Emília Lisboa Pacheco está en el rincón lateral de la barra. En los últimos años se habituó a ver cómo el vecino, sentado a sus anchas en la barra principal, se iba llevando el salero, el picante, la bebida y el plato. Hoy se aferra con todas sus fuerzas al trozo de sándwich que le queda: un pedacito que el enemigo, de ceño siempre fruncido y cuerpo bien alimentado, pretende arrebatarse. En Brasil, cualquiera que elija luchar contra los agronegocios sabe que enfrente tiene un adversario voraz, uno que reparte las cartas en la República incluso desde antes de que esta existiera con ese nombre.

«Estoy convencida, no estoy sola y cada vez tenemos más aliados», dice Maria Emília a pesar de tantas adversidades. Si estar del lado opuesto al de los grandes dueños de tierras es una labor que no proporciona gloria alguna, es peor aún cuando se suma de aquel otro lado la industria alimentaria. Sin embargo, la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) está segura de que existen cada vez más adeptos a una causa que ella mismo decidió emprender hace ya 40 años. En la década de 1970 integró el equipo que fundó en el estado de Minas Gerais el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Acababa de salir de la cárcel y, en tiempos de dictadura, enseguida iba a tener que salir, también, del país. Llegó a ingresar, aun así, y en aquella misma década, en la Federación de Órganos de Asistencia Social y Educativa (FASE), en Río de Janeiro, que congregó a un grupo de organizaciones volcadas a distintas cuestiones vinculadas con la pobreza. Ya en la década de 1990, cuando Itamar Franco cruzó las puertas del Palacio del Planalto tras la destitución de Fernando Collor de Melo, las entidades de la sociedad civil entendieron que era el momento propicio para negociar la creación del CONSEA. Y salió bien. Pero la llegada de Fernando Henrique Cardoso al Poder Ejecutivo en 1995 cerró las puertas del Palacio y del Consejo, por lo que los

movimientos decidieron crear el Foro Brasileño de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde Maria Emília se enlistó.

Desde allí acumularon fuerzas y proyectos hasta que llegó, cinco años después, la oportunidad de volver a Brasilia. Con la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, los cuadros reclutados del Foro proveyeron subsidios para la reactivación del CONSEA, del cual Maria Emília es miembro desde 2004 y presidenta desde 2012.

El consejo de este órgano, ligado directamente a la Presidencia de la República, tiene el deber de orientar la formulación de políticas públicas, y es la sociedad civil la que designa a su presidente. El CONSEA cobró fuerza con la instalación de la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda política de Lula, primero a través del plan Hambre Cero e inmediatamente después con el programa Bolsa Família, que actualmente garantiza ingresos básicos a 15 millones de familias, con un patrón similar al de otros programas latinoamericanos surgidos en la década pasada.

La institucionalización de la lucha contra la pobreza es uno de los factores citados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el documento en el cual la entidad anunció que Brasil había logrado salir del Mapa del Hambre, en octubre de 2014. El CONSEA fue determinante también en la creación del Plan Safra de Agricultura Familiar, que asegura financiación a los pequeños productores rurales, y del Programa Cisternas, que contempla la instalación de tanques para recuperar agua de lluvia en el Noreste semiárido, algo fundamental para evitar que las temporadas de sequía redunden en miseria y emigración del campo a las ciudades.

Pero ante cada avance suele haber un retroceso a la vuelta de la esquina. Entre 2003 y 2010 prevaleció en Brasilia la dualidad lulista: de un lado, el Ministerio de Desarrollo Agrario, de cara a los pequeños agricultores; del otro, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, que defiende los agronegocios. En un extremo, la cesión de tierras para reforma agraria; en el otro, la habilitación de rutas y puertos que garanticen el desagote de las cosechas record de soja. En una chacra, el despliegue de una política de meriendas escolares a base de alimentos saludables; en la otra, la concesión de miles de beneficios a las grandes corporaciones alimenticias.

La política de Lula, bautizada con la expresión «gana-ganha» [«todos ganan»], fue posible durante cierto tiempo gracias al entrecruzamiento

de factores excepcionales, entre ellos la misma habilidad política del ex-presidente. El agotamiento de ese modelo desembocó en una ofensiva que generó algunas derrotas puntuales, en un primer momento sobre el sector representado por Maria Emília, y que más tarde se ampliaron en una serie de duros reveses para este mismo sector, en una pugna que hoy está al borde de convertirse en humillante.

Los agricultores familiares cuentan con la significativa suma de 29.000 millones de reales (poco más de 8.000 millones de dólares) para financiar la cosecha 2015-2016. Los agronegocios disponen, por su parte, de 180.000 millones de reales: seis veces más. La reforma agraria se paralizó: se asentaron 107.000 familias durante el primer mandato de Dilma Rousseff, en lo que es el nivel más bajo desde el retorno de la democracia. La demarcación de tierras indígenas, que debería haber terminado en 1993, está estancada y corre el riesgo de retrotraerse a causa de una ofensiva de la bancada ruralista, que es la más numerosa dentro del Poder Legislativo.

La FAO reconoce a las comunidades indígenas como las más vulnerables en términos de seguridad alimentaria, junto con las diversas comunidades quilombolas que hoy se mantienen, fundadas y habitadas por esclavos prófugos en los siglos XVIII y XIX. Pero ningún dato parece ser capaz de modificar la postura de los representantes del agronegocio en el Congreso: esto suman al menos 109 diputados, que representan un quinto del total, y unos 17 senadores, sobre un cuerpo de 81. Mientras que la mortalidad infantil en el país descendió de 26,1 a 15,7 por cada 100.000 nacimientos en el lapso 2000-2011, la misma tasa entre indígenas pasó de 75 a 42. Estudios llevados a cabo por el gobierno en 2008-2009 mostraron que la presencia de anemia entre indígenas alcanzaba una cifra superior a 50% en la franja de niños de seis meses a cinco años, y que la desnutrición crónica era un problema para uno de cada cuatro niños. Otra investigación, en 2013, constató desnutrición crónica en 18,6% de los habitantes de las comunidades quilombolas menores de cinco años de edad.

«Una tiene que ser bastante aguerrida», dice Maria Emília. Como presidenta del CONSEA, fue responsabilidad de ella organizar la V Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria. Se trató de una serie de encuentros entre la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado.

El informe final de la primera conferencia, en 1994, ya reconocía la cuestión de la seguridad alimentaria como algo muy amplio. Incluía el derecho a vivienda adecuada, el respeto por las legislaciones laborales y la necesidad de redistribución de tierras como pasos importantes en la

lucha contra el hambre. Ese modo de encarar el problema reconociéndolo como algo mucho más complejo que la cuestión acerca de qué colocar sobre la mesa fue un factor central para la elaboración de políticas públicas transversales y la construcción de un concepto de soberanía alimentaria propuesto como modelo. Asimismo, algunos de los tópicos reivindicados hace ya dos décadas se mantuvieron presentes en los documentos posteriores, y quien procure incluirlos en los informes de las conferencias futuras probablemente no cometa errores: subordinación del poder económico a las necesidades alimentarias, regulación de los mercados de alimentos y de venenos agrícolas, reforma agraria efectiva y protección de los derechos de los pueblos tradicionales son algunos de ellos.

Pero en el ínterin Brasil se transformó en campeón mundial en el uso de agrotóxicos, en una escalada que se hizo posible de la mano de la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados. Siempre a la vanguardia en lo que respecta a liberar semillas transgénicas, en estos días, por ejemplo, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), una entidad pública y federal, se prepara para introducir en el mercado una variedad alterada de frijol, ingrediente central de la dieta brasileña.

Además de la cuestión rural, un tema que está ganando últimamente una discusión mayor y necesaria es el de las consecuencias directas en la salud que tienen los alimentos modificados. El film documental *Muito além do peso* [Más allá del peso], lanzado en noviembre de 2012 y disponible en Youtube, pone de manifiesto la dramática situación de los niños sometidos a una dieta a base de alimentos ultraprocesados. Sobrepeso, diabetes y problemas vasculares son algunos de los trastornos que esto ha generado y que afectan a un mayor número de brasileños día tras día. Un relevamiento difundido en agosto de 2015 por el Ministerio de Salud muestra que 60% de los niños de menos de dos años de edad come galletas, budines y tortas, y que 32,3% consume gaseosas y jugos artificiales —son 1,9 millones de niños pequeños sobre un total de 5,6 millones—. La Encuesta Nacional de Salud, realizada en 64.000 domicilios, arrojó por resultado que 59,8% de los brasileños mayores de 18 años tiene algún grado de sobrepeso, esto es, 82 millones de personas. Una de cada cuatro mujeres (24,4%) es obesa, casi el doble de lo que se registraba en 2003, y en más de la mitad de los casos se trata de una obesidad abdominal que sobrepasa los parámetros de riesgo de salud establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre los hombres, el porcentaje es menor: 16,8. Los resultados son fáciles de prever, ya que el sobrepeso es uno de los factores de

riesgo entre las enfermedades crónicas no transmisibles, que explican tres de cada cuatro fallecimientos en Brasil.

Maria Emília cree que el modo de cambiar este escenario implica establecer dos cosas: una política de educación alimentaria y un sistema que regule la producción de alimentos, especialmente los orientados a la infancia. Pero esto último no parece factible considerando la composición actual del Congreso y la agenda política del gobierno de Dilma. Mientras tanto, a la presidenta del CONSEA solo le queda mantenerse alerta. A fin de cuentas, hay alguien sentado en la barra principal que quiere arrebatarse el último trozo de su sándwich.

Nos gustaría pedirle que trace un balance de las políticas que Brasil llevó adelante en el siglo XXI en lo que hace a consolidar el derecho a la seguridad alimentaria.

Tenemos la ley que sancionó la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Logramos también una conquista como es haber incluido en la Constitución el derecho humano a la alimentación. Aunque a muchos pueda sorprenderlos, nuestra Constitución no contemplaba ese derecho. Logramos retomar el CONSEA en 2003 y crear la Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, compuesta por veinte ministerios. Los lineamientos de esta política son bastante abarcadores. El concepto de seguridad alimentaria en Brasil se extiende desde la producción hasta el consumo. Es una política que contempla varias líneas de acción, y esas líneas se establecieron en las distintas conferencias sobre seguridad alimentaria. Es importante subrayar el rol social que subyace a esta política. Es todo un proceso en el que fueron consolidándose programas y decisiones. La decisión de revalorizar el salario mínimo, los programas de transferencia de ingresos y, sobre todo, la creación de puestos de trabajo, al menos hasta hace un tiempo, porque ahora nos enfrentamos con otros riesgos. Logramos también la consolidación del Programa de Adquisición de Alimentos, con compras que el gobierno les hace a los agricultores familiares, de comunidades tradicionales. Y está el Programa de Alimentación Escolar, que se renovó en su concepción. La política de meriendas escolares existe desde el tiempo de Getúlio Vargas, en la década de 1950, pero recién en la década de 2000 la ley se actualizó desde una perspectiva mucho más sólida, que garantiza la compra de al menos 30% de las meriendas escolares al sector de la agricultura familiar y tradicional. También exige que se contemplen productos locales y se provea educación alimentaria. Todo esto dentro del marco institucional. Eso no significa que las cosas se estén llevando a la práctica de ese modo en todo el país. Pero aun así, hoy podemos decir que, en Brasil,

50% de los municipios se está proveyendo de la agricultura familiar. Para nosotros, estos programas de alimentación escolar y de adquisición de alimentos son estructurantes. Antes no existían políticas que ligaran la cuestión agrícola con la seguridad alimentaria. Por eso consideramos esto como un eje que estructura nuestro trabajo.

¿Cuáles son los problemas principales con los que se enfrentan?

No puede haber soberanía alimentaria y nutricional sin un proceso de democratización de la tierra, de los derechos territoriales, y sobre esto Brasil tiene una laguna histórica. Son pocas las tierras que se entregaron en los últimos años; la reforma agraria se congeló, y el reconocimiento y la consolidación de los territorios tradicionales avanza a pasos extremadamente lentos. Dentro de nuestra perspectiva de seguridad alimentaria nos planteamos el desafío de lograr una alimentación adecuada y saludable, y ahí entra a jugar una gran contradicción. El modelo agrícola predominante en el país es fruto de la llamada «revolución verde», que se basa en insumos químicos. Brasil es el mayor consumidor de agrotóxicos y la liberación de transgénicos no parece tener freno. Nosotros, desde el CONSEA, hicimos debates sobre el impacto de los agrotóxicos y los transgénicos y elaboramos una propuesta en el ámbito de la creación de la Política Nacional de Agroecología y Agricultura Orgánica. Eso desembocó en el Programa Nacional de Reducción de Agrotóxicos, que hoy está en manos de los distintos ministerios, y esperamos la respuesta del gobierno. Es algo fundamental. Estamos reclamando que se tomen medidas similares a las que se adoptaron en relación con la industria del tabaco: que exista un fondo que pueda destinarse a ampliar políticas de agroecología. En todo este proceso también reflexionamos mucho, desde la perspectiva de una alimentación adecuada y saludable, en lo que hace al consumo. Y nos preocupa mucho el tema del aumento de la obesidad y el sobrepeso. Hay mucho por hacer en ese terreno, ya que paralelamente defendemos la necesidad de una política de abastecimiento alimenticio. ¿Cómo garantizar el consumo de alimentos adecuados y reducir el de ultraprocesados? Es necesario que se regule la publicidad de alimentos, especialmente en los productos de consumo infantil. Y es muy importante que la política de abastecimiento garantice una distribución descentralizada. Hoy nos encontramos con que hay desiertos alimenticios en barrios muy populares, a causa de que en esos barrios desapareció el almacén, la verdulería. Creció mucho en Brasil el hipermercado mayorista. Dos cosas que quiero destacar como muy positivas son el Programa Un Millón de Cisternas y el Programa P1+2 [que provee a las tierras semiáridas nordestinas de dos tipos de agua: potable y para cultivo]. Porque los dos generaron un cambio enorme en

el Noreste, incluso en los periodos de sequías más largas. Las mujeres ya no tienen que caminar decenas de kilómetros con un balde de agua en la cabeza. Eso significa una vida más digna para las mujeres, que pueden reorganizar su tiempo. Es absolutamente injusto cuando se dice que el trabajo de la mujer es liviano; es una imagen muy equivocada. Y este programa consiguió liberar el tiempo de las mujeres para otras actividades.

¿Cómo fue la discusión que hizo que el concepto de seguridad alimentaria dejase de estar acotado a la última etapa, la del alimento que se pone sobre la mesa, y se transformara en un tema que abarca distintos aspectos?

Es un proceso en construcción. Nosotros tenemos un concepto que no es restringido, como sí lo era el concepto que hasta hace un tiempo tenía la FAO. Esto es más abarcador. Nunca dejamos de decir que es fundamental que se sostenga el concepto de soberanía alimentaria. Una soberanía que solamente va a existir cuando nos liberemos de los límites que hoy existen. Hoy el sistema agroalimenticio está controlado por un puñado de corporaciones, lo mismo que las semillas y los agrotóxicos. Nuestro concepto de seguridad alimentaria dialoga en muchos aspectos con el de soberanía alimentaria. Es una construcción histórica y, como tal, tiene que traducirse en la acción política y también en la vida social. En los últimos años creció mucho la conciencia sobre estos temas, desde nuestro punto de vista. Durante un tiempo, hablar de seguridad alimentaria se veía como algo restringido a la idea de acceso. Hoy en cambio se lo piensa en todo el contexto del sistema agroalimentario, que va de la producción al consumo. Pero aun así es algo en construcción. En primer lugar, porque existen lagunas desde el punto de vista estructural, medidas que hace falta tomar y transformar en políticas. Pero además, desde el punto de vista de la sociedad, el concepto de seguridad alimentaria todavía aparece marcado con un sesgo rural. Carecemos de una gran movilización urbana de consumidores que cuestione la homogeneización del consumo, que haga un llamado de atención sobre los aspectos simbólicos, culturales. Es cierto que también se puede decir que, junto con la conciencia ambiental que viene creciendo en las ciudades, comenzaron a surgir nexos con la cuestión alimentaria. Hay sectores de clase media interesados y preocupados en tener una alimentación de calidad, saludable, en la medida en que también creció la preocupación por la salud en general. A mi modo de ver, esas manifestaciones que vienen de parte de la sociedad, y que trascienden la visión biologicista del alimento, favorecen también una condensación del sentido de este concepto del que hablamos e influyen en la movilización de más y distintos sectores sociales. Lo que necesitamos

es avanzar más en esa movilización, lograr que se manifieste esa conciencia y que pongan en interacción la dimensión ambiental y la salud.

¿Cómo recibió la noticia de que Brasil salió del Mapa del Hambre? Para alguien que actúa en esta área desde la década de 1970, ¿era algo esperado o jamás pensó que ocurriría?

Confieso que es una noticia agradable. Y la cuestión con la que nos encontramos hoy es justamente garantizar que eso se mantenga. Y que crezca, porque Brasil todavía tiene sectores de una vulnerabilidad grave. Haber salido del Mapa del Hambre no significa haber erradicado el hambre. Hay que celebrarlo, por supuesto, y es algo que es fruto de la conjunción de fuerzas políticas, pero queda mucho por andar. Quiero remarcar que, para sostener ese logro, que es un logro muy importante, hace falta que los programas sociales sigan en acción. Tenemos que afrontar concretamente la cuestión de la concentración de tierras, la extranjerización, el cercamiento que padecen los pueblos indígenas y tradicionales. El cercamiento del territorio significa la apropiación de los bienes comunes, de la naturaleza. Y esas comunidades tienen el derecho a darles continuidad a sus modos de vida. Ese es un problema grave. Sabemos de medidas que están en manos de los poderes Legislativo y Judicial y que solo podrían agravar esos conflictos.

¿Por qué es tan invisible el tema de la inseguridad alimentaria en las comunidades indígenas y quilombolas?

A nosotros nos preocupa mucho la ola conservadora que está viviendo nuestra sociedad. Necesitamos dar más pasos en la construcción de la ciudadanía, de una conciencia pluriétnica, que es algo que nuestra Constitución destaca. Hay muchos episodios de discriminación respecto de esos pueblos, a los que suele considerárselos atrasados o responsables de entorpecer el desarrollo. Las políticas llevan esa contradicción en su interior. A la vez que se logra una medida específica en favor de las comunidades quilombolas e indígenas, se aleja la posibilidad de resolver la cuestión de los derechos territoriales. Y tampoco es fácil explicarle a la sociedad y traducir a la política el rol fundamental que esos pueblos tienen en la preservación de nuestra biodiversidad. Por eso es que el concepto de sociobiodiversidad es muy importante, porque muestra que eso existe gracias a que hay comunidades que lucharon históricamente. Para algunos sectores del gobierno, no parece estar clara esa conciencia de que la naturaleza que tenemos es algo que ha sido construido. Y esas comunidades tienen mucho para enseñarnos sobre el futuro. Verlas como un pasado que hay que rechazar es negarse

a entender de manera más profunda que existen varios saberes. No está solo el saber que se produce en las universidades. Hoy, paradójicamente, el saber tradicional es donde la industria química se muestra más interesada.

¿Qué recomendaciones les haría usted a los órganos de gobierno para evitar que la crisis implique un retroceso?

Esa es nuestra preocupación. Y no hablaría solo del Poder Ejecutivo. Hablo del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hay una cuestión básica: no podemos retroceder en nuestros derechos y por eso nos preocupa mucho, en este contexto de crisis, el posible corte de recursos para algunos programas de vital importancia. El temor a un cambio en la orientación, a un retroceso en algunas políticas o a un recorte en ciertos derechos nos preocupa. Porque esos programas marcaron una pauta, eso pese a que todavía nos queda reparar algunas deudas históricas.

¿Cuáles cree que serían las medidas posibles para afrontar el problema de los alimentos ultraprocesados?

Se debe llevar adelante una serie de acciones conectadas entre sí. Primero, está el campo de la seguridad tanto alimentaria como nutricional. Hay un libro sobre alimentos regionales que el gobierno editó a través del Ministerio de Salud. Segundo, hace falta profundizar más el debate y generar propuestas prácticas de producción artesanal de alimentos. Existen contradicciones entre lo que pregona la Agencia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y lo que se observa respecto de la comida como patrimonio. La ANVISA recientemente estableció una resolución que reconoce la particularidad de los alimentos artesanales. Hace falta avanzar más en ese terreno. Y, al mismo tiempo, necesitamos algo que regule la publicidad de alimentos. Y un sistema de abastecimiento alimenticio que sea descentralizado. Si hubiésemos ampliado el número de restaurantes populares, de cocinas comunitarias, de verdulerías... También es necesario reconocer las iniciativas innovadoras que surgen de la sociedad. Hace falta que los gobiernos municipales y provinciales asuman el compromiso político de llevar a cabo un ordenamiento territorial desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Debería contemplarse un área de seguridad alimentaria y de producción de alimentos de calidad entre las principales jerarquías de cada administración pública local. Y también una política de agricultura urbana, porque muchas veces la gente compra los condimentos envasados cuando podría cultivarlos en macetas o en pequeñas áreas colectivas. Son muchas las iniciativas que hacen falta para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Muchos de

nuestros hábitos tienen que cambiar, por eso también hablamos de una cuestión cultural. Y son distintos procesos que a su vez tienen que combinarse con el tema de la educación alimentaria. Suelo decir que comer se ha vuelto cada vez más un acto político y que tenemos que preguntarnos de manera constante qué es lo que comemos y lo que dejamos de comer. Y llevar el debate a los distintos espacios, a las escuelas, los barrios, los grupos de amigos. Encarar la importancia de los alimentos como una cuestión que tiene sentido político, económico y cultural. Eso contribuye a la construcción de ciudadanía.

¿En qué momento usted se dio cuenta de que esta cuestión alimentaria era de suma importancia?

Es algo que se me cruzó en la vida de manera fortuita. Fui una de las personas que participaron en la creación del Instituto de Alimentación y Nutrición en el estado de Minas Gerais. Pero apenas había entrado me despidieron, por razones políticas. De modo que la problemática pasó a ser para mí un tema interno, de debate conmigo misma. Hasta que después la vida me llevó de nuevo a este debate públicamente. Participé de una investigación sobre hábitos e ideologías alimentarias en familias de bajos ingresos mientras trabajaba en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Entré a la FASE y, mientras analizaba los procesos de expropiación de tierras y la lógica de los modos de vida del campesinado, me di cuenta de lo importante que era asociar eso a la alimentación, a la representación que los pueblos tienen de los alimentos. Y así fue andando mi vida. Acabé entrando en el Foro. Y fue a través del Foro como llegó la designación para pasar al CONSEA.

¿Qué necesita una persona cuando se enfrenta ideológicamente con un sector que es el más poderoso del Congreso y uno de los más poderosos de la economía?

Una tiene que ser bastante aguerrida. Y no perder nunca la perspectiva que nos moviliza. Eso en nombre, ante todo, de la certeza de que quienes alimentarán al mundo no van a ser los agronegocios. Las medidas tomadas sobre la base de las nuevas tecnologías lo único que vienen haciendo es expulsar, expropiar, diseminar enfermedades en la población y degradación en el medio ambiente. Estoy convencida, no estoy sola y cada vez tenemos más aliados. Necesitamos reconocer y apoyar el rol de la agricultura familiar y de las comunidades tradicionales como ámbitos que alimentan al mundo. Es un desafío enorme, porque tenemos una producción que es cada vez más artificial. Y ahora tenemos un nuevo riesgo como es el de la medicalización de los alimentos, la idea de que las nuevas tecnologías van a darle una respuesta al hambre en el

mundo. Lo que me moviliza es saber que estamos en una lucha contra-hegemónica y que hacen falta cambios profundos en el sistema agroalimenticio. Hay que enfrentar a los imperios de la alimentación. Por eso digo que es una lucha profunda, constante, que requiere que nos organicemos a escala internacional.

¿De qué modo la concientización sobre los problemas de la alimentación puede desembocar en un rechazo total al sistema imperante?

En la medida en que le damos al alimento un lugar central, teniendo presente la relación entre producción, distribución y acceso, se suscitan en nosotros cuestiones de variada naturaleza, que tienen como trasfondo el análisis acerca de cómo se organiza el sistema agroalimenticio. Entendiendo, al mismo tiempo, el rol que cumplen esos sujetos de derecho. Esa es la interacción que nos permite avanzar. Yo apuesto a eso, y por eso decía que necesitamos avanzar en el debate en las ciudades, involucrar a los consumidores. Porque tiendo a creer que la defensa de la soberanía alimentaria va a lograr que se movilicen muchas mentes y corazones.

Traducción: Cristian De Nápoli

TERESA CAMPELLO: «EL HAMBRE EN BRASIL NUNCA SE DEBIÓ A LA IMPOSIBILIDAD DE PRODUCIR ALIMENTOS»

João Peres / Tadeu Breda

Tereza Campello nos propone hablar de las sequías en el Noreste de Brasil. No las de ahora. Antes de que le hagamos una primera pregunta, la ministra de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre trae el recuerdo de la sequía de 1932 en Ceará. El gobierno nacional y el local juntaron fuerzas para combatir el problema: crearon barricadas para impedir que los sectores pobres migraran del campo a la capital cearense, Fortaleza. Casi 80.000 personas, según un reportaje del diario *Folha de S. Paulo*, fueron retenidas en campos de concentración. Muchos permanecieron reclusos hasta que murieron, en un episodio que hoy sigue siendo ignorado por la mayoría de los brasileños. Sería rarísimo encontrar a un niño que haya escuchado hablar en la escuela de aquellos sucesos, o incluso un adulto que haya tenido acceso a documentos y libros sobre el tema. «Cuando alguien me lo comentó, entré a internet para saber más. Me pasé toda la noche llorando porque fue algo terriblemente dramático. Y es una historia que muestra con mucha claridad cómo hay dos formas opuestas en que puede actuar el Estado ante un mismo fenómeno. La historia del hambre y la de las sequías en Brasil están muy relacionadas», nos cuenta la ministra.

Graduada en Economía por la Universidad Federal de Uberlândia, en el estado de Minas Gerais responsable del acento que todavía exhibe al hablar, Tereza Campello forjó su carrera política dentro del Partido de los Trabajadores (PT) de Rio Grande do Sul. Se trasladó a Brasilia durante la transición hacia la primera presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2002, y allí integró el equipo que planificó el concepto de Hambre Cero, reconvertido más tarde en Bolsa Família, un beneficio social que aseguró ingresos básicos a 14 millones de familias durante 2015. «Hoy lo que tenemos es lo opuesto: un Estado que trata de usar su poder y capacidad para viabilizar el acceso al agua. Hoy también atravesamos una sequía dramática, que lleva cuatro años, y a diferencia de otros tiempos en que este drama se padeció, hoy no escuchamos a

nadie hablando de abandono de tierras. Ahora se lo llama ‘crisis hídrica’, que es un concepto más *chic*, y que es un fenómeno totalmente urbano», agrega.

En efecto, la sequía de los últimos años ha sido más dramática para los que viven en la ciudad de San Pablo, en especial en la periferia. Con 20 millones de habitantes, la región metropolitana más grande de América del Sur convive desde hace dos años con un racionamiento no oficializado: uno abre la canilla y el agua no sale, pero el gobierno local lo niega contra toda evidencia empírica y respaldado por buena parte de los medios, que son los que acuñaron la expresión «crisis hídrica». En las redes sociales, los habitantes del Noreste aprovechan para vengarse de la tradicional pretensión de superioridad paulista. Mientras la región más rica sufre esta escasez del recurso más básico, la misma situación no se da en el área que históricamente se asoció a este tipo de problema.

Año tras año, la historia se repetía: embalses secos, mujeres cruzando kilómetros con baldes en la cabeza en busca de un pozo de agua, criaturas escuálidas con gusanos en el estómago, el ganado muerto en los campos, la población huyendo a las ciudades. La llamada «industria de la sequía» era el retrato general de un Brasil de desigualdades, bruto y absurdo. «El hambre nunca fue consecuencia directa de una imposibilidad de producir alimentos. En un país tropical, maravilloso, gran productor y exportador de alimentos, no tenía ningún sentido que hubiera tanta gente pasando hambre», asegura Tereza.

El modo de lograr que el problema desapareciese, o al menos se redujera notablemente, implicó el entrecruzamiento de varias políticas creadas o fortalecidas a partir de 2003. A Bolsa Família se sumó el programa Luz para Todos, que llevó energía eléctrica a áreas aisladas. Otro paso fue la construcción de 1.200.000 cisternas para capturar el agua pluvial en las regiones secas. La revalorización del salario mínimo, la creación de puestos de trabajo y el programa de adquisición de alimentos producidos por la agricultura familiar fueron otros elementos añadidos al conjunto.

Y al comenzar a desarrollarse el Noreste, otro problema salió a la vista. Hoy es la región Norte la que capta el grueso de las preocupaciones. Lo que no significa que la situación nordestina haya encontrado una solución total –eso sigue estando lejos–. Pero el área que pasó a concentrar los peores índices es la que abarca la mayor parte de la Amazonia. Apenas 7% de la población brasileña vive en ese territorio que equivale a

45,2% de la superficie total del país. Las distancias son enormes, los pueblos están muy desparramados, cosa que dificulta el trazado de políticas públicas. Paradójicamente, la región que concentra 73% del agua dulce tiene los peores índices sanitarios, con una red de agua potable que abastece solo a 16% de las viviendas. El bajo alcance del sistema cloacal —inferior a 15% de la población— es lo que explica a su vez la proliferación de diversas enfermedades.

Al frente de Desarrollo Social, Tereza Campello necesita poner a prueba nuevas iniciativas para dar solución a viejos problemas. Ocupa el cargo desde enero de 2011, cuando recibió de Dilma Rousseff el mandato de coordinar acciones en la lucha contra el hambre. «Llegar a ser ministra y asumir una tarea como esta es algo que nunca me imaginé». La transición del cargo de asesora de gobierno a ministra se dio en medio de una tempestad personal provocada por un cáncer de mama que le descubrieron poco después de las elecciones de 2010. No bien logró superar ese problema de salud, encaró el programa Brasil Sin Miseria como un eje fundamental en la búsqueda de respuestas cualitativas para una serie de medidas que, en términos cuantitativos, ya venían recibiendo atención en todo el mundo. Hoy Tereza parece estar muy a gusto en su cargo. Habla con desenvoltura sobre la función que cumple, discute, argumenta, se siente cómoda al ser entrevistada.

Cuando terminó el primer mandato de Dilma, algunos cuadros que habían llegado a Brasilia con Lula decidieron volverse a sus casas. Gilberto Carvalho, secretario general de la Presidencia, y Guido Mantega, ministro de Hacienda, estaban cansados de ocupar cargos tan estresantes, o quizás cansados de lidiar con la Presidenta. Pero Tereza Campello se quedó. Su responsabilidad durante los cuatro primeros años fue la de localizar y sacar de la pobreza extrema a las familias que hasta ese momento no recibían ningún beneficio social. 22 millones de personas fueron incluidas en el llamado Catastro Único, donde se concentran los datos de todos los beneficiarios de programas gubernamentales. «Marta es la que está con el tema de los números. A mí los números no me gustan; me gustan las curvas», arroja en tono de broma respecto de su asesora de prensa, Marta Salomon, que de repente se levanta de su silla y va en busca de los datos que sí le gustan a la ministra: «Ayer tuve que confiscar los gráficos porque ella quería tirarlos». En efecto, el gráfico de curvas ofrece el mejor ángulo para quien quiere impresionar: la línea traza una recta descendente que empieza con 31,2% de la población en situación de pobreza en 1990, se estabiliza en torno a 24% entre 1993 y 2002 y vuelve a bajar, con más fuerza, hasta llegar al 8,8% en 2013.

Pero al siguiente año, el gobierno de Dilma ya daba muestras de no estar en sus mejores días. Los números dejaban de ser impresionantes, desde cualquier punto de vista. Muchos programas daban la sensación de nacer ya sin impulso vital y, por encima de todo, la presidenta no encontraba el modo de «publicitar» su gobierno como lo hiciera, con inigualable habilidad, su antecesor. Finalmente llegó una buena noticia: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) anunció en octubre de 2014 que Brasil había logrado salir por primera vez del Mapa del Hambre. Entre 2002 y 2012 el índice del hambre cayó un 82%, en lo que representa una baja no lograda por ningún otro país densamente poblado en similar periodo. Actualmente, menos de 5% de los 200 millones de brasileños padecen de subalimentación, según los criterios establecidos por la ONU para medir la ingesta de calorías.

La noticia llegó de Roma por medio de José Graziano da Silva, director general de la FAO. Graziano puede ser considerado un antecesor de Tereza Campello: en los comienzos del gobierno de Lula fue el titular del Ministerio Especial de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre, que pronto se transformó en el Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre.

Algo que puede ser una ventaja tanto como una desventaja al analizar los datos del hambre en Brasil es que, con una población tan grande, los números van a ser siempre impresionantes, para bien o para mal. Según datos del gobierno, la inversión en programas sociales creció 128% entre 2000 y 2012, y el monto total destinado a acciones contra el hambre en 2013 alcanzó los 35.000 millones de dólares. La pobreza crónica en la región Norte bajó de 18,1% en 2004 a 5,2% en 2013. En el Noreste, en el mismo periodo, pasó de 15,3% a 1,9%. El gráfico que le gusta a Tereza Campello muestra cómo las curvas de las regiones más pobres convergen en dirección a las de regiones ricas. Pero también pone de manifiesto el largo camino que queda por andar para que los gráficos del Norte y el Noreste se encuentren con los del Sur, Sudeste y Centro-Oeste.

Una persona afín al gobierno vería en estos datos la evidencia de una etapa de grandes logros. Otro, más crítico, en cambio encontraría que queda un camino enorme por recorrer y que lo hecho hasta el momento no es sino un conjunto de medidas paliativas. Una visión intermedia podría dar cuenta quizás de un retrato más o menos fiel de la realidad. Entre el 5% más pobre, el acceso a una heladera pasó de 52,8% antes del gobierno de Lula a 88,7% en 2013. Durante el mismo periodo, el

índice de escolarización primaria fue de 92,5% a 97,5%, lo que refleja la exigencia de matricular a los hijos para acceder a los beneficios de Bolsa Família. Siempre en el mismo sector de ingresos más bajos, el índice de jefes de familia sin instrucción escolar descendió de 34,3% a 21,9%. Una baja significativa, pero que aun así expone la realidad de que más de una quinta parte de la población adulta más pobre carece en absoluto de acceso a la educación formal.

En las últimas tres elecciones, el PT de Lula y Dilma salió victorioso al presentar estos datos y sostener que sus adversarios políticos representaban una amenaza fatal para una trayectoria tan exitosa. El principal oponente, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), nunca logró revertir el impacto negativo de haber cuestionado Bolsa Família ya en su gestación. Algunos de los cuadros más importantes ligados a Fernando Henrique Cardoso, el antecesor de Lula, llegaron a decir que el programa en cuestión era una limosna que acabaría creando miles de vagabundos dispuestos a gastarse el subsidio en cachaza. Ese discurso desapareció oficialmente para dar lugar a una reivindicación de la paternidad que nunca logró sonar convincente. Algunas personas continúan hoy adosándoles a los subsidios sociales la culpa por lo difícil que les resulta encontrar una empleada doméstica que acepte cobrar menos del salario mínimo.

Curiosamente, días después de una elección presidencial que volvió a estar marcada por un debate furibundo, comenzó a darse un cambio de rumbo cuyos efectos aún no son fáciles de medir. Durante la primera etapa de la crisis internacional, en 2008 y 2009, el gobierno tomó la decisión de crear una especie de burbuja de protección que garantizó que se sostuviera el alto índice de empleo —el más alto en décadas—, se controlara la inflación y no se redujeran los programas sociales. Fue una política que se sostuvo hasta el último resultado en las urnas, en octubre de 2015. A los pocos días, la llegada de un nuevo equipo económico y la fragilidad política de la Presidenta, quien hizo en la práctica lo contrario de lo que postuló en la teoría, comenzaron a alejar al gobierno del camino de los logros y conquistas obtenidos durante años.

Cuando se le pregunta sobre estos temas, Tereza Campello expone un discurso alineado con el del gabinete presidencial. Explica que el gobierno sostuvo el panorama hasta el límite presupuestario y confía en la permanencia de una serie de medidas que garantizarán que no haya ningún retroceso en los números alcanzados en los últimos años. «Si se mira el último periodo, se ve que en medio de una crisis mundial el

gobierno hizo un conjunto de movidas apostando a que la crisis iba a durar menos de lo que duró. ¿No estuvo bien esforzarse para generar cinco millones de puestos de trabajo? ¿No estuvo bien esforzarse para preservar los niveles de ingresos? Incluso aunque eso implicara realizar un esfuerzo fiscal que nos acabara llevando a un agotamiento». El hecho es que, por primera vez en 12 años, los datos que a la ministra tanto le gustan están en niveles de riesgo. De mantenerse el mismo ritmo, no habrá asesor capaz de aportar gráficos más optimistas.

Nos gustaría comenzar esta charla preguntándole acerca de aquella sequía en Ceará.

La historia del hambre y la de las sequías en Brasil están muy relacionadas. Cuando uno habla del hambre en Brasil, siempre surge esa imagen del nordestino. Es algo que está ligado a la ausencia del Estado y a la ausencia de alternativas de producción. Pero esto último no es verdad, porque Brasil y en general toda América Latina siempre fueron grandes productores de alimentos. El hambre nunca fue consecuencia directa de una imposibilidad de producir alimentos. Brasil siempre estuvo atravesado por dos fenómenos contradictorios: desde los tiempos de la Colonia es un gran productor de alimentos con una población muy grande que pasa hambre. Y ese episodio de la sequía de la década de 1930 fue muy particular, se trató de una sequía enorme, similar a la que estamos viviendo hoy, de varios años. Cuando la sequía se extiende en el tiempo, como ya ocurrió en algunos momentos de la historia, comienza a perderse el ganado, se secan los cauces de agua y el pueblo, desesperado, abandona la tierra. Fue lo que pasó en 1932 en Ceará. Eran hordas de gente desesperada, hambrienta, sedienta, que se iba del campo tratando de llegar a Fortaleza. Pero el gobierno nacional y el cearense montaron barricadas para impedirles que entraran a la ciudad. A las personas que llegaban hasta la ciudad a pie o en mula, las llevaron a cinco campos de concentración. Cercaron los campos, cortándole a la gente toda posibilidad de sobrevivir, y así como los llevaban muchos morían. Fíjese cómo el Estado, en esa oportunidad, usó su poder y capacidad para prácticamente condenar a muerte a la población. Son historias terribles. No fueron pocas personas. Miles murieron. Y hoy encontramos al Estado tratando de usar su poder y capacidad para lo opuesto, que es asegurar el acceso al agua. Las sequías en Brasil siempre fueron un fenómeno rural. ¿Y por qué este año no se dio ese fenómeno rural? ¿Hubo sequía en la ciudad y no en el campo? Lo que pasó es que el Estado actuó. Instalamos 1.200.000 cisternas. La poca o mucha lluvia que cae va a parar a esos tanques. Ya no hay saqueos de supermercados, ni de camiones que pasan por la ruta. Ya no se ve ese paisaje. Es todo un contrapunto.

¿Cómo recibió la noticia de que Brasil salió del Mapa del Hambre?

Creo que podrían resumirse en cinco los puntos que la FAO toma en cuenta respecto de la superación del hambre en Brasil. El primero es el hecho de que el país haya asumido como tema prioritario de agenda la cuestión del hambre y la haya puesto en el centro de la discusión nacional. Las consecuencias de esto no pasan solo por lograr que el presupuesto se apruebe y que la opinión pública se movilice, sino también por obligarnos a asumir la situación y a no esconder el tema del hambre. Solo es posible superar un fenómeno dramático como este si verdaderamente se lo empieza a tratar como un problema real y no como un problema natural. El hambre, en Brasil, era un fenómeno naturalizado: se hablaba del clima, de que el pueblo es perezoso, de la esclavitud en el pasado. Siempre hubo intentos de explicar el hambre y la pobreza naturalizándolas. Por eso, establecerse como prioridad acabar con el hambre es una precondition. No es una acción ni una solución científica para erradicar el problema. Es un conjunto de cosas, y la primera de todas es la voluntad política.

El segundo punto a destacar es que el país consiguió mejorar la producción de alimentos. Y el resultado es que hay mayor disponibilidad de alimentos para la población. Podría no haber sido así; podría haber aumentado la producción pero que esta se destinara a exportaciones. La disponibilidad de alimentos equivale a todo lo que se produce descontando lo que se exporta y sumando lo que se importa. Y lo que logramos especialmente es que aumente la producción de alimentos típicos de la mesa brasileña.

El tercer punto clave es algo que para la FAO es de gran importancia. Antes, la comida no llegaba del mismo modo a las mesas. Había falta de acceso. Y eso es algo que se relaciona ante todo con la ausencia de ingresos. El cambio en general se asocia con la llegada de Bolsa Família, pero son cinco o seis factores los que hicieron que mejorara el nivel de ingresos de las familias brasileñas. Subió el empleo formal, subió el salario mínimo. El salario mínimo aumentó 72% y eso, en los sectores de bajos ingresos, repercutió automáticamente en la compra de alimentos. Hoy la elasticidad para comprar alimentos entre los sectores pobres es altísima. Entre los ricos, si se duplican sus ingresos, no se duplica automáticamente la cantidad de carne que compran. Entre los pobres sí, cualquier alza en el nivel de ingresos se traduce en más proteínas directamente ingeridas. Del nivel del salario mínimo para abajo, esto es un fenómeno directo.

El cuarto punto es la disponibilidad de alimentos fuera del hogar. Es algo que pasa en gran parte debido al plan de meriendas escolares y que un poco también se relaciona con el Programa de Adquisición de Alimentos, por el que nosotros compramos a la agricultura familiar. Los restaurantes populares también influyen un poco en este punto, pero el caballito de batalla acá son las meriendas escolares. Son 43 millones de niños y jóvenes alimentándose, no digo que exclusivamente a base de productos de la agricultura familiar, pero sí con un porcentaje significativo de estos. Y finalmente está el quinto punto, que es la participación, el control social. Si tengo entonces que resumir cinco razones del reconocimiento que la FAO le dio a Brasil, serían estas cinco.

En la década de 1990 los brasileños convivíamos con expresiones como «industria del hambre» o «industria de la sequía». ¿Cuál es la implicancia simbólica de que esas expresiones hayan desaparecido?

Es más que simbólico. En el Noreste pasaron varias cosas. Básicamente son tres cosas que hicieron que el panorama cambiase por completo. La primera es el programa Luz para Todos: si uno miraba el paisaje noreste en los años 90, era una cosa medieval. Las casas eran de barro, la gente estaba desnutrida, la producción era escasa, se vivía en la oscuridad. Hoy tenemos luz en todo el Noreste. Pasamos de chicos sin escuela a chicos con internet, de casas sin heladera a casas con heladera. Y eso tiene una repercusión enorme en la alimentación. La heladera implicó un salto para salir de una pobreza multidimensional. Porque antes alguien mataba una gallina y tenía que aprovecharla toda en el mismo día. Esa persona no tenía modo de administrar las proteínas. Lo mismo con la leche, el queso, etc. Por eso el cambio es enorme desde el punto de vista de la alimentación. Tampoco hace falta estar cocinando todo el día, y ahí entra a jugar una mejor organización del tiempo. En segundo lugar, las cisternas. Cualquiera puede verlas todas vía satélite, nuestras cisternitas. Y en tercer lugar está el acceso a un conjunto de elementos que modificaron el potencial productivo de todas esas familias. Aun cuando sean familias sin la propiedad de la tierra donde viven, pasaron a tener acceso a créditos, insumos, conocimiento. No es poco. Son una serie de cosas que impactan en el nivel de producción aunque no se reflejan en el PIB. Porque el PIB no registra la subsistencia, no registra el trueque. Hay un testimonio muy lindo que hizo el cineasta Sérgio Machado, que fue el coproductor de la película *Central do Brasil* [Estación Central]. Para esa película, Sérgio visitó Ceará y Piauí a comienzos de los años 90; después, a principios de los 2000 fue a filmar *Abril despedaçado*, y hace poco, en 2012, volvió para preparar la historia de Padim Ciço. Y él vivió toda esta transformación y la cuenta.

Mucha gente sigue hablando de «industria de la sequía» por arrastre, porque se volvió un concepto. Pero una cosa, por ejemplo, que me parece genial del programa de cisternas es que antes la gente tenía que pedir autorización para entrar a una propiedad ajena y pedir agua —o la tenía que comprar—. Era algo medieval, la gente atravesando campos para tener acceso a una fuente de agua. Hoy, como es agua de lluvia, cualquier persona tiene propiedad sobre esa agua. Uno de los secretarios de nuestro equipo suele decir que el acceso al agua en esas regiones fue la mejor reforma agraria que hicimos. Porque eran tierras que estaban quedando cada vez más en pocas manos, mientras la gente se iba a las ciudades. Claro, ¿cómo iban a vivir sin agua? Ya de por sí es una vida dura la de estas zonas, pero hoy pueden administrar su propia agua. Antes, pasaba el camión cisterna y la gente salía a llenar los baldes. Hoy llenan media cisterna y listo. Cuando no llueve, el tanque no pierde su función porque sirve como reserva. No se puede cocinar frijol sin agua, no se puede cocinar arroz sin agua. No se puede producir comida sin agua. En general, no pensamos en el agua como alimento.

Hablando de eso, el concepto de seguridad alimentaria tal como se lo planteó en Brasil va más allá de la comida puesta sobre la mesa. Incluye la producción, el acceso a la tierra, el alimento. ¿Cómo fue que se dio forma a ese concepto y cuál es la diferencia en relación con los planteos anteriores?

Hay varias ideas. No se trata solo de una alimentación saludable sino también de fortalecer la producción autónoma de los agricultores familiares, transformar los alimentos en fuente de ingresos, crear un círculo virtuoso en torno de todo esto. Hay gente que alimentar, hace falta aumentar la producción, los agricultores son pobres. Eso es lo que estaba de fondo en los documentos del Hambre Cero allá por el año 2002, 2003. Pero hoy estamos en otro nivel de organización y de acceso a la información. Hoy estamos alcanzando un nivel de desarrollo y de capilaridad. Estamos financiando 640 bancos de semillas en la región semiárida para tratar de incentivar un aumento en la oferta de semillas nativas y de variedades regionales resistentes. Son cosas que tienen que ver con lo que ya habíamos vivido antes, pero ahora contamos con otra capacidad. Los bancos de semillas de los que hablo son casitas; se les enseña a los agricultores a reservar una parte de las semillas, y a hacerlo en forma colectiva, a trabajar en pequeñas comunidades y poder multiplicar esas semillas de tal modo que para la cosecha siguiente no solo tengan una oferta diversificada sino que les sobren semillas para que el Estado se las pueda comprar. Nosotros queremos comprar. Es un programa piloto que tenemos. En el fondo, se trata de darles elementos

para que se vuelvan productores independientes. Acceso al agua, semillas. La idea de la industria de la sequía tenía que ver con formas de dependencia, por ejemplo depender de que pase el camión cisterna. Claro que uno no puede solucionar todo en diez años. Y uno tampoco puede esperar que salga todo tal como se lo previó después de una sequía enorme. Pero estamos en una ruta muy sólida, inclusive en lo que hace al desarrollo de tecnologías muy sencillas.

La conexión entre los programas Bolsa Família y Salud de Família es lo que hizo que bajara en un 58% la mortalidad infantil producto de desnutrición. Otro dato importante es la superación del déficit de altura en los niños nordestinos, que traspasó el 50%. No es que estamos derrotando el hambre; estamos derrotando la desnutrición. Hoy hay estudios que demuestran que la constancia de Bolsa Família reduce a la mitad el riesgo de desnutrición. Está esa cosa de que habría que sacar de Bolsa Família a la gente que no mejoró de vida... Nosotros estamos preocupados por los niños y por el futuro del país. Tenemos fuertes indicios de que la Bolsa Família reduce el riesgo de obesidad. A diferencia de lo que suele decirse de que uno les da dinero a los pobres y ellos lo gastan comprando porquerías, conseguimos que mejore la calidad de alimentación de la gente. Eso por distintos motivos. En el interior es muy importante el acceso a alimentos poco procesados. Como a todos esos chicos se les da acompañamiento médico, uno de los requisitos es que se pesen cada seis meses. Y los índices de sobrepeso están mejorando. Mucha gente, incluso gente de izquierda, cree que con el subsidio compran solo frituras, porquerías. Los de derecha dicen que los pobres se lo gastan en cachaza. Pero la realidad demostró que toda esa gente es más sabia de lo que creen los filósofos.

¿Cuáles son las peculiaridades de la región Norte en la lucha contra el hambre?

Hay dos grandes desafíos. Uno es el agua potable. Aunque está rodeada de agua, el Norte es una región que tradicionalmente arrastra un índice alto de enfermedades causadas por la mala calidad del recurso. Y venimos desarrollando tecnologías para mejorar el acceso al agua potable. Allá llueve mucho, entonces se pueden montar pequeños reservorios que les permitan a las familias disponer de agua no contaminada. El otro desafío es el acceso a una alimentación diversificada. Muchas veces pasa que hay gente que solo tiene acceso a pescados y frutas de *açaí*. Es una alimentación muy repetitiva, por ende pobre.

Con la cuestión de los alimentos ultraprocesados, nos encontramos con una industria altamente refractaria a cualquier tipo de regulación. ¿Cómo se puede lidiar con ese

desafío de manera tal que el derecho a la alimentación sea también derecho a una alimentación saludable?

Falta avanzar mucho en ese punto en nuestro país. Logramos avanzar mucho en otros aspectos, que son los que les dan sostén a nuestras políticas, y hay cosas también que venimos haciendo en este terreno como fortalecer la producción de alimentos orgánicos, ampliar la oferta de semillas, revalorizar la cocina regional. Hay muchas cosas para las que haría falta una regulación y también una serie de prohibiciones, pero aun así, y en lo que está dentro de nuestras posibilidades de acción, hay un estímulo fuerte. El tema de asegurar que el 30% de los recursos públicos federales puesto en el plan de meriendas escolares sea destinado a la agricultura familiar fue lo que hizo que en algunos lugares la merienda incluya pescado, *açaí*, castañas. Porque era eso lo que conformaba la agricultura familiar del lugar. Y no es fácil estimar cuántos beneficios trajo esto, pero al contrario de lo que se suponía, hay una enorme cantidad de municipios actualmente en Brasil que compran 100% de las meriendas a agricultores familiares. Eso tiene una incidencia mucho más fuerte que cualquier acción regulatoria. Y lo mismo con la cuestión ambiental. Los chicos hoy son unos maestros en separar basura. Se volvió algo muy común, y los mismos chicos retan a los padres cuando no separan. Hay todo un costado de la educación ambiental que impactó en las familias. Con la alimentación el desafío era lograr lo mismo. Un chico que aprende que los fritos hacen mal, que tal cosa engorda o no es sana, enseña lo que hace es reproducir en su casa eso que aprendió. Se hizo mucho en todo el país por revalorizar la mandioca, la tapioca. Ahora estamos por empezar la batalla del ñame.

¿Cómo fue su reacción cuando la presidenta Dilma Rousseff la llamó y le pidió que coordinara las políticas contra el hambre?

Hoy es más fácil decirlo, pero en su momento hubo que coordinar todo de cero. Llegar a ser ministra y asumir una tarea de este tipo... la verdad es que nunca me imaginé algo así. Cuando armamos el Brasil Sin Miseria, fueron seis meses que nos pasamos gestando el proyecto. Fue un armado colectivo, hicimos un diagnóstico conjunto. Fue una construcción hiper-compleja, de esas que en la teoría son muy lindas pero en la práctica casi nunca salen bien. Y salió bien. Fueron casi 120 acciones que involucraron 18 organismos con metas muy osadas que después de cuatro años se cumplieron. Imponerse metas osadas es un arma de doble filo. Si uno quiere superar la miseria y el hambre, la meta no puede ser sencilla. Y solo se consigue lograr algo si el horizonte que uno se impone es amplio. En fin, nos habíamos puesto metas casi utópicas, y con ninguna nos queda-

mos atrás. Superamos todas las metas. En los distintos ministerios, todos los que participamos del proyecto nos reconocíamos en él. Veíamos ahí una oportunidad para profundizar algo que siempre habíamos querido hacer. Una escuela integral, una agricultura familiar. Y si hoy uno mira atrás, es por el orgullo colectivo de haber conseguido producir una acción tan compleja, tan positiva y tan poco divulgada.

¿Cómo se puede garantizar, en el escenario económico actual, que no se den retrocesos en relación con los sectores más vulnerables de la sociedad?

Cuando uno habla de Bolsa Familia, para mucha gente solo se trata de un subsidio o una cantidad de ingresos. Uno menciona las otras dimensiones del programa y la gente dice que lo importante es el dinero. Es curioso. Nadie les va a quitar las cisternas a todas esas personas. No hay inflación que venga y corte el acceso de 15 millones de brasileños a la energía eléctrica. O a la educación, o a las políticas sanitarias. Hay logros estructurales que no van a verse afectados. Ya se modificó el nivel de pobreza. El acceso a una heladera o a una cocina está hoy prácticamente universalizado. Son logros que implican un cambio en la calidad de vida. Aun cuando la gente llegara a encontrarse en situación de desempleo, no va a volver a la situación anterior.

Si se mira el último periodo, se ve que en medio de una crisis mundial el gobierno hizo un conjunto de movidas apostando a que la crisis iba a durar menos de lo que duró. Nosotros apostamos a que la crisis iba a durar menos de lo que está durando. Hoy estamos atravesando un momento de ajuste, pero la expectativa de la Presidenta es que esto no impacte en ciertas políticas.

Con el pasaje de Guido Mantega a Joaquim Levy, ¿hubo algún cambio en el grado de compromiso del Ministerio de Hacienda en relación con los programas sociales?

Les voy a responder de otro modo. Una vez, una ministra de un país africano me preguntó cómo me las arreglaba para pelear con el ministro de Hacienda y conseguir los fondos. Pero lo cierto es que yo nunca tuve que pelear con el ministro de Hacienda. Ni con Guido ni con Levy. La persona que está dándoles prioridad a las políticas sociales es la Presidenta. De modo que la cuestión no pasa por mis habilidades ni por las decisiones del ministro. La apuesta por sostener la Bolsa Familia y las políticas sociales es una apuesta firme de la Presidenta. Poquísimas veces tuve que conversar con el ministro Guido, poquísimas también con Levy. Y nunca tuve que pelear.

Traducción: Cristian De Nápoli

SÍ, NOSOTROS TENEMOS BANANAS Y YA NO PASAMOS HAMBRE

Thiago Domenici / Tadeu Breda

Los productores de bananas de Juquiá, en la región más pobre del estado de San Pablo, no tenían a quién venderle. Y las escuelas de la ciudad más rica y más grande de Brasil no tenían a quién comprarle. El simple acto de unir las dos puntas cambió el panorama alimentario y económico de la zona: el valor de 1,6 millones de reales de la primera licitación benefició directamente a decenas de familias de agricultores del Valle del Ribeira.

El antes y después de la agricultura familiar de Juquiá, ciudad situada al sur del estado de San Pablo, revela que las mejoras en las condiciones de sustento del productor rural todavía tienen mucho camino por recorrer. Quien visita la región y toma contacto con los que viven del trabajo agrario, sobre todo de la cosecha de banana, descubre un itinerario desconocido e inexplorado, algo que va más allá de las bellezas naturales y del ecoturismo ofrecido a los visitantes. Con poco más de 20.000 habitantes, a mitad de camino entre otros dos municipios, Miracatu y Registro, la entonces incipiente Santo Antônio de Juquiá fue levantada en el pasado lejano en las márgenes de un río de aguas oscuras que le dio el nombre de origen indígena, un afluente del río Ribeira de Iguape. Para llegar allí y a otros 24 municipios que integran el llamado Valle del Ribeira, región que constituye la mayor área de preservación continua de selva atlántica de Brasil, con cerca de 2,1 millones de hectáreas del bioma, el camino común es tomar la ruta Régis Bittencourt (BR-116), por mucho tiempo llamada «la ruta de la muerte» por la cantidad de accidentes automovilísticos fatales ocurridos en ella.

Como contrapartida de la riqueza de su ecosistema, designado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1999, la región del Ribeira es la más pobre del estado de San Pablo, ya que ostenta uno de los Índices de Desarrollo Humano (IDH) más bajos del país.

A pesar de la voracidad cada vez mayor del monocultivo de pinos y de eucaliptos, el cultivo de banana y de té negro y la pesca resisten como principales actividades económicas. En Juruá, la banana también comparte el espacio con la explotación de la pupunha, uno de los palmitos tradicionales en la mesa del brasileño, con espacio creciente en la alta gastronomía. Por la SP-790, ruta adyacente a la BR-116, que une el pequeño municipio con la ciudad de Sorocaba, se ven enormes bananales y palmitales que bordean el camino que desemboca en el barrio Caçula, sede de la Coopafarga, la Cooperativa de los Agricultores Familiares de la Región de Juruá. Quienes dan la bienvenida al visitante son Regiane Alves da Silva y Aline Juvêncio, las encargadas del trabajo pesado de Coopafarga. La primera es responsable de la administración y la segunda, de la parte financiera. Mientras arreglan con esmero la abundante mesa del desayuno, comentan que muchos están en la zona rural, en una visita a una plantación de café, que forma parte de un curso para capacitar a nuevos agricultores sobre el grano. Regiane dice que el día será pleno. «Va a salir de aquí sabiendo todo de nosotros», bromea. Aline avisa que la reunión de los miembros de la cooperativa no demorará en comenzar.

A pesar de ser invierno, es una mañana cálida, y el tiempo húmedo da una sensación térmica de mucho más calor, lo que hace que Regiane recurra al aire acondicionado, instalado meses antes para aliviar los problemas diarios con el ventilador, que hacía que los papeles volaran por la sala. En la mesa de reuniones de Coopafarga, una hoja de papel servirá para que los invitados firmen su asistencia. Ellos aparecen enseñada, de a poco. La conversación con la docena de participantes interesados en contarnos lo que ocurre en sus regiones se convirtió en una especie de dinámica de grupo a lo largo del día, que tuvo una pausa para el almuerzo, con derecho a jugo de maná, una fruta exótica cuyo sabor recuerda al del maracuyá, pero que en la apariencia recuerda al jiló. Después de entrevistas y más entrevistas, declaraciones y más declaraciones, los nombres escritos con bolígrafo azul en la hoja dejada en la mañana representarían una certeza constatada en tono de cliché: la unión hace la fuerza.

Las declaraciones de los representantes de la Asociación de Banicultores de Miracatu (ABAM), la Cooperativa de Banicultores de Miracatu (COOBAM), la Cooperativa de Agricultura Familiar de Sete Barras (COOPAFASB) y la Cooperativa Agroecología de los Agricultores Familiares del Valle del Ribeira y Litoral Sur (Familia del Valle) pueden ser resumidas en palabras de uno de los representantes de la ABAM, el joven Rafael Grothe de Oliveira: «Antes peleábamos entre

nosotros para vender banana al poder público. Ahora, trabajamos en redes». Juntas, las cooperativas hicieron viable la creación de la Coopercentral VR, cuya presidencia asumirá Rafael. La unión en un único Catastro Nacional de Personas Jurídicas, nombre que se da en Brasil al registro de una empresa o asociación, es una forma de reducir la burocracia en la emisión de documentos y concurrir a licitaciones públicas de forma más sencilla. Políticamente, esa unión los hará ganar escala y mayor representación. «Sin la construcción de consensos democráticos y de negociación política no se sale del lugar», evalúa Antônio Pereira da Penha. Toninho, como lo llaman los más cercanos, parece tener siempre una expresión de sonrisa contenida en el rostro. Es uno de los fundadores de Coopafarga y el responsable de los proyectos y contratos de la cooperativa, además de uno de los galvanizadores de la alianza de las cooperativas del Ribeira. Un sujeto pulido, de hablar tranquilo y preciso, que piensa antes de decir algo. En sociedad con su mujer, Maria Valdineide da Silva, actual presidenta de la cooperativa, la pareja creó las condiciones para que a partir de 2009 Juquiá les diera espacio a los productores rurales.

Hijo de agricultor, Toninho lidia desde hace dos décadas y media con la agricultura familiar y viene de una historia de acción social por viviendas en la zona este de San Pablo. Las dos luchas, evalúa, le enseñaron que romper el prejuicio por medio de un proceso constructivo de diálogo trae, sí, resultados. «Las personas solo necesitan entender que nosotros, pequeños agricultores, no somos pobrecitos. Lo que queremos son oportunidades», advierte. En la sala todos asienten con la cabeza. Todos, en la medida de lo posible, dejaron un mensaje de unión y relataron las aflicciones de la vida en el campo, las dificultades para el transporte de los productos, la falta de apoyo, pero no se permitieron perder el entusiasmo.

Lo que se evidencia en las tierras del Ribeira es que el escenario de afirmación de los agricultores familiares en los últimos años refleja en gran medida lo que en el ámbito nacional se ha consolidado de forma lenta y gradual vía políticas públicas, algo que muchos aquí reverencian, formando casi una isla en pro del gobierno federal en el momento en que las administraciones del Partido de los Trabajadores (PT), particularmente la de Dilma Rousseff, padecen de absoluto descrédito en medio de confusiones económicas y políticas. Casi sin excepción, entre una visita aquí y otra allá, surgen algunos denominadores comunes: «juntos somos más fuertes»; «nos sentimos orgullosos de lo que hacemos y queremos más»; «el ex-presidente Lula tiene muchos méritos». Fue en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 y

2010, cuando surgieron algunos de los programas que benefician a las comunidades pobres del Ribeira y de otros parajes.

En términos de recursos financieros, los privilegiados siguen siendo los latifundistas brasileños que cuentan con una línea de financiamiento de casi 200.000 millones de reales para la zafra anual, contra 30.000 millones de los pequeños productores. Pero, en esas franjas, por lo menos –afirman muchos con énfasis mirando profundamente a los ojos del interlocutor– con Lula se crearon las condiciones para mejorar la agricultura familiar de un Brasil que pasaba hambre. El verbo en pasado revela una conquista reciente: la nación ya no ostenta la vergüenza del hambre. Entre los factores que explican el éxito brasileño, la FAO coloca en el centro el éxito de las políticas sociales y de transferencia de ingresos implementadas en la última década.

En perspectiva histórica, es sabido que nunca hubo problemas para producir alimentos. Existe abundancia para alimentar a dos Brasiles. Lo que no existía era el poder de compra de los más pobres, situación que también mejoró en la última década con la política de incentivo al consumo, aunque ahora sea este uno de los reflejos de la crisis económica instalada. El hecho es que millones de brasileños dejaron las clases sociales más vulnerables. Si hubo progreso, como pregona el eslogan de la bandera nacional, y un contingente de 15,6 millones de brasileños superó la subalimentación desde comienzos del año 2000, es también una realidad que todavía 1,7% de la población no sabe si tendrá garantizada la próxima comida. Aunque eso represente 3,4 millones de personas, el país es señalado como referencia en el combate contra el problema que tiene como víctimas a más de 800 millones de ciudadanos en todo el planeta.

Contrariando al escritor y pensador francés Voltaire, que dijo que «la buena política descubrió el secreto de matar de hambre a quienes, cultivando la tierra, hacen vivir a otros», en las últimas gestiones el gobierno federal consiguió, además del programa Bolsa Família, reivindicar otros que están umbilicalmente ligados al escenario de progreso lento y gradual de lucha contra el hambre: el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE). Juntas, estas políticas crearon una demanda estructurada de los alimentos que produce la agricultura familiar brasileña, que representa 84,4% de los establecimientos agropecuarios del país. Hoy, de lo que va a la mesa del brasileño, 70% se produce en tierras de pequeños agricultores, gente como Don Joãozinho, Mineiro, Luis Henrique y Claudinho Barbosa, personajes de un Brasil que insiste en mantenerlos casi anónimos.

Esta gente, que se alimenta de la tierra y hace de su tierra el alimento de la mayoría del pueblo, posee la menor porción de los territorios rurales –solamente 25%–, lo que revela la alta concentración de tierras, otro problema histórico, todavía lejos de una solución. En la sede del Departamento de Alimentación Escolar (DAE) del Municipio de San Pablo, en la región central de la ciudad más grande del país, los gestores explican el embrollo que significa hacer funcionar el PNAE municipal. «Existe una ley que estipula que 30% de los alimentos usados en la alimentación escolar de los municipios brasileños debe ser adquirido a los productores locales», informa el asesor e ingeniero agrónomo del órgano, Luiz Henrique Bambini. Aprobada y sancionada a fines de 2009, esta legislación proporcionó a las cooperativas de la región del Valle del Ribeira «el potencial de aumentar significativamente la renta y ampliar las oportunidades de mercado, pero nos trajo un desafío considerable», evalúa. El desafío, cuenta, abarca la concepción de la licitación de compra, la evaluación de la calidad del producto y la distribución adecuada, que pasa por una rígida inspección, entre otros aspectos.

Los números del programa son impactantes. Todos los días, las escuelas públicas brasileñas ofrecen comida a un contingente de estudiantes cuyo volumen supera la población de Argentina, cerca de 45 millones de alumnos. En el caso de la alimentación escolar paulista, casi un millón de alumnos recibe dos millones de comidas diarias en más de 2.800 unidades escolares. «Bromeamos con que es el restaurante más grande del mundo», dice Bambini.

En el piso del DAE, con vista privilegiada a la ciudad, circulan 200 empleados entre nutricionistas, agrónomos, ingenieros de alimentos, veterinarios, gestores de políticas públicas y otros profesionales. Bajo la responsabilidad del órgano hay más de 8.000 cocineras. Este gerenciamiento técnico, administrativo y financiero volcado a alimentar a un contingente de pequeños comensales es una tarea hercúlea, ya que se necesita planear menús semanales, teniendo en cuenta una serie de variantes logísticas y nutricionales. Además, existen agravantes tales como servir comidas a los niños con restricciones alimentarias, lo que no es poco: en junio de este año, eran más de 6.000 los que presentaban alergias, como intolerancia a la lactosa o a la leche de vaca, a la soja, al pescado, frutos de mar, trigo, avena, almendras, a las frutas y al café, entre otras, lo que exige la elaboración de un menú individualizado.

En la Escuela Municipal de Educación Infantil Martins Fontes, en el distrito de Brasilândia, en la zona norte de la ciudad, la banana de la agricultura familiar se usa como postre algunos días de la semana.

Durante el recreo, el imaginario infantil la transformó en un teléfono antes de ser devorada por un grupo de niños. Allí estudian aproximadamente 400 alumnitos, en dos turnos (mañana y tarde). La escuela garantiza, en una comida, 20% de las necesidades nutricionales diarias, o 30% para los que hacen dos comidas. En escuelas de doble turno, ese umbral se eleva a 70%.

Además de la banana de postre, el alumnado de la Martins Fontes comió con esmero un plato que llevaba arroz, frijol, carne molida y ensalada de papas. El arroz, comentó la joven directora Katia Elisabete Ruiz, es orgánico y provino de una cooperativa de la región sur del país. Una de las actividades de la dirección es, en la medida de lo posible, orientar a los padres acerca de que la alimentación saludable es fundamental para el buen desempeño escolar. El grupo de cocineras de la escuela, siete en total, se turna en los quehaceres dentro y fuera de la cocina. Algunas están allí desde hace décadas. Es el caso de la jefa de cocina, Ana dos Santos Silva, una señora sonriente que explica que los niños comieron proteínas de soja con macarrones por primera vez y no notaron que no era carne molida. Allí, cuenta, se sirven cuatro comidas: desayuno, un primer turno de almuerzo, un segundo turno de almuerzo y merienda. «Todo hecho con mucho amor y cariño», se enorgullece.

Una de las nutricionistas del DAE, Renata Maciel Nunes, presente en nuestra visita, explica que monitorea cada día algunas escuelas de un grupo de regiones. «Tengo que ver el *stock*, el almacenamiento adecuado, si todo está siendo ejecutado conforme a los informes nutricionales enviados por el DAE, además de conversar con las cocineras, para tener un *feedback* para críticas y sugerencias de mejoras».

El contexto social del barrio de Brasilândia indica la necesidad de una alimentación que sustente a los niños durante el día. El lugar en que se ubica la Escuela Martins Fontes es una rareza en San Pablo: uno de los pocos espacios en que se puede ver, a pocos metros, el fin de la inmensa mancha urbana de la ciudad, que da lugar a un par de árboles sobrevivientes al agresivo concreto que en décadas alteró millares de kilómetros cuadrados para dar espacio a la mayor metrópolis de América del Sur. Nuestro taxista, acostumbrado a circular por la región entregando mercaderías, cuenta que en algunas calles necesita el aval de los traficantes para ingresar, y no es raro que se vea en apuros.

El barrio, que fue loteado en 1947 en un antiguo sitio perteneciente a Brasília Simões, tiene en sus orígenes la marca de la exclusión. Los primeros en vivir aquí vinieron de las viviendas populares y de los aglomerados del

centro de la ciudad, demolidos para dar lugar a avenidas como la São João y la Ipiranga, durante la gestión del ex-intendente Francisco Prestes Maia entre 1938 y 1945. El barrio creció desordenadamente y, a partir de la década de 1970, surgieron villas adyacentes como Jardim Carumbé, Damasceno, Vila Teresinha, Vista Alegre, todas con terrenos pequeños, calles estrechas y sin áreas de recreación, destinadas en su mayoría a las familias de bajos ingresos. Por eso, la escuela Martins Fontes –evalúa la directora– es el lugar donde muchos hacen la principal comida del día.

Helena Novaretti, gestora y nutricionista del DAE, explica que el sector de menús define semanalmente los alimentos en una reunión de evaluación con los ingenieros agrónomos. Hecha la consulta, se investiga de disponibilidad del alimento, para la cual se toma en cuenta su estacionalidad y el precio de los productos. Objetivamente, el menú tiene una amplia base de alimentos, desde el tradicional arroz y frijol –que juntos representan 400 toneladas mensuales– hasta raíces y tubérculos como ñame, cará y mandioca, además de muchas frutas, verduras y legumbres.

Vera Nakayama está allí desde el tiempo en que la merienda escolar de San Pablo era un paquete de galletas o un vaso de leche. «Eso no es comida», dice. Lleva 35 años en el órgano y ve con simpatía una nueva ley, aprobada en marzo de 2015 por la Cámara Municipal, que impone al municipio la meta de utilizar alimentación orgánica o de base agroecológica oriunda de la agricultura familiar a partir de este año. Uno de los desafíos es reducir el consumo de alimentos procesados y ultra-procesados, todavía presentes en la red escolar del municipio, y alcanzar la recomendación de la Organización Mundial de la Salud respecto al consumo de frutas y hortalizas, dando prioridad al consumo de preparaciones realizadas con alimentos naturales y mínimamente procesados.

Bambini concuerda con ella. Para él, el desafío es hacer que los niños coman cada vez más alimentos sin agrotóxicos. El ingeniero agrónomo estuvo a comienzos del año pasado en Juquiá para participar del primer encuentro del producto de la agricultura familiar en la alimentación escolar de San Pablo, que reunió a 80 participantes entre miembros de las cooperativas, del poder público y profesionales de la Secretaría de Educación del Municipio de San Pablo, como técnicos, nutricionistas y cocineras de las escuelas. Para las cooperativas presentes, el encuentro sirvió para consagrar el contrato firmado entre ellas y el DAE para la provisión de bananas para la merienda escolar, un hecho inédito de las cooperativas ahora reunidas en la Coopercentral VR.

Llevar la fruta hasta la mayor ciudad del país consolidó la unión de las cooperativas, evalúan Adriano de Almeida Cardoso, el supervisor de las ferias libres de San Pablo, y Pablo Daniel Ferreira, que se encarga de la supervisión general de abastecimiento del municipio. Para ambos, «sin el PAA, el PNAE no existiría», o sea, sin el programa que adquiere alimentos en la agricultura familiar, no habría un proyecto que garantice el abastecimiento a las escuelas.

Hombre de muchas palabras, Cardoso explica que el Programa de Adquisición de Alimentos apoya la agricultura familiar en uno de los aspectos más difíciles del proceso productivo, que es el acceso al mercado de consumo. «Con el PAA es posible vender a instituciones públicas sin necesidad de un proceso de licitación pública», dice. Los números generales del programa indican que en diez años el PAA adquirió más de tres millones de toneladas de alimentos a más de 200.000 agricultores familiares. «Gracias a Dios, el agricultor no es demandante. Lo que necesita es apoyo, un punto para comercializar su trabajo, cosa a la que San Pablo le viene abriendo espacio», dice el coordinador de ferias paulistas. «Uno siempre quedaba golpeado. ¿Por qué San Pablo no le compraba a la agricultura familiar?», recuerda Toninho. Según él, fueron casi dos años de conversaciones para cerrar el primer contrato. «El rechazo no se daba por falta de capacidad del agricultor, y tampoco por falta de calificación. Era por falta de voluntad política, de entender nuestro modo de hacer las cosas, algo que cambió con la actual gestión», elogia.

Concretada el pasado noviembre, esta primera sociedad dio como resultado la distribución de 512 toneladas de banana Enana y 194,6 toneladas de banana Plata, todas entregadas con éxito en escuelas ubicadas en barrios periféricos como Campo Limpo, Guaianases, São Mateus y M'Boi Mirim. La primera prueba de fuego fue exitosa, tanto que se firmó un segundo contrato, y esta vez se abarcarán otras regiones, como Pinheiros, una de las más nobles de la ciudad. El valor de 1,6 millones de reales (500.000 dólares) de la primera licitación benefició directamente a 86 familias de agricultores de la región del Valle del Ribeira. Para los miembros de las cooperativas, el grupo todavía tiene la preocupación por la ganancia inmediata para la sustentabilidad de la producción, y los nuevos contratos, firmados por otras municipalidades, serán una oportunidad de establecer capital de trabajo y fortalecer la innovación.

En 2014, además de los de la banana, la municipalidad firmó contratos con otros agricultores familiares para la adquisición de 552.000 litros de jugo de uva integral, cinco millones de sachets de 200 mililitros de

jugo de naranja integral congelado, 1.000 toneladas de arroz orgánico, 360 toneladas de arroz parbolizado y 520 toneladas de frijol carioca. Para 2016 está prevista la adquisición de otros productos de la agricultura familiar, un total de 24 millones de reales en recursos (equivalente a seis millones de dólares).

Don João Rodrigues dos Santos, Joãzinho, de 47 años, es un sujeto que ejemplifica la agricultura familiar. Macizo, de gestos rápidos y habla ligera, en la piel enrojecida por el sol se trasluce una vida de superación. «Aquí no hay tiempo para perder. Aquí planto de todo, soy casi autosustentable», dice mientras invita un café que él mismo cultiva en su pequeña propiedad rural enclavada en la Selva Atlántica, distante algunos cuantos kilómetros del centro de Juquiá, y a la que se accede a través de sinuosas carreteras de tierra.

Joãzinho tiene un hijo que también vive del cultivo de la banana, producto que los sustenta financieramente. En la propiedad que él mismo alzó, el agricultor se enorgullece de decir que la vida mejoró. «Primero agradezco a Dios. Después, a la Coopafarga». Joãzinho destaca la vista del lugar, que embarga los sentimientos de cualquiera, más aún cuando el visitante es de la ciudad y está acostumbrado a lidiar solamente con el cemento de los edificios. Al encontrarse con historias de agricultores familiares como Joãzinho, el cuestionamiento llega a ser de intrusión por estar allí, y de saber que la mayor ambición de aquel hombre es tener un «bananal espectacular» y mejorar el sitio, que recibió luz eléctrica hace siete años por medio del programa federal Luz para Todos. «Mi ingreso mejoró. Porque antes yo solo tenía a los intermediarios para vender mi producto», dice. Los intermediarios son personas que compran la banana a precios irrisorios para revenderla a precios lucrativos.

La banana es una de las frutas más importantes del mundo, tanto en lo que se refiere a la producción como a la comercialización. Para muchos países, además de ser un alimento complementario de la dieta de la población, presenta gran relevancia social y económica, al ser fuente de ingresos para muchas familias. Actualmente Asia produce cerca de la mitad de las bananas del mundo. Inmediatamente después vienen América, que responde por un tercio de la producción, y África, con 14%. La FAO informa que anualmente se producen cerca de 120 millones de toneladas de la fruta, la quinta más cultivada en el mundo, detrás de la sandía, la uva, la manzana y la naranja.

Además de Joãzinho, Edvaldo Ramos dos Santos, conocido como Mineiro, es otro agricultor de la región que tiene la banana como fuente

exclusiva de ingreso. «Esa gente nos lastima, de verdad nos lastima. Nos complica demasiado», cuenta, con honestidad, sobre la relación con los intermediarios. Explica que si vendiera 200 cajas de bananas a los intermediarios, no tendría el mismo rendimiento que si comercializara la mitad de ese total con la Coopafarga. Instalado desde hace cinco años en la región, Mineiro tiene cinco hijos, y uno de ellos, Sidnei dos Santos Passos, sigue el camino del padre. «Da resultado vivir de las bananas. Pero hay que cuidarlas bien. Si se cuidan, se cultivan correctamente, un racimo rinde una caja», explica Sidnei.

Originaria del sudeste asiático, esa fruta se cultiva hace más de 4.000 años. Las áreas con calor y moderada cantidad de lluvias son ideales para su cultivo, explica Luiz Henrique, otro agricultor de 75 años, que nos aguardaba con la mesa puesta, guaraná, pan y queso. Don Luiz mantiene un bananal con la ayuda de su hijo, ya que la edad le impide hacer la recolección de la fruta. «Mi banana es buena, da unas cien cajas por mes», se enorgullece. Las cajas de fruta de la Alimentación Escolar deben incluir, por norma, 18 kilos del fruto cuando es del tipo Plata, y 20 kilos cuando es del tipo Enana. «Si estuviera en manos de los intermediarios, ellos harían que la caja pesara más kilos, casi el doble, de modo de lucrar por encima del agricultor», dice don Luiz, que también está agradecido con Coopafarga por pagarle un precio justo por su producción, lo que hizo que mejoraran sus ingresos. «Hasta compré un televisor mejor para ver la novela».

Según la FAO, Joãzinho, Luiz Henrique y Mineiro se encuadran dentro de los parámetros que definen al agricultor familiar, o sea, cuando la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola es administrada y operada por una familia y es predominantemente dependiente de mano de obra familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia y la explotación están vinculadas, coevolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, reproductivas, sociales y culturales. Por eso, la agricultura familiar también se refiere a pescadores artesanales, pastores, recolectores, trabajadores sin tierra y comunidades indígenas.

Claudio Barbosa es otro de esos personajes casi anónimos. Concejal de Jiquiá y originario de la agricultura familiar, fue el tercero más votado en las últimas elecciones —«impulsado por el grupo», dice— y obtuvo 300 votos. «Aquí luchamos por mejoras en el transporte y la comunicación». Para encauzar la producción desde las escondidas propiedades hasta la Coopafarga, la dificultad en algunos casos bordea el peligro. En el Morro do Pique, por ejemplo, una región alta, en la cual el camino de

tierra es estrecho y accidentado, los camiones padecen muchas veces. «Si llueve, se complica». En la subida en auto, el precipicio que se revela a menos de un metro de distancia llega a asustar. Además de eso, la mayor parte de las propiedades no tiene acceso a internet y la señal de celular no suele funcionar ni siquiera en el único hotel-hacienda de la región. En general, la comunicación se hace por un teléfono rural, cuya antena está en la parte más alta de la casa. Cuando se necesita llevar un mensaje de la Coopafarga para alguien, por ejemplo, Joãzinho toma la moto y cumple la función de correo verbal.

La propiedad de Claudinho tiene diez hectáreas. Al llegar, la vista se pierde en el bananal, de tamaño equivalente a diez canchas de fútbol. Claudinho es lo que se puede decir un hombre de campo exitoso. En la batalla cuenta con la ayuda de su hijo, de primos y de sobrinos, que ya no alcanza: piensa en tener más gente para hacerse cargo de otras demandas, como la plantación de hortalizas y verduras. Claudinho, que heredó la finca del padre, se emociona al hablar de su progenitor. Es toda una vida como agricultor, en la cual el cultivo pasó de generación en generación. «La banana en mi vida es todo, ¿sí? Lo que sé hacer hoy, lo que conquisté, se lo debo a ella. Sé el ADN de la fruta solo de mirarla», dice. Nos explica que los primeros frutos nacen entre seis y diez meses después de la plantación, y que una buena bananera puede ser productiva por hasta 20 años. En el bananal Claudinho muestra cómo hace el corte. El racimo ya está embolsado para evitar «herir la fruta y engordarla más rápido», lo que también la mantiene más bella. El cuchillo afilado tajea la bananera unas diez veces mientras un ayudante espera que el tronco se doble, momento en que el racimo se acomoda en su hombro, en suave caída. Un tajo más y el racimo está libre en el hombro del sujeto. De allí, la banana se lleva al galpón de la propiedad, donde se lava en un tanque con agua y detergente, y es separada en cajas. Desde allí, el producto seguirá hacia la cooperativa, donde quedará en espacios refrigerados. El racimo de demostración, cosechado un viernes, dormirá el fin de semana en Juquiá y será transportado a San Pablo en la mañana del lunes para ser distribuido a partir del martes en las escuelas paulistas. Claudinho se contenta con saber que los niños comen en la escuela la banana que él planta. «Es emocionante», dice.

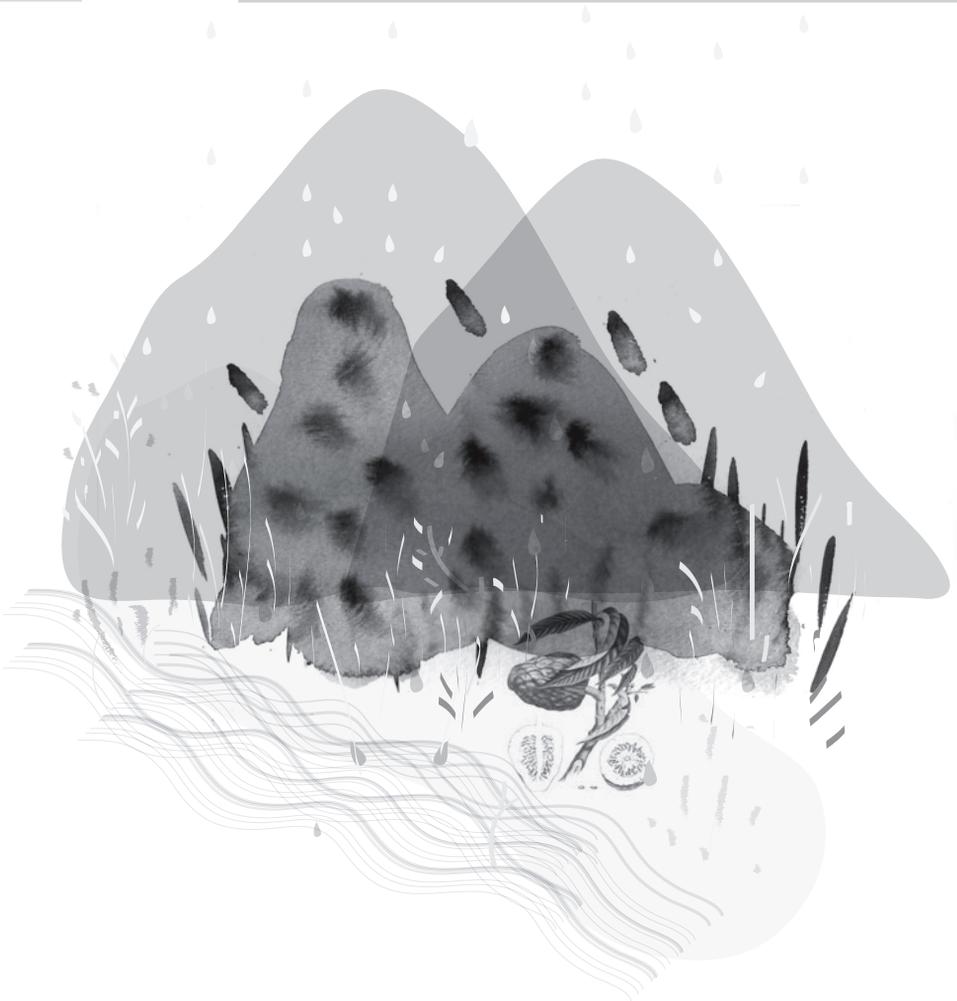
Después de la inmersión de 48 horas en la vida juquiaquense, nuestra impresión es que muchas historias siguen a la espera de un observador que las cuente. Ya rumbo a la ruta de Juquiá, el taxista Joel va contando algunas historias de la ciudad. La radio está encendida en una estación local. La música que suena parece hecha para el momento; es de Jorge

Thiago Domenici / Tadeu Breda

Ben Jor. «Traigo bananas para vender / Bananas de todas calidades /
Quién va a querer / Mira banana Enana / Mira banana Manzana / Mira
banana Oro / Mira banana Plata / Mira la banana de la Tierra (...) /
Mira la banana / Mira el bananero».

Traducción: Claudia Solans

Colombia



COLOMBIA, LA TIERRA DEL OLVIDO

Catalina Lobo-Guerrero

El paraíso tropical que muestran las campañas publicitarias bajo el rótulo de «realismo mágico» no se parece en nada al mundo rural colombiano. Y en ningún otro lugar se palpa más el realismo trágico del hambre y la pobreza del país como en la zona caribeña de La Guajira.

Salí a buscar el hambre de Colombia en las cifras de desnutrición, en los titulares de la prensa, en las denuncias de las ONG internacionales, en los discursos del gobierno. Y lo encontré, de manera más alarmante, entre los indígenas wayúu de La Guajira, ese lugar que como no se parece al resto de Colombia en tantas cosas es necesario que nos recuerden que también forma parte de nuestro país. Y así lo hicieron unos letreros que acompañaban unas cajas de comida que el gobierno nacional envió como ayuda humanitaria de emergencia al corregimiento de Siapana, en la parte alta del departamento de La Guajira: «Siapana también es Colombia».

La Guajira es un caso aislado, dicen, porque ha sido afectado como ninguna otra región por un fenómeno climático atípico en los últimos años y porque está en la frontera con Venezuela. Y es cierto, lo que pasa en La Guajira no pasa en el resto del país. Pero no hay que engañarse: la sequía, que se ha prolongado durante demasiado tiempo, y la crisis económica venezolana solo agudizaron condiciones estructurales de pobreza existentes que el departamento sí comparte con el resto del mundo rural colombiano.

Es un mundo que vive apartado, especialmente si es indígena. Que carece de servicios básicos. Que no cuenta con infraestructura, ni empleo, ni opciones de futuro. Que no alcanza a oler la riqueza de las rentas extractivas o las transferencias del presupuesto nacional, porque los políticos

las malgastan o se las roban. Que sufre la ausencia del Estado, que solo hace presencia como fuerza de combate contra el narcotráfico y los actores armados, pero no como garante de la seguridad alimentaria. La península guajira solo es la peor cara de ese pobre país rural. La Guajira también es Colombia.

JAMÜÜ, EL HAMBRE WAYÜU

Claudina Jayariyú Ipuana, una auxiliar de enfermería de 41 años que atiende el centro de salud de Siapana, sabe bien cómo identificar el hambre, que se dice «jamüü» en la lengua wayúnaiki. Mide la talla, la altura, el peso de los niños. Revisa si tienen la piel reseca, poco pelo o de un tono amarillento. «Nosotros los wayúu somos muy fuertes, pero me preocupa lo que está pasando», dice Claudina con los ojos negros encharcados y cuenta que el mes pasado detectó que había 13 casos de niños en alto riesgo por desnutrición.

Le pregunto a Claudina dónde están los que más sufren por hambre. Ella voltea la mirada hacia la mujer que está lavando los platos en el patio de su casa, donde estamos conversando. Se llama Ilda Rosa. Es joven, delgadita y muda. Claudina le dio trabajo en su casa haciendo varios oficios para ayudarla. Estaba muy débil y su hijo estaba desnutrido desde los seis meses de edad. Ahora ambos están mejor.

Mientras Ilda Rosa trabaja en lo de Claudina, su bebé pasa el día en el Centro de Desarrollo Integral (CDI) para niños en Siapana, que queda cerca de allí. Es una casa bien construida del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con amplios salones ventilados, pisos de baldosa y un patio central. La inauguraron hace dos años y sirve como guardería y jardín infantil para niños de seis meses a cinco años.

En el CDI, los niños reciben desayuno, almuerzo y dos meriendas. Dice su directora, Ramona del Carmen del Palmar, que tienen cupo para alimentar a 150 niños pero que solo atienden a 60. Muchos padres no tienen la costumbre de llevar a sus hijos a la guardería. Otros quisieran, pero no pueden llevarlos todos los días. Un jeep Land Rover blanco con una colchoneta en vez de asientos lleva y trae —y zarandea— a los niños que viven más cerca y por donde sí hay carretera.

Imagino que en los salones voy a encontrar un alboroto de chiquitines que gritan, corren, empujan, ríen. Pero al entrar no escucho nada. Dentro de la sala cuna, donde están los bebés de seis meses a un año, ninguno llora. Hay un par en cunitas de madera y el resto están sentados en el

suelo o sobre colchonetas en vez de andar gateando. No juegan con bloques, sonajeros, ositos de peluche. No veo ningún juguete. Un bebé, con una camiseta de *Toy Story*, se ha quitado un zapato y se lo lleva a la boca. En el salón de al lado hay niños más grandes, deben tener dos o tres años. Duermen la siesta boca abajo sobre tres colchones en el piso y la maestra los ha acomodado de tal forma que solo la cabeza y el tronco descansan sobre lo acolchado. Las piernitas se apoyan sobre el piso de baldosín. Me pregunto a qué estaban jugando antes de caer rendidos. Dos de ellos están despiertos, pero no molestan a los otros.

Finalmente, en el último salón, escucho ruido. Allí están los más grandes, personitas de cuatro años. Algunas de las niñas, en vez de usar vestidos infantiles, ya llevan la tradicional manta wayúu de las mujeres. El salón tiene las paredes rosadas, están decoradas con una bandera colombiana y carteleras con soles y árboles de papel. Cuando entro al salón con Claudina y otro periodista, la maestra quiere demostrar lo que han aprendido en lo que llaman «momentos pedagógicos» y empieza un juego de preguntas y respuestas:

¿Cómo se llama tu país?

Colombia.

¿Cómo se llama el presidente?

Juan Manuel Santos (o algo parecido en media lengua).

¿Cuáles son los colores de la bandera?

Amarillo, azul y rojo.

Y luego la maestra les pide que canten el himno nacional en wayúunaiki.

Desde que se promulgó la Constitución de 1991, Colombia se define como un país pluriétnico y multicultural, pero la realidad de los 102 pueblos indígenas que habitan 34 millones de hectáreas —casi 30% del territorio nacional— es de aislamiento y exclusión. Según datos estimativos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), hay casi un millón y medio de indígenas en Colombia, y de ellos, 300.000 son wayúu. Son la etnia más numerosa y, actualmente, una de las más vulnerables.

El resto del país se alarmó por lo que estaba pasando con los niños wayúu cuando el secretario de Planeación de la Gobernación de La Guajira, César Arismendi, dijo a principios de 2014 que más de 4.000 niños, en su mayoría indígenas, habían fallecido entre 2008 y 2013. Las cifras fueron refutadas de inmediato por el ICBF —la entidad responsable por la seguridad alimentaria de la infancia en el país—, que habló solo de 132 casos.

Para abril de 2014, la Defensoría del Pueblo hablaba en un informe de 313 muertes. 100 o 500 o miles de muertes sí hacen diferencia en un discurso político y en un informe de gestión gubernamental, pero los indígenas no están acostumbrados a que la muerte quede por escrito. No se sabe realmente cuántos niños han muerto por desnutrición. Lo que sí se sabe es que, a pesar de los discursos, de las alarmas, de los informes, la tragedia continúa, sobre todo en la parte media y alta de La Guajira, donde está ubicado el CDI, en el que los chiquitos aprenden a cantarle en su lengua a la gloria inmarcesible de la patria.

Entre todos los niños, hay uno que capta de inmediato mi atención. No canta. Está distraído con mi cámara y no sigue las instrucciones de la maestra. Luce una camiseta como de uniforme de béisbol que le cubre la pancita, una pantaloneta que le queda demasiado grande y unos crocs de plástico sin medias. Tiene cuatro años pero parece de dos. Le llega a la cintura al nieto de Claudina, el niño más alto y avisado del salón. Ese chiquito, tan chiquito, se llama José Pablo y no comió bien durante los primeros años, algo que le sucede en La Guajira a más de 20% de los menores de cinco años. El retraso en el crecimiento es uno de los principales indicadores de la malnutrición.

Es un mito que los niños indígenas colombianos están genéticamente destinados a ser más bajitos que el resto de los niños del país. Lo son, pero esa es la consecuencia menos grave de no comer bien ni lo suficiente. Las profesoras dicen que cuando trajeron a José Pablo al CDI el año pasado, estaba desnutrido y no sabía caminar ni hablar. Hoy da sus pasitos pero todavía no articula bien las palabras y tiene problemas de motricidad y de desarrollo cognitivo. Cuando la maestra reparte unos *bombombum* (un chupetín dulce con chicle adentro) de fresa, los demás niños rompen el envoltorio y atacan la colombina a chupetazos. En cambio, José Pablo la sostiene en su manita pero no sabe qué hacer con ella. ¿Qué otras cosas no sabrá hacer José Pablo? ¿Qué otras cosas no podrá hacer en el futuro?

DESCIFRANDO EL HAMBRE

Al retraso en el crecimiento se lo llama técnicamente «desnutrición crónica». Es lo que muestra el historial de alimentación del niño y se mide comparando la talla contra la edad, siguiendo valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Podría decirse que en la talla de los niños se puede medir cuán desarrollado está un país. En Colombia, casi 30% de los niños indígenas sufre desnutrición crónica, más del doble que el resto de los niños del país. Podría decirse, entonces, que las políticas de desarrollo en Colombia no dan la talla porque es un desarro-

llo desigual. Y sí, está entre los cuatro países más desiguales de América Latina junto con Honduras, Brasil y República Dominicana, según el coeficiente de Gini y los estudios más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Se ha puesto de moda hablar de «cerrar la brecha» entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco, pero quizás la desigualdad no se mida aquí en términos de cuántos tienen hambre y cuántos no. El primer indicio de eso es que en un país tan leguleyo no existe una ley específica para combatirla o, puesto en otros términos menos temerarios, para garantizar la «seguridad alimentaria». El concepto aparece dentro de otras leyes, en documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), en planes de desarrollo nacionales y territoriales, y en varios decretos y resoluciones. La Resolución 2121 de 2010, que se adoptó luego de que se cambiaran los patrones internacionales de medición de la OMS, define cómo se denomina el hambre en el país. Lo que internacionalmente se conoce como «desnutrición global», en Colombia se decretó como «peso bajo para la edad». La desnutrición aguda fue reemplazada por «bajo peso para la talla», y a la desnutrición aguda severa —la que mata— se le dice «peso muy bajo para la talla». Colombia es un país de eufemismos y tecnicismos.

De la desnutrición crónica ni se habla en esa resolución; solo aparece en el anexo técnico como una mala noticia persistente. «Ese indicador casi no se mueve», dice Joana Zuluoaga, nutricionista de la ONG internacional Acción contra el Hambre, que lleva operando más de una década en Colombia. Lo dice también un informe del Programa Mundial de Alimentos. Entre 1995 y 2010 la tasa de declinación anual de la desnutrición crónica fue de -0,5%, mientras que en Brasil fue de -2,1 puntos.

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional es la que mide el hambre en el país. A pesar de que los técnicos han hecho un esfuerzo para que la muestra sea más incluyente —en la de 2010 buscaron ir a sectores rurales menos accesibles y recabar información entre los indígenas—, la población urbana sigue estando sobrerrepresentada. «A los antiguos territorios nacionales (eso que queda lejos, muy lejos de Bogotá) nadie llega. El Estado nunca ha llegado», dice Jaqueline Londoño, coordinadora de gestión técnica nutricional del ICBF, entidad responsable de la encuesta.

Las agencias y organizaciones internacionales con frecuencia llegan a donde el Estado colombiano no lo hace. La ONG Acción contra el Hambre ha hecho estudios estadísticos en las zonas rurales de varios

departamentos del país. Según sus cálculos, en Córdoba, Putumayo y Nariño la desnutrición aguda está entre 1,8% y 2%. Creen que en la Guajira puede estar entre 7% o 12%. «Esas son cifras de emergencia humanitaria y hay un subregistro de muertes», dice José Luis Barreiro, director de la organización en Colombia.

Las cifras sirven tanto para mostrar como para esconder. Si se miran desde una perspectiva general, es cierto que el país ha mejorado. El índice de desnutrición global –que compara el peso y la edad y no es tan útil como los otros dos indicadores– se redujo entre 2005 y 2010 en 30,6%, y pareciera que Colombia va a cumplir lo que prometió en la última cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) –reducir el hambre a la mitad para 2015– y va bien encaminada a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que le exige bajar la desnutrición global a 2,6%.

Pero, otra vez, hay una verdad que empieza a aparecer por los márgenes. El país urbano, el que ayuda a aumentar las buenas calificaciones en las encuestas, no se parece en nada al país rural. El Estado colombiano lo sabe, hasta lo admite internamente. ¿Y la sociedad? ¿Lo sabe? ¿Le importa? En Colombia sabemos disimular y lo hacemos con las campañas publicitarias de la «marca país», que hablan de un paraíso tropical lleno de gente bella y talentosa, como Shakira, Carlos Vives o el pintor Fernando Botero, que logró «que el mundo amara a los gorditos». Las gordas de Botero, esas sí que servirían para tapar la verdad que canta triste la tierra del olvido.

LAS ARISTAS DEL HAMBRE

Todo es gris en la ranchería. La tierra, los ranchos, los árboles trupillos sin hojas, incluso la mirada de América Rosales, una mujer wayúu de 42 años, que vive allí con sus cuatro niños, un perro en los huesos, unos chivitos y un burro viejo. América había salido a buscar un poco de arroz. Por eso, cuando llegamos hasta su casa, sus hijos estaban solos. América regresó con las manos vacías y por ese motivo su familia está en el radar de preocupación de Claudina, quien pidió ver los informes de control médico de los niños y los medicamentos que les habían recetado. Los informes están escritos en español, lengua que América no entiende. Cuando le hago la entrevista, Claudina traduce.

Es la primera entrevista que hago en mi propio país con intérprete de por medio y pienso –porque entre pregunta y respuesta y traducción hay

más tiempo para pensar— que el hambre de América no tiene que ver solo con la disponibilidad de alimentos.

¿Cuántos hijos tienes?

Diez hijos. Se murieron tres.

¿De qué murieron?

Estaban enfermos por desnutrición.

¿Hace cuánto?

Hace como seis o siete años murieron. Ahora los dos más pequeños se enferman mucho.

De los siete hijos que sobreviven, tres no viven con ella. Los que están correteando por allí mientras hablamos son Yoneira, de diez años, Jairo, de ocho, Roberto, de cinco, y Ameida, la bebé de un año, que es la que más le preocupa a América. Saca un cartón en el que se ve que Ameida ha estado en un programa de recuperación nutricional.

«Después de que estuvimos con los médicos del hospital, se está recuperando nutricionalmente con las vitaminas que le dejaron y con la Bienestarina [complejo alimenticio provisto por el gobierno]. Y nos han traído mercaditos: arroz, lentejas, caraotas».

Nos enseña unos sobrecitos con letras en francés que contienen un polvo de vitaminas que debe echar en el tetero o en la sopa. Me dice Claudina que a Ameida también le dieron unas barritas de Plumpy Nut, una pasta concentrada a base de maní que tiene todos los nutrientes. Es el mismo suplemento de recuperación nutricional que les dan a los niños de África y fue lo que, según Claudina, salvó al chiquito José Pablo y ha salvado a otros niños guajiros de la desnutrición. Le pregunto a América si aún está amamantando a Ameida. Dice que a veces, cuando le sale leche.

Al revisar el cartón de control de las visitas del programa de recuperación nutricional, Claudina se da cuenta de que llevan dos meses sin venir y le pregunta por qué.

Desde hace dos meses que dejaron de dar los alimentos, dijeron que ya estaban bien, que no estaban desnutridos, y que buscara yo la forma de alimentarlos.

¿Y qué les das a los niños?

Ahora lo único que les doy es con lo que busco. Voy al pueblo a buscar trabajo, a cocinar, a lavar. Y compro con eso espagueti, arroz, un pedacito de carne.

¿Qué te gustaría comer?

Queso, carne, la comida que no tengo.

¿Cuántos chivos tienes?

Cinco chivos. Es poco. Y toca quemar cactus para alimentarlos.

¿Dónde compras los alimentos?

Trato de buscar algún trabajo, lo que sea para buscar alimento para los niños y comprarlos allá donde una señora que vende la comida barata.

¿De dónde sacas el agua?

Cuando veo algún carro-tanque pasando por ahí, salgo a pedir agua.

¿Cada cuánto pasa el carro-tanque?

Ahora que va a haber elecciones, todos los políticos están echando agua. Es lo bueno de estos momentos [se ríe]. Pero cuando se acabe, no sé cómo vamos a hacer.

¿Y si no pasa el carro-tanque?

Allá en el microacueducto. Voy a buscar el agua allá.

¿Dónde está tu marido?

Él no está. Es artesano, hace guaireñas [alpargatas]. La plata de la venta se la toma en ron. Es borracho.

Claudina explica que el marido de América tiene otra mujer e hijos en otro corregimiento y vive con ellos. En la cultura wayúu es habitual que los hombres tengan varias mujeres.

¿Estás preocupada por la sequía y la dificultad de conseguir alimentos?

Estoy muy preocupada, por eso busco la manera. Y me toca dejar los niños solos. Voy y consigo lo que sea, a nada digo que no para poder traer alimentos a los niños.

¿Estás preocupada por la salud de alguno de los niños?

Si se enferman, sí. Me siento sola. A media noche me siento a pensar qué voy a hacer con mis hijos.

¿Qué necesitas y quién puede ayudarte?

Estoy asustada, de pronto es porque la plata ya no vale nada. Hago cualquier trabajo y pagan 2.000 bolívares, con eso no compro nada. Voy a la tienda con eso a pagar la comida que ya me habían fiado. Estoy con deudas.

¿Y quién puede ayudarte?

No hay nadie que pueda ayudarme. Soy yo misma la que tengo que ayudarme.

¿Y la autoridad indígena, el resto de tu familia, no pueden ayudarte?

No. Los hermanos pueden ayudar pero la única forma es que me mude para Venezuela porque no hay la forma de mandar ahora los alimentos que ellos puedan conseguir allá. Antes me mandaban azúcar, harina de maíz.

¿Y por qué no te quieres ir de aquí?

Para mí es complicado. Yo soy de aquí. Sé dónde está el centro de salud. Allá no sabría qué hacer. Estoy esperando la vivienda, salí beneficiada en el programa del gobierno para hacerla aquí mismo. Por eso no me voy pa' Venezuela.

¿Y cuándo te la van a construir?

No sé.

Y aparte de la casa, ¿qué quisieras para mejorar la vida de tus niños?

Más que todo, alimentos. Por ejemplo, voy a una casa y digo, préstame un kilo de arroz que yo mañana te lo devuelvo si consigo trabajo [se ríe por decir una mentira que quisiera no tener que decir]. O le digo a una persona que tiene más que yo: «¿Tienes trabajo para mí? Yo sé hacer chinchorros». Y si me dan ese trabajo lo hago.

América habla de un futuro en el que los niños puedan crecer allí, en su tierra. Porque allí juegan futbolito con pelota de trapo y cuando los cactus están en temporada de frutas de iguaraya, los niños van al monte a buscarlas para comérselas y regresan felices.

«Quiero verlos grandes, que estudien, que se superen, que estén bien.»

Al igual que América, la mayoría de los habitantes rurales del municipio de Uribia, que constituyen 96% de la población, vive con sus necesidades básicas insatisfechas. Solo 6,1% en ese municipio tiene acceso a energía eléctrica, 3,5% a servicio de alcantarillado y 5,3% a acueductos. La buena calidad del agua es uno de los factores esenciales para evitar la desnutrición, y en La Guajira rural eso es prácticamente inexistente.

«Las mayores brechas entre el campo y las áreas urbanas se presentan en hábitat (vivienda, servicios domiciliarios)», dice el más reciente informe de la Misión Rural del Departamento de Planeación Nacional. Si bien el informe resalta que solo hay un déficit de luz eléctrica en 10% de los hogares rurales del país, únicamente 53,3% tienen acueducto, y la cobertura de alcantarillado es apenas de 15,6%. La Misión Rural también dice que aunque ha habido reducciones en las últimas décadas, las brechas en acceso a educación y salud también son significativas. Y el acceso no garantiza instantáneamente una buena calidad.

EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL

«Crisis humanitaria en La Guajira» se tituló en 2014 el informe de la Defensoría del Pueblo. Denunciaba lo que el resto del Estado colombiano no quería escuchar, justamente porque lo señalaba como responsa-

ble directo, por omisión o por mala calidad en la atención, de las condiciones de la población más vulnerable del país. El defensor Jorge Armando Otálora hablaba de «hechos que deben avergonzar a toda la sociedad y, en particular, a quienes hacemos parte del poder público y a quienes ejecutan políticas públicas dirigidas a esta población en particular».

Solo para mencionar algunos de los hallazgos del informe, entre las seis comunidades indígenas visitadas por la Defensoría, encontraron que había 2.223 niños y niñas menores de cinco años, de los cuales la gran mayoría no contaba con atención alguna por parte del Estado. Solo 158 estaban en el programa de primera infancia del ICBF, y el programa de nutrición de la gobernación de La Guajira, llamado PAN, tenía cobertura parcial.

La Defensoría constató que las raciones que les estaban dando en las escuelas eran insuficientes, a punto tal que estaban dividiendo un huevo entre dos niños. En varios de los colegios no había neveras para evitar que se pudrieran los alimentos y el agua que consumían no era potable. Además, los programas de recuperación nutricional eran de corto alcance. Por todo lo anterior y más, la Defensoría solicitó la declaración del «estado de cosas inconstitucional» en el departamento.

El hambre tiene muchas aristas y es un problema transversal, pero el diseño institucional para abordarlo hace que la responsabilidad esté dispersa, por no decir diluida, entre tantos actores: ICBF, Ministerio de Educación, de Salud, de Agricultura, Programa Hambre Cero, las gobernaciones y alcaldías, entre otros. «El Estado sigue creciendo, pero cuando baja al territorio, cada programa es una isla y no hay capacidad de coordinar acciones», me dijo un asesor del gobierno en seguridad alimentaria.

Las instituciones se han venido señalando unas a otras como culpables del desastre, y con ello solo han aparecido más problemas. A dos de los líderes indígenas que denunciaron las muertes de los niños wayúu los amenazaron de muerte. Las amenazas son testimonio de que el Estado en Colombia no solo es insuficiente e ineficiente, sino corrupto y criminal. Unos pocos hacen negocios millonarios mientras muchos pasan hambre.

La Defensoría del Pueblo continuó investigando irregularidades en los programas de alimentación para niños en La Guajira, pero también en otros departamentos del país. En la zona del Atlántico encontró bacterias coliformes en los almuerzos escolares, y en el Chocó, irregularidades

en la cobertura que lo convierten en uno de los departamentos con más altos índices de desnutrición. Hace unos años, precisamente en el Chocó, descubrieron que la Bienestarina, el complemento nutricional del ICBF, era revendido como alimento para cerdos.

Tras conocer este nuevo informe, el presidente Juan Manuel Santos pidió al ICBF y al Ministerio de Educación que implementaran un esquema para eliminar la corrupción en sus programas de alimentos. Quizás sabiendo lo que eso realmente significa, la directora del ICBF, Cristina Plazas, salió a los micrófonos y pidió ayuda para combatir lo que llamó una «mafia de los alimentos» dentro de su propia institución. La ministra de Educación, Gina Parody, también pidió a los organismos de control hacer un frente común contra lo que estaba sucediendo.

Las «IAS» (instituciones de control en Colombia, como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría), que quizás funcionan más por competencia de poder que por diligencia en las denuncias, anunciaron que entrarían en acción. La Fiscalía dijo que crearía un grupo de elite compuesto por 60 personas para investigar presuntas irregularidades en 80 contratos por valor de 180.000 millones de pesos (unos 56 millones de dólares) para el suministro de alimentos a la primera infancia entre las entidades del gobierno y operadores privados en toda la costa Caribe. La Procuraduría decidió abrir su propia investigación para indagar tanto en el ICBF como en el Ministerio de Educación, y también en alcaldías y gobernaciones. Y la Contraloría pidió que se decretara la emergencia, en cualquiera de sus modalidades, y recordó que desde 2013 había iniciado cinco procesos para determinar dónde estaban los 6.000 millones de pesos (casi dos millones de dólares) que faltaban del Programa de Alimentación Escolar (PAE), recursos que no salen solo del Ministerio de Educación y del programa general de participaciones, sino también de las regalías nacionales por petróleo y minerales.

LAS RENTAS CRIMINALES

Las denuncias de corrupción en los programas de alimentación para niños durante la gobernación de Juan Francisco Gómez, más conocido como Kiko, en La Guajira, son una nimiedad al lado del prontuario de Gómez, hoy destituido, inhabilitado, acusado y encarcelado mientras se adelanta un juicio por varios delitos. «El gobernador del miedo» fue como la revista *Semana* tituló un artículo de portada en el que retrataba quién era el mandatario guajiro, acusado formalmente de homicidio agravado de varias personas, entre ellas, la alcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, quien fue asesinada a tiros por sicarios el 27 de agosto de 2012 y

que meses antes había señalado públicamente también al gobernador como responsable de la muerte de su esposo y su escolta. Además, Gómez está siendo procesado por fabricación, tráfico y tenencia ilegal de armas y municiones. Algunas de estas armas son de uso privativo de las fuerzas militares.

Dice la revista que Gómez conoció desde joven a Santa Lopesierra, el rey del contrabando, más conocido en el país como «El hombre Marlboro», que llegó a senador de la República por el Partido Liberal. En 2003 fue extraditado a Estados Unidos, donde paga una condena de 25 años de cárcel por narcotráfico. Gómez habría continuado por la senda de su amigo, ya que varios ex-paramilitares lo han señalado como uno de los jefes del contrabando y el enlace del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Después de la desmovilización de las AUC, a Gómez lo vincularon con «Marquitos» Figueroa, dueño de un grupo armado criminal al servicio del narcotráfico, quien fue capturado en 2014 en Brasil, donde se encuentra detenido.

Gómez es el ejemplo de lo que significa un actor armado en el poder, en un departamento donde, dicen, el conflicto armado nunca llegó porque quedaba muy lejos. Y sí, los indígenas wayúu en las rancherías más alejadas se salvaron de los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla o los paramilitares. Ningún frente subversivo o pelotón militar sobrevive por mucho tiempo las duras condiciones del desierto. Quizás esa sea la única razón –vaya consuelo– por la cual los wayúu reclaman al Estado que les devuelvan solo 703 de las casi seis millones de hectáreas que abandonaron por temor a los enfrentamientos o de las tierras de las que fueron despojados intencionalmente los campesinos e indígenas por parte de los grupos armados ilegales, que las querían por razones estratégicas.

Pero que las tierras desérticas de La Guajira no hayan sido botín de guerra no quiere decir que el conflicto armado, o más bien varios conflictos armados, no hayan tenido lugar en la península. Las masacres, los secuestros, los desplazamientos y asesinatos también ocurrieron, y la disputa violenta por captar las rentas económicas del departamento siguen vigentes. La riqueza guajira está en el subsuelo. La minería, especialmente la que produce la mina de carbón de El Cerrejón, la más grande del mundo a cielo abierto, representa 60% de los recursos que genera el departamento. La exportación del mineral le ha generado miles de millones de regalías, pero la bonanza minera no se ha traducido en una mejor calidad de vida para la mayoría de la población guajira.

Además de ser una zona minera, La Guajira es una zona fronteriza, donde se cobra un peaje al narcotráfico, al contrabando de combustible, y últimamente, al de alimentos. Los wayúu encargaban productos alimenticios venezolanos porque les salía más barato que comprar los nacionales. Muchos de los rubros esenciales como harina, café, azúcar y aceite tienen precios controlados en Venezuela y son subsidiados por el gobierno. Los mercados por encargo para los wayúu eran llevados a través de unas empresas cooperativas de camiones. Fue tanta la demanda y el aumento de contrabando de alimentos que, en los últimos años, las cooperativas pasaron de operar 46 camiones a 3.500, y los alimentos comprados en Venezuela llegaron incluso a otras regiones del país.

La renta que deja el comercio ilegal es incalculable, y aunque muchos guajiros llevan años dedicados a esta actividad económica, en todas las escalas, la mayoría no se ha enriquecido. Quizás muchos no lo sienten así, pero las autoridades indígenas, como Gustavo Valbuena, sí lo saben: «La crisis que estamos viviendo hoy en La Guajira se debe a las bonanzas. La bonanza marimbera y del narcotráfico, la bonanza de las regalías del carbón, y la que medio nos salvaba, la bonanza venezolana».

LA LEJANA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La palabra soberanía es difusa en las fronteras. Pero cuando hay crisis, los límites, los controles y las barreras aparecen para defenderla. A finales de 2013, el gobierno venezolano les cerró el grifo a los wayúu. El argumento de los venezolanos fue que su país, que sufre de escasez y desabastecimiento de alimentos, se estaba desangrando por el «contrabando de extracción». Para frenarlo implementó nuevas medidas de control, que incluyeron la suspensión de remesas y mercados desde Venezuela, el racionamiento o cupo limitado de compras de ciertos productos y hasta el cierre de la frontera.

El impacto inicial fue tan fuerte que la Unidad de Gestión del Riesgo del gobierno colombiano tuvo que enviar cajas de comida a ciertas poblaciones. Los «kits alimentarios» alcanzaron para mitigar el hambre durante 15 días y no les llegaron a todos. Mientras tanto, la cancillería colombiana negociaba un convenio para que en la base militar venezolana de Cojoro pudieran venderles alimentos a los habitantes de la región, en pesos colombianos. Pero los wayúu negocian en bolívares. Al convertirlos a pesos, a muchos no les alcanzaba ni para ir hasta Cojoro. «Es un problema más económico que de abastecimiento», dice Luis Mora, funcionario del Plan Fronteras de la cancillería colombiana.

La crisis fronteriza solo evidenció hasta qué punto el Estado venezolano llenaba la ausencia del Estado colombiano en, al menos, siete de los corregimientos del departamento. El uso del bolívar en vez del peso colombiano en esos lugares es la constancia de que los wayúu dependían económicamente del país vecino, no solo para comprar alimentos y gasolina y comerciar sus chivos, sino para trabajos temporales y para recibir servicios médicos. Algunos, por tener doble cédula de identidad, también se beneficiaron con los programas sociales del chavismo.

Las decisiones restrictivas del gobierno venezolano coincidieron con una sequía atípica que se ha prolongado por tres años, lo que impidió que los wayúu pudieran cultivar verduras y frutas en sus huertas. Sin poder cultivar los alimentos y sin tener con qué comprarlos, miles de indígenas empezaron a cruzar el umbral de la pobreza extrema monetaria, que se mide, precisamente, por la (in)capacidad de adquirir la canasta básica de alimentos. La incidencia de la pobreza extrema alcanzó el 28% en La Guajira en 2013, mientras en el resto del país rural era de 19,1% y en las zonas urbanas, de 6%.

Para sobrevivir, los wayúu han empezado a sacar a sus hijos de la zona. Los envían a los internados, donde al menos les garantizan comida, o a vivir a las ciudades más grandes con sus parientes. Que los jóvenes abandonen el campo es un fenómeno que se presenta también entre los campesinos en varias zonas del país. Entre 1999 y 2005, la población en las cabeceras municipales creció a una tasa anual de 2%, mientras que la rural decreció a 0,09%. Así, el mundo rural colombiano se ha ido quedando cada vez más solo. Las razones del abandono del campo son múltiples, pero además de los factores climáticos y económicos, que Colombia puede compartir con otros países de la región, hay uno que le es único: el conflicto armado. Colombia es el segundo país del planeta con más desplazados internos después de Siria. Y no hay gente más pobre en Colombia que los desplazados. Según un informe de 2010 del Programa Mundial de Alimentos, casi 25% de los niños desplazados presentaba desnutrición crónica mientras la cobertura de los programas de ayuda alimentaria solo llegaba a un tercio de la población.

Los desplazados no solo salieron huyendo debido al despojo de sus tierras, las masacres o los confinamientos. Lo han hecho también por otros factores como el reclutamiento forzoso, las minas antipersonas y las aspersiones aéreas con glifosato contra las plantaciones de coca, que terminan arruinando sus cultivos, que tanto esfuerzo cuestan y que se han venido reduciendo por el alto precio de los insumos y la falta de subsidios

y de préstamos agrícolas. En la última década, el sector agropecuario solo creció en promedio 2% frente al 4% del resto de la economía.

Por esa sensación de ausencia de futuro en el campo, los pequeños y medianos agricultores fueron al paro a mediados de 2013. Surgió de manera desarticulada en distintos puntos del país y en un inicio tuvo poca difusión mediática, lo que llevó al presidente Santos a pronunciar la memorable frase: «El tal paro no existe». Pero existió y le dio un sacudón a ese país urbano que no se lo esperaba, aunque era de esperarse. El mundo rural e indígena se levantó, se articuló en lo que luego se llamó Dignidad Campesina y puso en duda el concepto de «soberanía alimentaria», es decir, las acciones y políticas que en teoría los pueblos deben tomar autónomamente para garantizar la producción de sus alimentos y evitar ser arrasados por las dinámicas del mercado internacional. Para intentar calmar los ánimos, el gobierno negoció subsidios y algunos acuerdos de corto plazo, pero no ha avanzado en soluciones estructurales.

Con frecuencia, y sobre todo desde los sectores de izquierda, se señalan los tratados de libre comercio (TLC) como responsables de haber arruinado el campo colombiano. Pero cabe preguntarse en qué condiciones estaba realmente el país antes de firmarlos. Según datos del Foro Económico Mundial, Colombia tiene una de las peores calificaciones en infraestructura vial, ferroviaria y portuaria. Si los costos de producir, transportar y comercializar los alimentos colombianos son tan altos que los guajiros no los pueden comprar, es difícil que esos alimentos puedan competir en el exterior. Así parece confirmarlo un análisis de Fernando Barberi sobre los efectos del TLC entre Colombia y Estados Unidos. A dos años de su firma, la balanza comercial de bienes entre ambos países no solamente se redujo, sino que para el segundo año ya fue deficitaria para Bogotá. Y aunque la entidad gubernamental ProColombia, encargada de promover el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y la imagen del país en el exterior, afirma que hay cientos de productos colombianos que son exportados al país del Norte, el Grupo Proindustria (privado) asegura que el valor de esas nuevas exportaciones alcanzó apenas los 10.000 dólares en 2014.

Por su ubicación geográfica y superficie de tierras fértiles, Colombia es considerada por el Banco Mundial como uno de los siete países con potencial para ser la «despensa del mundo». Pero en vez de incentivar los cultivos, la prioridad de los últimos gobiernos ha sido explotar los recursos extractivos y sembrar caña y palma para generar agrocombustibles. Adicionalmente, hay miles de hectáreas cultivables que están siendo subutilizadas para ganadería extensiva o como lotes de engorde. A pesar

del mal uso de las tierras, en el país hay suficientes alimentos para que ningún colombiano tenga que pasar hambre. Lo dice Gerson Vásquez, encargado de política alimentaria y balance de alimentos de la Dirección de Nutrición del ICBF, quien añade: «Si se sobrepone el mapa de producción de alimentos con el mapa de acceso a esos alimentos, encuentras la brecha de pobreza». Dicho de otro modo, hay un acceso desigual a los alimentos. En las regiones más pobres y apartadas, tanto en el campo como en la ciudad, los colombianos no comen bien o suficientemente bien porque no tienen cómo producir alimentos o porque estos son demasiado caros para comprarlos.

Cerrar esa brecha de pobreza es hacer la paz. Ese es el discurso que se viene acentuando desde que se anunciaron los diálogos entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno nacional en 2011. La firma del acuerdo entre las partes es lo de menos. Lo que importa es que el país quiera hacer «la paz», porque tras décadas de conflicto, no sabe lo que es. Sabe que perdonar cuesta mucho, ¿pero sabe que cuesta más no hacerlo? ¿Sabe que todos esos miles de millones que se han gastado de manera prioritaria en ráfagas de fusil o helicópteros de guerra se hubieran podido invertir en carreteras, en viviendas, en acueductos, en escuelas y hospitales? Se hubieran podido invertir, ante todo, en saciar el hambre de los colombianos, la expresión más dolorosa de todo lo que falta en las tierras del olvido.

EDUARDO DÍAZ URIBE: «EL PROBLEMA DE COLOMBIA ES LA FALTA DE ACCESO A LOS ALIMENTOS»

Catalina Lobo-Guerrero

El economista Eduardo Díaz Uribe lleva varios años tratando de mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Fue ministro de Salud y Educación y director de la Red de Solidaridad Social y del Plan Nacional de Rehabilitación. En la última década se dedicó a diseñar políticas públicas para luchar contra el hambre y creó el programa Bogotá sin Hambre bajo la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón (2004-2007). Luego siguió intentándolo desde el sector privado, como director de la fundación de la empresa de alimentos lácteos Alpina. Es cierto que ha vivido muchas frustraciones a causa de la burocracia y la corrupción, pero aún cree que si se superara la desconfianza, sería posible que el ámbito público y el privado trabajaran de la mano.

¿Por qué hay hambre en Colombia, si se supone que tenemos todas las condiciones para ser un «país despensa»?

Yo lo pondría al revés: si no fuera por las condiciones naturales, deberíamos haber tenido hambrunas como las que se dan en otras partes del mundo. Es decir, lo que ha evitado que el hambre sea más grave en Colombia son las condiciones naturales excepcionales. El problema aquí no es de diversidad o disponibilidad de alimentos. Es un problema de acceso, ingresos y precios, y hábitos alimenticios. Incluso en zonas donde se ha mejorado el acceso mediante una disminución del desempleo, eso no necesariamente se está traduciendo en buena nutrición, a pesar de que el Estado colombiano ha venido desarrollando de manera creciente un dispositivo cada vez más grande para suplir esas falencias.

¿Cómo ha sido la evolución de la idea de que el Estado colombiano debe velar por el derecho a la alimentación?

El primero que distribuyó alimentos en los colegios de Bogotá fue Jorge Eliécer Gaitán cuando fue alcalde (1936). Ahora, lo ideal sería que eso no

ocurriese sino que los niños pudieran alimentarse adecuadamente en sus casas y que el Estado no tuviera que suplir esas necesidades. En el programa Bogotá sin Hambre teníamos tremendas dificultades con los jóvenes. No querían ir al comedor comunitario porque les daba vergüenza. Les parecía ofensivo ir a un lugar con un cartel de «comedor comunitario». Por eso ordenamos quitar esos avisos.

¿Pasar hambre es un estigma por tener que admitir que no tienes los propios medios para poder comprar los alimentos?

Más que un estigma, la gente prefiere su libertad. Prefiere tomar sus propias decisiones. La pobreza esclaviza y hace depender de este tipo de cosas, que hay que hacerlas, pero ojalá estos dispositivos fueran lo más pequeños posibles. Ahora, si bien es cierto que es mejor enseñar a pescar que regalar pescado, también es cierto que al que se está ahogando de nada le sirve la clase de natación. Si hay niños que están muriendo de hambre, tenemos que desarrollar programas de atención. Pero también debemos trabajar para que esa situación se mejore en el tiempo y que la gente pueda ejercer su autonomía.

Se ve que las políticas y el diseño de programas en salud alimentaria están enfocados en los más chiquitos, como una inversión en el futuro del país. Pero no son suficientes, y me queda la duda de si la nutrición y la seguridad alimentaria realmente están siendo la prioridad como política de desarrollo y superación de la pobreza.

Cuando el zapato aprieta, aprieta en todas partes, no solo en el dedo gordo. En la Fundación Alpina, antes de retirarme, hicimos el ejercicio de mirar esto que dices. El foco de la Fundación es la seguridad alimentaria, y en algunos casos lográbamos poner en funcionamiento proyectos de desarrollo productivo, que implican el mejoramiento de ingresos para las comunidades y el mejoramiento del suelo, que se traduce en más productos, que a su vez se traduce en más ingresos. Y entonces nos satisfacíamos con esos indicadores. Pero luego comenzamos a reflexionar que nos estábamos quedando en los indicadores del proceso, no en los indicadores del impacto, y llegamos a una conclusión clara: la variable por la cual debemos leer si los proyectos tienen impacto o no es el estado nutricional de los niños. Ahora claro, cuando hablamos de priorizar la primera infancia, estoy de acuerdo, hay que hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque no basta con atender la primera infancia. ¿Los viejitos qué? ¿No tienen tasa de retorno? O si es primera infancia, de cero a cinco años, el que tiene seis años se jodió. Entonces hay que atender la primera infancia sin dejar de atender a los demás. Ahí hay un debate acerca de lo que es focalización, política universal y política de derechos.

Si no lo hacemos dentro de la lógica de los derechos, esa niña que atendimos de los cero a los cinco años, y que por eso tuvo una mejor posibilidad de formación de su cerebro, va a estar mal nutrida de ahí en adelante, y va a retornar al sistema como una madre en ese estado, y con un feto desnutrido. Hay que persistir en la lógica del derecho. Aquí se focaliza con el argumento de que los recursos no son suficientes, pero cuando la focalización se convierte en la herramienta para eludir la política de derechos, es sumamente peligrosa.

La focalización, entonces, ¿termina convertida en exclusión?

No digo que no haya que hacer políticas focalizadas, pero cuando la lógica es focalizar para ajustar las metas a un presupuesto, nos jodimos. Lo que hay que hacer no es reducir el foco, sino ampliar el presupuesto. Y nuestros países, en la lógica de la cooperación internacional y la banca mundial, han convertido la focalización en el objetivo. Es todo un debate. A nosotros nos pasaba que en los comedores comunitarios teníamos que seleccionar a los más desnutridos de los desnutridos porque el comedor tenía cupo para 120 personas y no 121.

Hablemos de ese programa de comedores comunitarios y de la situación de pobreza que encontraron en Bogotá, que además de ser una capital con muchos pobres recibió justo a finales de los años 90 mucha población desplazada de otras regiones.

Nosotros (en la Alcaldía de Bogotá) en ese momento entendimos varias cosas. Primero, que había una gran dificultad de acceso a los alimentos por parte de un sector importante de la población, que accedía en condiciones precarias o irregulares, y que era necesario actuar frente a eso. La condición de extrema pobreza afectaba a un poco más de 20% de la población. Eso significa que esas personas solo satisfacían una de las necesidades básicas. En esa situación dijimos que íbamos a caminar con ambos pies. Entonces, por un lado hicimos los comedores comunitarios, encaramos la alimentación en los colegios y los programas de complementación y recuperación alimentaria. Y en las redes hospitalarias creamos los programas para mujeres gestantes y lactantes. Digamos que esos serían los programas que se podrían considerar «clásicos». Por otro lado, nos pusimos a mirar cuánto costaba en Bogotá un plato de alimentos para una familia, la canasta básica mínima necesaria recomendada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Encontramos que los ingresos de los hogares pobres no permitían acceder a esa canasta. Entonces nos preguntamos ¿qué podemos hacer? ¿Aumentar los salarios y los ingresos? Es un tema supremamente importante pero no podemos cargarle a un programa de seguridad alimentaria el

tema de los ingresos. No teníamos las herramientas ni los instrumentos. Pero lo que sí podíamos hacer era incidir para que los precios de los alimentos no crecieran a la velocidad que estaban creciendo, e incluso para que disminuyeran. Nos pusimos a mirar la relación de la ciudad con las zonas y regiones que producían los alimentos que llegaban a ella, y encontramos que a menos de 300 kilómetros se produce casi 60% o 70% de los alimentos que consume la ciudad. Y sin embargo, esos alimentos tenían 30% o 40% de costos que podían reducirse.

¿Qué hacía entonces que los alimentos fueran —y sigan siendo hoy— tan caros?

Una excesiva intermediación y una serie de ineficiencias logísticas. Por ejemplo, a Bogotá ingresaban productos con desechos en los camiones. ¿Qué sentido tenía que a Bogotá llegara el racimo completo en vez del plátano en buen estado? También encontramos que los camiones que se utilizaban eran muy pequeños, cuando se podían utilizar camiones más grandes con menor costo por kilómetro. Entonces empezamos a identificar una cantidad de ineficiencias evitables en toda la cadena. Pero no hicimos todo nosotros, fue un trabajo que empezó el alcalde Antanas Mockus, dentro del Plan Maestro de la ciudad, para saber dónde debían ubicarse de forma eficiente las plazas de mercado.

¿Y cuáles fueron el impacto y el resultado?

Fue un trabajo articulado absolutamente innovador. Tuvimos más de 300 comedores comunitarios pero no construimos ninguno. Solo nos pusimos a trabajar con las comunidades que tenían ya iniciativas, con las iglesias, con las organizaciones comunitarias, y nos aliamos con el sector privado y las cajas de compensación (entidades privadas sin ánimo de lucro que prestan distintos tipos de servicios como salud, recreación, etc.). Hicimos alianzas bellísimas entre lo público, lo privado y las comunidades, y llegamos a cerca de un millón de personas diarias. Pero también trabajamos con los tenderos. Hicimos un inventario de todas las tiendas de barrios en nueve de las 20 localidades de Bogotá, y a partir de eso iniciamos un trabajo de organización. Empezamos a hacer compras colectivas en los barrios para que en vez de que cada comerciante comprara por su parte, fueran a hacerlo todos en grupo con un camión. Todo eso después se quedó en nada... A los que vienen a hacer negocios poco les interesa lo que hicimos.

Precisamente, la corrupción de entidades del gobierno y los escándalos de los programas de seguridad alimentaria son moneda corriente. ¿Cree que el mismo diseño de esos programas, que tercerizan tanto el servicio, favorece las prácticas corruptas?

Eso hay que trabajarlo con las organizaciones comunitarias. No para que hagan pérdidas —no tienen por qué tener ánimo de pérdida—, sino porque es una oportunidad para fortalecer procesos de la ciudadanía. La tercerización con operadores privados, si no es un proceso transparente, con controles, ofrece muchos riesgos. Muchas veces el argumento que esgrimen es que hay que hacerlo así para hacer economías de escala. Pero las economías de escala traen deseconomías de aglomeración. Por ejemplo, el ICBF hace una licitación pública para comprar leche. La ganan tres empresas de la industria lechera. Y claro, la unidad va a salir más barata, porque se ahorra plata. Pero esa economía de escala, por estar todo aglomerado, generó una deseconomía: se cerró la oportunidad, desde el punto de vista económico, de abrir compras locales en los departamentos a los productores locales.

En teoría hay un programa del gobierno colombiano que está tratando de hacer eso con la leche, porque precisamente los sectores productores del campo están pidiendo que no los ignoren más.

Claro, localmente deberíamos generar esos procesos. Ahora, es mucho más complejo y costoso. Tú puedes comprarle más fácilmente a un proveedor que te entrega el producto aséptico y en una cajita, la metes en un camión y la llevas adonde quieras, que a un productor local que tiene malas prácticas agropecuarias. Y esa leche, si no la trabajan previamente, ofrece riesgos de enfermedad. Pero hay que construir estas alternativas, o al menos intentar hacer ambas cosas.

Bogotá es la capital del país y tiene unas particularidades que no se aplican para el resto del país. El hambre urbana es una cosa y el hambre rural es otra. La oferta institucional no está diseñada para la realidad rural. Entonces, no es un tema solo de ingresos y acceso, sino que los programas que se diseñan para mitigar las desventajas con las que vives si eres un habitante rural no te llegan. ¿Cómo se puede repensar una política pública de seguridad alimentaria enfocada hacia el hambre rural y que funcione?

Sí, mira los informes del Censo Agropecuario. El conflicto por la tierra es mucho de lo que explica esa situación, y la concentración de la tierra ha aumentado en vez de disminuir. Aquí lo que hubo fue una contrarreforma agraria. Entonces, el país tiene que resolver primero el problema de la tenencia de la tierra. Y eso es parte importante de la posibilidad de construir la paz. ¿Cómo hacerlo? La propuesta que nosotros hicimos desde Bogotá —no quiero decir que sea la mejor o la única— la planteamos así: si la seguridad alimentaria de los habitantes de esta ciudad depende de lo que producen miles de familias campesinas de la región,

esa debilidad de esas familias campesinas es al final una debilidad para la seguridad alimentaria de Bogotá. Si esos productores campesinos se debilitan por efecto de la violencia, del verano, el invierno o la pobreza, eso está afectando, perjudicando, la seguridad alimentaria de la ciudad.

¿Pero qué cosas puntuales puede hacer la ciudad por el campo, además de comprarle los productos?

Nosotros propusimos que el distrito apalancara fondos de Finagro, la financiera agrícola, para subsidiar intereses a productores de alimentos campesinos. Logramos avanzar en algo, pero no ha prosperado porque después llegó el alcalde Samuel Moreno y ahí hubo un quiebre. Pero es parte de lo que se debe retomar. Aunque esos productores estén fuera del territorio político y administrativo de Bogotá, si se debilitan, nos debilitamos todos. Hay un avance reciente, que tiene este punto, que se llama la Región Ampliada de Planificación. El gobierno nacional introdujo una nueva norma que permite hacer alianzas entre regiones. La gran dificultad que nosotros teníamos era que no podíamos invertir plata de Bogotá en otras regiones; eso se llamaba peculado técnico. Pero ahora aparece esa herramienta y Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima generaron una alianza que se llama la Región Ampliada de Planificación, y uno de los temas que aborda es seguridad alimentaria.

Hablando de soberanía alimentaria y el tema de los costos, muchos de los productores se quejan de que la falta de infraestructura en el país también hace muy complicado que puedan competir con los productos que se importan gracias a los tratados de libre comercio (TLC). Con eso hubo gente que dijo «Yo ya no puedo producir más».

Claro, pero no es solo un problema de los TLC. Yo creo que los mercados funcionan. Lo que pasa es que hay que democratizarlos.

¿Cómo se hace para que esa participación en el mercado sea más democrática?

Yo no soy amigo de ese tipo de mecanismos de subsidiar con precios como en Venezuela. Puede haber compras públicas y otros mecanismos que pueden regular, pero la manera es ganar en competitividad.

¿Y con los TLC cómo se puede competir entonces?

Con tecnología, con desarrollo, con buenas prácticas, con investigación. Y hay que acompañar con créditos.

Pero lo que uno ve es que las políticas para el agro y el sector productivo, y sobre todo para los pequeños campesinos, quedaron como en el olvido.

Por eso el primer punto acordado entre el gobierno y las FARC en La Habana es ese [N. del E. Entre los puntos acordados está la creación de un Fondo de Tierras para repartir apoyos y subsidios a productores agrícolas, mejoras en servicios públicos en sectores rurales, zonas de reservas campesinas especiales, etc.]. O nos metemos en serio o nos jodemos. Pero eso hay que trabajarlo, hay que hacerlo, y para eso se necesita plata y tecnología, y en muchos casos pasar del discurso a la acción. Se necesita también a las universidades, y personalmente, creo que hay que abandonar ciertas posturas. A mí me pasó en un comedor comunitario de Ciudad Bolívar que llegó un tipo con el cuento de que los huevos que estaban recibiendo los niños no eran huevos campesinos. Y sí, no son huevos campesinos. No es la gallina feliz que cacarea y mira el sol a las 6 am y se sacude las patas. Es una gallina enjaulada que es una máquina de producir huevos. Pero yo no quiero tomar la decisión de qué niños son los que salen del programa si les damos solo ese huevo feliz porque su precio es más alto. Si los campesinos nuestros se dedican a una economía de subsistencia, a la gallinita feliz, nos jodimos. ¿Quién alimenta a los bogotanos? ¿Los gringos? Aquí hay que introducir modernidad, respetando el ambiente. Y modernidad no significa la gran plantación, pero tampoco significa preservar el atraso. Y hay otros discursos como el de la quinua, por ejemplo; eso de que debíamos volver a la quinua porque los españoles acabaron con ella y nos trajeron la costumbre del pan. Ponga a los niños en los comedores escolares a comer papilla de quinua, porque es soberanía alimentaria, y te la devuelven.

Abí hay un debate que no es solo de discurso ideológico sino de usos de la tierra...

Que el tema de la tierra es la causa de lo que estamos viviendo, totalmente de acuerdo. Que los TLC tienen cosas buenas y cosas malas, discutámoslo. Pero hay que hablar también de prácticas, como la pasteurización de la leche. Pasteur no era un agente del imperialismo yanqui ni de las multinacionales.

Siempre se dice que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad alimentaria, pero hay una profunda desconfianza frente al Estado, sus programas, su ejecución, su eficiencia. ¿Qué papel deben jugar en la seguridad alimentaria otros actores, por ejemplo las fundaciones empresariales como en la que usted trabaja?

El tamaño de los proyectos de las fundaciones es una cosa ínfima al lado del problema, pero sí hay un papel que cumplir en términos de

aprendizajes, de contribuir a mejores políticas públicas y de experimentar. Y tiene más valor el producto de metodologías y aportes para que sean replicables por terceros, públicos y privados, que el proyecto en sí mismo. Ahora, una de las grandes dificultades que tiene este país es la desconfianza entre todos. No es solo de las comunidades hacia las empresas, sino de las empresas hacia el Estado. Y del Estado hacia las empresas. Y de las empresas hacia la comunidades. Porque hay empresas que se satisfacen —y excúseme por lo que voy a decir— con limpiarles los mocos a unos niños y tomarse una foto linda, y se ganan el premio de la responsabilidad social empresarial en un cóctel en Cartagena. Pero ahora, ¿qué va a hacer el sector privado de cara al proceso de paz? ¿Se va a quedar de espectador, o se va a involucrar?

ABSALOM MACHADO: «SE VIENE UN CAMBIO DEL CONFLICTO ARMADO POR LOS CONFLICTOS SOCIALES»

Catalina Lobo-Guerrero

Hasta hace pocos años, el nombre del economista Absalom Machado solo era reconocido entre los académicos interesados en el desarrollo agrícola de Colombia. Eso cambió en 2011, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) le pidió a este experto, profesor de la Universidad Nacional, que coordinara el Informe de Desarrollo Rural, un diagnóstico crítico sobre la situación del campo colombiano. El informe, titulado «Razones para la esperanza», llegó hasta las manos del presidente Juan Manuel Santos, y a pesar de que en sus discursos Santos dijo que tendría en cuenta las valiosas recomendaciones del profesor Machado y los hallazgos del informe, es poco lo que el país ha avanzado en el tema. Así y todo, Machado conserva su optimismo.

El informe sobre desarrollo rural que usted coordinó hace unos años decía que Colombia tenía tierras de sobra y aptas para cultivar alimentos, y sin embargo eso no estaba pasando. La situación no ha cambiado desde entonces. ¿Por qué no se produce más comida y de qué manera incide eso en que haya hambre entre los más pobres del país?

El informe tenía un enfoque de la seguridad alimentaria más desde el lado de la oferta, es decir, la disponibilidad de tierras productivas, y menos del lado de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, la situación es que hay tierra disponible pero hay tres problemas que no están resueltos. Uno de ellos es el acaparamiento y la concentración de la tierra en manos de gente que no quiere utilizarla para producir sino para especular con ella. El impuesto predial es tan bajo en el sector rural que es un medio de acumulación muy atractivo para los que tienen recursos y acumulan rentas hacia futuro, a través de la valorización. No hay cifras sobre cuánta tierra está en el mercado especulativo, pero eso se puede volver cada vez más fuerte. Si se hace el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y disminuye la presión y el acoso de las guerrillas, esas tierras se van a

valorizar mucho más. El segundo problema es el mal uso del suelo, o lo que se llama «conflictos de uso». Hay una cantidad enorme de tierra dedicada a la ganadería de extensión o a ganadería no tan productiva que debería estar dedicada a la producción agrícola de alimentos.

¿Por qué pasa eso?

Yo diría que el Estado nunca ha tenido una política de ordenamiento productivo de las tierras. Se ha dejado que el mercado intervenga libremente y no ha habido detrás una política de seguridad alimentaria que permita crear incentivos para que la gente reconvierta tierras de ganadería extensiva, mal utilizadas o de muy baja productividad, en tierras de producción de alimentos con tecnología moderna.

Se dice que la única forma en que la ganadería es rentable es que se haga en grandes extensiones de tierra, y ahí impera la lógica de cuánto se gana. Y entre más tierra tienes, más ganas.

Sí, detrás de las grandes extensiones está la codicia por la tierra. Por el carácter especulativo que genera rentas institucionales con muy malos impuestos, pero también porque la tierra sigue siendo fuente de poder político en muchas regiones de Colombia. Sobre todo en las regiones donde no existen desarrollos industriales, que son relativamente atrasadas y donde el poder de los grandes ganaderos es muy fuerte.

¿La tierra como fuente de poder e influencia política regional es el tercer factor?

El tercer factor es que hay una gran inseguridad en los derechos de propiedad, que hace que mucha gente con tierras no tenga títulos suficientemente claros, legales. Y por eso tiene dificultades para acceder a créditos, porque los bancos no prestan si usted no tiene título, una garantía con una escritura legalmente formalizada, y no tiene acceso a otros servicios del Estado simplemente por estar en la informalidad. Se dice que cerca de 50% de los predios está en la informalidad. Son datos del Ministerio de Agricultura y lo ha mencionado también el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Misión Rural.

Esa informalidad jurídica se ha prestado para otro tipo de prácticas corruptas de apropiación y robo de tierras. Incluso algunas quedaron a nombre de narcotraficantes o testaferros de paramilitares y guerrilleros, y es algo que se hizo con la firma de las instituciones que se supone se encargan de regular eso, como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural o la Superintendencia de Notariado y Registro.

¡Es terrible! El Estado no tiene las normas ni los mecanismos para agilizarlo y hacerlo de una manera consistente. Ese lío jurídico de la propiedad aquí no está resuelto y yo creo que eso es un impedimento grave para que se haga un buen uso de la tierra.

Pensando en la manera como el conflicto armado ha incidido en todo esto, ¿existe un análisis de cuántas tierras cultivables dejaron de producir a causa del control o la influencia de actores armados en ciertas zonas?

No es un dato muy significativo porque la guerrilla estaba más en la periferia, donde se cultiva básicamente coca y hay bosques y una agricultura muy de subsistencia. La parte gruesa de la producción agrícola está en el interior del país, donde a pesar de que existen guerrillas no han tenido incidencia en la producción. Los empresarios agrícolas se acomodaron al modelo pagando vacunas [N. del E.: pagos por extorsión] y una de las cosas curiosas para el ojo extranjero era cómo semejante conflicto no había disminuido la producción de las grandes empresas.

En las zonas de la costa atlántica del país sucedió también con los ganaderos, los bananeros y otros sectores que se aliaron con los paramilitares o pagaron sus extorsiones.

Así es, eso no afectó la producción. Pero a los pequeños productores sí los afectó porque los desplazaron o les quitaron las tierras. Y eso afectó algunos rubros, pero solo en el nivel local, no en el nivel nacional.

La tierra también fue utilizada en algunas zonas específicas como botín de guerra para cultivos ilícitos o como corredores de droga, o porque fueron sembradas de minas. Eso tuvo que afectar la producción local de los campesinos, ¿o no?

En esas zonas donde tanto los paramilitares como la guerrilla establecieron esos corredores, la tierra dejó de cumplir su función social y fue instrumento de guerra. No cultivaron, o se la dieron a sus testaferros para que la cultivaran. Eso afectó la producción de alimentos en esas áreas. Hay algunos estudios que dicen que un millón y pico de hectáreas salieron de la producción, pero esas cifras me parecen exageradas. Hay un problema de información. Si uno mira los productos que provienen de la economía campesina —plátano, yuca, frijol, en buena parte maíz y ñame— y mira los datos de producción en los últimos diez años, durante la fase intensa del conflicto, no se observa que esa producción haya disminuido en el nivel global. Porque si fuera cierto que la producción se afectó significativamente, encontraríamos precios más altos. Unos dicen que las importaciones sustituyeron muchos de esos productos, entonces no se nota el efecto, pero entonces, si eso fue así, miremos las

cifras de producción. Allí no se encuentra mucha diferencia. Entonces, o las cifras de producción que tenemos están mal o estos estimativos tienen problemas metodológicos.

¿Las cifras dicen que efectivamente en Colombia se está produciendo menos cantidad de alimentos debido a esta serie de factores?

En los últimos años la producción de alimentos ha estado por debajo del promedio y en lugar de mejorar, en algunos años ha empeorado. Pero hay que mirar cifras de productos en particular, porque las cifras globales son engañosas. Por ejemplo, la producción de café aumentó 50% en los últimos dos años, y eso sumado al PIB da un aumento grandísimo en la agricultura, pero al lado encontramos una disminución notoria en la producción de otros rubros.

Cuando hizo el informe de desarrollo rural en 2011 todavía no se había anunciado públicamente que se iniciaba un proceso de paz con la guerrilla de las EARC, y que el primer punto en la mesa de negociación era el uso de la tierra en Colombia y una reforma agraria. Al empezar los diálogos, el proyecto de Ley de Desarrollo Rural, que se supone iba en esa dirección, quedó en veremos y sigue en veremos porque los diálogos en La Habana no han terminado. ¿Qué opina de eso?

Efectivamente, todo eso se frenó mientras en La Habana no se hiciera una apuesta política por lo rural. Ante cualquier proyecto que llegara al Congreso, los congresistas iban a decir «No, esperemos un momentico a ver qué van a discutir allá, porque de pronto va en contradicción».

Me pregunto si los diálogos de La Habana no sirvieron también como excusa para no hacer mucho mientras tanto en lo rural.

En el discurso político se siguió hablando de la reforma rural, del pago de la deuda social con el campo, pero en la realidad no se hizo absolutamente nada y creo que en lugar de avanzar se siguió retrocediendo en términos de política agraria. Porque el gobierno de Juan Manuel Santos se dedicó a darles subsidios a los impulsores de las protestas campesinas para que no le armaran un zafarrancho permanente con esos paros, pero son subsidios que no tienen ningún impacto o efecto sobre la producción o lo productivo. Fue un contentillo de corto plazo y ahí se quedó la política agraria.

¿El paro campesino fue un reclamo de un sector que quería pedir qué cosa?

Fue una protesta para tratar de mostrarle a la sociedad, no solamente al Estado, que este sector de pequeños propietarios tiene una problemática

muy compleja, muy estructural y que ha sido prácticamente abandonado por la política pública. Pero eso se combinó con una coyuntura de mercado, de caída de precios y rentabilidad para algunos productores, por ejemplo, los cafeteros, los paperos.

Hubo sectores políticos que se sumaron a ese paro.

Fue una combinación. Hubo sectores políticos metidos, pero esa protesta campesina tiene otros elementos importantes. Uno es el surgimiento de nuevos líderes en el sector rural, distintos de los antiguos líderes de organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro). Ambas organizaciones han estado en el corazón de la lucha campesina y la tierra desde los años 60, y sus miembros fueron perseguidos y asediados, incluso señalados como insurgentes, pero ese liderazgo tradicional que ha mantenido un discurso muy quedado, muy ideológico, está agotado. Otro elemento es que, me parece, se trata de la apertura de un espacio político, porque va a llevar a que todos estos nuevos líderes, y los pequeños productores, busquen representación política. Y tercero, es un preludio de que en el posconflicto va a haber innumerables protestas campesinas para exigirle al Estado el cumplimiento de ciertos compromisos. Lo que se viene en Colombia, al fin, es un cambio del conflicto armado por los conflictos sociales.

En el momento en que ustedes presentaron el informe había un gran entusiasmo, y el gobierno decía que iba a acoger sus propuestas. Hasta el presidente y el ex-ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo mencionaban el informe como un diagnóstico muy importante para el país, y había una sensación de que por fin le iban a dar su lugar al campo. ¿Por qué no pasó?

Creo que hay una debilidad política del Ministerio de Agricultura. No tiene esa fuerza dentro del Estado para comprometer al gobierno con una política pública coherente y clara sobre lo rural. Entonces, claro, prevalecen la minería, el petróleo y la gran inversión de proyectos en la alta llanura. Privilegiaron eso, en lugar de valorizar lo rural y la importancia de la pequeña producción.

Los campesinos colombianos parecen tener todo en contra para producir alimentos: el conflicto armado, las condiciones económicas y jurídicas. Pero si no producen, los primeros que no comen son ellos.

La informalidad de los mercados de trabajo influye en los ingresos de las familias. Por ejemplo, más o menos 80% de los trabajadores rurales

reciben menos del salario mínimo, una cifra espantosa. El empleo informal en el sector rural es casi de 70%. Es gente muy pobre.

¿Sigue vigente esa cifra vergonzosa del informe que indicaba que 30% del campesinado colombiano vivía en situación de pobreza extrema?

Sí, esas cifras están hoy entre 28% y 30%. Y el nivel de pobreza multidimensional con las nuevas mediciones es como de 42%.

¿Los campesinos colombianos o los sectores rurales son los que más sufren de hambre?

Aguantan hambre. Hay problemas de malnutrición fuerte porque no hay dietas equilibradas. Comen plátano y yuca todos los días. No tienen con qué comprar carne. Tienen problemas de balance nutricional. No conozco ningún campesino que se muera de hambre porque siempre tienen al compadre al lado, al vecino, pero sí tienen mala calidad de vida y de alimentación.

A muchos de ellos la pobreza, y no solo el conflicto armado, los sigue sacando del campo.

Son pobres en el campo y pasan a ser miserables en las ciudades. Llegan a las ciudades y siguen bajando porque nadie les da empleo, y entonces se van al mercado informal o algunos se meten en grupos delincuentes para poder vivir.

Ustedes titularon ese informe «Razones para la esperanza». Después de lo que ha pasado en el sector rural de Colombia en los últimos años, ¿todavía mantiene la esperanza?

Sigo creyendo que sí, porque aquel es un titular de largo plazo. No podemos perder la esperanza de que este país tome una decisión política y resuelva los problemas estructurales del espacio rural si quiere tener una paz estable y duradera. Si no, estamos perdidos porque volveremos a los mismos conflictos. Y creo que no estamos partiendo de cero en Colombia y en el sector agrícola. Ya hay cosas construidas, experiencia, capacidad y gran potencial productivo. Si el Estado se lo toma en serio, esa esperanza se volverá una realidad.

AGUA A CAMBIO DE VOTOS

Catalina Lobo-Guerrero

En la Alta Guajira, en el norte de Colombia, los indígenas wayúu sufren dos males que abonan el terreno a la pobreza y el hambre: una sequía crónica que mata a animales y niños, y el olvido deliberado del Estado. Solo se sabe que hay vida allí por los retazos aislados de bolsas plásticas que se enredan en las ramas de los árboles. Los carros-tanque que transportan agua potable no llegan hasta la zona a causa de las dificultades que presentan los caminos, pero también porque esas comunidades no están en la lista de los políticos que deciden a quiénes se les suministra agua y a quiénes no.

El viento sopla fuerte y la manta wayúu de Gertrudis Mengual se pega a su cuerpo. Gertrudis camina lento y va dejando la marca de sus suelas en la tierra arenosa. Se detiene cuando encuentra otras huellas, de personas y animales, sobre la superficie agrietada de lo que era un jagüey [charco de agua] con agua de lluvia. Hace seis meses ese jagüey se evaporó, y sin agua, no hay comida.

Los wayúu del departamento colombiano de La Guajira, en el rincón superior de Sudamérica, son indígenas seminómadas, acostumbrados a ir de un lugar a otro con sus rebaños. En la temporada de lluvias cultivan ahuyamas, calabazas, frijol, maíz, pepinos y patillas en pequeñas huertas a las que llaman apuín, o rosas. Como no ha llovido desde hace tres años a causa del fenómeno de El Niño, no hay rosas y no hay jagüeyes. La sequía ha sido tan brava que los indígenas han empezado a quemar los cardones de los cactus, para luego quitarles las espinas y darles lo que queda de comer a los animales. Muchos chivos y ovejas han muerto de hambre y de sed. Cientos de niños de la comunidad también.

Es en la Alta Guajira donde están las comunidades rurales de Colombia más afectadas por la sequía y la pobreza. Las familias viven dispersas, alejadas unas de otras por un laberinto de cactus y árboles trupillos, que son resistentes a la falta de agua. Solo se sabe que hay vida allí por los

retazos de bolsas plásticas que se enredan en las ramas o por las hilachas de cuerdas que los niños colocan atravesando las carreteras cubiertas de arena. Los retenes infantiles son una oportunidad para pedir algo de plata o de comida a los pocos viajeros que se atreven a andar por la zona.

Carlos Hernández, un conductor de la Cruz Roja colombiana que conoce bien estos caminos a punta de perderse, dice que la carretera se traga las llantas y los guardabarros. Por eso, los carros-tanque que transportan el agua potable no llegan hasta allí, pero también porque esas comunidades no están en la lista del concejal que determina a quién se le suministra agua y a quién no. Así se lo contó a Gertrudis uno de los choferes de un carro-tanque. Agua a cambio de votos.

Es tanta la politiquería que han hecho con las necesidades de los guajiros, que cuando Gertrudis y Carlos empezaron a llevarles tanques y filtros de agua en una camioneta de doble tracción con el logo verde de Oxfam, la gente preguntaba de qué partido político eran y por quién había que votar en las próximas elecciones. Ellos les explicaban que el logo verde, que Gertrudis lleva bordado en sus mantas wayúu, no era de ninguna tolda política sino de una organización humanitaria internacional que trabaja en todo el mundo de la mano de las comunidades para erradicar la pobreza. El mismo gobierno colombiano les pidió a las organizaciones internacionales que lo apoyaran con programas de emergencia ante lo que se percibe ya como una crisis humanitaria de lento desarrollo.

VIVIR SIN AGUA

Para Yenifer Joana Fernández, una joven mujer wayúu, el mayor problema que enfrentan ahora es la falta de agua. Yenifer vive en la comunidad de Matajaret, en Porshina, palabra que en wayúu significa «mucho barro», y que le hace honor al lodazal en que se convierte este corregimiento cuando llueve. Pero como no llueve, no han sembrado las rosas, así que comen lo que pueden comprar. Por lo general, carbohidratos. «Desayunamos arepa, almorzamos espagueti o arroz y tomamos chicha. Si hay azúcar, con azúcar, si no, no».

La bebé de Yenifer es pequeña en tamaño para su edad y tiene el pelo amarillo, lo que refleja una pobre nutrición. Dice Yenifer que ahora está mejor, que la bebé bajó de talla cuando a ella le dio la enfermedad de Chinkungunya hace ocho meses, y por eso, además, paró de amamantarla. Ambas viven en la ranchería de su tío Beniberto, junto con la

familia de él y la abuela. Los ombligos de todos están enterrados allí, siguiendo la tradición wayúu para marcar el lugar de nacimiento.

Beniberto es una autoridad indígena y aunque él está en mejores condiciones que muchos otros de la comunidad, tampoco la ha tenido fácil. Dice que lo que más le preocupa es que la gente se está robando los animales de los otros, sobre todo los que están mejor, porque nadie compra un chivo flaco. Los roban para venderlos en Uribia o en Maicao, pero también los están robando para comérselos. Resulta paradójico que no quieran matar a sus animales cuando tienen hambre, pero en la cultura wayúu, los chivos son animales especiales, que se venden o se sacrifican cuando hay invitados o una boda, pero no se tienen chivos para comer su carne (frichi) a diario. «Sentimos hambre, pero nos da pesar tener que matar al chivo», dice Beniberto. En la familia han empezado a matar a un chivo cada 15 días por necesidad, por eso les quedan 50 chivos de los 200 que tenían.

A la ranhería de Beniberto va de vez en cuando Remedios Ipuana. Remedios tiene el pelo enredado, cubierto por una pañoleta raída. Habla con un hilito de voz y tiene la mirada triste. No debe tener más de 40 años, pero se ve envejecida. Cuando Gertrudis le pregunta en wayúunaiki por su edad, dice que no sabe cuántos años tiene. No tiene esposo, no tiene trabajo, ni ayudas de ninguna clase. Depende de lo que la familia Fernández y otras familias puedan darle para tomar y comer a ella y a sus hijos. «Tengo hambre y mis niñas deben estar llorando», le dice Remedios a Gertrudis.

Remedios ha estado embarazada diez veces, pero solo cinco de sus hijos sobrevivieron. Explica que tuvo dos abortos y tres de los que nacieron murieron antes de cumplir tres años. Al preguntarle por las causas, dice que a uno le dio diarrea, otro se murió en un accidente y el tercero fue por «mal de ojo». A ninguno lo llevó al médico porque no tenía cómo ir. En Porshina, además de no haber agua ni luz, tampoco hay puesto de salud. El caso de Remedios es uno de los que más preocupa a Gertrudis. Fue hasta la casa de Remedios y encontró que no tiene paredes y está en un estado de abandono total. «La familia no la ayuda y ninguno de los hombres con los que tuvo los hijos respondió por ellos», dice Gertrudis. Cuando Remedios sale a pedir comida, deja a los niños solos. Su hija de cuatro años, Dailín, aún no sabe caminar.

Aunque la cultura wayúu es matrilineal, son los tíos maternos los que tienen poder dentro de las comunidades. Y aunque se supone que los tíos deben velar por las mujeres de la familia, cuando estas se casan,

dependen de los maridos. En la cultura wayúu un mismo hombre puede tener varias mujeres; algunas veces viven todas juntas, a veces no. Y si el esposo o el compañero las abandona, sus hijos quedan en una situación muy vulnerable porque solo dependen de ellas para su alimentación.

CRISIS DE FONDO Y DE EMERGENCIA

En la región existían desde hace décadas 11 molinos de viento con los que los wayúu podían bombear el agua de pozos naturales. Pero la mayoría ya estaban dañados o funcionaban mal cuando llegó la sequía, y no pueden utilizarlos para sacar las aguas subterráneas que corren por la zona. «Es puro abandono del Estado», dice Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia. Pesquera es española y la primera vez que visitó la zona le preguntó a un anciano indígena cuál había sido el último presidente que había ido a visitarlos. El anciano solo podía recordar al general Gustavo Rojas Pinilla, que gobernó hace más de 50 años (entre 1953 y 1957) y quien mandó a instalar los molinos hoy dañados a pesar de que se pueden reparar fácilmente o reemplazar por placas fotovoltaicas para generar energía solar.

Entre los molinos que la comunidad reparó con apoyo de Oxfam, está el de Matajaret, a dos kilómetros de la ranchería de Beniberto, en donde hay aguas subterráneas que antes no lograban sacar sin contaminarlas. El 24 de diciembre de 2014 le pusieron aspas nuevas y volvió a girar. «El día 25, en Navidad, ya había agua. Para celebrar maté un ovejo, conectamos el equipo de sonido y tomamos chirrinchi [licor a base de miel de caña o panela] hasta las cuatro de la mañana», dice Yenifer, contenta.

Desde entonces, el molino se ha convertido en lugar de encuentro de muchos de los wayúu que viven dispersos en el corregimiento. Algunos, como Yenifer, van caminando, otros llegan en motos o en burro a llenar bidones que luego transportan hasta sus casas. También llegan acompañados de sus rebaños de animales. Además de cambiar las aspas, construyeron un abrevadero para las vacas, los chivos y las ovejas. Y para la gente habilitaron conexiones con grifos, que les permiten sacar agua de manera más controlada y evitan que se contaminen los tanques a los que llega el agua que bombean del pozo.

Desde que el molino volvió a funcionar, es más fácil para los Fernández tomar agua y preparar alimentos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le dio a Yenifer dosis de Bienestarina, una fórmula enriquecida para que le prepare papillas a la niña con un poco de agua. Yenifer también la toma, mezclada con agua, como si fuera una malteada,

porque le sabe rico, tiene vitaminas y le da energía. Oxfam también le entregó a Beniberto filtros y dos tanques plásticos grandes para almacenar agua en su ranchería. Dos veces al día, los chivos y las ovejas que permanecen en un corral de la ranchería toman agua de una batea que Beniberto dispone para ellos con agua de los tanques, lo que le ahorra tiempo al no tener que llevarlos tantas veces hasta el pozo del molino.

«Oxfam es la única entidad que ha aparecido por esta zona», dice Beniberto y cuenta que si no fuera por el agua, se le habrían muerto aún más animales.

Otras 525 familias tienen tanques y 1.780 tienen filtros de agua. Todas ellas han sido capacitadas sobre cómo utilizar el filtro, hecho con una materia de cerámica y aserrín y una placa coloidal. La combinación no solo permite filtrar bacterias, sino que conserva el agua a una temperatura más fresca. Cada filtro, que es fabricado en Colombia, sirve para abastecer a cinco personas. Gertrudis también les enseña en lengua wayúunaiki hábitos de manejo del agua y de higiene distintos a los que hasta el momento practicaban en la zona. Sin saberlo, las costumbres de los propios wayúu les han causado enfermedades que contribuyen a la deshidratación y la desnutrición, sobre todo de los más chiquitos.

El Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutrición (OSAN) de Colombia considera el agua como uno de los alimentos que mayor incidencia tiene en el estado de salud. Según Marcel Reyes, que coordina el programa de Oxfam en La Guajira, uno de los logros que los tiene más contentos es que han disminuido las enfermedades gastrointestinales y de la piel que la gente de la región padecía con frecuencia. Reyes dice que monitorean la calidad del agua que se consume allí y que realizan pruebas bacteriológicas *in situ* en al menos 40% de los filtros entregados.

Además de los filtros y tanques, la organización instaló unos paneles solares que permiten bombear el agua en el corregimiento de Siapana, donde hay uno de los internados más grandes y en donde funciona un microacueducto. Es de los pocos lugares en toda la Alta Guajira donde se están cultivando alimentos en medio de la sequía. Gracias a que el microacueducto volvió a funcionar, la Fundación Alpina, en alianza con el gobierno nacional, creó una granja experimental dentro del internado, que funciona con riego por goteo. Allí han logrado sembrar maíz y frijol, entre otros granos, para el consumo de los alumnos, y pastos para ovejas, chivos y vacas que producen leche y quesos, todo con el apoyo técnico de Alpina.

El coordinador administrativo del internado, Jesús Támara, dice que el trabajo de los alumnos en la granja está integrado a la materia de ciencias naturales. «Somos autosostenibles y la idea es que esta granja sirva como modelo para la comunidad», dice. Una de las alumnas del internado, Ana Flor Mengual, está próxima a graduarse. En el internado vive bien, pero le preocupa la situación de muchas de las comunidades. «Necesitamos agua y comida», dice.

Agua y comida parece ser lo que piden todas las personas de la región de La Guajira. Y aunque el proyecto de Oxfam ha beneficiado a 31.000 personas, que habitan en las ranherías de diez corregimientos, es insuficiente para cubrir tanto las necesidades estructurales como de emergencia a causa de la sequía en esta zona. La falta de agua, por ejemplo, afecta a otra escuela en Taparajín, a donde van 192 niños a estudiar. Desde que empezó la sequía, los alumnos dejaron de asistir a clases todos los días. La educación no es una prioridad cuando hace falta agua. Los niños tienen que ir a buscarla para sus familias; algunos caminan hasta seis horas bajo el sol para encontrarla y luego llevarla en bidones hasta las ranherías.

En la escuela hay agua nueva solo cada 15 días, cuando llega el carro tanque. La almacenan en bidones y otros recipientes, pero por lo general se les acaba pronto y esto trae problemas para preparar los almuerzos escolares —que, según el profesor a cargo, no alcanzan para todos los niños— y para mantener la escuela limpia. Aun así, al preguntarle si lo que más necesita su escuela es comida o agua, me responde sin dudar: «Un tanque de agua es lo que más quisiera».

Jamaica



LAS CARAS DEL HAMBRE

Marilyn Facey

Uno de cada cinco jamaíquinos es pobre. El sueldo mínimo en el país es demasiado bajo para mantener a una familia, pero la mayoría de los trabajadores rurales ni siquiera cuenta con eso: en el campo, la regla son los trabajos ocasionales y la falta de ingresos regulares. El desempleo entre los jóvenes llega a 38% y los niños de familias campesinas solo asisten a clase dos o tres veces a la semana. En Jamaica, la pobreza es hambre pero también impotencia.

Generalmente se entiende la pobreza como la falta de posesiones materiales y se caracteriza por la falta de ingresos y comida o alimentos nutritivos y por una vivienda precaria. Sus efectos incluyen y son consecuencia de un bajo nivel educativo. Es decir, los padres suelen tener muy poca educación o no han alcanzado un nivel alto de educación formal y los hijos, a su vez, pueden llegar a enfrentar severos obstáculos en su escolaridad debido a la falta de fondos y de alimentos. Sin embargo, la educación es también el principal vehículo para escapar de la pobreza. Además, la pobreza se asocia a la impotencia o a la incapacidad de cambiar significativamente las circunstancias existentes.

El hambre y la pobreza en Jamaica afectan principalmente a personas en áreas rurales y a los sujetos más vulnerables, incluyendo a mujeres y niños. Las estadísticas muestran que de 47 hogares liderados por mujeres, alrededor de 34% tienen mayor cantidad de niños que los hogares encabezados por hombres y están ubicados en zonas rurales. Es el caso de Regina Virgo, madre soltera de cinco hijos. Otro rasgo de este fenómeno es que 32,2% de los hogares liderados por mujeres incluyen niños, ancianos, enfermos y personas con discapacidades, comparados con 25,7% de los hogares liderados por hombres.

Las historias muestran patrones similares que incluyen el desempleo, el subempleo, la imposibilidad de los niños de asistir regularmente a la escuela y la dependencia de la asistencia estatal, especialmente entre los

ancianos, a través del Programa de Ascenso a través de la Salud y la Educación (PATH, por sus siglas en inglés). Osmand Finley, de 78 años, cuenta que usa la magra suma que recibe a través del programa principalmente para pagar deudas de comida con el almacén de su barrio. Esto le deja poco margen para cualquier cosa que no sea continuar con el círculo de «fiado», o compra de comida a crédito, hasta que recibe el subsidio que le permite pagar la deuda.

Sin embargo, los programas de bienestar social no hacen demasiado por dar asistencia a hogares que no cuentan con una fuente de ingresos regulares. El PATH es la primera intervención gubernamental centrada en estos grupos vulnerables. Luego de una evaluación, se provee a familias e individuos una pequeña suma de dinero cada dos semanas. El resultado es una suma menor a los 3.000 dólares jamaíquinos (JMD), unos 25 dólares estadounidenses por mes. Según el sitio web del PATH, se trata de «un programa de transferencia de dinero condicional financiado por el gobierno de Jamaica y el Banco Mundial, destinado a otorgar beneficios en forma de subsidios de dinero a los más necesitados y vulnerables de la sociedad. El PATH fue introducido en toda la isla en 2002. Busca racionalizar las operaciones de tres programas preexistentes de transferencias de ingresos para eliminar la duplicación, reducir costos administrativos, redirigir el uso de recursos y aumentar la eficacia de la llegada del programa a los pobres».

En 2011, el gobierno de Jamaica entró en un crédito contingente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Dos de los efectos de este acuerdo fueron un congelamiento de los salarios y los beneficios que superen la inflación o 4%. De este modo, los fondos para salarios, educación y beneficios sociales se mantienen en los mismos niveles, mientras que el valor de los productos aumenta debido a la devaluación del dólar jamaíquino frente al dólar estadounidense. En octubre de 2011, el valor era de 85 JMD por un dólar estadounidense, mientras que en septiembre de 2015 esa relación pasó a ser de 118 a 1. Para los grupos más pobres de la sociedad, esto representa una disminución significativa en su capacidad de comprar comida, que es en su mayor parte importada.

Entonces, el impulso a la compra de más bienes de producción local es un plan viable solo en teoría. Muchos granjeros han debido enfrentar, durante un mismo periodo, desastres naturales tales como huracanes, sequías e incendios, caminos en mal estado y acceso limitado al mercado. El granjero Everaldo Lewis es un ejemplo de cómo los recientes desastres naturales tienen un impacto en los cultivos para consumo personal y en la posibilidad de ganarse el sustento. O Eileen Wright, que

perdió su cosecha en los incendios recientes y a quien le resulta imposible volver a cultivar a causa de una sequía persistente que afecta las zonas rurales de St. Andrew, St. Thomas, Manchester y St. Elizabeth.

Entonces, ¿cuál es el rostro del hambre en Jamaica? ¿Es similar a las imágenes de personas hambrientas en África, Sudamérica o Haití, que cada tanto aparecen en los pedidos de ayuda internacional en la televisión?

En el rostro de Aaron Dunkley, de 65 años, es el desempleo y la falta de comida. Granjero y ex-recolector de caña, dice que fue víctima de hurtos a sus parcelas. Antes plantaba bananas, plátanos, batatas, cacao, dasheen y cocos. «No saco mucho del coco. A veces obtenemos algo, pero no lo que espero», explica. Con el poco rédito que obtiene de la agricultura y sin ningún ingreso, le resulta muy difícil sobrevivir a diario. «No conozco la misma supervivencia que tú», se lamenta. «Sobrevivir es muy difícil, a veces no tengo nada para comer. Muchas veces me voy a la cama con hambre», dice.

Un agravante de su situación es que Dunkley tiene una hija que depende de él. Cuando cultivaba podía mantenerla, pero actualmente ya no puede hacerlo. Dunkley tampoco tiene una pensión que lo ayude a cubrir sus necesidades básicas. Cuenta que a veces depende de la ayuda de la madre de la niña para enviarla a la escuela. Se ríe al mencionar el desafío que supone darle a su hija el dinero para el almuerzo escolar: «A veces el dinero que tenemos para el almuerzo escolar ni siquiera alcanza para eso».

Dunkley explica que el viaje desde su hogar hasta la escuela secundaria Seaforth High en St. Thomas cuesta 200 JMD. Concuere da con su hija, que está sentada a su lado, en que son «100 para ir y 100 para volver». Eso, dice él, es aparte del almuerzo. Al preguntarle a su hija si estaba en el PATH, ella respondió: «Sí, pero no me dan el almuerzo». El señor Dunkley agregó que no estaba seguro de por qué no se lo daban. Su hija señaló que el beneficio del PATH consiste en un estipendio que se le otorga a la familia. Dunkley señala que en este momento no tiene un ingreso adicional aparte del beneficio del PATH. Piensa esperar hasta el comienzo de la cosecha, en enero, para generar un ingreso, dice.

La comprensión de las complejidades y las dimensiones de la pobreza debe tener en cuenta no solo el ingreso sino también el acceso a la educación. Las redes de seguridad social efectivas deben contemplar las causas para crear estrategias de intervención significativas. Aunque los datos muestran que 53% de los hogares están liderados por hombres,

esos hogares tienen menos niños que los hogares liderados por mujeres. En 2013, el Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) indicó además que los hogares liderados por hombres tenían 17% más de recursos que los hogares liderados por mujeres, generalmente más numerosos. Esto se relaciona con un alto nivel de empleo masculino, incluyendo el empleo estacional en la construcción y la agricultura.

Para Regina Virgo, de la Jamaica rural, la pobreza se manifiesta en su incapacidad de mantener a sus hijos. Son cinco y tienen entre tres y 20 años. Tres de ellos no asisten a la escuela. La hija mayor ha terminado la secundaria con siete materias, pero no ha podido conseguir trabajo. La señora Virgo cuenta que su segunda hija completó sus exámenes en 2015 y quiere volver a la escuela en septiembre para cursar el sexto año. «Cuando fui a la escuela me dijeron que costaba 40.000 JMD enviarla de nuevo. Me estoy esforzando mucho pero no tengo ese dinero, es muy caro», se lamenta.

«No tengo mucha ayuda para mantenerlos», dice. Es decir, carece de cualquier sistema real de ayuda financiera. Uno de sus hijos está en el jardín de infantes, otro en la escuela primaria, y la tercera acaba de mudarse nuevamente con ella y no está inscrita en la escuela por el momento. «Le rogué a una señora que intentara hacerla entrar en alguna escuela. Cuando fue a su antigua escuela, la señora me dijo que debía 7.000 JMD y que tenía que pagarlo para obtener un permiso para cambiarla, y sin esa carta no puede cambiarse de escuela», agrega.

Virgo vuelve a mencionar que no puede pagar la cuota ya que no recibe ningún tipo de ayuda externa. Cuenta que durante el último año académico hizo un gran esfuerzo para enviar a sus hijos a clases. Según ella, «a veces los mando a la escuela y almuerzan cuando regresan, al menos lo intento», pero fue un gran problema conseguir el dinero para el transporte escolar de su hija, que está en la secundaria. «A mi segunda hija a veces la mando a la escuela y solo el pasaje cuesta 200 JMD». Es todo lo que puede pagar.

La hija que está en la secundaria está en el PATH y recibe una comida durante el día. Virgo dice que trata de asegurarse de que además tenga algo para comer cuando regresa a la casa por la noche. Los preparativos para la vuelta a clases han sido lentos. «No sé cómo será el próximo año escolar porque en este momento es muy difícil. La semana próxima comienzan las clases y aún no veo ninguna salida», señala.

Regina Virgo está desempleada y vive con el padre de uno de sus hijos. Él está subempleada. Según ella, «hace algunos trabajos de barbería, se

esfuerzo pero muchas veces no gana el dinero suficiente. Pero se esfuerza mucho». Dice que cuando falta la comida, comen lo que consiguen y «aprenden a conformarse. Les enseño eso: a conformarse. Me siento y les explico para que entiendan. A veces incluso lloran, pero yo les digo que no hay motivo para llorar, así es la vida. Solo quiero que puedan diferenciar el bien del mal».

En 1990-1992, América Latina y el Caribe tenían 14,7% de su población afectada por el hambre. Sin embargo, en 2014-2016 la cifra disminuyó a 5,5%. Según Darby Collins, directora de la Unidad de Economía Hogareña en la Dirección de Desarrollo Agrícola y Rural, la mala alimentación se manifiesta de varias maneras. Collins explica que las personas carecen de micronutrientes tales como vitaminas y minerales. A Jamaica no le faltan alimentos sino el conocimiento de cómo combinar y balancear la comida. La alimentación insuficiente también se manifiesta en la malnutrición. Esto es evidente tanto en adultos como en niños.

Osmand Finley, de 78 años, tiene dificultades para recordar su edad. Su primera declaración es un pedido: «68 o 78. El año es 1938, verifícalo, porque yo no lo sé». Vive solo en una pequeña estructura de madera desvencijada, con muy pocos muebles. «Estoy casado, sabes», explica, «pero mi mujer se marchó y nunca regresó. Se fue a las islas Turcas y Caicos». Su voz temblorosa revela su frágil estructura corporal, dado que además está postrado en una silla de ruedas.

Finley dice que «solía manejar, pero mi enfermedad se comió todo mi dinero. Si la gente no me da algo, no tengo nada». Esto significa que depende por completo de la caridad de los desconocidos. Agrega que cada vez que sus plantas de banana dan un racimo, las cosecha y se las vende a los transeúntes.

Dice que las personas en su comunidad no lo ayudan demasiado y remarca que son principalmente las personas de fuera las que le ofrecen ayuda. «Parecería que la gente hoy en día no tiene nada de amor. Solo unos pocos, como esta joven», dice, señalando a una mujer que lo ayudaba a preparar comida durante nuestra visita. Finley cuenta que en otras épocas los miembros de la iglesia lo visitaban y lo ayudaban con pequeños paquetes de comida.

Todo lo hace desde su silla de ruedas, incluso lavarse o cocinar. «A veces cuando me lavo me empieza a circular la sangre...», dice, mostrando sus manos doloridas. Como su principal ingreso era la venta ocasional de algún racimo de bananas o la limosna de algún extraño, le pregunto

qué hacía cuando no contaba con ninguna de las dos. «Cuando no hay nada para vender pienso que no sé cómo haré para sobrevivir, pero siempre viene alguien que me da algo».

No recibe una pensión pero es beneficiario del PATH. «Les lleva dos meses darme 3.000 JMD. A veces voy a la tienda y compro a crédito hasta que me dan el PATH y lo pago y vuelvo a comprar. Es poco lo que me ayuda [el beneficio del PATH], pero aun así, es mejor que nada».

Varios sectores dentro de su vivienda están húmedos; cuando le pregunto si la casa tiene goteras durante las lluvias, dice: «Sí, un huracán se llevó el techo. Ve allí y mira. El techo se voló en una tormenta antes del último huracán y yo lo arreglé. En ese entonces podía moverme, pero durante este último huracán ya no pude. La gente del PATH vino a verlo y me dijeron que me ayudarían pero no han hecho nada. Ahora la casa entera se pudrió porque el agua cae adentro cuando llueve», se lamenta el anciano. Y dice que no recibe ninguna ayuda de su iglesia porque al estar postrado en silla de ruedas le resulta imposible asistir.

En 2012, las estadísticas mostraban que una de cada cinco personas, o 19,9% de los 2,8 millones de habitantes de Jamaica, son pobres. Desde su creación, el PATH ha dado asistencia a más de 40.000 personas con comidas y préstamos de dinero. Sin embargo, como muestra el caso del señor Finley, la suma otorgada no logra cubrir adecuadamente las necesidades básicas.

Tamara Jackson vive sola con sus tres hijos, de cinco, siete y 13 años. Se oía el ruido de los niños jugando cuando visitamos su casa. Dijo que todos iban a la escuela: los dos más chicos, que están en la primaria, deben ir caminando todos los días. Le pregunto cuánto tienen que caminar. «Es un poco lejos, bajar la colina, y luego ir por la llanura». Su hijo mayor se ve obligado a asistir a la escuela esporádicamente por falta de fondos. «Si el mayor va a la escuela hoy, no podrá ir mañana ni el resto de la semana», dice. Como los más pequeños van caminando, ella usa 100 JMD para comprarles galletas y un paquete de jugo para cada uno para el almuerzo. «A veces, por la noche, si no logro conseguirles algo para cenar, alguien me da una mano con alguna banana, una libra de harina y una lata de pescado, y así. Así es como vivo». Explica que el desafío de alimentar a sus hijos muchas veces le hace saltar las lágrimas. «A veces me siento y lloro mucho». Jackson dice que pedirle ayuda al padre de sus hijos es inútil. En lugar de hacer eso, se esfuerza en conseguir trabajo, una tarea en la que no ha tenido éxito más allá de algunos días de trabajo doméstico.

Su principal fuente de ingresos son los trabajos ocasionales como ayudante doméstica. «A veces alguien tiene algo de ropa para lavar; yo la lavo, me dan algo de cambio [un pequeño ingreso] y trato de administrarlo para que dure». Por cada trabajo le pagan alrededor de 1.500 JMD. Para enero de 2014, el salario mínimo nacional era de 5.600 JMD. Esto representa alrededor de 47 dólares estadounidenses de acuerdo con el tipo de cambio de 118 JMD por cada dólar de Estados Unidos. Puede decirse que el sueldo mínimo de por sí es demasiado bajo para mantener a una familia. Sin embargo, este sueldo es el que recibe alguien que trabaja 40 horas semanales. Muchas personas tienen trabajos ocasionales, como es el caso de la señora Jackson, y ganan cifras menores a esa por semana.

Según el STATIN, la tasa de desempleo en 2015 fue de alrededor de 14,2%. STATIN sostiene que hubo 7,5% de aumento en el número de personas desempleadas en enero de 2015 en comparación con el mismo mes del año anterior. Y reveló que en enero el número de desempleados era de 188.000 —un aumento de 13.000 personas cuando se lo compara con los 175.000 de enero de 2014—. La tasa de desempleo fue de 14,2%, poco más que el 13,4% de enero de 2014. El desempleo entre los jóvenes, sin embargo, tuvo una cifra dos veces mayor a la tasa nacional, con 38%.

La señora Jackson dice que sus hijos están en el PATH y por lo tanto reciben el almuerzo en la escuela. Explica el desafío que enfrenta la familia al tener que mandar a tres hijos a la escuela durante la semana y proveerles el almuerzo. Como respuesta, las escuelas consintieron en otorgarles el beneficio. «A los pequeños, como van caminando, les dan el almuerzo. De ese modo puedo enviarlos a la escuela. Pero con el mayor es más difícil porque solo el pasaje cuesta 300 JMD por día y a veces no consigo ese dinero. Por eso es que casi no va a la escuela», explica.

Según Jackson, los intentos por cambiarlo a una escuela más cercana han sido inútiles ya que todas dicen estar completas. Explica que aún no ha comenzado a prepararse para que su hijo mayor vuelva a empezar las clases. El padre de ese hijo murió hace años y ella no puede comprarle zapatos, ropa o libros. «La última vez que me encontré a un hombre importante [de la comunidad], le pedí ayuda y me dijo que vería qué podía hacer. Pero no volví a tener noticias de él, así que en definitiva no sé en qué situación estamos», concluye.

Eileen Wright ofrece un panorama un poco más sombrío. Dice que no es capaz de darles un té a sus hijos por la mañana, antes de ir a la escuela.

Sus dos hijos están en el PATH. «Muchas veces el PATH les da dos o tres comidas por semana. Luego, cuando vuelven a casa de la escuela, a veces comen algo por la noche». Dice que el resto de los días compran un paquete de jugo y galletas para el almuerzo. La señora Wright explica que «a veces cuando los chicos se van a la escuela nosotros, los adultos, cocinamos algo y comemos. A veces les guardamos lo que podemos para cuando regresan a casa».

Su marido es un pequeño granjero que provee el único ingreso de la familia, ya que ella no tiene trabajo. La sequía que afectó varias zonas de la isla perjudicó duramente los cultivos que habían plantado. Dice que eso provocó que las bananas y los plátanos no se desarrollaran correctamente. Esa es su única fuente de ingresos. El Ministerio de Agricultura estimó que en 2014 el sector agrícola sufrió pérdidas por cientos de millones de dólares a causa de las sequías y los incendios. Esto damnificó a alrededor de 18.000 granjeros.

Rainford Newton sobrevive vendiendo cocos. «Solo tengo dos pequeños cocoteros, que me dan unos 25 cocos cada tres meses. Vendo eso y vivo del PATH, nada más». Dice que le dijeron que no calificaba para una pensión. Rainford no puede trabajar y tiene que pedirle ayuda a alguien para bajar los cocos, venderlos y obtener un ingreso. Dice que usa el dinero para comprar comida. «Me tomo mi tiempo. La gente que pasa me conoce, me llevan hasta Morant Bay [St. Thomas]. Firman por mí los papeles del PATH, a causa de mis cataratas». Dice que luego de hacer las compras le quedan unos 1.000 JMD para seis semanas. «Es una vida dura, una vida dura».

Newton dice que para lavar la ropa toma una olla y va al río. Es un hombre jovial, ciego de un ojo y con cataratas en el otro, y explica que no siempre la lava correctamente. «Lo hago un poco al tun tun», dice riéndose. Su ropa no queda del todo limpia debido a su visión deficiente. Consiguió un turno en el National Chest Hospital para un tratamiento a través del programa de cuidados oculares de Cuba. Aun así, se lamenta de que deberá recibir ayuda para pagar el transporte o ahorrar el dinero que recibe del PATH. «Si vendo 50 cocos, tendré que mordirme los labios y pagar el pasaje de colectivo». Eso significa que tendrá que subsistir sin comida para poder ahorrar el dinero y costearse el transporte.

Barbara Curry no tiene necesidades urgentes pues dice que hay personas en el extranjero que cada tanto la ayudan. Cuenta que su hijo le envió hace poco un tonel con comida. En otras ocasiones, dice, recibió

asistencia de sus amigos. Sin embargo, el desafío son los preparativos para la vuelta a clases, ya que el padre de sus nietos murió y no queda nadie para ayudarla a ella y a su hija, madre de los niños. Ambas están desempleadas. La señora Curry explica que la agricultura no es una fuente de ingresos para su familia. Tiene unas pocas plantas de banana y antes solían tener cabras. No hay dinero ni ayuda, a pesar de los intentos por conseguir trabajo. La escuela está cerca y eso facilita el costo diario del transporte de los niños. Sin embargo, uno de ellos está por comenzar la secundaria luego de pasar los exámenes de sexto grado. Pero aún tienen que conseguir los fondos para lograr que siga en la escuela.

En lo que respecta a la comida, Curry dice: «Comemos, no te voy a mentir, comemos, pero todo lo demás es muy difícil. Conseguimos comida para los niños por la mañana, pero cuesta conseguir comida para la noche. Aun así comemos algo». A veces pueden preparar alimentos que crecen en la casa y comprar carnes baratas como carcasa de pollo. «Si no, es muy difícil».

Everald Lewis se considera pobre. Es un agricultor que se vio afectado por el paso de un huracán. A pesar de no haber recibido asistencia cuando su terreno se dañó, logró ahorrar y comprar suministros. Luego, sin embargo, se los robaron. Lewis, de 51 años, confiesa que ha llevado una «vida salvaje» o «silvestre» durante los últimos cinco años. Vive en una pequeña explotación cerca de un río. «Allí duermo, como y bebo. Así funciona el sistema. No me puedo mudar porque no quiero tener que mendigar para conseguir un refugio y que alguien me diga ‘no puedes quedarte aquí, ya has estado aquí dos días, mañana tienes que irte’». Dice que tiene libertad de quedarse ahí todo el tiempo que quiera, ya que la tierra le pertenece al gobierno.

Compra comida con los ingresos que recibe de sus productos agrícolas. Cuando cosecha, viaja a vender al «distrito» o centro. Sin embargo, la sequía está dañando sus cosechas y afectando la calidad de sus productos. «Así que ya no queda nada disponible. Incluso si digo que voy a dejar la vida salvaje, como dice la gente del distrito, que voy a ‘salir adelante’, aun así no puedo porque no tengo dinero para construir una habitación».

Lewis cuenta que es un desafío sobrevivir con la sequía. «Con lo poco que ahorro, uno o dos dólares, no puedo salir adelante. A veces es uno solo, no puedo ahorrar más. Así es como hago para sobrevivir. Pero hay que tener fe, porque no se sabe lo que traerán los tiempos. Las cosas pueden mejorar». Dice que muchas veces se hace tan difícil que alguien

tiene que hacerse cargo de su hijo, cuya madre no está. «La madre vive en otro distrito, pero es cierto que es más fácil para mí, porque consigo algo de comida para mantenerlo». Sin embargo, muchas veces no está en condiciones de hacerlo, ya que la sequía de los últimos dos años destruyó su terreno.

Lewis solicita que se le brinde algún tipo de ayuda estatal. «Si la ayuda viene del sistema [gobierno], me alegraría, porque no puedo vivir una vida salvaje todos los días. En mi opinión, no puedo conseguir ningún otro trabajo. Cultivo desde que iba a la escuela. Pero la sequía ha destruido todo».

Lennis Robinson dice que sobrevive por gracia de Dios, ya que en este momento no tiene a nadie que lo ayude. Cuenta que ocasionalmente un vecino, un primo o alguna otra persona le trae comida. El vecino que lo ayuda con más frecuencia se mudará pronto, de modo que Lenny manifiesta preocupación por su supervivencia luego de que eso suceda. «Pongo primero a Dios; la mayoría de las veces tengo que pedirle a la gente porque ahora no puedo caminar. Así que tengo que quedarme sentado en un lugar. Me traslado de mi cama a algún lugar. Me arrastro sentado». Alguna que otra semana recibe ayuda del PATH. «Pido fiado de la tienda, luego cuando recibo el PATH, les pago y se me acaba».

Todas las personas incluidas en este informe se lamentaron de que el monto provisto por el programa gubernamental —que va de un básico de 900 JMD a un máximo de 1.500, según el periodo— no alcanzara a cubrir las necesidades básicas de ninguno de ellos. Estas son las caras del hambre en Jamaica.

Traducción: Virginia Higa

«LOS NIÑOS VIENEN A LA ESCUELA SOLO LOS DÍAS EN QUE SE LES DA DE COMER»

Marilyn Facey

Muchas personas se encuentran en riesgo de experimentar hambre con frecuencia o de caer presas de la pobreza debido a circunstancias como la pérdida de su trabajo, falta de ahorros, muerte del sostén del hogar, desastres naturales o enfermedades. En Jamaica, hay numerosas personas que viven en situación de pobreza o debajo de la línea de pobreza, y que suelen enfrentar periodos en los que no les es posible alimentarse o alimentar a quienes dependen de ellas. Quienes se encuentran en mayor situación de riesgo son los niños, los ancianos y las mujeres, en especial en las zonas rurales. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), las estadísticas correspondientes a 2009 mostraban que cerca de 16,5% de los jamaicanos vivían bajo la línea de pobreza. Esa cifra se incrementó en los años subsiguientes, y las estimaciones actuales se sitúan en 19,5%.

¿Contribuye la pobreza a agravar el hambre? Las personas que viven en situación de pobreza no pueden satisfacer necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda. En Jamaica, este hecho se pone de manifiesto en la falta de una provisión regular de alimento o de un suministro sostenido de alimentos nutritivos, la dependencia de trabajos irregulares o esporádicos o subsidios, y la ocupación ilegal de tierras del Estado. La imposibilidad de conseguir empleo o conservarlo es, asimismo, otro factor clave que contribuye a la pobreza, puesto que los ingresos reducidos limitan la capacidad de las personas de satisfacer sus necesidades básicas e incrementan la vulnerabilidad. El tamaño de las familias, que tiende a ser mayor en zonas rurales, constituye otro factor fundamental, en particular cuando se combina con las condiciones indicadas con anterioridad. La educación deficiente también afecta la capacidad de generar ingresos de estos grupos. Por último, deben considerarse factores externos como el alto nivel de endeudamiento nacional y la inflación, que influye sobre el precio de los bienes y la capacidad

de quienes se encuentran en las franjas de ingresos más bajos para adquirir productos alimenticios. Para terminar, estrategias tales como establecer compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) restringen la capacidad gubernamental de incrementar el gasto en programas de asistencia social y elevar los ingresos.

En Jamaica, algunos ministerios claves se ocupan desde el nivel del Estado de paliar los efectos sobre la población del hambre y la pobreza, efectos entre los que se incluyen la mala salud, las deficiencias nutricionales y el ausentismo escolar. Trabajan en colaboración en varias iniciativas como el Programa para la Promoción mediante la Salud y la Educación (PATH, por sus siglas en inglés), que constituye una red de seguridad social, y el Programa de Alimentación Escolar, en el marco del cual se sirven comidas a los alumnos de hasta nivel secundario. El hambre y la pobreza se manifiestan básicamente en las zonas rurales, donde la fuente primaria de ingresos es la agricultura, en muchos casos, de pequeña escala. La causa radica en que la población de las zonas rurales depende de la producción monocultivo y de la venta de lo producido para la obtención de ingresos, en lugar de recurrir al cultivo de alimentos básicamente para consumo; radica también en la incapacidad de competir o producir para mercados de mayor envergadura. Los ministerios también ejecutan sus políticas en colaboración con organismos como la Autoridad para el Desarrollo Agrícola y Rural (RADA, por sus siglas en inglés), la Sociedad Agrícola de Jamaica (JAS, por sus siglas en inglés) y Jamaica 4H Clubs. Los programas y los organismos mencionados trabajan en colaboración para reducir el hambre y la pobreza en zonas rurales y urbanas.

Según la doctora Pauline Samuda, nutricionista jubilada a cargo de coordinar la modernización del Programa de Alimentación Escolar en el Ministerio de Educación, existe hambre crónica y hambre de corto plazo. Señala que si bien «no tenemos un problema de hambre crónica, que significa hambre durante periodos prolongados, lo cual provoca pérdida de masa muscular, sí existe en cambio mucha hambre de corto plazo, en especial entre los escolares». Algunos estudios del ministerio indican que «entre 25% y 33% de los niños llegan a la escuela con hambre. Es decir, no han comido antes de ir a la escuela o en el día que asisten a la escuela. Esa es el hambre de corto plazo y ese es concretamente nuestro problema».

El secretario permanente del Ministerio de Agricultura, Donovan Stanberry, cree que el desafío radica en que el país logre producir una masa crítica de alimentos para consumir. Es más, si esos alimentos que se

consideran esenciales para la salud y el bienestar no pueden producirse, ¿cómo podría el país importarlos? «La nutrición en esa combinación es importante. Creo que los jamaquinos cuentan en general con acceso a alimentos, pero es posible que carezcan de los requisitos nutricionales para llevar una vida saludable», señala.

Para el senador Norman Grant, presidente de la JAS, la reducción del hambre y la pobreza está estrechamente vinculada con la seguridad alimentaria. «Es necesario instalar en el contexto internacional que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un proceso de impulso a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria puede lograrse a través de la agricultura». Y agrega: «El objetivo de la JAS, el Ministerio de Agricultura y los grupos interesados en general es impulsar la seguridad alimentaria mediante el sector agrícola. Y la seguridad alimentaria se define como la disponibilidad de alimentos saludables y su distribución entre todos los ciudadanos del país». Si bien los problemas del hambre de corto plazo y la seguridad alimentaria se reconocen prontamente como desafíos, las cuestiones de la producción y la distribución en el mercado también contribuyen al hambre y la pobreza. En Jamaica se producen grandes volúmenes de alimentos; sin embargo, el reto radica en llevar esos alimentos a los mercados que los necesitan a precios asequibles.

Entre 1990 y 1992, 14,7% de la población de América Latina y el Caribe se veía afectada por el hambre. Sin embargo, en el periodo 2014-2016, el porcentaje se redujo a 5,5%. Como resultado, la región en general ya alcanzó el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) en lo referente al hambre. En mayo de 2015, la FAO informó que seis países del Caribe habían cumplido el ODM 1: eliminar la pobreza y el hambre extremos. En un informe titulado «Panorama de inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe 2015», la FAO señaló que Barbados, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Cuba y República Dominicana habían alcanzado esa meta. Jamaica no cumplió ese objetivo; el problema existe sin dudas, y hay diversas entidades y políticas orientadas a resolver esta cuestión, en particular entre las poblaciones rurales.

MUJERES Y NIÑOS PRIMERO

El senador Grant señala que «nuestra población agrícola en Jamaica es de aproximadamente 213.000 personas. Más de 70% son pequeños agricultores. Resulta interesante que, si bien las tierras son propiedad

de los hombres, un importante porcentaje de los pequeños agricultores y las personas dedicadas a labores agrícolas son mujeres. Estamos hablando de más de 60%; por ese motivo, existe la Red de Mujeres Campesinas».

Desde el Ministerio de Agricultura se han mencionado algunas iniciativas de intervención en materia de pobreza basadas en el género. Stanberry explica que «reconocer la vulnerabilidad de las mujeres y los jóvenes en la agricultura ha llevado a la inclusión de la cuestión del género y las actividades relacionadas con el género en la totalidad de su operación. Como resultado, todos sus proyectos, programas y políticas hacen foco en el género».

La agricultura es el motor principal de crecimiento económico en las comunidades rurales. Hay 106.096 hombres que trabajan 311.346 hectáreas de tierras de cultivo, frente a 46.085 mujeres que trabajan 73.567 hectáreas registradas en el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, la presidenta de la Red de Mujeres Campesinas de Jamaica, Mildred Crawford, sostiene que «si bien las mujeres no poseen grandes cantidades de tierras como los hombres, producen el doble en la misma expansión».

TIERRAS MOVEDIZAS

El acceso a la tierra es uno de los mayores desafíos que enfrentan las agricultoras. Crawford apunta que ese reto se ve reforzado por la dinámica cambiante que existe en Jamaica en materia de uso de la tierra para caminos y vivienda. Según ella, muchas mujeres trabajan tierras que arriendan al gobierno o al sector privado: «Parte de la tierra agrícola de algunas porciones de la zona rural de St. Andrew se está utilizando para construir caminos y viviendas residenciales».

Crawford dice que esta tendencia afecta las vidas de las mujeres, pues muchas de ellas obtuvieron las tierras en el marco de programas gubernamentales y no son propietarias de los terrenos que cultivan desde hace años. «Tampoco se les informó acerca de qué planea hacer el gobierno una vez que recupere las tierras. Esta situación las deja en un estado de incertidumbre, puesto que la agricultura es su principal medio de vida». Señala además que el hecho de que el foco esté puesto en las mujeres no significa que solo las agricultoras resulten afectadas por las decisiones. Muchos agricultores también padecen de falta de seguridad respecto de la tierra pues cultivan tierras ocupadas ilegalmente o que son estatales, en muchos casos durante generaciones.

Sin embargo, Stanberry apunta que el ministerio prioriza el acceso a las tierras del Estado para la producción de alimentos: «Desde el punto de vista del uso de la tierra, tenemos la gran responsabilidad de garantizar que las tierras consideradas tierras cultivables se preserven y utilicen como tales». Y reconoce que existe una feroz competencia por estas tierras para utilizarlas para la construcción de viviendas, en especial en las áreas meridionales de la isla. Este hecho constituye a su juicio una grave amenaza a la seguridad alimentaria. Stanberry agregó que si no hubiera una supervisión adecuada «desde Spanish Town hasta May Pen serían todas viviendas».

Tradicionalmente, las mujeres no han sido propietarias de la tierra. La representante de la RADA indicó que «las mujeres pueden haber recibido un lote de tierra de sus cónyuges o padres para que lo cultiven con el fin de mantenerse ellas y sus familias». Pero según Darby Collins, lo producido no alcanza para abastecer el mercado, solventar la educación de los hijos o construir una vivienda. Según el censo agrícola de 2009, 139.965 hombres y 63.690 mujeres eran titulares individuales de tierras, lo que significa que cuentan con un título registrado de propiedad a su nombre.

Jamaica se encuentra abocada a la creación de grandes agroparques. No obstante, también parece existir cierto nivel de incertidumbre respecto de la distribución o asignación de uso de las tierras. Crawford señaló que la información sobre varios proyectos nacionales no se envía a la Red de Mujeres Campesinas: «En consecuencia, no podemos guiar a nuestros miembros respecto de cómo acceder a esos beneficios».

En respuesta, Stanberry indicó que un porcentaje de sitios en los agroparques se han reservado para mujeres; no obstante, deben satisfacer los requisitos para poder obtener acceso a esos espacios. Entre los requisitos, se incluye contar con financiación y aceptar proveer alimentos producidos a mercados contratados específicos. Por carecer de títulos de propiedad, las mujeres tienen más dificultades para obtener acceso a capital provisto por fuentes tradicionales de financiación.

EL CAPITAL

Crawford manifestó que a lo largo de los años se ha aportado capital a las instituciones financieras con miras a beneficiar a propietarios de pequeñas empresas en general, y a agricultores, en particular. Sin embargo, algunas instituciones otorgan préstamos a agricultores a tasas

de interés que van de 28% a 52% con dinero otorgado por el Banco de Desarrollo de Jamaica (DBJ, por sus siglas en inglés) a bancos comerciales para que brinden asistencia especial a los agricultores. Crawford lamentó que «si una mujer sufre las consecuencias del cambio climático y se ve ‘entre la espada y la pared’, tratará de obtener asistencia tan pronto como pueda, pues es posible que se encuentre sola y que tenga una familia que dependa de ella para sobrevivir».

La directora de la Red de Mujeres Campesinas señala que devolver esos créditos se vuelve insostenible, lo cual lleva a mayor vulnerabilidad pues el crédito no implica mayor sustento en el largo plazo. Crawford agregó que la tasa más baja que ha visto es la que ofrece el National People's Co-operative Bank of Jamaica, de 9%; sin embargo, para obtener esos créditos es necesario superar obstáculos burocráticos.

No obstante, Stanberry dice que es poco lo que el gobierno puede hacer en este aspecto. «Porque todavía vivimos en un país en el que sigue siendo más sencillo obtener un préstamo para comprar un automóvil que para emprender cualquier forma de actividad productiva». Agregó que esta es la causa desafortunada de la situación, puesto que los bancos responden a señales.

Darby Collins concuerda en que, según su experiencia, la financiación es el reto básico que enfrentan las agricultoras rurales. Agregó que si bien la RADA brinda asistencia en materia de comercialización, las mujeres deben enfrentar aún problemas para mantener viables sus negocios. Incluso los fondos provenientes de organismos como la FAO y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) resultan insuficientes para sostener un proyecto de procesamiento agrícola. La asistencia se orienta, básicamente, a la compra de equipos para poner en marcha el emprendimiento, pero no constituye un capital de trabajo adecuado. Según Collins, «en cuanto esos fondos se agotan, deben empezar a enfrentar dificultades. Algunas de ellas no toman créditos por temor a no poder pagarlos».

ROBOS RURALES

El hecho de cultivar la tierra, criar animales o cultivar peces y perderlo todo a causa del robo está provocando un efecto sumamente dañino entre los agricultores de Jamaica. El robo de lo producido en las actividades agrícolas constituye un obstáculo de proporciones que afecta a todos los agricultores. Crawford reveló que fue víctima en dos ocasiones. «Soy criadora de cerdos y la primera vez que vinieron a

robar a mi granja, se llevaron 39 animales. Volvieron una semana y media después y se llevaron otros 36. Y eso me dejó sin nada. Tuve que abandonar la cría de cerdos, volver a la escuela a estudiar y empezar nuevamente».

Señaló que otras agricultoras pueden no tener posibilidades de educarse y empezar de cero, como lo hizo ella. Como resultado, si no hay una red de seguridad social que asista a las agricultoras, el efecto es devastador. Crawford cree que en esos casos, los hombres pueden contar con medios para recuperarse más rápidamente, pues pueden obtener financiación con el uso de sus títulos de propiedad de tierras.

Stanberry dijo que la Unidad de Robo Agrícola del Ministerio de Seguridad Nacional, creada en marzo de 2015, procesó a más de 50 individuos en sus tres primeros meses de funcionamiento. Con anterioridad, existía una unidad en el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, sostuvo que la lucha contra el delito es responsabilidad de la policía. Señaló que, en la actualidad, hay un equipo de oficiales dedicados a este tipo de delito en cada unidad policial. De este modo, las posibilidades de acceso a las explotaciones agrícolas se incrementan, en especial en las zonas rurales. Además se mejora el tiempo de respuesta y aumenta el tiempo dedicado a investigar los robos.

UNA LARGA LISTA

Crawford también manifestó su preocupación por el tiempo que le toma a la RADA registrar a los agricultores. Opina, asimismo, que la práctica de divulgar información por medio de organizaciones como la JAS o la RADA puede ser la causa de la falta de información que aqueja a la Red. Señaló: «se da más información a la JAS, lo que no significa que esa información será transmitida a organizaciones como la Red de Mujeres Campesinas». En consecuencia, llama a una mayor colaboración entre las diversas organizaciones para beneficio de los agricultores.

Sin embargo, la demora en el registro de los agricultores se atribuye a una deficiencia en la cantidad de oficiales de extensión de la RADA. Según Stanberry, el oficial «efectúa el registro de la explotación agrícola, después el mismo funcionario tiene que comprobar [el tamaño de la explotación] y responder quejas. Hay un oficial de extensión por cada 3.000 agricultores». Agregó que, dada la carga de trabajo, es comprensible que existan demoras en el proceso de registro. Para paliar el problema, en verano se contratan jóvenes como personal adicional que se dedica a procesar las inscripciones.

RESPUESTAS AL PROBLEMA DEL HAMBRE

En la actualidad se están reforzando las cuestiones prioritarias y se está promoviendo el autoabastecimiento basado en el consumo de alimentos producidos localmente a través de una campaña nacional. El senador Grant manifestó que el autoabastecimiento también incluye «la capacidad del país de producir alimentos para exportar y utilizar las ganancias de las exportaciones para adquirir alimentos que satisfagan la demanda, en los casos en que esos alimentos no puedan producirse». Esta es la vía de la sustitución de importaciones y del incremento de la producción local.

Agregó que como resultado de la campaña «Come lo que produces» de Jamaica, que lanzó la JAS en 2003, la producción total de cultivos del país fue de 497.000 toneladas. Grant dice que diez años después ese volumen había aumentado a 615.000 toneladas métricas. Se trata de un incremento de 25% de la producción nacional de alimentos. «El año pasado, se importaron aproximadamente 50 millones de dólares menos de alimentos que en 2013, de modo que se trata de un resultado fabuloso en lo que respecta a la seguridad alimentaria de Jamaica», según el senador.

Un área en la que se han registrado éxitos es la producción de papa. Según Grant, también agricultor, «hace cinco a siete años, Jamaica importaba 90% de las papas que consumía. El año pasado, como resultado de una gestión estratégica en apoyo a nuestros agricultores, logramos producir 90% de las papas que consumimos en Jamaica. El Programa de la Papa Irlandesa tiene por objetivo lograr abastecer 100% de esa variedad para 2015, lo que significa 15 millones de kilogramos. Agregó que a través de una asignación de 30 millones de dólares, el ministerio continuará proveyendo semillas de calidad, apoyo a través de extensión y capacitación continua de los agricultores. El programa beneficiará en forma directa a 4.000 familias rurales, así como a 700 distribuidores y 250 transportistas. Además, el programa creó un componente orientado a jóvenes y mujeres; como resultado, se beneficiaron 180 participantes que trabajan 40 hectáreas.

OTRA VEZ, MUJERES Y JÓVENES

Los 4H Clubs de Jamaica, orientados a propiciar la participación de hombres y mujeres jóvenes en la agricultura, han experimentado un enorme incremento en la cantidad de asociados, que hoy llega a 94.000. «Como parte de esta estrategia, los 4H Clubs se han instalado en las

escuelas para crear huertas escolares. En la actualidad, tenemos más de 300 huertas escolares, que proveen alimento para los comedores donde se alimenta a los niños. Tenemos planeado instalar una huerta en cada escuela pública en los próximos cuatro años, y las escuelas son 1.400. El 4H Club está diseñando un marco para que eso sea posible.

El senador Grant dijo que la JAS «prestará especial atención a procurar la participación de nuestras mujeres de un modo muy estructurado, pues intentamos darles apoyo en el sector agrícola. Hacen buena parte de las tareas de siembra, abono y cuidado de los campos. Nuestras mejores cosechadoras de café son mujeres. Hay espacio para las mujeres, y un gran porcentaje de los hogares está constituido por mujeres. La JAS quiere rendir homenaje a esas agricultoras: han hecho muchísimo para sostener la economía de Jamaica».

REDES DE SEGURIDAD SOCIAL

Según el panorama del Banco Mundial 2014-2015, «Jamaica, cuya tasa de pobreza había caído casi 20% en dos décadas, registró un aumento de 8% en pocos años. La tasa de desempleo en Jamaica rondaba el 13,4% a fines de 2013-2014, con un desempleo juvenil que superaba por más del doble la tasa nacional». De acuerdo con los datos del UNFPA, en 2011 la tasa de pobreza de Jamaica era de 16,6%. Sin embargo, esa cifra ha crecido en los últimos años.

Aproximadamente 23,2% de los habitantes de zonas rurales vive en situación de pobreza, un porcentaje que supera el 14,4% que se registra en el área metropolitana de Kingston. 47% de los hogares tiene una mujer como jefa. Y 34% de los hogares con jefatura femenina, que son los que tienen el mayor número de niños, se encuentran en zonas rurales; mientras que el 32,2% de los hogares con jefatura femenina incluyen niños, ancianos, enfermos y personas con discapacidades, frente a solo 25,7% de los hogares con jefatura masculina que lo hacen.

Dadas estas estadísticas, la necesidad de intervenciones sociales dirigidas a las mujeres y a las poblaciones vulnerables, en especial en zonas rurales, es decisiva para reducir el hambre y la pobreza en Jamaica. Darby Collins, directora de una unidad de la RADA, comenta que cuando visitan muchas de las comunidades rurales, observan que las mujeres viven en situaciones de gran privación. Agrega que es difícil ayudar a mejorar esas condiciones. «Si no contamos con fondos del gobierno o de grupos de donantes, es difícil ayudarlas porque no cuentan con los medios para ayudarse ellas mismas». Collins señala que la RADA procura alentarlas y

elabora proyectos orientados a obtener fondos; sin embargo, muy pocas veces alcanza para lograr un cambio concreto.

Las intervenciones de la Unidad de Servicios Sociales/Economía Doméstica de la RADA están orientadas a ayudar a que las familias rurales incrementen su bienestar y su calidad de vida. El objetivo general consiste en desarrollar y mejorar la situación socioeconómica y la capacidad de las mujeres y los jóvenes rurales. Las actividades de la unidad se orientan, principalmente, a la creación de puestos de trabajo, el desarrollo de pequeñas empresas, el desarrollo de productos, la administración del hogar y el bienestar social y la reducción de la pobreza general.

Como resultado de sus iniciativas, la unidad ha establecido contacto con más de 10.000 jóvenes y mujeres en riesgo. Stanberry señaló que «la unidad ha establecido tres agroempresas nuevas y apoyó el desarrollo de un total de 38 empresas generadoras de ingresos en los años 2014-2015».

El programa PATH es la principal intervención gubernamental dirigida a esas poblaciones vulnerables. Después de llevar a cabo una evaluación, se entrega una suma pequeña de dinero a individuos y familias en forma quincenal, lo que significa menos de 2.000 JDM (casi 17 dólares estadounidenses) por mes.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura había anticipado que a través de asociaciones estratégicas que se pondrían en marcha en 2015, estaría en condiciones de fortalecer diversos programas de intervención en materia de protección social, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esas intervenciones incluyen iniciativas en los campos de la educación y la capacitación en diversas habilidades. Asimismo, «un total de 5.258 personas recibieron en 2014 pequeños subsidios por un total de 692.429.940 dólares estadounidenses, 150.000 dólares para cada hombre y 170.000 dólares para cada mujer, además de que se completaron unos 70 proyectos sociales valuados en aproximadamente 1.400 millones de dólares», señaló Stanberry.

LA ALIMENTACIÓN EN LAS ESCUELAS

Otra intervención social es el Programa de Alimentación Escolar, en el marco del cual se sirve al menos una comida al día a los niños en edad escolar en las escuelas públicas. En 2014 se dio impulso a este programa, que nace de la colaboración entre los ministerios de Salud, Agricultura y Silvicultura, y Educación. Se espera que beneficie a más de

300.000 alumnos. El proyecto se titula Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar en el Marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025. Tiene como objetivo fortalecer el programa de alimentación en las escuelas ya en marcha y garantizar una nutrición adecuada de los alumnos a través de un mayor acceso a alimentos nutritivos, seguros y de calidad a precios asequibles en las escuelas, y también a través del establecimiento y mantenimiento de una política, un plan y una legislación integral de alimentación escolar.

Este modelo de proyecto lleva 50 años de éxito en Brasil. El gobierno brasileño y la FAO colaboran con Jamaica en la implementación de la iniciativa. En un discurso pronunciado en septiembre de 2015, el ministro de Educación, reverendo Ronald Thwaites, dijo que por primera vez 125.000 estudiantes de nivel inicial recibirían el desayuno mientras que los estudiantes de los niveles primario y secundario recibirán el almuerzo cinco días a la semana. Con anterioridad, los alumnos de nivel inicial no estaban integrados por completo al programa, mientras que otros alumnos recibían un plato de comida tres veces a la semana.

Stanberry dice que, en asociación con el Ministerio de Educación, grupos específicos de mujeres de zonas urbanas recibieron capacitación en agroprocesamiento. El propósito es desarrollar y crear productos para la venta en las escuelas, en un esfuerzo por reemplazar los productos con saborizantes y aditivos artificiales que consumían los estudiantes. Esta capacitación también creó oportunidades de generación de ingresos para estos grupos urbanos. Se capacitó a un total de 53 mujeres y se establecieron seis emprendimientos que prestan servicios a más de 30 escuelas de toda la isla.

NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN

El Objetivo de Desarrollo del Milenio ODM 1 –la eliminación del hambre y la pobreza– se encuentra vinculado con el ODM 2, lograr la matriculación universal en el nivel primario. Los niños que padecen hambre y viven bajo la línea de la pobreza deben enfrentar dificultades mayores para obtener acceso a la educación formal. Según la revisión de ODM 2015, la tasa de matriculación neta en escuelas primarias en las regiones en desarrollo alcanzó el 91% en 2015, frente al 83% en 2000. La cantidad de niños no escolarizados en edad de concurrir a la escuela primaria ha disminuido en el mundo entero a casi la mitad: la cifra correspondiente a 2015 se estima en 57 millones, frente a 100 millones en 2000.

Si bien Jamaica no alcanzó el ODM 1, estuvo cerca de cumplir el ODM 2. El país, en cambio, había logrado el objetivo en 2009, según el informe

sobre ODM del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Jamaica. No obstante, en mayo de 2015, nuevos datos del Ministerio de Educación mostraron que «Jamaica no ha alcanzado la meta nacional en materia de asistencia a la escuela primaria. El Relevamiento Económico y Social 2014, compilado en la Cámara de Diputados, mostró que la tasa diaria promedio de asistencia era de 86,8%. La meta del Ministerio de Educación es 95%. El informe también mostró que el tamaño de la población escolar primaria ha decrecido. La matrícula disminuyó 4,5% en 2014-2015, comparado con 2012-2013. En 2014-2015, 257.046 alumnos asistieron a escuelas primarias, lo que indica un decrecimiento respecto de los 269.485 en 2012-2013». Datos en conflicto: según datos de 2009 del PNUD, Jamaica ya alcanzó este ODM puesto que la tasa neta de matrícula para la escuela primaria se elevó por encima de 90% y la tasa bruta, a casi 100%.

La encargada de coordinar la modernización del Programa de Alimentación Escolar en el Ministerio de Educación, Pauline Samuda, señaló que «el Programa de Alimentación Escolar es un mecanismo utilizado en el mundo entero para mejorar el sustento e impedir que los niños en situación de vulnerabilidad pasen inadvertidos. Como estrategia, contribuye a poner en práctica varios acuerdos internacionales. Por ejemplo, ‘Educación para todos’ es una de las iniciativas a las que el programa contribuye, además de los ODM. Sobre la base de estudios internacionales, sabemos que la alimentación escolar colabora con el desarrollo de capital humano, pues reduce el hambre y mejora los resultados nutricionales y educativos».

Este programa ha estado en marcha en Jamaica desde 1926, en diferentes formas. Con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Educación ha elaborado una Política de Alimentación Escolar con el fin de mejorar la asistencia y el bienestar de los niños en la escuela. La política se centra en la cohorte de la primera infancia (niños de tres a ocho años). «Sabemos que un buen desarrollo en la infancia temprana es una buena base para los años posteriores». Agregó que casi un cuarto de los alumnos llegan a la escuela con hambre: «Es decir, no comieron nada antes de ir a la escuela o el día en que asisten a la escuela».

La doctora Samuda señala que «a veces no hay nada en casa para comer o lo que consiguen en casa no es sustancioso. Entonces toman una taza de té y algunas galletas o algo que haya sobrado. A veces la casa está muy alejada de la escuela, así que para cuando llegan, tienen mucha hambre». El dinero es también un problema, puesto que «muchas veces no hay

realmente fondos para ofrecer un desayuno nutritivo a los más vulnerables, que viven en la pobreza, y allí es donde está nuestro problema».

La creencia general es que el hambre afecta solo a los pobres, pero muchas personas de clase trabajadora e ingresos medios también padecen hambre. La causa es que la mayor parte de sus ingresos se destinan al pago de un alquiler y el transporte, por lo que los alimentos, en especial los alimentos saludables, no constituyen una prioridad.

La doctora Samuda agrega: «Si bien nos centramos en el percentil más pobre, también tenemos un problema de hambre de corto plazo en la clase media, a causa de los ingresos con que cuentan y del hecho de que el ingreso debe destinarse a otros fines para sobrevivir. El hambre de corto plazo consiste en alimentarse pero con alimentos no saludables. Por eso se habla de hambre de corto plazo: porque uno tiene hambre, come algo que tiene muchas calorías. Entonces tienden a usar el dinero para comprar gaseosas. Y así terminamos con todo tipo de problemas de salud, y esto también afecta a personas que tienen trabajo».

La facilidad para obtener productos no saludables y su bajo costo son factores que agravan el problema. Samuda sostiene que algunas de las dificultades debidas a la falta de dinero pueden remediarse si, al usar los mismos recursos limitados, los interesados pueden hacer mejores elecciones alimentarias. De ese modo, se reducirían algunas de las dificultades sanitarias vinculadas al estilo de vida que el país enfrenta, como la diabetes y las enfermedades cardíacas.

POLÍTICAS PROGRESISTAS

Según un informe de la FAO, América Latina y el Caribe han dado un paso significativo hacia la erradicación del hambre al reducir tanto el porcentaje como la cantidad total de personas desnutridas a menos de la mitad. También se señala que el crecimiento económico, el incremento del gasto público en cuestiones sociales y las políticas públicas centradas en los más vulnerables han contribuido a reducir el hambre y la pobreza en la región.

En una cumbre de ministros de Agricultura de la Comunidad del Caribe (Caricom), llevada a cabo en Bahamas en febrero de 2015, el director general de la FAO, José Graziano da Silva, dijo que «garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos debe ser nuestro principal objetivo». Instó a los ministros a fortalecer sus «iniciativas orientadas a combatir el hambre y la desnutrición en el Caribe».

En 2011, la Caricom aprobó el Plan de Acción para la Seguridad Nutritiva y Alimentaria para la región, mientras que muchas naciones han elaborado sus propios planes nacionales orientados a eliminar el hambre.

El director general de la FAO manifestó que el sector agrícola es crucial para favorecer los esfuerzos orientados a lograr un desarrollo más sostenible e inclusivo en la región. «La agricultura crea oportunidades de trabajo, fundamentales en especial para los jóvenes, y es decisiva en lo que atañe a reducir la pobreza rural. La agricultura puede ser proveedora del sector turístico caribeño», según Da Silva. Añadió que la producción agrícola local puede incrementar el autobastecimiento, como resguardo frente a los fluctuantes precios internacionales de los alimentos y los costos elevados de los alimentos importados.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

«Sí, podemos lograr seguridad alimentaria», dice el senador Grant. Agrega que los números muestran que es posible. En enero de 2015, la JAS celebró su primera cumbre alimentaria nacional y, en palabras de Grant, «estimamos que estábamos produciendo unas 615.000 toneladas de alimento. Si incrementamos esa producción en 10% para fines de 2016, a partir de allí alcanzaríamos para 2020 un nivel de producción de más de un millón de toneladas de alimento. Creo que sería emocionante si lográramos mantener un incremento de la producción de 10% en el periodo de los próximos cinco a siete años. Creo que esa posibilidad nos acercaría muchísimo al objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria en Jamaica».

Grant apuntó que parte del impulso tendiente a garantizar la disponibilidad y la regularidad en la producción de alimentos proviene del crecimiento de la agricultura tradicional, lo que incluye una mayor producción de caña de azúcar, banana, azúcar y café. «Lo que haremos será aumentar la exportación de estos productos, con lo que generaremos más divisas extranjeras y reduciremos nuestras importaciones, pero además esto nos brindará la capacidad de expandirnos en otras áreas de producción de cultivos en el país».

Agregó asimismo que «el sector ganadero es muy importante en lo que respecta a lograr seguridad alimentaria». Según la JAS, Jamaica produce en la actualidad 60% de la carne de cerdo que consume. Con anterioridad, el país debía importar un volumen sustancial de cerdo para satisfacer la demanda. Los detractores señalan que la actual saturación del mercado está llevando a la baja los precios y la rentabilidad de la producción porcina local.

El senador indicó que el país también es autosuficiente en lo relativo a la producción avícola. Señaló que las granjas avícolas de Jamaica proveen más de cuatro kilos de carne de ave a la mesa de 2,7 millones de jamaquinos. Según su evaluación, «no necesitamos importar aves, lo que nos orienta en esa dirección. Somos autosuficientes en lo que respecta a huevos, y ese es un paso en dirección a la seguridad alimentaria a través de la sustitución de importaciones».

No obstante, advirtió que «donde debemos consolidarnos en el curso de los próximos cinco a siete años o una ventana de cinco a diez años es en el área de nuestro pequeño rumiante, el cordero. En este momento, Jamaica está importando más de 600 millones de dólares de cordero para satisfacer la demanda. En la actualidad, solo podemos responder a 25% de la demanda. La buena noticia es que en lo que respecta a ovejas y cabras, nuestra producción se ha incrementado a 700.000 cabezas. Hace tres años estábamos en medio millón y ahora llegamos a 700.000. Para satisfacer la demanda local necesitamos 3,5 millones de cabezas. De modo que existe una brecha de 75%, y hay mucha motivación para hacerlo. En lo que respecta a ganado vacuno, tanto para la producción de carne como láctea, también hay una gran oportunidad de incremento de la producción para satisfacer la demanda interna».

Confía en que con el marco adecuado de políticas, que incluye contratar mano de obra (calificada y no calificada), identificar tierras y poner a trabajar los recursos, la agricultura cuenta con capacidad para impulsar un proceso que permitirá alcanzar la seguridad alimentaria, la independencia económica y la mitigación de la pobreza en Jamaica.

NUTRICIÓN Y CONSUMO

Otro pilar de la política mencionada tiene que ver con la provisión no solo de alimentos sino también de alimentos nutritivos. Samuda señala que el hambre de corto plazo también se relaciona con la calidad de los alimentos, y no solo con la frecuencia del consumo. Agrega que muchas personas consumen alimentos con alto contenido calórico cuando tienen hambre. Esta situación está contribuyendo a la presencia de desnutrición y anemia en los niños, y de diabetes y otras enfermedades vinculadas con el estilo de vida en los adultos.

Según Donovan Stanberry, en el sistema escolar existe preocupación respecto del incremento en la disponibilidad y el consumo de refrigerios procesados, mientras que se observa una carencia de alimentos con contenido nutricional adecuado. Por ejemplo, la doctora Samuda señaló

que el Ministerio de Educación informa que 95% de los escolares consumen gaseosas todos los días. Otra de las dificultades destacadas es el consumo restringido de frutas y la negativa de los niños a consumir verduras. «En el hogar, no se consumen verduras regularmente, quizá solo los domingos. No es un componente habitual del menú. La gente dice que las verduras son caras, pero cada tanto se pueden conseguir verduras más económicas y además es posible ayudarse plantando algo en la propia casa. Hasta en una olla se puede plantar un poco de amarantho, pimiento o tomate», agregó.

Esta situación está generando una dificultad importante en el Programa de Alimentación Escolar, «porque estamos presionando para que se incremente el acceso a las verduras en los almuerzos que se sirven. Pero hay que estar allí desde la etapa del jardín escolar tratando de que acepten ponerse la comida en la boca, porque lo primero que hacen es separar las verduras de la comida y ponerlas en un rincón de la caja o del plato».

Las comidas en el nivel de la primera infancia se proveen en dos formatos: un producto ya horneado, de Nutrition Products Ltd., que es una organización del ministerio, o un desayuno cocinado en el momento, financiado con fondos provistos a la escuela. El ministerio también está procurando incrementar el uso de frutas y verduras especialmente en los productos horneados. Como resultado, las recetas ahora incorporan zanahorias y bananas. El plan, según Samuda, también procurará incluir un jugo de frutas en lugar de la bebida frutal que se sirve en la actualidad.

El Ministerio de Agricultura manifestó que, en colaboración con el Ministerio de Educación, capacitó a grupos específicos de mujeres de zonas urbanas en agroprocesamiento. El propósito radica en desarrollar y crear productos para la venta en las escuelas, en un esfuerzo por reemplazar los alimentos con saborizantes y aditivos artificiales que consumían los estudiantes. Esta capacitación también creó oportunidades de generación de ingresos para estos grupos urbanos. El proyecto ha tenido niveles diversos de éxito.

El Ministerio de Educación está trabajando con el Ministerio de Salud para garantizar que se sirva una verdura con cada comida preparada. El objetivo es que si el niño solo consume una comida diaria, esa comida pueda brindarle al menos 30% del requerimiento diario, pues muchos niños sufren de anemia debido a la falta de nutrición. Samuda señaló que «hasta 40% de la población en edad escolar (cinco a 16 años) tiene

anemia por deficiencia de hierro. Este tipo de anemia afecta el aprendizaje, puesto que puede provocar letargo».

De acuerdo con Samuda, el acceso a los alimentos, la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos son un problema más amplio que afecta a toda la población. Argumenta que lo que se necesita es más educación acerca del modo de utilizar recursos limitados para garantizar el acceso a los alimentos de toda la familia. Asimismo aboga por una mejor distribución de alimentos, pues no existe escasez en la producción de una amplia variedad de cultivos en el país, sino una falta de un sistema de mercado adecuado para distribuir los alimentos a quienes intentan obtenerlos a precios más bajos.

REDES DE SEGURIDAD

El representante de la FAO en Jamaica, Belice y las Bahamas, Jerome Thomas, en un discurso pronunciado en 2014 en ocasión del lanzamiento del Programa de Alimentación Escolar integrado, destacó su importancia en la promoción de la seguridad alimentaria y nutritiva en los países donde se ha implementado. «También influyen en la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho al alimento. Por estas razones, los programas de alimentación escolar se recomiendan, por lo tanto, como una de las estrategias decisivas para alcanzar un desarrollo sostenible de largo plazo», agregó.

A partir de 2015, el Ministerio de Educación provee dos comidas, desayuno y almuerzo, para la cohorte de primera infancia. En años anteriores, el ministerio no suministraba el desayuno pero la investigación ha mostrado que esta comida es fundamental, y las indagaciones llevadas a cabo en los dos últimos años revelaron que casi 30% de los niños llegan a la escuela sin desayunar. La doctora Samuda dice: «Si no hay desayuno, hay lentitud mental, y la eficacia del marco cognitivo no opera correctamente por la mañana. Por lo tanto, el gobierno está agregando el desayuno».

El Programa de Alimentación Escolar trabaja, además, en colaboración con el programa PATH en la provisión de comidas a alumnos de hogares registrados en ese programa. Los niños de entre nueve y 18 años que pertenecen a esos hogares reciben el almuerzo en la escuela; la comida es gratuita o bien con un copago. Sin embargo, una de las dificultades detectadas radica en el costo de suministrar las comidas. Dice la doctora Samuda: «A decir verdad, debido al costo de los alimentos, la cantidad de dinero no es suficiente para proveer una comida totalmente gratuita los cinco días, pero algunas escuelas hacen un esfuerzo por

lograrlo. Esperamos, no obstante, que los niños puedan recibir al menos tres buenas comidas gratis, y que las otras dos se financien con un copago, lo que significa un aporte para cubrir el costo de las comidas».

También se ha informado que hay alumnos que solo asisten a la escuela tres días por semana: son los días que se sirven las comidas del programa y además los días en que es posible pagar transporte y almuerzo con los fondos aportados por PATH. Samuda indicó que algunos alumnos que reciben el almuerzo comen la mitad y llevan el resto a casa, porque tienen que compartirlo con alguien. Es probable que estos alumnos vengan de hogares donde faltan alimentos. «Uno de los objetivos del Programa de Alimentación Escolar es mejorar la asistencia, porque si un niño asiste a la escuela es más que probable que vaya a la clase, aprenda y alcance objetivos. Si no están en la escuela, tenemos un problema. Entonces, el primer objetivo es mejorar la asistencia. Y esa es la razón por la que estamos presionando para que se sirvan comidas cinco días, porque los niños vienen a la escuela solo los días en que se les da de comer».

Traducción: Elena Odriozola

NIÑOS Y MUJERES PRIMERO

Marilyn Facey

El hambre y la pobreza en Jamaica están lejos de ser situaciones individuales. Son problemas crónicos que afectan sobre todo a las familias de las zonas rurales, por lo general monoparentales, encabezadas por mujeres desempleadas que deben elegir a diario entre comer y enviar a sus hijos a la escuela.

La encuesta de condiciones de vida en Jamaica de 2012 reveló que uno de cada cinco jamaíquinos (19,9%) vive en la pobreza. Los distritos con los niveles más altos de pobreza están situados en zonas rurales. Con excepción de Kingston, esas son St. Thomas, St. Catherine, Portland, Manchester y St. Elizabeth, con una prevalencia de más de 20%. Estos distritos también constituyen las zonas agrícolas claves de la isla. Las mujeres representan alrededor de 30% de la población agricultora total.

La pobreza ha sido un rasgo constante en la historia de Jamaica. Aunque la incidencia ha fluctuado, con una disminución a 16% en 2009 y luego un aumento a 20% en 2012, se trata de una preocupación que persiste. Para contribuir a una mejor comprensión del problema, tres mujeres comparten la experiencia de su lucha contra el hambre y la pobreza en diferentes periodos. Las tres se criaron trabajando en granjas y con el tiempo comenzaron a cultivar por sí mismas para escapar de la pobreza.

En palabras de Fantan Mojah, en su canción «Hambre»: «Mamá tiene hambre / Papá tiene hambre / Mi hermano tiene hambre / Mi hermana tiene hambre / Haz algo por los pobres, abre la puerta». La letra resalta claramente el hecho de que el hambre y la pobreza están lejos de afectar a un solo individuo. Es un problema que afecta a las familias,

que por lo general son monoparentales, lideradas por mujeres desempleadas que viven en áreas rurales. Las estadísticas muestran que 17,2% de las mujeres, en comparación con 7,6% de los hombres, están desempleadas, mientras que los hombres jóvenes tienen más posibilidades de ser contratados que las mujeres. Esto se evidencia en la imposibilidad de conseguir trabajo de las jóvenes que quedan embarazadas, como en el caso de Dorrett Haughton.

DORRETT HAUGHTON, DEL CALALOU AL CAFÉ

Dorrett conocía el rostro del hambre y la pobreza y estaba dispuesta a ayudar a encaminar a otras mujeres ofreciéndoles empleos estacionales. Dice que a veces era «un desafío pagarles, ya que las cosas no siempre salen como una querría. Las mujeres tienen que ponerse de pie y ayudarse entre ellas, y no ser totalmente dependientes de los hombres».

Al contar su propia historia, Dorrett Haughton recuerda que se crió en Seven Miles, Bull Bay, que limita con St. Andrew y St. Thomas. «Crecer en Bull Bay fue agradable hasta 1980, cuando mi papá perdió su trabajo en la fábrica de bloques de hormigón. Vaya si fue difícil, solía quemar carbón. La primera vez solo obtuvo unas diez bolsas porque se le quemó. Luego le confió el carbón a una señora y nunca obtuvo el dinero».

Luego de ese intento fallido empezó a plantar calalou [hojas y tallos comestibles]. Haughton cuenta que toda la familia tenía que ir al río por la mañana para que su padre pudiera regar el calalou dos veces al día. Agrega que «el calalou crecía mucho, en esos días no teníamos pesticidas, así que usábamos la ceniza del fuego de leña y la esparcíamos sobre las plantas para que el calalou no tuviera gusanos. Luego cuando el calalou estaba listo venía otro desafío, porque nadie quería ir a venderlo. Mi madre quería que la gente viniera a comprarlo al jardín. Pero como nadie sabía que lo teníamos, nadie venía. Así que finalmente me ofrecí como voluntaria».

Su madre juntó cinco o seis atados y los puso en una caja de cartón. Haughton dice: «La primera persona que me vio me preguntó cuánto costaba el atado y yo dije ‘cincuenta centavos’. Porque en ese momento un atado de calalou costaba cincuenta centavos. Lo vendí todo antes de llegar a Seven Miles. Entonces volví a casa y le dije a mi madre que vendería más; ella lo cortó y yo lo vendí. Cuando regresé con el dinero me preguntó si podía ir a Harbour View a comprar algo de comida. El dinero no alcanzaba como para que ella pudiera ir a comprar. De modo que paró un camión, me subió y fui a lo que en ese momento era el

Mercado de Harbour View. Compré arroz, harina, azúcar y harina de maíz. Cuando regresé, ella cocinó y nos dimos un banquete. Desde ese momento no tuve que volver a ir a la ruta a vender calalou. Todos me conocían y venían a casa a comprarlo».

En septiembre de 1980, su padre tuvo la oportunidad de viajar al exterior con el programa Farm Work. Esto puso fin a ese periodo, y él pudo hacerse cargo de su familia nuevamente.

El trabajo, ya sea a través de la agricultura constante o el empleo tradicional, es la mejor manera de terminar con el ciclo de la pobreza. Aunque el gobierno ponga énfasis en los programas de beneficios sociales, rara vez hacen mella en las situaciones que afrontan muchas familias. Ni los programas ni los subsidios son suficientes para asegurar que las familias tengan cubiertas sus necesidades básicas. Sin embargo, iniciativas como la capacitación a través de la Heart Trust National Training Agency o los programas Farm Work en el extranjero a través del Ministerio de Trabajo suelen tener un mayor impacto en reducir o alejar a las familias del alcance de la pobreza.

En el caso de Dorrett Haughton, su capacidad de proveerse su propio sustento, el de su familia y ayudar a otros vino a través de la agricultura. «Mis dos abuelos eran campesinos. Yo tuve a mi hijo joven y luego vine a vivir a Flamstead [área rural de St. Andrew]. No tenía trabajo así que empecé a trabajar en una granja. Aprendí mucho, hice muchas preguntas, leí muchos libros y cuando me fui decidí tener mi propio terreno». Su cultivo más rentable son las bananas. Haughton cuenta que cuando «[los árboles] están llenos, los hago madurar y las vendo, y así es como hago el dinero. Ahora puedo tener uno o dos empleados que me ayuden cuando no puedo hacer el trabajo sola».

Dice que la vida del agricultor es buena. «Puedes plantar un poco de calalou, un poco de tomate y obtener algo para comer cuando tienes hambre. Sí, cultivar me da mucho».

Uno de los principales desafíos es que la tierra que cultiva no es suya, sino del gobierno. Las estadísticas muestran que las mujeres son terratenientes minoritarias y la mayoría cultiva en tierras que no son propias.

Haughton señala que está en esa tierra hace muchos años, «así que no me molestaría que el gobierno hiciera algo para que yo pudiera arrendar la tierra». Esto, dice, ayudaría a conseguir préstamos para sostener la explotación.

Las sequías y los incendios de matorrales, el acceso al transporte y el estado de las rutas en la comunidad, explica, son otras de sus preocupaciones. «A veces hay que llevar la carga en la cabeza hasta llegar a la ruta principal y lograr que alguien te lleve. Todos dicen que no pueden llevarte por el mal estado del camino».

El desarrollo de caminos rurales es necesario para aumentar los ingresos del sector agricultor. Muchos caminos rurales llevan años sin ser reparados. Al mismo tiempo, los costos del transporte de productos desde los campos hacia los mercados aumenta el costo de los comestibles.

Para estas mujeres, la pobreza fue consecuencia del desempleo. Sin embargo, la habilidad para cultivar, como en el caso de Dorrett, o haber recibido ayuda de otras mujeres, como sucedió con Sandra McNair, las llevó a una reducción gradual de la pobreza. Al día de hoy, la agricultura es la principal fuente de ingresos para ambas, y les ha permitido derrotar el hambre, una característica de su infancia en Jamaica.

SANDRA McNAIR, EL HAMBRE EN LOS CAFETALES

Sandra recuerda que su madre trabajaba en una plantación de café «desde que era pequeña me llevaba con ella a cosechar, y allí obtuve la experiencia». Más tarde se casó y se mudó a Clarendon, en Jamaica central. Madre de dos hijas, Kendra y Jackie, la señora McNair se instaló en Clarendon cuando ellas tenían cinco y dos años, pero allí no había trabajo.

Según el Instituto de Estadística (STATIN) de Jamaica, la fuerza de trabajo femenina es de 448.000 personas, de las cuales 183.400 son mujeres jóvenes, de entre 18 y 25 años. STATIN también indica que 17,2% de las mujeres están desempleadas, en comparación con 7,6% de los hombres.

McNair dice que el primo de su marido le enseñó a quemar carbón. «Recuerdo una vez que quemamos carbón y nadie quería comprarlo; fue muy duro, nos fuimos a dormir sin comer. Recuerdo que un día, volviendo de los matorrales donde quemábamos el carbón, mi hija pequeña, Jackie, me dijo, ‘mamá, no tenemos nada para comer’, y a mí se me cayeron las lágrimas. Ella tenía dos años en ese entonces, fuimos a casa, preparé un té y ella se lo bebió y se fue a dormir. Eso era todo lo que había».

Esta es la experiencia familiar de muchas personas que atraviesan períodos de hambruna o viven una subsistencia a base de té. Generalmente

ese té es a base de un arbusto u hojas hervidas, endulzadas con azúcar. El elemento seleccionado para hacer el té suele encontrarse en el jardín. Hierbas tales como cedrón, hojas de lima, hojas de guanábana, kalanchoe, hojas de arroz y hojas de melón amargo, una hierba de propiedades saludables.

Sandra relata un momento particularmente difícil: «Un domingo tuvimos que recolectar cocos del árbol e ir a sentarnos en el porche, y eso era todo lo que teníamos para comer y luego irnos a dormir: coco. Una vez un vecino llamó a mi hija mayor, Kendra, y le dijo ‘Sé que las cosas están difíciles, tu mamá no tiene nada y están disimulando’. Pero yo decidí aguantarme el hambre. Me iba a dormir una noche tras otra con hambre».

Sus hijas siguieron sufriendo los efectos del desempleo y la falta de alimentos. «Mis hijas no podían ir a la escuela. Pero la maestra quería mucho a Jacqueline, la menor. Recuerdo que la señorita Ball me dijo ‘Mándelas a la escuela, a ambas, y yo les daré de comer’. Porque las dos iban a la misma escuela primaria. Y eso hice, las mandaba a la escuela y ella les daba de comer. Las mandaba a las excursiones escolares, y a veces incluso me enviaba a casa un poco de dinero en un sobre. Así de grave era la situación».

Hay muchos maestros como la señorita Ball, que ayudan a los estudiantes cotidianamente con dinero para el almuerzo y el transporte escolar. Sin embargo, muchas de estas historias nunca salen a la luz, sobre todo en la Jamaica rural.

Sandra McNair dice que se separó de su marido y regresó a Content, en el área rural de St. Andrew, en 2005. «Yo trabajaba con un hombre y una mujer en sus cafetales. Ellos me ayudaron, no voy a mentir, me ayudaron durante los momentos difíciles cuando regresé». Siguió trabajando con ellos hasta que Dorrett Haughton, la mujer para la que trabajaba, la animó a plantar dos plantas de café por sí misma. Sandra lamentaba no tener dónde plantar el café, porque vivía ilegalmente en tierras fiscales. Finalmente decidió cultivar la tierra ocupada.

«Plantaba tomate, y eso me ayudaba cuando no había trabajo en las plantaciones. Aún trabajo con ella [Dorrett] cada tanto, cuando hay trabajo para hacer. Pero planté algunas por mí misma y voy viendo cómo funciona, porque hay gente que vive de su café y no tiene que trabajar para nadie. De modo que en el próximo año o dos quiero dejar de trabajar para otros y cuidar de mis hijos», agrega McNair.

Las dos niñas ya son adultas jóvenes. Al reflexionar, dice, le da gracias a Dios. «A decir verdad, le doy las gracias a Dios porque nunca me rendí. Esas dos niñas saben lo que es el hambre, siempre salimos adelante y nunca van a mendigarle a nadie. Al verlas, hoy en día, sé que ya han pasado por lo peor. Kendra vive sola y Jackie es enfermera. Me alegra ver de dónde me ha sacado Dios. Las cosas aún no son del todo buenas, pero teniendo en cuenta de dónde vengo, tengo que darle las gracias a él».

LAURINE DUFFUS, LLORAR Y NO COMER

Laurine cuenta que su prioridad es enviar a sus hijos a la escuela. Dice que su infancia fue muy difícil, ya que sus padres no tenían dinero para enviarla a la escuela. Tuvo que empezar a trabajar a los 15 años cosechando café y luego empezó a cultivar.

Ahorrar en el National Peoples Cooperative Bank la ayudó a mandar a su hijo mayor a la escuela. Con su segunda hija, que ahora va a la secundaria en Kingston, «las cosas están muy difíciles. A veces le doy la tarjeta [de débito] y el dinero se acaba porque tiene que sacar para pagar el transporte y la comida. Necesita 500 JMD [poco más de cuatro dólares estadounidenses], para ir desde Flamstead [zona rural al este de St. Andrew], hasta Red Hills Road [en St. Andrew]. No sé si tienes idea de dónde está Flamstead, pero es muy lejos. Así que cada tanto cultivamos un poco para ganar algo de dinero para que puedan ir a la escuela. A veces vas al mercado y tienes que vender lo que tienes por 50 dólares [jamaíquinos] la libra [0,40 dólares estadounidenses]. Pero hay que resistir y tener fe. Recuerdo cuando no teníamos nada para comer. Iba a vender al mercado y solo me alcanzaba para comprar algo para el domingo. Luego por el resto de la semana no teníamos nada para comer. Teníamos que pedir fiado en la tienda, y aun así no teníamos dinero para pagarlo».

«Recuerdo que mi madre cocinaba hierba sosa con banana. Así crecimos, no con una cena dominical decente. A veces mi abuelo le daba a mi madre un poco de azúcar y tomábamos té. Recuerdo que cuando tuve a mis hijos ni siquiera tenía azúcar para prepararles el té. Un día un amigo vino a verme y yo estaba de pie contra la pared, llorando porque tenía hambre, pero no podía hacerle saber que esa era la razón por la que lloraba. Desde entonces las cosas han mejorado, pero yo no tengo trabajo. Aunque trato de mantenerme. A veces consigo un trabajo de un día, y aun así lo tomo. Tengo algo de banana, aunque la mayor parte se quemó en el incendio [del este rural de St. Andrew y

St. Thomas], pero aún quedan uno o dos bananos, así que los haré madurar y los venderé».

Según la señora Duffus, la situación actual es muy difícil para los campesinos a causa de las sequías que ha sufrido el país durante los últimos dos años. «Porque no tenemos agua para regar las cosas que plantamos. Solíamos tener cultivos comerciales, juntábamos agua y la cargábamos. Es muy difícil. Todavía lo intento pero no hay dinero para entregar la cosecha».

Traducción: Virginia Higa

Perú



EL HAMBRE EN PERÚ NO SABE DE MILAGROS

Nelly Luna Amancio

En la última década, las cifras de la pobreza en Perú se han reducido de 58% a 23%, pero en las zonas rurales el porcentaje todavía alcanza a la mitad de la población. El hambre en el país tiene varios rostros y uno de los más crueles es la anemia crónica que afecta a 43% de los niños menores de tres años. Parece evidente que el «milagro económico peruano» está lejos de haber eliminado el hambre.

La amenaza llega con los primeros vientos fríos a Huancavelica, una de las regiones del sur andino más pobre de Perú. Cuando el ventarrón revuelca la tierra seca y golpea con rudeza las casas de adobe en la comunidad de Chocorvo-Arma, las mujeres saben que las bajas temperaturas asolarán su ganado y penetrarán sus hogares. Entonces, repiten el único ritual que la pobreza les permite: abrigan con lo que pueden a sus niños y cubren con las mantas que sobran sus alimentos. Nada pueden hacer con sus animales. El ganado sucumbe al frío y con su muerte la economía de estas empobrecidas familias, cuya subsistencia depende de la venta de los animales, se desmorona aún más.

El 97% de la población de Chocorvo-Arma es pobre. La Plaza de Armas de esta comunidad es un cuadrado de tierra y cemento salpicado de ichu (pasto empleado como forraje para el ganado), rodeado de agrietadas casas de adobe que parecen haber soportado un terremoto y con niños de cabellos desteñidos jugando en un campo sin árboles ni juguetes. La necesidad y la ausencia de servicios básicos rigen la vida de los habitantes de este pueblo ubicado a 24 horas por tierra desde la capital de Perú y a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Las familias no consumen la carne del ganado que crían, prefieren cambiarlo o venderlo para adquirir sacos de maíz, fideos, arroz o papa.

En Chocorvo-Arma el consumo de proteínas se encuentra por debajo del mínimo necesario. Lo saben las autoridades locales y las cifras

de la dirección regional de salud lo confirman: la desnutrición y la anemia son las principales amenazas de la pobreza en esta comunidad. Ellos eligen carbohidratos porque estos los llenan más y duran más tiempo. En los Andes peruanos, la dieta pobre en nutrientes es un problema aún mayor al de la pobreza monetaria: 60% de los niños menores de tres años en Huancavelica tiene anemia crónica. El hambre toca el cielo en Perú.

UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

El mundo habla del «milagro peruano» y del imparable crecimiento del país en la última década: la economía creció a un promedio anual superior a 6,5% entre 2005 y 2012; entre 2002 y 2014 el PIB per cápita varió de 2.037 a 6.594 dólares estadounidenses y la pobreza monetaria pasó de más de 50% en 2004 a menos de 23% en 2014. Pero el optimismo de estas cifras se desmorona al revisar las tasas de anemia en los niños. En los últimos años, la anemia crónica se ha extendido a más de 40% de los niños menores de seis años. Se estima que por lo menos 70.000 menores tienen déficit de hierro, lo que limita su crecimiento y desarrollo cognitivo, y con ello el acceso a mayores oportunidades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la anemia afecta a 24,8% de la población del mundo. El grupo más golpeado son los niños en edad preescolar (47%), las mujeres gestantes (41%) y los adultos mayores (23%). En América Latina, la anemia es considerada un problema de salud pública moderado o severo en casi todos los países, excepto en Argentina y Uruguay, donde las tasas son bajas y solo representa un problema leve.

El hambre no existe como un indicador económico para medir el desarrollo de los países, pero la anemia puede ser su expresión más implacable. En Perú, entre los años 2001 y 2010 los casos se redujeron, pero a partir de 2011 comenzaron nuevamente a incrementarse. En 2000 el déficit de hierro afectaba a 62% de los niños menores de tres años, en 2011 alcanzó a 41,6% y desde ese momento se registró un relativo aumento, hasta que en 2014 el promedio nacional alcanzó el 46%.

¿Por qué se incrementaron los casos de anemia si todos los demás indicadores socioeconómicos describían las mejoras de la economía peruana? Mario Tavera, asesor del viceministro de Salud Pública, señala que la anemia no necesariamente es un problema asociado a la pobreza, sino que también se vincula a hábitos alimenticios y al acceso a educación por parte de la familia.

Para las familias más pobres, el gobierno impulsa desde hace años un programa para distribuir micronutrientes de hierro, pero estos no siempre llegan a los lugares donde más se necesitan. Tavera lo reconoce. «No ha sido fácil llegar con los micronutrientes a los lugares más alejados y por eso ahora estamos priorizando su distribución en áreas rurales y comunidades indígenas», explica.

Pero no solo hubo un problema de distancias geográficas. Consultado por el tema, el ministro de Salud, Aníbal Velásquez, reconoció que hubo inconvenientes con los proveedores de estos compuestos. «Se hizo un cambio de sulfato ferroso a un nuevo preparado en polvo que tiene mayor aceptabilidad en los niños. Pero hubo un problema con el proveedor y entonces no se pudo distribuir. El producto no estaba en buena calidad y se tuvo que inmovilizar. Eso fue entre 2012 y 2103», dijo en una entrevista con el diario *El Comercio*.

Tavera sostiene que hasta agosto de 2015 las cifras habían mejorado y que en las zonas rurales la anemia en menores se había reducido de 46% a 43% por ciento. Sin embargo, estos porcentajes se encuentran todavía por encima del promedio en la región. En Latinoamérica la prevalencia de anemia en niños menores de cinco años es de 29%. «En cualquier parte del mundo, tener los porcentajes que tiene Perú sería una situación de emergencia», reconoce el funcionario.

Además de los problemas con los proveedores y las distancias, el economista Enrique Vásquez, investigador de la Universidad del Pacífico, advierte que otro de los factores que interfiere en la lucha contra la pobreza tiene que ver con la mala distribución de los recursos asignados a los programas sociales. Luego de analizar las cifras de la inversión pública, el investigador concluyó que el presupuesto para enfrentar estos temas se concentra en áreas que no tienen altos niveles de desnutrición, como Lima y Callao. Es decir, muchas personas que no son pobres son beneficiarias de programas sociales: 26% en el vaso de leche, 36% en comedores populares, 46% en desayunos escolares y 47% en almuerzos escolares. Esta distorsión de la inversión ocasiona que los más pobres no reciban apoyo adecuado del Estado.

«Nosotros estamos mejorando los procesos de distribución y esperamos el próximo año tener cifras más alentadoras. Se está coordinando con otros programas sociales para llegar de una manera más eficiente a las comunidades más pobres», dice Tavera. El reto es grande. El Ministerio de Salud se ha propuesto reducir la anemia y alcanzar solo el 20% como promedio nacional para 2016.

UNA DIETA POBRE EN NUTRIENTES

La anemia infantil es considerada un problema de salud pública severo en Perú. Las regiones que más casos concentran son también las regiones con más altos indicadores de pobreza y desigualdad: Puno, Madre de Dios, Junín, Huancavelica, Pasco y Ucayali. En estos lugares, más de 60% de los niños presentan cuadros con déficit de hierro.

Las cifras desagregadas revelan a los grupos de mayor riesgo. La quinta parte de la población (quintil) con menores ingresos tiene 60% de niños con anemia. Los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud mencionan que la anemia en la infancia tiene un impacto irreversible: está asociada a logros educativos pobres y a deficientes capacidades para el trabajo, pero también a un aumento de la mortalidad y morbilidad debido a enfermedades infecciosas.

Sin embargo, la mala alimentación no solo es un problema de familias con escasos ingresos. Desde hace varios años las autoridades han reportado un serio problema de malnutrición en los sectores de mayores ingresos. Mario Tavera señala, por ejemplo, que 25% de los niños menores de tres años del quintil con mejores ingresos tiene anemia. «En este momento la anemia es el problema de salud pública más importante del país. Las encuestas de consumo de alimentos confirman los serios problemas de alimentación en el país», señala.

En este contexto, el ministerio impulsó una campaña de alimentación saludable en los colegios y una ley que busca prohibir la venta de alimentos no saludables en la escuela, pero a la fecha su reglamento se encuentra paralizado porque ha recibido el rechazo de la industria alimentaria.

Un indicador revela el grado de alarma por la anemia en Perú: en mujeres en edad fértil, el consumo promedio de hierro es de 7,4 miligramos por día, pero esta cantidad apenas cubre la tercera parte de lo que el cuerpo necesita diariamente. En el caso de los niños de uno a tres años, según la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA), la media de consumo de hierro es de 4,3 miligramos por día. 90,9% de esta población consume hierro por debajo de las recomendaciones sanitarias (25 miligramos por día). Es decir que la economía peruana crece pero la anemia amenaza con estancar los indicadores de desarrollo.

La preocupación de las autoridades sanitarias por la falta de hierro en mujeres gestantes tiene que ver también con los impactos sobre el niño y la madre: la anemia está asociada, por ejemplo, al parto prematuro y

del bajo peso del menor al nacer. Además, entre las principales causas de morbilidad materna se encuentra el «embarazo terminado en aborto, que está relacionado con el parto prematuro y este, a su vez, con la anemia de la madre». Y para un niño con bajo peso al nacer, las complicaciones en la salud son mayores: puede sufrir de síndrome de dificultad respiratoria o presentar un desequilibrio en la cantidad de sales o insuficiente cantidad de azúcar en la sangre.

IMPACTOS ECONÓMICOS DEL HAMBRE

La anemia también tiene un impacto en la economía nacional. Un estudio de Lorena Alcázar, investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), estimó –con información actualizada a 2009– que los costos para el país de este déficit alimentario superan los 2.000 millones de soles (unos 570 millones de dólares). De este monto, el componente más importante está asociado a los impactos en la edad adulta que genera la pérdida cognitiva por falta de hierro en edades más tempranas.

El estudio analiza tres indicadores. Establece primero que el costo per cápita por la pérdida cognitiva asociada a la anemia es de 44 soles. En lo que corresponde a años de estudios perdidos a causa de la anemia, quienes la padecen tienen un quinto de año menos de escuela que los niños sin anemia. El tercer indicador analiza el impacto laboral y concluye que la anemia genera un costo de 17,49 soles. Al sumar los tres hallazgos, el estudio estima una pérdida total de 74,8 soles per cápita.

En términos totales (multiplicando por la población de Perú, 28.954.000 habitantes), precisa el estudio de Alcázar, el impacto económico de la anemia alcanza los 2.165 millones de soles, lo que representa 0,55% del PIB peruano. Sin embargo, también aquí el desagregado por regiones evidencia las enormes brechas entre áreas urbanas y rurales. En Amazonas, Apurímac, Huánuco, Ucayali y Puno los costos de la anemia representan cuatro veces más: 2% del PIB regional.

La respuesta del gobierno peruano ante esta situación, como ha señalado Mario Tavera, ha sido impulsar programas nutricionales enfocados en las madres gestantes y en los niños menores de seis años. Durante el actual gobierno de Ollanta Humala se creó, además, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entidad que administra y ejecuta los programas de lucha contra la pobreza. Sin embargo, estos avances aún son insuficientes.

Lorena Alcázar sostiene que lo que sucede con la desnutrición y la anemia es un buen ejemplo de lo que ocurre en la política intersectorial. «Hace falta mejorar los niveles de coordinación entre los diferentes sectores; deben intervenir también los ministerios de Salud, Economía, Agua, Educación; el crecimiento económico ha ayudado a reducir estos indicadores, pero ahora hay que hacer más esfuerzos para alcanzar a los lugares a donde es más difícil llegar», explica la especialista.

La investigadora se refiere a los distritos rurales que todavía concentran más de 90% de pobreza, a los centros poblados sin beneficios del canon minero, a las comunidades indígenas de la selva a donde no llegan las carreteras ni los servicios básicos de salud y cuyos habitantes mueren por falta de acceso a tratamientos adecuados y oportunos para enfermedades como la tuberculosis.

LA ENFERMEDAD DE LOS MÁS POBRES

La anemia no es la única expresión del hambre. La tuberculosis puede ser otra de sus formas más silenciosas. Una mala alimentación debilita el sistema inmunológico e impide que este le oponga resistencia al bacilo de la tuberculosis. En el país es considerado un serio problema de salud pública. Cada hora, según los estimados del Ministerio de Salud, se enferman de tres a cuatro personas. Cada día se reportan alrededor de 81 casos y tres muertes a causa de esta enfermedad.

La presencia de la tuberculosis en las comunidades indígenas de la Amazonía, alejadas territorialmente y con altos niveles de pobreza, es una de las principales preocupaciones del ministerio. La tuberculosis en los pueblos indígenas está directamente asociada a la mala nutrición y a la falta de un adecuado servicio de salud. Las distancias geográficas complican un acompañamiento en el tratamiento y terminan derivando la enfermedad en una variedad más agresiva: la tuberculosis multidrogorresistente y la extremadamente drogorresistente, cuyos tratamientos requieren de fármacos más costosos y agresivos.

Perú concentra 25% de los casos de Latinoamérica y es, junto con Haití, el país con más casos de enfermos de tuberculosis multidrogorresistente. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, durante 2013 se registraron 31.000 casos de tuberculosis en la forma sensible, 1.260 casos de multidrogorresistente y 66 casos de extremadamente drogorresistente.

Uno de los aspectos que contradice el crecimiento económico en las regiones con mayor inversión producto del *boom* minero tiene que ver,

precisamente, con la presencia de la tuberculosis en las regiones con elevados ingresos producto de la industria extractiva. En Áncash, donde opera uno de los proyectos mineros más importantes (Antamina), entre 2009 y 2013 se pasó de 569 a 627 casos de personas diagnosticadas con tuberculosis, y en Cajamarca (la región con la mayor producción de oro en Perú), se pasó de 182 casos a 232 en el mismo periodo.

Las paradojas sobre el *boom* minero y el hambre se extienden. La región más pobre del país es Cajamarca, el lugar de mayor producción de oro. Si el *boom* minero no logró eliminar el hambre, ¿podrá Perú continuar reduciendo la pobreza con la caída de los precios internacionales de los metales?

LOS RIESGOS DEL ESTORNUDO ECONÓMICO

¿Un estornudo al otro lado del mundo puede generar un resfrío en Perú? Las perspectivas de desaceleración de la economía china y la consecuente caída del precio de los metales han hecho pensar en tiempos duros para la economía. Los economistas coinciden en que los países de América Latina y el Caribe cuyo crecimiento económico ha dependido de la industria extractiva deberán planificar estrategias y diversificar su economía para evitar una caída severa de sus rentas.

«Lo que todos los análisis han mostrado en los últimos tiempos es que de manera general el crecimiento económico de casi diez años en Perú ha contribuido a la disminución de la pobreza, y un factor importante para ese crecimiento ha sido la inversión en industrias extractivas, principalmente la minería», dice Epifanio Baca, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, organización que monitorea las industrias extractivas y su impacto en la economía.

Pero este ciclo de crecimiento e inversiones ha comenzado a presentar baches y ha puesto en riesgo la reducción de la pobreza. Los presupuestos de las regiones cuyas economías estaban directamente asociadas al canon que recibían como parte de las regalías mineras se han visto mermados. «El canon minero de 2015-2016 es la tercera parte del canon minero que recibían las regiones en 2011. Ha habido una drástica reducción del canon y eso significa menos inversiones, menos empleo, menos trabajo. El impacto es directo, y principalmente en las regiones que más recursos recibían por esta fuente», señala Baca.

Las regiones más afectadas son Piura, Cajamarca, Áncash, La Libertad, Arequipa, Cusco y Puno. Varios indicadores –según el especialista de

Propuesta Ciudadana— ya advierten el retroceso de la economía desde 2014. En Arequipa, por ejemplo, durante casi un año ha habido menos empleo, menos construcción de obras públicas.

¿Será posible seguir reduciendo la pobreza con la economía estancada? Epifanio Baca plantea que sería un error continuar impulsando una economía basada en las industrias extractivas. «Hace poco más de cinco años, entre 20% y 25% de la economía dependía de la industria extractiva. Hoy día es menos de 10%. El dinero del canon ya no es tan relevante ahora para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Lo que nosotros planteamos es retomar la agenda de la descentralización fiscal que está postergada desde 2005, y eso implica un sistema de transferencia de dinero que sea equitativo, transparente y predecible», dice el experto.

Hace más de una década Perú inició un proceso de descentralización. El gobierno central transfirió funciones y presupuestos a los gobiernos regionales y municipalidades. Para Baca, este proceso ha permitido que el Estado tome mejores decisiones y esté más cerca de las autoridades: «En el momento en que llegó la plata del canon a las municipalidades y a los gobiernos regionales hubo muchos fondos, no siempre bien distribuidos en las regiones. Si la descentralización contribuyó a la reducción de la pobreza, no puedo dar cifras, pero es impensable pensar en el desarrollo del país sin este proceso».

Quizás una de las advertencias más serias sobre lo que podría ocurrir con la desaceleración de la economía es la que plantea Oxfam: «El escenario para los próximos años es un sistema tributario que recaudará menos y será más injusto. Para los sectores populares, la carga vendrá por dos lados: seguirán pagando buena parte de la cuenta del Estado, pero además correrán el riesgo de ser más vulnerables si se estanca o reduce la inversión social».

PROMESA ROTA: LOS DUEÑOS DE LA TIERRA

Otra promesa anunciaba hace unos años acabar con el hambre y eliminar la pobreza en el norte de Perú y terminó evidenciando las enormes desigualdades. Un gigantesco proyecto de irrigación en Olmos, región de Lambayeque, financiado con inversión pública, ofrecía garantizar el agua que los pequeños agricultores necesitaban para ampliar su producción. El proyecto Olmos prometía irrigar más de 70.000 hectáreas de tierras. Hace unos años, Jaime Escobedo, uno de los investigadores que más ha estudiado la propiedad de la tierra en el país, visitó una de las comunidades campesinas próximas al proyecto, Santo Domingo de

Olmos. Conversó con las asociaciones de pequeños agricultores y notó el entusiasmo de los dirigentes sobre un sueño tantas veces postergado.

«Ellos habían esperado dos generaciones para acceder a más tierras con agua, creían que con el proyecto podrían ampliar la extensión de sus pequeñas tierras de menos de tres hectáreas», cuenta Escobedo. En 2010, el entonces presidente Alan García y la presidenta de la región Lambayeque, Nery Saldarriaga, firmaron el contrato de concesión del proyecto con la hoy cuestionada empresa brasileña Odebrecht. Un tiempo después, las tierras que iban a ser irrigadas se subastaron y fueron vendidas a grandes compañías; 40% de ellas quedó en manos de una sola empresa. La promesa de acabar con el hambre de las comunidades de Olmos se quebró.

Escobedo, investigador asociado del Centro Peruano de Estudios Sociales, lo explica así: «El proyecto Olmos fue dividido en dos partes, un sector de alrededor de 38.000 hectáreas que ya han sido subastadas y son precisamente las tierras que van a gozar de las mayores facilidades tanto de circuitos de comercialización para la salida de los productos al puerto, mecanismos de acceso al agua por goteo, las facilidades más óptimas que uno pueda pensar en el mercado agrario van a estar en Olmos, y para los pequeños agricultores de la comunidad campesina o de las asociaciones de riego locales les han dado solo 5.500 hectáreas».

De las 38.000 hectáreas ya vendidas en Olmos, la compañía Gloria es propietaria de 15.000. De los terrenos que quedan, lo que le correspondería a cada familia campesina sería solo entre una o media hectárea. ¿Qué tiene que ver la concentración de tierras con el hambre y la pobreza? Jaime Escobedo es claro: «Hay una estrecha relación, la población no está accediendo a mejores posibilidades de salir de la pobreza porque toda la inversión pública que se está dando, sobre todo en la costa del país, está sirviendo no para apoyar a la población pobre, no a la población que necesite tierras, sino para apoyar al sector agroexportador».

En las zonas rurales, los principales activos son la tierra y el agua: si una familia campesina pierde su tierra o el acceso al agua, pierde sus posibilidades de salir de la pobreza. La concentración de tierras en Olmos ha ocasionado conflictos sociales en la zona. La Defensoría del Pueblo ha documentado el malestar de la población local, pero hasta ahora el gobierno no ha atendido sus demandas.

Perú tiene el menor porcentaje de tierras con aptitud agropecuaria de América Latina. «Si la tierra agrícola es escasa, y la poca existente es des-

tinada a grandes corporaciones, y sumas escasez más pobreza, lo que tenemos es una enorme desigualdad en el área rural», precisa Escobedo.

El último estudio que se hizo sobre aptitud de la tierra de Perú indicaba que de 128 millones de hectáreas, 80% tenía aptitud o para la conservación o para el desarrollo del sector forestal, y del 20% restante, la mayor parte son pastos. Para la agricultura solo correspondería 6% y es esta pequeña cantidad la que se está concentrando en pocas manos.

La historia se repite en otras regiones cuyas economías ponen énfasis en la agroexportación. Por ejemplo, en Ica existe un número importante de pequeños agricultores que han transferido sus tierras a favor de agroindustrias. El otro actor que también ha transferido un buen número de tierras son las ex-cooperativas de haciendas azucareras, que poseían más o menos 100.000 hectáreas. Todas ellas han vendido los terrenos a grandes corporaciones: Wong, Gloria y el grupo Oviedo.

Si sumamos todas las empresas con más de 500 hectáreas, el resultado revela la existencia de, por lo menos, 22 inversionistas que controlan alrededor de 60.000 hectáreas a lo largo de la franja costera, en particular en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y Lima.

La concentración de tierras no solo reduce las posibilidades de enfrentar la pobreza, también tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria. Actualmente, en Perú la producción de alimentos destinada al mercado interno está en manos de agricultores familiares, agricultores campesinos y medianos productores; mientras que las grandes corporaciones destinan sus productos a la exportación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya menos tierras destinadas a la producción de alimentos del mercado interno? Jaime Escobedo sostiene que este es uno de los temas que las decisiones del gobierno deberían tener en cuenta para garantizar la seguridad alimentaria del país.

BRECHAS PENDIENTES

Durante los últimos diez años la pobreza se redujo en 35 puntos porcentuales: de tener 44% en 2004 se ha pasado a 13%. El crecimiento acumulado de la economía entre 2009 y 2014 fue de 32,4%, con una tasa anual de 5,8 puntos. Las cifras oficiales mencionan que en este tiempo el empleo adecuado aumentó en 32,7%, el ingreso real promedio subió en 14,4%, y los servicios básicos llegaron a más personas. Perú fue uno de los países de la región con mayor desempeño económico en la última década.

Pero lo que estos promedios ocultan es la desigualdad del crecimiento. En la sierra rural la pobreza afecta a 52% de la población. La escasez se agrava si vemos los números desagregados: en 76 distritos la pobreza afecta a 80% de sus habitantes, en 484 la cifra alcanza a 60% y en otros 1.013 afecta a más de 40%, muy por encima del promedio nacional de 23,9%.

El optimismo se ha concentrado en evidenciar la reducción de la pobreza y ha silenciado el aumento de las desigualdades económicas. El acceso y la cobertura de los servicios básicos se han ampliado, pero todavía más de medio millón de hogares no tiene electricidad; 3,5 millones de viviendas son de material precario, un millón no está conectado a la red pública de agua, siete millones de peruanos no tienen aún acceso a agua potable segura y muchos otros sufren la mala calidad de suministro.

Mientras Perú crecía, la riqueza se iba concentrando en pocas manos. Entre 2013 y 2015, según el último informe de Oxfam, el número de multimillonarios aumentó de 470 a 515 y sus fortunas crecieron 8%. La riqueza que posee este grupo representa ahora 32% del PIB. Este monto representa diez veces la inversión que el gobierno dedica a la educación.

Los indicadores de la desigualdad revelan también los matices del hambre en Perú. Las zonas más pobres de Lima Metropolitana pagan el agua más cara. En estos sectores no hay acceso a la red pública de agua potable y se abastecen por camiones cisternas, por lo que pagan hasta diez veces más por cada litro de agua que quienes viven en una zona residencial. Algunos estimados elaborados por investigadores locales señalan que una familia pobre de Lima dedica un porcentaje de su presupuesto para agua seis veces mayor al que dedica una familia de mayores ingresos.

Un informe de Oxfam, titulado «Para no retroceder, realidad y riesgo de la desigualdad en Perú», señala que en 2012 eran ocho millones «los pobres medidos monetariamente» en el país; sin embargo, si se consideraban las carencias en servicios básicos, salud y nutrición, entre otros, el número real de pobres era mayor a los 11 millones. «Pobres invisibles» los llamó el documento, porque viven en tugurios, no tienen acceso a agua segura, no consumen suficientes calorías, sus niños no van a la escuela, pero no son considerados como tales porque no cuadran en los indicadores monetarios.

DESPLAZADOS POR EL HAMBRE

La pobreza expulsó en la década de 1970 a Gerardo Almeyda Florez de Huancavelica, una de las regiones con los indicadores más pobres en Perú. Don Gerardo tenía 15 años cuando su madre, maestra de escuela, lo envió a culminar sus estudios superiores a la costa, a la vecina región de Ica. «Tenía que migrar porque no había futuro, no había nada». Don Gerardo jamás volvió a vivir a su tierra, se hizo ingeniero y compró una casa en Lima.

Las actuales condiciones económicas del país han mejorado los indicadores pero todavía muchos habitantes siguen la ruta del autoexilio de Gerardo Almeyda. La pobreza se redujo pero la desigualdad se arraiga en las áreas rurales. Si en 2004 un poblador rural tenía el doble de probabilidades de ser pobre que el urbano, hoy esa probabilidad es el triple.

La falta de acceso a servicios y oportunidades continúa expulsando a cientos de familias de sus hogares para migrar, principalmente, hacia ciudades de la costa: Piura, Arequipa, Trujillo, Chiclayo. «En la capital se está un poco mejor, pero la pobreza de las zonas rurales es todavía muy grande, dolorosa. A mí me da mucha pena volver a mi tierra, porque veo por momentos que todo está igual», dice el ahora presidente del Club Huancavelica de Lima.

La pobreza en Huancavelica aún expulsa a los jóvenes que buscan mejores oportunidades en empleo y educación. Mientras que el promedio nacional habla de 23% de pobres, aquí y en otras regiones como la Amazonia, Ayacucho y Cajamarca las cifras alcanzan a entre 47% y 52% de la población.

La pobreza continúa teniendo un rostro andino y rural. Las familias en situación de pobreza extrema se encuentran principalmente en los Andes (69,7%); la quinta parte en la Amazonía (18%) y el resto (12%), en la costa. La mayoría trabaja en micro- o pequeñas empresas, un sector con alta informalidad. Solo 6,9% de ellos es empleado en grandes empresas (de 51 o más trabajadores). En la población que señala tener como lengua materna un idioma indígena hay casi dos veces más pobres (35,4%) que entre los que tienen como lengua materna el español (19,5%).

La pobreza se ha reconfigurado geográficamente: ya no solo afecta a las regiones sur andinas sino incluso a regiones donde la principal actividad económica ha sido la explotación de minerales. Los distritos de Curgos y Condomarca, en la región La Libertad, son los más pobres de Perú.

Les siguen José Sabogal y Chetilla, en Cajamarca, la región en la que se ubica la principal exportadora de oro de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, la minera Yanacocha. Cajamarca tiene uno de los presupuestos públicos más grandes de Perú como producto de las regalías mineras, pero en este tiempo eso no ha garantizado eliminar el hambre.

Los contrastes y las paradojas acompañan el crecimiento peruano. Las cifras del PIB de la última década han sido imparables, el número de multimillonarios se ha incrementado, los medios reportan con euforia el avance de la gastronomía, pero el Estado aún no ha logrado frenar el hambre. «Huancavelica debe ser una de las regiones donde muchos no tienen qué comer, en las comunidades más lejanas siguen igual de pobres», dice don Gerardo, el hombre que migró a la capital por falta de oportunidades.

FERNANDO EGUREN: «LA DESIGUALDAD ES UNA DECISIÓN POLÍTICA»

Nelly Luna Amancio

Desde 1976, el Centro Peruano de Estudios Sociales promueve la mejora de las condiciones de vida y producción de los agricultores de las zonas más pobres de Perú. El experto en agricultura y economía rural Fernando Eguren es el presidente de esta organización sin fines de lucro, la que más ha estudiado la economía rural y la concentración de la tierra en el país. Eguren ha recorrido gran parte de Perú y es una de las voces más autorizadas en el tema. Conoce a los agricultores, sus desafíos y sus oportunidades. Por eso cuestiona la deliberada ausencia del Estado para rescatar de la pobreza y la exclusión a la población más pobre de Perú: los pequeños agricultores del sur andino peruano.

¿Es Perú un país agrícola?

Sí, lo es, pero no solamente es agrícola. Hay una larga tradición histórica y una gran cantidad de personas vinculadas a la actividad agropecuaria. A pesar de los censos, no sabemos con exactitud cuántos son los pobladores rurales, porque los censos tienen sus propios criterios para definirlos. El último censo agrario realizado en Perú en 2012 decía que 24,7% de la población es rural, pero si aplicamos los estándares del Banco Mundial, la población rural superaría el 40%. Con este criterio, el aporte de la agricultura al PIB llegaría a 20%. Entonces, si usáramos esos estándares, lo rural sería mucho más importante de lo que se piensa en Perú.

La población más pobre se encuentra en el sector agrario. ¿Cree que existe alguna estrategia desde el Estado para el problema?

El gobierno acaba de promover una estrategia del Ejecutivo destinada a la agricultura familiar. A través de un decreto firmado por el Ministerio

de Agricultura, se ha dispuesto la implementación de una comisión multisectorial encargada de fiscalizar la implementación de una estrategia nacional para la agricultura familiar hasta 2021.

¿Cuál es la importancia del sector agrario en la generación de empleo?

Debemos entender esto: que el sector que más trabajadores involucra en el país es el agrario. Además, una serie de estudios señalan que es el sector que con menor inversión podría generar más fuentes de trabajo. Por eso no entiendo por qué es tan relegado, a excepción, claro está, de la agroindustria, que está bien mimada por las autoridades.

¿Qué nos dice el último censo agrario de 2012 sobre la propiedad de la tierra?

En el año 2012 las pequeñas unidades agropecuarias (hasta cinco hectáreas) eran 1.811.000, un incremento de 40% respecto al año 1994. Es decir, había 520.500 unidades agropecuarias más. Ahora bien, la mayor parte de estas pequeñas unidades agropecuarias son minifundios: 150.300 tienen menos de una hectárea (68% del total de unidades agropecuarias del país).

En Perú la pobreza es geográfica, y hablamos del mundo rural porque ahí se concentran los mayores indicadores de pobreza y desigualdad. ¿Cómo atender el tema?

Para entender el tema es necesario mirar a otros sectores, como el transporte. Por ejemplo, la mejora del estado de las carreteras reduce los costos de traslado de los productos. Cuando hay poblaciones aisladas y es un solo camión el que ingresa a la zona a recoger los productos, este impone el precio de los cultivos. Entonces, la pregunta que debería atender el Estado es cómo reducimos los costos de transacción de los pequeños agricultores con sus intermediarios, porque son esos costos los que impiden que el agricultor pueda involucrarse en nuevos mercados. Y para lograrlo, se necesita que las autoridades nacionales, regionales y locales entiendan cómo gestionar el territorio y comiencen a diversificar las economías rurales.

¿Qué opina de las medidas implementadas en el sector agrario peruano en los últimos 15 años?

Bueno, hay cosas muy interesantes. Si uno compara el censo de 1993 con el de 2007, la población nacional creció en más de nueve millones de habitantes, pero la importación de alimentos no aumentó en esa

misma proporción; eso significa entonces que lo que se incrementó para satisfacer esa demanda interna fue la producción interna de alimentos. Y en Perú quien produce los alimentos para el consumo nacional es la agricultura familiar. Esto es un fenómeno importantísimo, porque esos agricultores han logrado satisfacer el crecimiento de la demanda interna sin mayor apoyo gubernamental. Incluso el último censo agrario muestra que es una ínfima cantidad la que recibe créditos financieros y asistencia técnica.

¿Cómo estos pequeños agricultores han logrado satisfacer la demanda sin apoyo técnico y con la migración constante del campo hacia las ciudades?

Bueno, el número de unidades agropecuarias ha aumentado, y también el número de hectáreas cultivadas. Entonces, a pesar de la migración, no hay un problema de abandono de las áreas agrícolas. Eso es lo que se evidencia en parte a partir del censo.

¿Considera que el proceso de descentralización ha tenido algún impacto en la pequeña agricultura?

Una gran parte de las inversiones en infraestructura las hacen los gobiernos regionales, pero pienso que no ha habido un cambio en términos positivos. Los gobiernos regionales tienen los mismos sesgos que el gobierno nacional a la hora de qué proyectos priorizar.

Hablemos de los alimentos y sus precios en el mercado internacional. ¿Qué ha pasado con la quinoa, que era un producto que se consumía mucho en los Andes y cuyos precios se incrementaron luego drásticamente?

La quinoa es un caso particular, porque es un producto de la sierra, que era de consumo rural y que luego fue reconocido internacionalmente, comenzó a exportarse y luego sus precios subieron. Entonces, los agricultores preferían vender el producto antes que comerlo. Pero eso no fue lo más preocupante. El gobierno, en lugar de apoyar a estos pequeños agricultores de los Andes a través de investigaciones o asistencia técnica, comenzaron a abrir programas de apoyo para el cultivo de quinoa en la costa, pero con los grandes inversionistas de siempre. La consecuencia fue que se obtuvieron resultados ambiguos. Cuando la quinoa se convierte en una monoproducción, comienzan a aparecer las enfermedades y luego hay que aplicarle químicos. Y hacer esto le resta una de las propiedades más importantes: su valor orgánico. Ahora el precio ya bajó, y creo que se va a estabilizar el mercado.

¿Cómo entender el incremento de la anemia crónica en las zonas rurales, sobre todo en lugares donde hay agricultura familiar y donde supuestamente no deberían faltar alimentos porque los cultivan?

No hay relación entre una producción diversa y una buena alimentación diversa. La investigadora María Mayer hizo un estudio y concluyó que en comunidades que tenían una producción diversa no tenían necesariamente una dieta diversa. Y esto tiene que ver con que no siempre las familias conocen las propiedades de los cultivos que siembran. Entonces, si una familia dedicada a la agricultura no conoce el valor nutritivo de estos alimentos, no puede decidir o priorizar su consumo. Por eso es necesaria más capacitación, pero también que el agricultor tenga acceso al intercambio con otros mercados. ¿Y cómo podemos enfrentar la anemia o la desnutrición? Pues yo creo que una de las maneras de superar esta situación es fomentar los mercados locales e impulsar una mejor educación para las madres. Varios estudios evidencian que mientras más educada sea la madre, mejor alimentados están los hijos.

Se ha investigado y reportado la concentración de tierras en la costa de Perú. ¿Cuánto afecta esto la pequeña agricultura?

En 1995 se dio una ley que liberalizó el mercado de tierras. Y esto se acompañó con otras políticas liberales que promueven la formación de grandes unidades agropecuarias, sobre todo en nuevas áreas irrigadas de la costa por megaproyectos financiados por el Estado. Se diseñó el acceso a estas tierras de tal manera que solo las grandes empresas con capacidad de inversión pudieran adquirirlas: módulos muy grandes y altos compromisos de inversión por cada hectárea. Fue una decisión política de los gobiernos de turno favorecer a las grandes corporaciones. Desde 1995 en adelante, el Estado ha decidido impulsar y ayudar a la gran agricultura, la que se enfoca en la agroexportación, y ha abandonado a la pequeña agricultura.

La gran agricultura se está impulsando en la costa, donde existe un serio problema de acceso a fuentes de agua. ¿Es eso sostenible?

Eso es un problema porque este tipo de agricultura industrial no es sostenible en los próximos 40 años. Lo que para nosotros en Perú es un paradigma del modelo agrícola porque lo consideramos eficiente no es en realidad un modelo sostenible. Hay estudios que mencionan que la forma más eficiente de producción en el campo es la agricultura familiar. Es la que mejor combina capital, tiempo y trabajo. En todos estos

años ha habido muchas normas y beneficios para la gran agricultura y casi nada para la pequeña agricultura.

La agricultura familiar ha quedado rezagada y empobrecida.

Sí. Durante el gobierno de Alberto Fujimori (en la década de 1990) se cortó la asistencia técnica para la pequeña agricultura argumentando que esta no era la función del Estado y que estas necesidades deberían ser satisfechas por la iniciativa privada, pero los privados no respondieron, no se crearon bancos para los pequeños agricultores ni se crearon empresas para asistencia técnica. Luego se han hecho algunos programas de desarrollo regional, pero nunca se han convertido en ejes de política pública.

¿Qué se debe entender por agricultura familiar?

Es aquella en la que la familia conduce el predio y donde es la mano de obra de la familia la que lo mantiene. Esa familia puede contratar personas pero solo temporalmente. En nuestro centro además creemos que el límite del tamaño de la parcela es de diez hectáreas para abajo. No se puede comparar una hectárea de pastos con 30 hectáreas de riego en la costa. Para compararlas, se necesita transformar las tierras de pasto como si fueran de riego, y eso nos da que 97% de las unidades agrarias, alrededor de 2.230.000 hectáreas, según el último censo, eran de agricultura familiar.

¿Cuánto del consumo nacional proviene de la agricultura familiar?

Se dice que 70% u 80% proviene de la agricultura familiar. Si nos basamos en el censo, vemos que 70% de las tierras dedicadas a cultivos transitorios para la alimentación están dentro de la agricultura familiar.

¿Cuál es su reflexión sobre pobreza y desigualdad en el mundo rural?

La pobreza es un concepto multidimensional, es mucho más complejo. Y cuando se habla de ella hay una definición convencional que la identifica con bajos niveles de gasto, pero eso banaliza este grave problema social. Esta simplificación conceptual puede ser útil para que los gobiernos muestren éxitos cuando hablan de sus programas redistributivos, pero hay que entender que incrementar los gastos en programas sociales no necesariamente ayuda a la eliminación de la pobreza, si consideramos la dimensión multidimensional de la misma. Para ello hacen falta políticas económicas más integrales. Existe una conexión entre

pobreza, desigualdad y calidad de vida. Por lo general, la condición de pobreza es resultado de la desigualdad. No es que la diferencia en los ingresos crea las desigualdades; es al revés, la desigualdad genera diferencias de ingresos.

¿La concentración de tierras afecta la seguridad alimentaria?

Sin duda. La concentración de tierras en la que se produce un solo producto genera la degradación de los suelos y eso hace la actividad insostenible en el tiempo. Y la monoproducción no contribuye al desarrollo de la biodiversidad y a la larga afecta la resiliencia de la agricultura. Joseph Stiglitz dice que los países con muchos recursos naturales deberían ser los más igualitarios en la distribución de ingresos, pero lo que ocurre es lo inverso. Luego de más de una década de *boom* de la industria extractiva, la desigualdad se ha acentuado en el país por las decisiones de los gobiernos. Y es que la desigualdad es una opción, es una decisión política: se opta por ella para beneficiar a grupos económicos determinados. Esa idea de concentrar la riqueza arriba para luego reinvertir y que chorree hacia abajo es un cuento ideológico. No funciona.

MARÍA ISABEL REMY: «SENDERO LUMINOSO DESTRUYÓ LAS ECONOMÍAS MÁS POBRES DE PERÚ»

Nelly Luna Amancio

Durante muchos años, María Isabel Remy recorrió las diferentes regiones de Perú y esta aproximación le permitió conocer y entender la economía rural del país. Socióloga por la Pontificia Universidad Católica de Perú y ex-directora del Centro de Estudios y Promoción Campesina de Piura, se ha desempeñado como investigadora y directora adjunta del Centro Bartolomé de las Casas, en Cusco. Actualmente es investigadora principal en el Instituto de Estudios Peruanos, uno de los centros de investigación más importantes del país.

¿Podemos decir que la economía rural en Perú está mejor que antes? La pobreza se ha reducido durante los últimos diez años, pero en las zonas rurales aún representa 46% de la población.

Las sociedades rurales están cada vez más conectadas a los circuitos nacionales e internacionales. Hay un gran avance de las telecomunicaciones y hay más caminos y carreteras porque el Sistema Nacional de Inversión Pública y los presupuestos participativos de los gobiernos regionales y locales priorizan la construcción de infraestructura, pero esto aún no se traduce en un mejor desarrollo de las personas. En los distritos hay más cemento, pero poco desarrollo. Y es que algunas autoridades creen que la sola construcción de una carretera convierte un mercado local en un mercado más competitivo, y eso no es cierto. Los agricultores locales necesitan de un acompañamiento, de créditos financieros y asesoramiento técnico para alcanzar nuevos mercados y volverse más competitivos. Por ejemplo, uno de los principales problemas es que muchos pequeños agricultores siguen dependiendo de un solo comerciante y esa dependencia no les permite mejorar los precios de sus productos. Esto hace que sus productos se vendan a muy bajos precios.

¿Por qué considera que no se ha logrado articular mejor el desarrollo de estas economías?

Junto al avance de la infraestructura, debió haberse desarrollado capacidades, invertir en tecnologías y mejores servicios de información, y nada de eso se hizo o en el camino se dejaron de hacer. Por ejemplo, durante un tiempo el Ministerio de Agricultura tenía un programa que funcionaba con mensajes de texto, financiado por la cooperación internacional. El agricultor enviaba desde un teléfono móvil una clave por mensaje de texto y en tiempo real le llegaba el precio del producto en el mercado mayorista. Eso le daba una mejor capacidad para negociar con el intermediario. Sin embargo, cuando se acabó el financiamiento de la cooperación, el programa desapareció. Las personas en el ámbito rural tienen dificultad para acceder a computadoras, pero todos tienen un móvil. Ese tipo de servicios son los que faltan.

Pero tampoco hay servicios financieros para la pequeña agricultura.

Es cierto. El censo nacional agrario revela que la mayor parte de los agricultores en Perú no usa créditos financieros, y no los piden porque saben que no existe ningún programa del gobierno que los otorgue. Entonces, estamos frente a una agricultura que funciona sin préstamos, o con créditos que les dan los mismos acopiadores, y eso es fatal porque así venden sus productos al único precio que les ofrece su único proveedor. Por otro lado, uno de los datos que más me desconcierta de ese censo nacional agrario y que revela un poco la situación de la pequeña producción familiar es la pregunta «¿Por qué usted siembra lo que siembra?». La respuesta mayoritaria en la pequeña agricultura (de menos de cinco hectáreas) es «Porque siempre lo he sembrado». No mencionan que se deba a que hay un mejor mercado ni porque haya más ganancias... Es triste.

¿Cómo influyó el conflicto armado interno en las economías rurales?

Perú ha vivido una guerra de insensatez absoluta durante diez años. Algunos suelen decir que la destrucción de las sociedades agrícolas de interés social (SAIS), que eran las ex-grandes haciendas que habían sido expropiadas por el gobierno militar y que luego fueron adjudicadas a los campesinos con el nombre de SAIS para que sembraran o administraran ganados, fue responsabilidad de los campesinos porque no supieron manejar las tierras; pero no fue así. Las SAIS no funcionaron por culpa de Sendero Luminoso. Sendero destruyó las SAIS. Yo recuerdo las fotos de alpacas y vicuñas degolladas y quemadas por los senderistas. Esto fue un factor de empobrecimiento muy fuerte.

¿Los programas de reparaciones colectivas no han funcionado?

Lo que hacía falta era una especie de Plan Marshall. No se trata de que si les quemaron la iglesia, el Estado les construyera otra iglesia. Era necesaria otra estrategia. Las economías rurales se habían descapitalizado, habían perdido animales y centros de mejoramiento genético. Centros de investigación de 30 años fueron destruidos.

La política económica impulsada por los gobiernos durante los últimos 20 años supuso que lo importante era invertir y crecer y que parte de ese crecimiento luego se «derramaría» para todos. ¿Por qué cree que no se hicieron políticas específicas para las economías rurales?

Ese es el problema de la ideología que se volvió imperante durante la década de 1990. Se cuestionaba que el Estado invirtiera dinero, por ejemplo para el mejoramiento genético de los animales de altura, porque se argumentaba que esa era una tarea del sector privado. El Estado paralizó su papel de promoción de desarrollo y dejó todo en manos del sector privado. En ese escenario, lo único que se impulsó fueron las grandes inversiones y la agricultura a gran escala con sus grandes irrigaciones estatales, la gran minería, la actividad petrolera, el cultivo de palma, etc., pero se dejó de lado la pequeña agricultura. De otro lado, en una investigación reciente que hemos realizado con Ricardo Fort [investigador y doctor en desarrollo económico], hallamos que en ámbitos rurales donde se invierte en infraestructura no se invierte en servicios, y donde se invierte en servicios no se invierte en infraestructura ni en el desarrollo de capacidades de los agricultores.

¿Pero los gobiernos regionales sí podrían articular sus obras?

No siempre, porque sus presupuestos están segmentados. Hay gobiernos regionales que pueden llegar a tener hasta 50 unidades ejecutoras. El presupuesto les viene armado y no tienen posibilidades de cruzarlo. La única entidad que tiene posibilidad de combinar diferentes intervenciones son las municipalidades.

¿Está de acuerdo en que hay que revisar el proceso de descentralización?

Tiene que revisarse porque superar la desigualdad urbano-rural requiere una mejor actuación de los gobiernos regionales y locales. Se supone que los ministerios son rectores y los gobiernos regionales son ejecutores, pero todavía gran parte del presupuesto está en manos del gobierno central. Yo creo que en realidad no se ha querido realmente descentralizar.

¿No cree que la descentralización no ha logrado enfrentar el retroceso en indicadores como la salud? La pobreza se reduce, pero no la anemia crónica, por ejemplo.

Yo tengo mucho respeto por los gobiernos regionales. El tema es que, por ejemplo, los centros de salud más alejados, que se encuentran en las zonas rurales, no siempre reciben los micronutrientes de hierro que el Estado distribuye gratuitamente para luchar contra la anemia. El otro tema tiene que ver con proyectos que ejecuta el gobierno regional pero que no tienen el apoyo del gobierno central. Por ejemplo, el gobierno regional de Piura invierte en la construcción de un hospital en Sullana y compra equipos de última tecnología, pero las plazas para contratar al personal médico dependen de la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y no se las aprueban.

¿La generación de mercados locales no es responsabilidad de los gobiernos regionales?

Ellos han desarrollado programas para promover cadenas de comercialización de algunos productos, como el plátano o el cacao. Puno, por ejemplo, se ha convertido en una importante cuenca lechera y produce quesos de calidad para el mercado interno. Hay otras experiencias como esta que explican la disminución de la pobreza en los Andes, pero en otras zonas es muy difícil impulsar una economía de desarrollo. La agricultura sigue siendo el sector que acoge la mano de obra que no encuentra sitio en otros sectores vinculados a la industria extractiva, como la minería.

¿Es sostenible una agricultura familiar si un agricultor tiene menos de dos hectáreas de tierra?

Hay una zona alta del Cusco en la que el promedio de propiedad de la tierra es de 1,75 hectáreas por familia. Tener esa cantidad de tierra es insostenible porque no garantiza suficiente producción de cultivos, tener menos de dos hectáreas es pobreza segura. Y lo que nos dice el último censo agrario es que el número de personas con menos de dos hectáreas es enorme, es el porcentaje más grande de todo el censo, sobre todo en los Andes. Todos defendemos la pequeña propiedad, son ellos los que generan estas pequeñas cadenas de mercado de plátano, de cacao, café, quesos, y eso es importante porque ellos multiplican y dinamizan la economía local.

¿Qué hacer entonces con los agricultores que tienen poca tierra y son los más pobres?

Lo que se conoce como minifundio, las tierras que se encuentran por debajo de 1,5 hectáreas, corresponde a personas que básicamente hacen

agricultura de subsistencia. Y en el país no hay ningún programa público enfocado en este grupo y que busque sacarlos de la pobreza. Lo que se tendría que hacer en este caso es que los agricultores con menos de una hectárea vendan sus tierras a los que tienen más de dos o tres hectáreas; eso permitiría que con esos ingresos esa persona se capitalice y ponga un negocio o costee los estudios superiores de sus hijos. Entonces, tendríamos agricultores con más de seis hectáreas y poblados con pequeños negocios.

¿Qué opciones tienen en este momento las familias más pobres para salir de la pobreza?

El asunto es que estas familias no tienen opciones. Se debería crear un fondo que les permita comprar tierras a los coherederos. Imaginemos que se muere el padre que tenía cuatro hectáreas y seis hijos: cada uno tendrá menos de una hectárea, lo que tienes entonces es personas más pobres. Un fondo de ese tipo permitiría que uno de ellos les compre a los otros la tierra, porque en este momento la transición generacional de la tierra es un desastre. Falta una política pública que la tome en cuenta y la esté apoyando. El gobierno ha preferido incrementar el monto de los programas sociales, pero los programas de desarrollo productivo tienen muy poco presupuesto. El problema es que somos herederos de una manera de pensar que cree que el Estado no debe meterse en la economía y que debería dejar todo en manos del sector privado. Por pensar así, en este tiempo, de los más pobres nadie se ha hecho cargo.

Sin embargo, el Estado sí se mete. Ha financiado la construcción de gigantescos proyectos de irrigación para impulsar la agroindustria.

Claro, y no es cierto eso de que solo los pequeños agricultores no pagan. Los grandes tampoco pagan. El proyecto de irrigación Chavimochic funciona a pérdida. Es cierto que la agroindustria genera empleo, pero la pequeña agricultura también.

¿Pero no es que todas las tierras son agrícolas en Perú?

Es cierto. Hay zonas que no deberían ser agrícolas sino forestales o ganaderas porque son laderas muy poco productivas y en estos lugares hay que tener un mejor manejo de cuenca, porque si no la tierra se empobrece, se lava.

¿Qué hacer con las regalías mineras del sector minero? Varios especialistas han planteado una mejor distribución...

Ha habido mucho temor a que una nueva forma de distribución provoque una reacción, pero no creo que sea tan así. Va a haber pleito, pero habría que saber manejarlo y para eso se necesita un Estado que tenga un mejor diálogo con la población, y eso en este momento no viene ocurriendo.

EL QUESO QUE REVOLUCIONÓ EL ALTIPLANO

Nelly Luna Amancio

En el altiplano peruano hubo una revolución láctea silenciosa que en poco tiempo logró quebrar la cadena de pobreza de un grupo de comunidades y convirtió a las mujeres en nuevas líderes regionales. Allí, de la mano del queso «Paria», son ellas quienes asumen las decisiones más importantes de la economía y la alimentación familiar y las que involucran a los hombres en el proyecto.

El sueño de Juan Huanco Huanco es elaborar el queso más grande del mundo. Hace tres años, el hombre que nació en las alturas del altiplano peruano y que desde hace más de una década se dedica a la producción lechera, intentó cumplir su propósito. Primero, investigó e hizo cálculos: para inscribir su queso en el Álbum de Récords Guinness, este debería tener más dos metros de diámetro y un metro de altura.

Necesitaba 5.000 litros de leche, entonces buscó ayuda: seis compañeros se sumaron, instalaron una planta procesadora especial y comenzaron a recaudar donaciones para cubrir los costos de producción. Planificaron que la presentación del queso más grande del mundo sería en junio de 2012, durante la Feria Ganadera del Sur de Perú, pero no lograron juntar el dinero necesario para tamaña aventura.

Juan no pudo cumplir su sueño aquel día, pero este continuó movilizándolo los años siguientes. Vive en Taraco, un pequeño distrito de la región Puno, provincia Huancané, en el altiplano del sur de Perú. Allí nacieron él y su familia cuando su comunidad tenía elevados niveles de desnutrición y pobreza y aún no se había convertido en una importante zona lechera. La historia de cómo el distrito enfrentó la pobreza resume el esfuerzo conjunto de organizaciones y la visión de las familias. Durante las últimas dos décadas, la economía de Taraco se ha dinamizado en torno de la producción de lácteos.

El queso producido en estas cuencas es conocido como «Paria», de sabor intenso y textura cremosa. Poco a poco ha alcanzado los mercados de las principales ciudades del país. Es la historia del sueño de Juan Huanco pero también la de cientos de familias que se enfrentan a la pobreza en todas las provincias en ese enorme y frío altiplano, en la región Puno.

UN TRABAJO INTEGRAL

Puno es una de las regiones de Perú más agobiadas por la pobreza. Se ubica en el extremo sudeste del territorio peruano, en la meseta del Collao y a orillas del Lago Titicaca, que comparte con Bolivia. La actividad agropecuaria es la base fundamental de la economía regional y se realiza en 80% de su territorio. 12% del ganado vacuno del país se concentra aquí. Tiene 13 provincias, entre las que se encuentran Melgar y Huancané, importantes por su actividad lechera.

Estas cifras resumen la importancia de la actividad lechera y su papel en la cadena productiva. ¿Cómo se forjaron estas economías? La historia del queso y cómo permitió a algunos poblados enfrentar la pobreza comenzó a mediados de la década de 1990, cuando Cáritas (la institución de la Iglesia católica que lucha contra la pobreza) inició proyectos en las provincias de July y Ayaviri para reducir la desnutrición e impulsar la seguridad alimentaria. Uno de los principales impulsores de este trabajo fue Juan Cazasola Ccama, un líder y abogado de la región.

A Cazasola y a su equipo les interesaba impulsar un proyecto a largo plazo. Muchos habían fracasado antes por falta de apoyo. ¿Qué propuesta de lucha contra la pobreza podría ser sostenible en la zona? Comenzaron a identificar los principales problemas, potencialidades y oportunidades de la región. «Lo que buscábamos era reducir los niveles de desnutrición crónica en los niños, y eso pasaba por impulsar la capacitación en el uso y manejo de los alimentos, y también por mejorar el acceso y la disponibilidad a estos», dice el líder puneño.

La propuesta fue incorporar a todos los sectores de la sociedad civil: docentes, líderes, voluntarios, animadores educativos, padres de familia, parroquias y autoridades comunales. En ese proceso identificaron la leche como un insumo articulador de la economía local. Varias comunidades en Puno producían tradicionalmente este alimento.

Entonces Cáritas se fijó como objetivo inicial mejorar la calidad de la leche del ganado vacuno. Con ese fin se promovió el cultivo de alfalfa,

una especie que se sembraba una vez al año y que podía cosecharse dos a tres veces en 12 meses. Su incorporación entusiasmó a las comunidades. No solo funcionaba como alimento para el ganado, también podía incorporarse a la dieta alimenticia de las familias en jugos nutricionales acompañado de frutas. Juan Casazola cuenta que la incorporación de esta planta llegó de la mano de una constante capacitación e información, e incluso muchas familias llegaron a usar la alfalfa como harina en la producción de panes.

Lo que pasó en aquellos meses revolucionó la economía local. Un proyecto regional que apenas contaba con el apoyo de las autoridades provinciales logró consolidarse en las comunidades. Con el ingreso de la alfalfa como cultivo, los animales, que antes solo producían dos litros de leche al día pasaron a dar hasta diez litros diarios. El tiempo hizo lo demás: al ver el éxito del programa, más comunidades quisieron sumarse, y con ellas, más organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado. El programa que comenzó en Taraco pronto se replicó en otras cuencas y comunidades.

Juan Casazola, que nació y estudió en la región, recuerda que eran las mujeres quienes pedían que las capacitaran en actividades productivas. Su liderazgo fue fundamental para el éxito de los programas. El despegue llegó cuando comenzaron a intercambiar experiencias con la cuenca lechera históricamente más importante de Puno, Melgar. «Llevamos a un grupo de mujeres de Taraco a la provincia de Melgar para que observaran y conocieran lo que el impulso lechero había logrado allá. ¡En tres meses las mujeres aprendieron!», dice el líder puneño. En Melgar se había logrado mejorar la calidad de los pastos satisfactoriamente, se criaba un mejor tipo de ganado y esta mezcla había logrado incrementar la producción de leche y, como consecuencia, la producción de quesos.

Cuando la visita terminó, las mujeres retornaron entusiasmadas a sus comunidades y replicaron el proyecto. Con el pasar de las semanas, ellas mismas se convirtieron en pequeñas acopiadoras de leche. El entusiasmo y los sueños movilizaron a estas mujeres para enfrentar la pobreza. En los Andes, son las ellas quienes asumen las decisiones más importantes de la economía y la alimentación familiar, por eso no sorprendió a los investigadores y capacitadores que fueran ellas las que involucraran a sus esposos en el proyecto. «Muchos de ellos abandonaron antiguos empleos para dedicarse exclusivamente a la producción lechera», recuerda Casazola.

El rol de las mujeres también fue fundamental en el desarrollo de cadenas productivas. No solo dirigieron el rumbo de la economía familiar,

varias llegaron también a convertirse en auténticas líderes y a ocupar cargos públicos y desde ese espacio impulsaron proyectos de desarrollo. «Ellas nos decían: no queremos ser toda la vida un proyecto, queremos graduarnos y dedicarnos a esto», recuerda Juan Casazola. Su enorme compromiso les creó fama de buenas y cumplidas pagadoras. Eran ellas las que solicitaban y recibían los créditos financieros.

El queso había logrado quebrar la cadena de pobreza de estas familias.

UNA HISTORIA DE IMPACTO

Dicen que fue durante el Virreinato cuando los jesuitas instalaron la primera planta lechera en Puno. La región era una zona de paso de los viajeros que iban camino hacia las minas de Potosí, en Bolivia, y los curas vieron necesario impulsar una alimentación más variada para las comunidades locales, pero también para los viajeros. No fue, sin embargo, esta tradición quesera la que impulsó la economía local. La visión de las comunidades y el papel de las autoridades locales fueron fundamentales.

Para comprender los vínculos de la producción de leche con la historia de Puno, es necesario mirar detenidamente la provincia de Melgar, conocida como la capital ganadera de Perú.

Ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar y a cinco horas de la capital de Puno, Melgar obtiene de la ganadería uno de los principales ingresos económicos. Con una población de 85.000 personas, es una provincia que impulsa de manera sostenida una economía local basada en la producción de lácteos y la crianza de vacas raza Brown Swiss. Aunque sus autoridades sostienen que han logrado establecer una importante cadena productiva, reconocen también que aún es necesario ampliar más el apoyo técnico.

El alcalde de la municipalidad provincial de Melgar, Víctor Jesús Huallpa Quispe, dice que cada uno de los animales produce un promedio de cinco litros de leche al día y que podría producir más con ganado mejorado genéticamente. «Para tratar de cambiar estas cifras y apoyar a más comunidades, hemos adquirido tractores para trabajar la tierra y potenciar la cosecha de alfalfa, alimento indispensable para el ganado vacuno, pero el camino aún es largo porque hace falta el apoyo del gobierno», comenta. Los esfuerzos continúan siendo locales.

De los nueve distritos que hay en la provincia de Melgar, Orurillo, Umachiri, Lalli, Cupi, Santa Rosa, Macari y Ayaviri han mejorado su produc-

ción lechera y con ello su situación económica. Las familias de estos poblados ahora producen derivados de la leche y comercializan yogur, quesos y otros productos lácteos como la mantequilla en cada una de sus localidades, pero también en otras regiones más distantes como Cusco, Arequipa y Lima. El resultado más célebre de este crecimiento lechero fue el queso «Paria».

El nombre de esta variedad de queso típico de la región está asociado a la historia de la Colonia. Dicen en Puno que cuando los españoles se instalaron en la zona, no existían herramientas para la extracción del suero de la leche y tuvieron que improvisar: usaban telas en las que ponían la leche cuajada y luego las torcían desde los extremos para ir aplastando el suero. A este acto los puneños lo denominaron «pari» o «paray», cuyo significado es precisamente hacer caer el agua o llover.

Diversos distritos de Melgar han sido beneficiados con un programa impulsado por Cáritas que plantea disminuir la desnutrición. Estos alimentos también ayudan a las familias a brindar una mejor nutrición a sus hijos; sin embargo, tal como lo explica el alcalde Huallpa Quispe, es necesario un apoyo mayor y persistente.

Durante la invasión española, Melgar fue el lugar a donde arribó Diego de Almagro buscando oro y minerales. No pasó mucho tiempo para que las amplias planicies desbordantes de pasto atrajeran a los primeros ganaderos. «Uno de los hitos de esta actividad ganadera —reporta el diario local *Los Andes*— se ubica temporalmente entre los años 1920 y 1921, con la introducción de razas de ganado con alto rendimiento en las haciendas. Las granjas modelo se caracterizaron por la crianza tecnificada de ganado. Con estos antecedentes, mediante Ley N^o 30.031, de fecha 4 de junio de 2013, se declara a la Provincia de Melgar, del Departamento de Puno, como la Capital Ganadera de Perú».

OPTIMISMO CON TAREAS PENDIENTES

Todo en Taraco gira desde hace dos décadas en torno del queso. Es uno de los distritos de la provincia de Huancané que más ha incrementado su producción ganadera en los últimos años gracias a los mejores pastos y al mejoramiento genético del ganado, impulsado recientemente por la municipalidad local con el uso de técnicas de inseminación.

En marzo de 2014 las autoridades implementaron la primera planta de inseminación. La población inauguró con optimismo este espacio y desde entonces los ganaderos están convencidos de que con este lugar

la producción de leche se multiplicará. «En la actualidad, una vaca brinda en promedio entre 8 y 10 litros de leche, y aunque también se pueden encontrar casos en los que el animal puede dar 20 litros por día, nuestra idea es que podamos alcanzar por lo menos los 15 litros diarios», dice Edgar Rosendo Puma Yucra, alcalde de la municipalidad distrital de Taraco y entusiasta impulsor de la actividad lechera.

El alcalde explica que el litro de leche se comercializa a un sol el litro (un tercio de dólar estadounidense). Un productor puede lograr hasta 200 litros de leche al día, es decir 200 soles. «Entonces, con esos ingresos diarios más lo que tenga guardado, creo que podría invertir en más ganado», dice. La venta de productos lácteos a otras regiones, especialmente el queso «Pariá», ha permitido que la economía del lugar mejore y, sobre todo, ha ayudado a reducir los índices de anemia que hay en el distrito.

En Taraco, sin embargo, también hay otras realidades: familias con una o dos vacas, que apenas pueden alcanzar entre 10 y 20 soles diarios. El alcalde Puma Yucra precisa que el distrito aún tiene que resolver el problema de la anemia que alcanza a 60% de la población.

En ese camino, la autoridad ha dicho que la agenda pendiente, para la que han pedido ayuda al gobierno regional y central, tiene que ver con mejorar los servicios de salud y educación. «Hace falta capacitar al personal de salud del distrito, brindar talleres de alimentación; por eso, en marzo de este año implementaremos un centro de vigilancia nutricional en la comunidad campesina de Collana».

HUANCANÉ: LA ENSEÑANZA DEL DESARROLLO

Leonides Ávalos Quispe es médico veterinario zootecnista y funcionario de la Municipalidad de Huancané, provincia a la que pertenece la emprendedora Toraco. En la capital de esta provincia se está produciendo la segunda etapa de la revolución del queso.

A mediados del año pasado, las autoridades iniciaron un proyecto denominado «Mejoramiento del desarrollo productivo del ganado vacuno lechero». El objetivo es relanzar nuevos proyectos que permitan que la actividad agrícola mejore las condiciones de vida en la provincia y apoye a los productores de leche y todos los que ya generan hace años otros productos derivados.

En esta iniciativa también se busca el mejoramiento genético del ganado vacuno, la tecnificación agrícola y la incorporación de mejores pastos

para que los animales puedan producir entre cuatro y cinco litros de leche al día y con ello aumentar la productividad en la zona. Aunque la cifra es baja si se compara con el distrito de Taraco, donde cada animal produce diez litros de leche en promedio, Leonides Ávalos Quispe sostiene que esa es la meta para toda la provincia. La meta es replicar los logros y la productividad que Taraco ha liderado en este tiempo.

La batalla contra la pobreza requiere de planes transversales. El funcionario zootecnista de Huancané lo sabe: «Lo que nos hemos propuesto es brindar conocimientos y técnicas a los productores, les enseñamos formas de comercialización y, sobre todo, información sobre cómo mejorar su alimentación, y con ello impulsar la reducción de la desnutrición».

Huancané también tiene cifras preocupantes pese a los esfuerzos para consolidar sus cadenas productivas. La pobreza extrema en la provincia alcanza 17,5%, «pero si recibiéramos apoyo para ampliar nuestro programa, yo estimo que la pobreza podría reducirse hasta un 10% en los próximos tres años. Hay mucho por trabajar. Esta es una oportunidad para ayudar a la provincia y evitar que las cifras de desnutrición y pobreza aumenten», dijo Quispe.

PERSISTENCIA E IMPULSO

¿Qué ha permitido que varias comunidades escapen de la pobreza extrema con la comercialización del queso? ¿Cuál fue la fórmula del desarrollo en Puno? Juan Casazola, uno de los entusiastas líderes que apostó por esta actividad económica, recuerda que «este no es un trabajo de tres o cinco años; se trata de un trabajo integral que vino acompañado de inversión en capacitación agropecuaria, mejoramiento de salud, plan de desarrollo comunal y la permanente animación de las familias».

Todos los proyectos locales impulsados por Cáritas, las municipalidades u otras organizaciones no gubernamentales impulsaron planes de desarrollo local y presupuestos participativos, y en estos los dirigentes elegían siempre comprar más semillas de alfalfa antes que invertir en hierro y cemento. «No solo querían producir leche, querían generar productos», insiste Casazola. El liderazgo de las comunidades y el papel de las mujeres madres de familia también fueron decisivos. Podría decirse que la revolución del queso en Puno lleva el rostro de cientos de mujeres.

Las cifras señalan que en 2014 el sector pecuario presentó un crecimiento de 3%, sustentado en mejores niveles de la producción de leche con un crecimiento en relación con el año anterior. En su Plan de Gestión

hacia 2021, el gobierno regional de Puno reconoce la fuerte tendencia y crecimiento de la producción de derivados lácteos. Y detalla que para estos se cuenta con el apoyo del Proyecto Pastos y Forrajes, de Cáritas, municipalidades locales y otros que vienen promocionando el incremento de instalaciones de pastos y siembra de forrajes.

Pero los proyectos de desarrollo corren el riesgo de estancarse si no existe apoyo y transferencias técnicas adecuadas. En el mismo plan de gestión 2021, el gobierno regional de Puno reconoce esta falta: «En la última década se abandonó a las instituciones de investigación y transferencia tecnológica, sin entender la importancia que tienen estas en el desarrollo de una economía competitiva local y la imperiosa necesidad de reformularlas en función a los cambios producidos». No existen investigaciones ni asistencia técnica permanente que acompañen el crecimiento de la cadena productiva basada en los lácteos.

Puno es ahora el primer productor de queso «Paria» en Perú y se prepara para impulsar la denominación de origen de este producto, pero la tarea no es sencilla porque antes deben garantizar una producción estándar de buena calidad. ¿Cómo lo logrará si, como señala el plan, «la paralización de transferencias de tecnología ha producido una profunda brecha de acceso a conocimientos en las regiones?»

Fredy Livisi Larico, dirigente de la Mesa de Lácteos de la región, es uno de los más entusiastas a la hora de hablar sobre la necesidad de que el queso «Paria» adquiera la denominación de origen. Sin embargo, Livisi reconoce que en ese camino el trabajo es mucho más difícil de lo que pensaban, porque se requerirá trabajar en grupo para que todo el queso tenga una sola calidad. «Lo bueno es que hay voluntad y predisposición para lograrlo. Lo único que falta es mejorar los procesos tecnológicos y estandarizar el producto», dijo Livisi hace poco a un diario local.

La región de Puno genera 52 toneladas de queso al día. La lechería y la producción de estos alimentos permiten la subsistencia de cientos de familias y el desarrollo de negocios rentables. La desnutrición se ha reducido a la mitad en las cuencas queseras. El reto ahora —coinciden todos los involucrados— es estandarizar la calidad para alcanzar nuevos mercados. El sueño de Juan Huanco de tener el queso más grande del mundo lo sigue movilizándolo.

Se terminó de imprimir en el mes de junio de 2016
en los Talleres Gráficos Nuevo Offset, Viel 1444, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Tirada: 1.000 ejemplares.

Nueve periodistas: Martín Caparrós,
Josefina Licitra, Cecilia Lanza Lobo, João Peres,
Tadeu Breda, Thiago Domenici, Catalina Lobo-Guerrero,
Marilyn Facey, Nancy Luna Amancio.

Seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Jamaica, Perú.

25 textos: un prólogo, seis reportajes, seis crónicas
y más de una decena de entrevistas.

Recorrimos seis países latinoamericanos y vimos cómo el hambre sobrevuela cosechas, plantaciones, tierras fértiles y sembradíos de exportación hasta volverse invisible. También fuimos a las ciudades y las periferias urbanas, donde habitan los que estudian y diseñan el mundo rural, y encontramos soluciones al alcance de la mano, brutales incapacidades institucionales y poco compromiso de los poderosos.

Escuchamos muchas historias tristes y algunas pocas felices, esas que nos recuerdan que no todo está completamente perdido. Historias de personas que no comen y de alimentos que no alimentan.

Historias de hambre, sin pan ni circo.

ISBN 978-987-95677-8-4



9 789879 567784